# DIARIO DE DEBATES

TOLUCA, MÉXICO, MARZO 10 DE 2011 TOMO XX SESIÓN No. 113


**SESIÓN DELIBERANTE DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**

**CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2011.**

**Presidente Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas.**

**S U M A R I O**


**LISTA DE ASISTENCIA.**
**APERTURA DE LA SESIÓN.**
**ORDEN DEL DÍA.**
**ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

1.- lectura y acuerdo conducente al Informe que presenta el diputado Daniel Parra Ángeles sobre las actividades realizadas por la Diputación Permanente de la H. "LVII" Legislatura.
La Presidencia acuerda que se tiene por enterada la "LVII" Legislatura del contenido del informe rendido por la Diputación Permanente.

2.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Desarrollo Social del Estado de México, Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, y Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Equidad y Género, para su estudio y dictamen.

3.- La Vicepresidencia, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la iniciativa de decreto por el que se nombra Magistrados Numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.

4.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Equidad y Género, para su estudio y dictamen.

5.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de Ley de Seguridad Pública del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio y dictamen.

6.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de Ley de Educación para el Estado de México, presentada en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen.

7.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que incorpora las directrices que en el ámbito de las penas y atenciones de víctimas, plantea la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, formulada por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen.

8.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de reforma y adiciones a diversos ordenamientos del Código Administrativo del Estado de México, en materia de prevención y erradicación de la violencia escolar, fenómeno conocido como “Bullying”, presentada por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen.

9.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para prevenir y erradicar el feminicidio en el Estado de México,

presentada por los Grupos Parlamentarios de los Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Equidad y Género, para su estudio y dictamen.

10.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con tres proyectos de decreto, por los cuales se crea la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, presentada por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Equidad y Género, para su estudio y dictamen.

11.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Estado de México pare prevenir la violencia y las agresiones por motivo de género, presentada en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Equidad y Género, para su estudio y dictamen.

**Presidente Diputado Jorge Álvarez Colín**

12.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México, adicionando el artículo 292 Bis, presentada en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

**Presidente Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas**

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen.

13.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Educación del Estado de México, presentada en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen.

14.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil del Estado de México, para incluir como causal del divorcio la incompatibilidad de caracteres, a fin de que la disolución de vínculo matrimonial pueda ser promovida por alguna de las partes y así evitar que se den situaciones que van desde la indiferencia hasta casos de violencia familiar o de abandono de persona, presentada en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen.

15.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su Reglamento, con el objeto de implementar el sistema electrónico de asistencia y votación en el Congreso Local, presentada en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.

16.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de Ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad del Estado de México, presentada en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a la Comisión Legislativa para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para su estudio y dictamen.

17.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, presentada por el Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen.

18.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa del Ley que crea el Organismo Públicos Descentralizado, denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, México, presentada por el Ayuntamiento de Amecameca, México.

La Presidencia registra la iniciativa y la remite a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio y dictamen.

19.- Lectura y en su caso discusión del dictamen formulado al Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que colaboren en el fomento y promoción del deporte nacional de la Charrería, a los Titulares de los Poderes Federal, Estatales y Municipales a conmemorar fielmente el 15 de septiembre como Día Nacional de la Charrería y a las Comisiones de Juventud y Deporte, de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012, se destinen recursos suficientes para fomentar en el país el deporte nacional de la charrería y las cabalgatas, así como la creación y construcción de la Escuela Nacional de Charrería.

El dictamen y punto de acuerdo son aprobados en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos.

**Presidente Diputado Jorge Álvarez Colín**

20.- Lectura y en su caso discusión del dictamen formulado al Punto de Acuerdo para exhortar a los 125 municipios del Estado de México, a que en el ámbito de su competencia, formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus programas de ordenamiento ecológico del territorio municipal, así como a diseñar las acciones inaplazables para su implementación inmediata.

El dictamen y punto de acuerdo son aprobados en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos.

21.- Lectura y acuerdo conducente del informe formulado al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, a los órganos constitucionalmente autónomos y a los 125 municipios del Estado de México, para que, el en ámbito de sus facultades, otorguen todas las facilidades y la colaboración necesaria para la realización del censo de población y vivienda 2010, y así alcanzar los objetivos deseados, presentado por la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica.

La Presidencia señala que la Legislatura queda enterada del informe y se tiene por concluido el asunto para los efectos procedentes.

22.- Uso de la palabra por el diputado Arturo Piña García, para proponer Punto de Acuerdo para exhortar al Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que explique el porcentaje de eficiencia del Ministerio Público, en consignaciones, órdenes de aprehensión giradas y cumplidas; así como las sentencias condenatorias, formulado por el diputado presentante en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Por unanimidad de votos se admite a trámite el punto de acuerdo y la Presidencia lo remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis.

23.- Uso de la palabra por el diputado Víctor Manuel Bautista López, para dar lectura al proyecto de acuerdo, con la finalidad de solicitar la urgente comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado de México, para que explique los resultados obtenidos en nuestra entidad en materia de combate al secuestro, formulado en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Por unanimidad de votos se admite a trámite el punto de acuerdo y la Presidencia lo remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis.

24.- Uso de la palabra por el diputado Crisóforo Hernández Mena, para dar lectura al Punto de acuerdo donde se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que en el ámbito de su competencia, establezca mayor eficiencia en la distribución, ejecución y aplicación de los recursos convenidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública dentro del presente ejercicio fiscal; asimismo, se exhorta para que de los recursos que no han sido ejercidos, sean ejecutados en su totalidad y subsanar en su caso el subejercicio de ejercicios fiscales anteriores, presentado en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

**Presidente Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas**

Por mayoría de votos se admite a trámite el punto de acuerdo y la Presidencia lo remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis.

25.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo, mediante el cual se condena la censura del documental titulado “Presunto Culpable”; así como, la constante amenaza del derecho a la libre manifestación de las ideas, presentado por el diputado Ricardo Moreno Bastida.

Por mayoría de votos se admite a trámite el punto de acuerdo y la Presidencia lo remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de

Justicia, para su análisis.

26.- Lectura y acuerdo conducente de la propuesta que formula la Junta de Coordinación Política, en relación con modificación de integración de Comisión Legislativa.

El acuerdo respectivo es aprobado por unanimidad de votos en lo general.

En la discusión en lo particular, el diputado Horacio Enrique Jiménez López formula una modificación al artículo transitorio segundo, en el sentido de que puede entrar en vigor a partir de su aprobación.

Por unanimidad de votos son aprobados la propuesta y el acuerdo en lo particular.

27.- Uso de la Palabra por el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, para dar lectura al Punto de Acuerdo para exhortar a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Tránsito de esta Legislatura, a dictaminar a la brevedad las iniciativas en materia de seguridad pública que han sido presentadas durante esta "LVII" Legislatura, formulado en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

La Presidencia registra lo expresado por el diputado Alejandro Landero Gutiérrez y señala que se hace del conocimiento de las comisiones correspondientes.

28.- La diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza hace uso de la palabra, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en nombre de la Legislatura del Estado de México.

La Presidencia manifiesta que se registra lo expresado y se inserta en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

29.- El diputado Crisóforo Hernández Mena hace uso de la palabra, con motivo del 183 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

30.- Clausura de la sesión.

**PRESIDENCIA DEL DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.**

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Esta Presidencia instruye a la Secretaría pasar lista de asistencia.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** En cumplimiento de la petición de la Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia del quórum. (Pasa lista de asistencia)

¿Falta algún diputado de registrar su asistencia?

Señor Presidente de la lista de asistencia, se advierte la existencia del quórum, por lo que es precedente la apertura de la sesión.

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias a la Secretaría.

La Presidencia saluda a las señoras y a los señores diputados y agradece la presencia de los representantes de los medios de comunicación que dan seguimiento a nuestros trabajos y al público que nos acompaña.

Para estar aptitud de iniciar la sesión, pido a la Secretaría, verifique la existencia del quórum.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** Ha sido verificada la existencia del quórum.

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Se declara la existencia del quórum y se abre la sesión, siendo las once horas con cuarenta y tres minutos del día jueves diez de marzo del año dos mil once.

Dé a conocer la Secretaría la propuesta de orden del día.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** Honorable Legislatura, la propuesta de orden del día, es la siguiente:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Informe de las actividades realizadas por la Diputación Permanente de la H. "LVII" Legislatura.
3. Lectura y acuerdo conducente de las iniciativas de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, Ley de Desarrollo Social del Estado de México, Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado y Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.
4. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se nombra magistrados numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.
5. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.
6. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de Ley de Seguridad Pública del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.
7. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de Ley de Educación para el Estado de México, presentada en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza.
8. Lectura y Acuerdo conducente de la iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que incorpora las directrices que en el ámbito de las penas y atenciones de víctimas, plantea la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, presentada por el diputado Oscar Sánchez Juárez, en nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional.

9. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de reforma y adiciones a diversos ordenamientos del Código Administrativo del Estado de México, en materia de prevención y erradicación de la violencia escolar, fenómeno conocido como "Bullying", presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
10. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para prevenir y erradicar el feminicidio en el Estado de México, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
11. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con tres proyectos de decreto, por los cuales se crea la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México y de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, presentada por la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
12. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Estado de México pare prevenir la violencia y las agresiones por motivo de género, presentada por la diputada Angélica Linarte Ballesteros, en nombre Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
13. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México, adicionando el articulo 292 Bis, presentada por el diputado Constanzo de la Vega Membrillo, en nombre Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
14. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Educación del Estado de México, presentada por el diputado Crisóforo Hernández Mena, en nombre Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
15. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil del Estado de México, para incluir como causales del divorcio la incompatibilidad de caracteres, a fin de que la disolución de vínculo matrimonial pueda ser promovida por alguna de las partes y así evitar que se den situaciones que van desde la indiferencia hasta casos de violencia familiar o de abandono de persona, presentada en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
16. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su Reglamento, con el objeto de implementar el sistema electrónico de asistencia y votación en el Congreso Local, presentada por el diputado Miguel Sámano Peralta, a nombre Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
17. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de Ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad del Estado de México, presentada por el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, en nombre Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.
18. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire" presentada por el Ayuntamiento de Tenango del Aire, México.
19. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa del ley que crea el Organismo Públicos Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, México, presentada por el H. Ayuntamiento de Amecameca, México.
20. Lectura y en su caso discusión del dictamen

formulado al punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que colaboren en el fomento y promoción del deporte nacional de la Charrería, a los titulares de los poderes federal, estatales y municipales a conmemorar fielmente el 15 de septiembre como Día Nacional de la Charrería y a las Comisiones de Juventud y Deporte de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública de las Cámaras de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012, se destinen recursos suficientes para fomentar en el país, el deporte nacional de la charrería y las cabalgatas, así como la creación y construcción de la Escuela Nacional de Charrería, presentada por la Cámara de Senadores.

21. Lectura y en su caso discusión del dictamen formulado al punto de acuerdo para exhortar a los 125 municipios del Estado de México, a que en el ámbito de su competencia, formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus programas de ordenamiento ecológico del territorio municipal, así como a diseñar las acciones inaplazables para su implementación inmediata, presentado por el diputado Pablo Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
22. Lectura y acuerdo conducente del informe formulado al punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y a los 125 municipios del Estado de México, para que en ámbito de sus facultades otorguen todas las facilidades y la colaboración necesaria para la realización del censo de población y vivienda 2010, y así alcanzar los objetivos deseados, presentado por la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica.
23. Punto de acuerdo para exhortar al Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que explique el porcentaje de eficiencia del Ministerio Público, en consignaciones, órdenes de aprehensión giradas y cumplidas, así como las sentencias condenatorias, presentado por el diputado Arturo Piña García, en nombre Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
24. Proyecto de acuerdo con la finalidad de solicitar la urgente comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado de México, para que explique los resultados obtenidos en nuestra entidad en materia de combate al secuestro, presentada por el diputado Víctor Manuel Bautista López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
25. Punto de acuerdo donde se exhorta al titular del poder Ejecutivo para que en el ámbito de su competencia, establezca mayor eficiencia en la distribución, ejecución y aplicación de los recursos convenidos del Fondo de Aportaciones para la seguridad pública, dentro del presente ejercicio fiscal. Asimismo se exhorta para que de los recursos que no han sido ejercidos, sean ejecutados en su totalidad y subsanar en su caso, el subejercicio de ejercicios fiscales anteriores, presentado por el diputado Crisóforo Hernández Mena en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
26. Punto de acuerdo, mediante el cual se condena la censura del documental titulado "Presunto responsable", así como la constante amenaza del derecho a la libre manifestación de las ideas, presentado por el diputado Ricardo Moreno Bastida
27. Propuesta que formula la Junta de Coordinación Política en relación con modificación de integración de Comisión Legislativa.
28. Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de esta Legislatura, a dictaminar a la brevedad las iniciativas en materia de seguridad pública, que han sido presentadas durante esta "LVII" Legislatura Local.
29. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, uso de la palabra en nombre de la

Legislatura del Estado de México, por la diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza.

30. Con motivo del 183 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México, uso de la palabra por el diputado Crisóforo Hernández Mena, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
31. Clausura de la sesión.

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Esta Presidencia solicita a quienes estén de acuerdo en que la propuesta que ha dado a conocer la Secretaría…

**DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA** (Desde su curul). Solicitaría yo señor Presidente, que se hiciera una corrección en el punto número 16, puesto que es una iniciativa que estaría presentando el suscrito Miguel Sámano a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista; y por supuesto, del Partido Revolucionario Institucional, con la aportación del señor diputado Gerardo Hernández Tapia.

Gracias señor.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias diputado Sámano.

Se votaría el orden del día, haciendo mención de que en el punto número 16 se complementaría la propuesta, como ha indicado el diputado Sámano; es decir, quedaría en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Presidencia solicita a quienes estén de acuerdo en que la propuesta que ha dado a conocer la Secretaría…sí, señor diputado Sánchez Juárez.

Micrófono para el diputado Sánchez Juárez, por favor.

**DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** (Desde su curul). Gracias Presidente.

De igual manera, en los puntos 8, 9, 10 y 11 que señalan el nombre de los ponentes y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le pediría que también fuera a nombre del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Sí diputado Sánchez Juárez ¿dijo usted el punto 8, 9, 10, y 11? Sí, diputado Bautista.

**DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ** (Desde su curul). Perdón, sí en el mismo sentido señor Presidente, en los puntos 12, 13, 14 y el 23, el 24, el 25; igualmente solicitamos que se incorpore que son presentados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias diputado Bautista.

Voy a repetir las propuestas de los señores diputados, en los tres casos, la del diputado Sámano, la del diputado Sánchez Juárez y la del diputado Bautista, una por una para que se vote posteriormente el orden del día, si me lo permiten. En el punto número 8 del orden del día, el diputado Sánchez Juárez, solicita que se añada a la propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y que se incluya la propuesta a la propuesta el del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Este mismo caso sucede en punto número 9 del orden del día, donde se incluye también al Partido de la Revolución Democrática como proponente de la lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de reforma y adiciones a diversos ordenamientos del Código Administrativo del Estado de México.

Asimismo, en el punto número 10, el punto número 11 y el punto número 12, en el punto 10 y 11 se solicita añadir al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En el punto número 12 el diputado Bautista solicita que se añada al Partido Acción Nacional; en el punto número 13, el diputado Bautista solicita que se añada al Partido Acción Nacional; en el punto número 14 de igual manera; en el punto número 16 el diputado Sámano solicita, se añada al Partido Revolucionario Institucional a la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; en el punto número 23 el diputado Bautista solicita se añada al Partido Acción Nacional y en los puntos 24 y 25 de la misma manera se solicita se añada al Partido Acción Nacional.

Con estas modificaciones propuestas por los señores diputados, esta Presidencia solicita a quienes estén de acuerdo en la propuesta que se ha

dado a conocer por esta Secretaría, sea aprobada con el carácter de orden del día, se sirvan expresarlo en votación económica poniéndose de pie.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO**. (Votación económica).

La propuesta de orden del día ha sido aprobada por mayoría de los votos, de los diputados presentes.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias, diputada Secretaria. Habiendo sido distribuido entre las señoras y señores diputados la Gaceta Parlamentaria y toda vez que en ella se contiene el acta de la sesión anterior, la Presidencia les pregunta si tienen alguna observación o comentario sobre el acta de la sesión anterior.

**ACTA DE LA SESIÓN DELIBERANTE DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL ONCE.**

Presidente Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas

En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las trece horas con dieciséis minutos del día primero de marzo de dos mil once, la Presidencia abre la sesión una vez que la Secretaría verificó la existencia del quórum.

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la propuesta de orden del día.

Desde su curul, el diputado Ricardo Moreno Bastida solicita se incluya su participación en el punto número dos del orden del día.

La Presidencia solicita a la Secretaría, incorpore la solicitud del diputado Ricardo Moreno Bastida, en el punto número dos, relativo al orden de oradores y somete a votación la propuesta de orden del día.

Desde su curul, el diputado Horacio Jiménez López manifiesta que no está de acuerdo en que el ejercicio de un derecho sea sometido a votación.

La Presidencia aclara que, se está sometiendo a votación el orden del día, con la inclusión de la propuesta del diputado Ricardo Moreno Bastida.

La propuesta de orden del día, incluida la propuesta del diputado Ricardo Moreno Bastida, es aprobada por unanimidad de votos y se desarrolla conforme al tenor siguiente:

1.- La Presidencia informa que las actas de las sesiones anteriores han sido entregadas y distribuidas a los diputados. Las actas son aprobadas por unanimidad de votos.

La Presidencia aclara que en el punto número 2, se incorporan en el uso de la palabra, los diputados Antonio García Mendoza del Partido Socialdemócrata y el diputado Ricardo Moreno Bastida.

2.- Para fijar la posición de sus Grupos Parlamentarios por el inicio del Quinto Período Ordinario de Sesiones, hacen uso de la palabra los diputados Ricardo Moreno Bastida; Antonio García Mendoza, del Partido Socialdemócrata; Horacio Enrique Jiménez López, del Partido Convergencia; Miguel Sámano Peralta, del Partido Verde Ecologista de México; José Francisco Barragán Pacheco, del Partido del Trabajo; Lucila Garfias Gutiérrez, del Partido Nueva Alianza; Arturo Piña García, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Ernesto Nemer Álvarez, del Partido Revolucionario Institucional.

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al comunicado formulado en relación con recomendaciones para municipios presentadas por el Consejo de Valoración Salarial.

La Presidencia manifiesta que la Legislatura se da por enterada del contenido del comunicado y de las recomendaciones formuladas; se tiene por cumplido lo dispuesto en el artículo 187 segundo párrafo del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

La Presidencia solicita a la Secretaría, registre la asistencia a la sesión, informando esta última, que ha quedado registrada la asistencia de los diputados a la sesión.

4.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión siendo las catorce horas con treinta y siete minutos del día de la fecha y cita a los diputados para el día jueves diez del mes y año en curso, a las diez horas con treinta minutos.

Diputados Secretarios

Yolitzi Ramírez Trujillo Félix Adrián Fuentes Villalobos

Horacio Enrique Jiménez López

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Esta Presidencia solicita a quienes estén por la aprobatoria del acta de la sesión anterior se sirvan poner de pie.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** El acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Considerando el punto 2 del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Parra Ángeles, para la presentación del informe de actividades, desarrolladas por la Diputación Permanente, durante el período que fungió ese órgano de la Legislatura.

**DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES.**
**DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS**
**PRESIDENTE DE LA H. "LVII"**
**LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO.**
**PRESENTE.**

Miembros de la Mesa Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, los integrantes de la Diputación Permanente, nos permitimos presentar al conocimiento de la H. "LVII" Legislatura, informe de actividades sustanciadas por este órgano de la Legislatura, que funcionó en el Cuarto Período de Receso comprendido del 15 de diciembre del 2010 al 28 de febrero del año 2011.

Cabe destacar, que la Diputación Permanente es el Órgano de la Legislatura que se encarga de representarla durante los períodos de receso y su actuación reviste especial importancia; porque le corresponde garantizar la presencia y la continuidad del Poder Legislativo en el Estado de México, con apoyo en el marco constitucional, para favorecer el equilibrio y respeto en el ejercicio de los poderes públicos de nuestra Entidad.

Se ha convertido también en el que los distintos grupos parlamentarios participan activamente en el tiempo de receso, formulando propuestas y deliberando sobre asuntos que mucho interesan a la sociedad mexiquense.

El Período de Receso para el Poder Legislativo no significa detención de las actividades, sino por el contrario, la oportunidad de seguir trabajando en favor de los mexiquenses, especialmente las comisiones y los comités en el estudio y preparación de los asuntos que competen a la Legislatura en Pleno.

Más aún, la propia Diputación Permanente en uso de las facultades e incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como entre otros preceptos como el artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, atiende trascendentes tareas para el Poder Legislativo, contribuyendo desde su ámbito de competencia en el desahogo de las tareas del interés público.

Durante el ejercicio que se informa, los trabajos realizados se vieron significativos por la voluntad de cada uno de sus integrantes de servir y cumplir con su encomienda de la mejor manera y de hacerlo con base en los criterios que han guiado la actuación de ésta, la más productiva Legislatura del Estado, impulsados por el interés general de la sociedad mexiquense, por serios y cuidadosos estudios y por una disposición permanente de diálogo y de consenso.

Con ánimo incluyente y respetuoso que nos permitiera obtener resoluciones fortalecidas por las opiniones y aportaciones de todos, estuvimos atentos para cumplir con diligencia nuestras tareas, participando en las sesiones mediante la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo y como lo dispone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, mediante decreto número 258 convocamos a la Legislatura a la realización del Cuarto Período Extraordinario para atender una agenda conformada por asuntos de actualidad, de provecho y convenientes para el pueblo del Estado de México.

En acatamiento del mandato que nos fue confiado por la Legislatura de la Diputación Permanente, celebramos 5 sesiones plenarias y desarrolló las actividades que a continuación se precisan en el orden cronológico: sesión del 15 diciembre de 2010, sesión del 13 de enero de 2011, sesión del 27 de enero de 2011, sesión del 31 de enero de 2011 y sesión del 18 de febrero de 2011.

Actividades de las Comisiones Legislativas.

Durante el Período de Receso que se informa, las comisiones legislativas tuvieron un intenso y fecundo trabajo de estudio y dictamen, de iniciativas, puntos de acuerdo y asuntos que en su oportunidad les fueron turnados y que en su mayoría dieron contenido a la agenda del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones.

En este sentido, se llevaron a cabo 17 reuniones públicas de comisiones legislativas para tratar asuntos turnados a las mismas, entre ellas las Comisiones y Comités de: Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Límites Territoriales del Estado de México y Municipios; Gobernación y Puntos Constitucionales; Comunicación Social; Procuración y Administración de Justicia; Planificación Demográfica; Legislación y Administración Municipal; Desarrollo Social; Asuntos Indígenas; Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización; Educación, Ciencia y Tecnología; Salud, Asistencia y Bienestar Social; de la Juventud y el Deporte; Trabajo y Previsión Social; Equidad de Género; Apoyo y Atención al Migrante.

Durante el registro de los trabajos, la actividad desplegada por la Diputación Permanente lo aconteció en las sesiones de este órgano legislativo y la documentación presentada fue registrada fielmente en el Diario de Debates, para conocimiento y valoración de las presentes y futuras generaciones; asimismo, como la determinada, de nuestra Ley Orgánica y Reglamento cada iniciativa y punto de acuerdo, así como las participaciones de las señoras y los señores diputados, fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo que distribuyó en su oportunidad.

Defensa de interese jurídicos: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Presidencia de la Diputación Permanente, asumió la representación jurídica del Poder Legislativo, ante distintas autoridades, interviniendo en la tramitación de juicios de amparo, como al tenor del siguiente:

Demandas de amparo: 80

Informes previos: 23

Informes justificados: 80

Correspondencia: La Diputación Permanente mantuvo comunicación institucional con las distintas instancias de Gobierno, Federales, Estatales y Municipales, de acuerdo con cada una de las materias que fueron sometidas a su consideración; de igual forma, conoció de los escritos y comunicados, enviados a la Legislatura, particularmente por las Cámaras del Congreso de la Unión, por Congresos de los Estados de la República Mexicana y por distintas autoridades, y despachó la correspondencia oficial de la Legislatura, sobresaliendo la recepción de 19 puntos de acuerdo y 68 comunicados atendidos en términos de ley,

Con la representación de este poder público, se firmó en la Ciudad de Querétaro, convenio de colaboración para la integración de una Agenda Legislativa común con 27 entidades del país, con el mismo carácter institucional, acompañamos al Presidente de la República, Maestro Felipe Calderón Hinojosa y al Gobernador del Estado de México, Licenciado Enrique Peña Nieto en diversas ocasiones¸ eventos de singular importancia para los mexiquenses por las obras y logros alcanzados.

Honorable Asamblea.

Ha sido un honor para nosotros, formar parte de la Diputación Permanente y también una gran responsabilidad, frente a los mexiquenses que exigen instituciones útiles y atentas a su realidad social, con la convicción de haber aportado nuestro entusiasmo, mayor esfuerzo y voluntad de trabajo, en esta encomienda, los diputados y las diputadas, Guillermo César Calderón León, María Angélica Linarte Ballesteros, Alejandra Gurza Lorandi, Luis Antonio González Roldán, José Francisco Barragán Pacheco, Francisco Javier Funtanet Mange, Miguel Ángel Casique Pérez, Miguel Ángel Xolalpa Molina, Francisco Cándido Flores Morales, José Vicente Coss Tirado, Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Jael Mónica Fragoso Maldonado, Arturo Piña García y el de la voz, agradecemos la confianza y el apoyo que nos dispensaron, y que hizo posible la buena marcha y resultados de la Diputación Permanente; así como los trabajos, en coadyuvancia y corresponsabilidad de lo que es Asuntos Parlamentarios; así como la

Junta de Coordinación Política.

Es cuanto y muchas gracias.

Toluca de Lerdo, Méx.,
a 10 de marzo de 2011.

**DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS**
**PRESIDENTE DE LA H. LVII LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MEXICO.**
**P R E S E N T E.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, los integrantes de la Diputación Permanente, nos permitimos presentar al conocimiento del H. "LVII" Legislatura, informe de actividades sustanciadas por este órgano de la Legislatura que funcionó en el cuarto período de receso comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 28 de febrero del año 2011.

Cabe destacar que la Diputación Permanente es el órgano de la Legislatura que se encarga de representarla durante los períodos de receso y su actuación reviste especial importancia porque le corresponde garantizar la presencia y la continuidad del Poder Legislativo en el Estado de México, con apoyo en el marco constitucional, para favorecer el equilibrio y respeto en el ejercicio de los poderes públicos de nuestra entidad.

Por otra parte, la Diputación Permanente se ha convertido también en un espacio plural de la Legislatura, en el que los distintos grupos parlamentarios participan activamente en el tiempo de receso, formulando propuestas y deliberando sobre asuntos que mucho interesan a la sociedad mexiquense.

El período de receso para el Poder Legislativo no significa detención de las actividades sino, por el contrario, la oportunidad de seguir trabajando en favor de los mexiquenses, especialmente, las comisiones y los comités, en el estudio y preparación de los asuntos que competen a la Legislatura en Pleno.

Más aún, la propia Diputación Permanente, en uso de las facultades y en cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como, en otros preceptos como el artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, atiende trascendentes tareas para el Poder Legislativo coadyuvando, desde su ámbito competencia, en el desahogo de las tareas de la Legislatura.

Durante el ejercicio que se informa los trabajos de la Diputación Permanente se vieron significados por la voluntad de cada uno de sus integrantes de servir y cumplir con su encomienda de la mejor manera y de hacerlo con base en los criterios que han guiado la actuación de la "LVII" Legislatura, esto es, impulsados por el interés general de la sociedad mexiquense, por serios y cuidadosos estudios y por una disposición permanente de diálogo y de consenso, con ánimo incluyente y respetuoso, que nos permitiera obtener resoluciones fortalecidas por las opiniones y aportaciones de todos, quienes integramos la Diputación Permanente estuvimos atentos para cumplir con diligencias nuestras tareas, participando en las sesiones mediante la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, y como lo dispone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, mediante decreto número 258 convocamos a la Legislatura a la realización del Cuarto Período Extraordinario para atender una agenda conformada por asuntos de actualidad, de provecho y convenientes para el pueblo del Estado de México.

En acatamiento del mandato que nos fue confiado por la Legislatura, la Diputación Permanente celebró 5 sesiones Plenarias y desarrolló las actividades que a continuación se precisa en orden cronológico:

**Sesión del 15 de diciembre de 2010**

- Instalación formal de la Diputación Permanente e inicio de sus funciones.

**13 de Enero de 2011.**

- Lectura y Acuerdo conducente de la minuta proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

- Lectura y Acuerdo conducente de la

minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

• Lectura y Acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que autoriza a desincorporar del patrimonio estatal y donar a título gratuito, un inmueble, a favor del órgano desconcentrado federal denominado CIATEC, A.C. para destinarlo a la construcción de un laboratorio de plásticos, formulado por el titular del Ejecutivo Estatal.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende, formulado por el Ayuntamiento de Villa de Allende, México.

**27 de Enero de 2011.**

• Lectura y acuerdo conducente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de desarrollar los procedimientos aplicables al ejercicio del derecho de iniciativa referente que la propia constitución otorga al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, formulado por el Titular del Ejecutivo Estatal.

• Lectura y acuerdo conducente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México a efecto de desarrollar los procedimientos aplicables al ejercicio del derecho de voz respecto de las iniciativas que atañen a las autoridades, a quienes la constitución otorga el derecho de iniciativa, formulado por el Titular del Ejecutivo Estatal.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se abroga el decreto número 180, aprobado por esta Soberanía Popular, en fecha 30 de septiembre de 2010, por lo que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Ocoyoacac, México, a crear el Organismo Público Descentralizado Municipal, para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de ese Municipio, formulado por el titular del Ejecutivo Estatal.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto, por el que se reforma el Código Penal del Estado de México, formulado por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Procurador General de Justicia del Estado de México, investigue los homicidios dolosos de mujeres en el Estado de México, formulado por la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Punto de acuerdo para solicitar la condonación del Pago del Impuesto Predial y los derechos por consumo de Agua Potable a los habitantes de las colonias vecinas, al depósito de basura Neza II, debido a los daños que han sufrido sus predios, por las frecuentes explosiones de gas metano, formulado por los diputados María Angélica Linarte Ballesteros y Hugo de la Rosa García, en nombre del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

• Punto de acuerdo sobre excitativa, al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación declare alerta de violencia de género, para el Estado de México, formulado por el diputado Constanzo de la Vega Membrillo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Comunicado de acuerdo, que formula la Junta de Coordinación Política, en relación con

integración de la Comisión Especial.

**31 de Enero de 2011.**

• Lectura y en su caso discusión del dictamen formulado a la iniciativa de decreto por la que se abroga el decreto número 180, aprobado por esta soberanía popular, en fecha 30 de septiembre de 2010, por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Ocoyoacac, México, a crear el organismo público descentralizado municipal para la prestación los servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento de ese municipio.

**18 de Febrero de 2011.**

• Declaratoria de aprobación de la minuta de decreto por la que se reforma el párrafo primero del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

• Declaratoria de aprobación de la minuta de decreto por la que se adiciona el artículo 86 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

• Declaratoria de aprobación de la minuta de decreto por la que se adiciona el párrafo décimo sexto al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Ley Reglamentaria del artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para modificar la denominación del Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, por la de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, formulada por el titular del Ejecutivo Estatal.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por la que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del municipio de Temascalapa, México, formulado por el titular del Ejecutivo Estatal.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por la que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales del municipio de Ocuilan, México, formulada por el titular del Ejecutivo Estatal.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por la que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del municipio de Texcoco, México, formulada por el titular del Ejecutivo Estatal.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec”.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tequixquiac”, formulado por el propio municipio.

• Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se convoca a la celebración del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la “LVII” Legislatura, formulada por la que la Junta de Coordinación Política.

• Posicionamiento referente al decreto presidencial por el que se establece la deducción del pago de colegiaturas de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, formulado en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza.

• Punto de acuerdo mediante el cual se hace un exhorto al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones se garantice la protección y tutela del derecho a la libre manifestación de las ideas, formulado por el diputado Ricardo Moreno Bastida.

Actividad de las Comisiones Legislativas.
Durante el período de receso que se informa, las comisiones legislativas, tuvieron un intenso y fecundo trabajo de estudio y dictamen, de iniciativas, puntos de acuerdo y asuntos que, en su oportunidad, les fueron turnados, y que, en su mayoría, dieron contenido a la agenda del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones.
En este sentido, se llevaron a cabo 17 reuniones públicas de comisiones legislativas para tratar los asuntos siguientes:

| N° | COMISIÓN Y/O COMITÉS | MATERIA |
|---|---|---|
| **1.** | Trabajo, Previsión y Seguridad Social | Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 229 y 231 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. (Busca favorecer el principio de celeridad, haciendo más expedita la emisión del laudo que corresponda). |
| 2. | Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios. | Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, para que en uso de sus atribuciones y en coordinación de las autoridades del orden estatal y municipal, busquen una solución pacífica al conflicto limítrofe existente entre las comunidades de "El Laurel y San Pedro Arriba", velando por la vigencia de las instituciones, la cohesión social, la continuidad de los servicios públicos y el respeto a los derechos agrarios de sus habitantes. |
| 3. | Gobernación y Puntos Constitucionales Comunicación Social | Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México. |
| 4. | Gobernación y Puntos Constitucionales Procuración y Administración de Justicia | Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, (Se tipifica un mecanismo legal coactivo que obliga a los padres o tutores a llevar a cabo las medidas tendientes al cuidado y protección de los menores de manera reiterada). |

| N° | COMISIÓN Y/O COMITÉS | MATERIA |
|---|---|---|
| | | Iniciativa de Decreto por la que se reforma el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, (Da congruencia al catálogo de delitos). |
| 5. | Gobernación y Puntos Constitucionales | Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de Depósito Legal para el Estado de México, (En materia de patrimonio documental y bibliográfico).<br><br>Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, (A efecto de desarrollar los procedimientos aplicables al ejercicio del Derecho de Iniciativa Preferente que la propia Constitución otorga al Titular del Poder Ejecutivo del Estado).<br>Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, (A efecto de desarrollar los procedimientos aplicables al ejercicio del derecho de voz respecto de las iniciativas que atañen a las autoridades a quienes la Constitución otorga el derecho de iniciativa). |
| 6. | Planificación Demográfica | Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y a los ciento veinticinco municipios del Estado de México para que, en el ámbito de sus facultades, otorguen todas las facilidades y la colaboración necesaria para la realización del Censo de Población y Vivienda 2010, y así alcanzar los objetivos deseados.<br><br>Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de México a que en el ámbito de sus atribuciones instauren y en su caso, reglamenten sus Consejos Municipales de Población. |
| 7. | Legislación y Administración Municipal | Punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos mexiquenses a verificar y ajustar los sueldos de los funcionarios públicos municipales, conforme a las recomendaciones del Consejo Consultivo de Valoración Salarial; presentado por el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. |

| N° | COMISIÓN Y/O COMITÉS | MATERIA |
|---|---|---|
| | | Punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a efecto de que consideren en los bandos municipales, disposiciones que prohíban la ubicación de establecimientos mercantiles cerca de centros educativos; presentados por la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. |
| | | Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para que se emita al Reglamento Interior de los Ayuntamientos del Estado de México, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza |
| | | Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Huixquilucan, Ecatepec de Morelos y Netzahualcóyotl, para que en la sucesiva implementación de cámaras de video y de vigilancia con fines de seguridad pública en sus respectivas municipalidades; presentado por el diputado Luis Antonio González Roldán, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. |
| | | Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos del Estado, que actualmente no cuentan con organismos operadores públicos descentralizados, para la prestación de servicios de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, tengan a bien crearlos; presentado por el diputado Miguel Sámano Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. |
| | | Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Administrativo del Estado de México, para que los establecimientos mercantiles que expiden bebidas alcohólicas cuenten con un instrumento que permita a sus clientes cuantificar la concentración de alcohol en la sangre, presentado por el diputado Francisco Funtanet Mange, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. |

| N° | COMISIÓN Y/O COMITÉS | MATERIA |
|---|---|---|
| 8. | Legislación y Administración Municipal<br>Desarrollo Social | Punto de Acuerdo sobre exhorto a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de México, para que consideren descuentos a madres solteras en las tarifas de Estancias Infantiles. |
| 9. | Desarrollo Social<br>Asuntos Indígenas | Iniciativa por la que se adiciona el párrafo segundo al artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, (Establece las reglas de operación de los programas de desarrollo social destinados a la población indígena, deberán considerar sus formas de organización y difundirse tanto en idioma español como en la lengua o lenguas que se hablen en los pueblos indígenas reconocidos en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México). |
| 10. | Procuración y Administración de Justicia<br>Gobernación y Puntos Constitucionales | Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 223 BIS y 306 del Código Penal del Estado de México. |
| 11. | Gobernación y Puntos Constitucionales<br>Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización | Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 8 fracciones XV y XXIX, 13 fracción XIII, 23 fracciones III, V y VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.<br><br>Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. |
| 12. | Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, (Para promover la transformación de las escuelas y guarderías del sistema tradicional por turno en escuelas de tiempo completo). |
| 13. | Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología<br>Salud, Asistencia y Bienestar Social | Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México. |
| 14. | La Juventud y el Deporte<br>Salud, Asistencia y Bienestar Social | Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia" de los 125 municipios de la entidad para que en la medida de lo posible se facilite asesoría nutricional y un alimento calórico suficiente que evite poner en riesgo de desnutrición a los atletas infantiles y juveniles, además que coadyuven con el "Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte", para que en conjunto se le dé una asesoría integral al atleta. |

| N° | COMISIÓN Y/O COMITÉS | MATERIA |
|---|---|---|
| 15. | Trabajo, Previsión y Seguridad Social Equidad y Género | Iniciativa de que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y Municipios. |
| 16. | Apoyo y Atención al Migrante | Punto de Acuerdo sobre exhorto al Ejecutivo Federal, en relación con percepciones económicas del ex-trabajadores migratorios, formulado por el Dip. Miguel Ángel Xolalpa Molina del Grupo Parlamentario del PC. |
| 17. | Desarrollo Social | Iniciativa de Ley que crea la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Estado de México.<br>Iniciativa de Ley de Seguro del Desempleo. |

Registro de los Trabajos.
La actividad desplegada por la Diputación Permanente, lo acontecido en las sesiones de este órgano legislativo y la documentación presentada fue registrada, fielmente, en el Diario de Debates, para conocimiento y valoración de las presentes y futuras generaciones. Asimismo, como lo determina nuestra Ley Orgánica y Reglamento, cada iniciativa y punto de acuerdo, así como las participaciones de las señoras y de los señores diputados fueron publicados en la "Gaceta Parlamentaria" del Poder Legislativo, que se distribuyó con toda oportunidad.

Defensa de Intereses Jurídicos.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la Diputación Permanente asumió la representación jurídica del Poder Legislativo ante distintas autoridades, interviniendo en la tramitación de Juicios de Amparo, conforme al tenor siguiente:

| | |
|---|---|
| Demandas de Amparo | 80 |
| Informes Previos | 23 |
| Informes Justificados | 80 |

**Correspondencia.**
La Diputación Permanente mantuvo comunicación institucional con las distintas instancias de Gobierno, Municipales, Estatales y Federales, de acuerdo con cada una de las materias que fueron sometidas a su consideración. De igual forma, conoció de los escritos y comunicados enviados a la Legislatura, particularmente, por las Cámaras del Congreso de la Unión, por Congresos de los Estados de la República Mexicana y por distintas autoridades, y despachó la correspondencia oficial de la Legislatura, sobresaliendo la recepción de 19 puntos de acuerdo y 68 comunicados atendidos en términos de ley.

**Honorable Asamblea.**
Ha sido un honor para nosotros formar parte de la Diputación Permanente y también una gran responsabilidad, frente a los mexiquenses, que exigen instituciones útiles y atentas a su realidad social. Con la convicción de haber aportado nuestro entusiasmo, mayor esfuerzo y voluntad de trabajo en esta encomienda, los diputados Daniel Parra Ángeles, Guillermo César Calderón León, María Angélica Linarte Ballesteros, Alejandra Gurza Lorandi, Luis Antonio González Roldán, José Francisco Barragán Pacheco, Francisco Javier Funtanet Mange, Miguel Ángel Casique Pérez, Miguel Ángel Xolalpa Molina, Francisco Cándido Flores Morales, José Vicente Coss Tirado, Isabel Julia Victoria Rojas De Icaza, Jael Mónica Fragoso Maldonado y Arturo Piña García, agradecemos la confianza y apoyo que nos dispensaron y que hizo posible la buena marcha y resultados de la Diputación Permanente.

Sin otro particular, le manifestamos nuestra elevada consideración.

**A T E N T A M E N T E**
**PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PERMANENTE**
**DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES.**

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Señor Presidente, si me permite antes de continuar con la sesión. Yo quisiera solicitarle, de manera respetuosa, que se pudiera conceder la dispensa de la lectura de los proyectos de decreto de las iniciativas, para que únicamente sea leído un documento síntesis de cada una de ellas, cuando esto proceda, ya que estos mismos, han sido remitidos a los diputados con oportunidad.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Para favorecer el desarrollo de la sesión y por economía procesal, la Presidencia con fundamento en lo señalado en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 47, fracciones VIII, XX y XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, somete a la aprobación de la Legislatura, la dispensa de lectura de los proyectos de decreto de las iniciativas, para que únicamente, sea leído un documento síntesis de cada una de ellas, cuando proceda; y de los dictámenes, la parte introductoria y los puntos resolutivos de cada uno, pidiendo, sean insertados en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a quienes estén por la dispensa de lectura de los proyectos de decreto, se sirvan poner de pie.

Gracias.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** La propuesta ha sido aceptada por unanimidad.

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Se tiene por aprobada la dispensa de lectura en los términos indicados.

Correspondiendo al acatamiento de un mandato dispuesto en nuestra Ley Orgánica, la Presidencia en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 47 fracciones VIII, XX y XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México:

**ACUERDA:**

**PRIMERO.** Se tiene por enterada la "LVII" Legislatura el contenido del informe, rendido por la Diputación Permanente y de la documentación recibida y tramitada durante el receso.

**SEGUNDO.** La Secretaría registrará los decretos expedidos y la documentación tramitada por la Diputación Permanente.

**TERCERO.** La Secretaría registrará las iniciativas y asuntos pendientes de tramitación.

**CUARTO.** En su oportunidad y conjuntamente con la Junta de Coordinación Política, se acordará el trámite de las iniciativas de decreto y en atención a la agenda, se programará, en su caso, la presentación a la "LVII" Legislatura.

**QUINTO.** Se tiene por cumplida la tarea de la Diputación Permanente y por atendido lo previsto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

En relación con el punto número 3 del orden del día, pido a la Secretaría dé lectura a la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Desarrollo Social del Estado de México, Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de Discriminación en el Estado de México, Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado y Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Papel membretado del Gobierno del Estado de México
"2011 Año del Caudillo Vicente Guerrero"
Toluca de Lerdo, México a 4 de febrero de 2011.
**C. SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO.**
**PRESENTE.**

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 51 fracción I, 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la

consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de usted, iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Desarrollo Social del Estado de México, Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de Discriminación en el Estado de México, Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado y Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En tal virtud y atendiendo la necesidad de la mujer, que desea armonizar trabajo con maternidad, se considera que ellas deben contar una legislación adecuada a sus intereses; pero a su vez responsable con la productividad y organización que contribuya al desarrollo cotidiano que desempeñan diversas actividades laborales, se hace necesario realizar reformas a diversos ordenamientos legales como son: la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios, la Ley para Prevenir y Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, en las que se propone establecer como obligación a las instituciones públicas y dependencias, eliminar toda forma de discriminación. El hecho de encontrarse embarazada una mujer cuando acuda a solicitar empleo, no es condición para negárselo, salvo que el tipo de actividad a desarrollar impida su desempeño por el riesgo que este pudiera generarse.

Asimismo, en la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, se precisa la equidad de género en el ámbito laboral, tanto como la generación de oportunidades para el trabajo con igualdad de género, su conservación, capacitación para el mismo.

De igual forma en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, se contempla de manera innovadora la propuesta tendiente al equilibrio de las relaciones que se dan entre los internos en los Centros de Prevención y Readaptación Social, con los empleadores de estos en la industria penitenciaria. En relación con la remuneración que debe ser por lo menos iguales a los que se pagan a un trabajador en condiciones similares de libertad.

Finalmente, en la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, se establece que deberá brindar la oportunidad y facilidades necesarias a los miembros de los pueblos indígenas, para que sean adiestrados y capacitados en el ámbito laboral diverso al de su comunidad.

A efecto de quien así lo considere, pueda incorporarse en la planta laboral de la Entidad, o en su caso, que por, que se, porque se apoyen los proyectos productivos.

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de ese, de este H. Cuerpo Legislativo la presente iniciativa, a fin de que si se estima correcta, se apruebe en sus términos.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO**
**(Rúbrica)**
**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**
**LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA**
**(Rúbrica)**

Es cuanto señor Presidente.

**“2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO”**

Toluca de Lerdo, México, a 4 de febrero de 2011.

**C. DIPUTADO SECRETARIO**
**DA LA DIPUTACIÓN PERMENETE**
**DE LA H. “LVII” LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**

**P R E S E N T E**

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de Usted, Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Desarrollo Social del Estado de México, Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado y Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, es el documento en el que se establecen los principales anhelos y aspiraciones de la sociedad mexiquense, resultado de un ejercicio democrático en el que participaron diversos sectores sociales, mediante la expresión de sus necesidades prioritarias; dicho instrumento determina las políticas públicas que se deben aplicar en nuestra Entidad Federativa con la finalidad de proporcionar Seguridad Integral a cada uno de los mexiquenses, misma que se sustenta en la coordinación interinstitucional.

El referido Plan, establece como uno de sus objetivos, fortalecer a las instituciones encargadas de ejecutar las políticas públicas de inclusión social; en su Pilar I de Seguridad Social, vertiente dos denominada igualdad de Oportunidades, en relación a la Equidad de Género y nuevas expectativas para las mujeres, establece como estrategias, la participación de la mujer en los ámbitos social, político y económico, el apoyo a las madres trabajadoras y la protección a la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres.

En la visión de Gobierno se estableció dentro del Pilar de Seguridad Social, ejercer un Gobierno en el que todos los sectores de la sociedad, particularmente los más vulnerables, continúen incorporándose al desarrollo, a través de dos funciones básicas del Estado, como lo son: La lucha contra la pobreza y los esfuerzos para fortalecer la equidad.

En ese sentido, destacan como líneas de acción, las relativas a crear un programa de capacitación permanente que sensibilice a los servidores públicos estatales sobre la equidad de género, privilegiar la atención de las demandas de las mujeres, relativas a su desarrollo integral y al respeto de su integridad, instrumentar mecanismos que garanticen el acceso de la mujer a los mercados de trabajo y el cumplimiento de sus derechos laborales y el impulso de reformas a las leyes laborales a fin de garantizar el trato equitativo a las mujeres.

El derecho tiene como fin preservar la seguridad jurídica de los gobernados, por lo que bajo esa premisa toral, el Estado debe propiciar las alternativas de solución respecto de la problemática que afecta a los particulares; por lo que es tarea insoslayable del Gobierno a mi cargo, dar cabal cumplimiento y vigencia al orden jurídico, en defensa de la seguridad jurídica de las personas.

En órganos del Gobierno, se deben promover políticas públicas y acciones que de modo eficaz se traduzcan en el goce de nuestras libertades, en una vida segura, donde la igualdad ante la Ley sea premisa fundamental, a efecto de que se posibilite la igualdad de oportunidades en el Estado de México.

El Estado de México, es la Entidad más poblada del país, cuenta con aproximadamente 15 millones de habitantes; de esta cantidad, las mujeres representan más de 7.5 millones, día con día queda constancia que constituyen el eje de la estabilidad de la familia, lo que insta a mejorar su entorno, fortaleciendo la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la sociedad, posibilitando así, que los mexiquenses construyamos una sociedad consolidada y próspera, que sea el engrane del desarrollo Nacional.

El respeto a los derechos de los trabajadores, especialmente a los grupos vulnerables y especiales, es una obligación de todo gobierno que se precie de ser democrático, sensible y cercano a la gente.

En ese sentido, se ha expresado que el Estado debe asumir su liderazgo en el desarrollo integral, que aminore las distancias entre segmentos sociales,

que contribuya a desterrar las diferencias entre las regiones; para eso, son las políticas públicas para encausar los esfuerzos individuales hacia objetivos sociales compartidos; así mismo se ha manifestado que las instituciones del Estado están obligadas a privilegiar y defender los programas sociales, a fortalecerlos y renovarlos para que logren que todos los mexicanos se incorporen al desarrollo y bienestar.

En ese tenor y acorde con las consideraciones expuestas con antelación, se hizo necesaria la revisión de diversos ordenamientos legales, a fin de ubicar en los que se tienen que destacar y robustecer de manera primordial los derechos para el acceso al trabajo y la capacitación para el mismo, particularmente de los grupos vulnerables de la sociedad, como lo son, entre otros; los adultos mayores, las personas con discapacidad, los grupos indígenas y desde luego bajo la perspectiva de equidad de género en el ámbito laboral.

En la historia de México en virtud de que los momentos más trascendentes del país han estado marcados por la lucha contra la desigualdad, se debe continuar sentando los cimientos de la paz y la estabilidad de México en verdaderas condiciones de justicia y solidaridad, toda reivindicación que se haga de las clases desfavorecidas, que por diferentes razones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, es precisamente ahí donde se tiene que incidir principalmente, en el respeto de los derechos fundamentales y en la apertura de oportunidades laborales, no solo porque se lo merecen; sino por que en muchas ocasiones se ha dejado de manera secundaria la contemplación de esas prerrogativas fundamentales en el ámbito laboral , por considerar que están establecidas en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

En tal virtud y atendiendo a la necesidad de la mujer, que desea armonizar trabajo con maternidad, se considera que ellas deben contar con una legislación adecuada a sus intereses, pero a su vez responsable con la productividad y organización, que contribuya al desarrollo cotidiano que desempeñan diversas actividades laborales, se hace necesario realizar reformas a diversos ordenamientos legales como son: la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, en las que se propone establecer como obligación a las Instituciones Públicas y Dependencias eliminar toda forma de discriminación. El hecho de encontrarse embarazada una mujer cuando acude a solicitar empleo, no es condición para negárselo, salvo que el tipo de actividad a desarrollar, impida su desempeño por el riesgo que éste pudiera generarle.

Así mismo, en la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, se precisa la equidad de género en el ámbito laboral; así como, la generación de oportunidades para el trabajo con igualdad de género, su conservación y capacitación para el mismo.

De igual forma, en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, se contempla de manera innovadora, la propuesta tendiente al equilibrio de las relaciones que se dan entre los internos en los centros de prevención y de readaptación social, con los empleadores de éstos en la industria penitenciaria, en relación con la remuneración que debe ser por lo menos iguales a los que se pagan a un trabajador en similares condiciones en libertad.

Finalmente, en la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, se establece que se deberá brindar las oportunidades y facilidades necesarias a los miembros de los pueblos indígenas para que sean adiestrados y capacitados en el ámbito laboral diverso al de su comunidad, a efecto de que quien así lo considere, pueda incorporarse en la planta laboral de la entidad; o en su caso por que se apoyen los proyectos productivos.

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo la presente iniciativa, a fin de que, si la estiman correcta, se apruebe en

sus términos.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO**
**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**
**LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA**

**DECRETO NÚMERO**
**LA H. "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**DECRETA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se reforma la fracción I del artículo 98 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 98.-…

I. Preferir, en igualdad de circunstancias, a mujeres y hombres mexiquenses para ocupar cargos o puestos, eliminando toda forma de discriminación;

II. a la XVIII. …

…

**ARTÍCULO SEGUNDO**.- Se reforma la fracción IV del artículo 10 y la fracción III del artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social del estado de México, para quedar como sigue:

**Artículo 10**.-…

I. a la III.

IV: Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, equidad de género en el ámbito laboral o cualquier otra para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;
V. a la XV. ….

**Artículo 11**.-…

I y II. ….

III. Generación de oportunidades para el trabajo con igualdad de género, su conservación; así como capacitación para el mismo;

IV. a la VII. …

**ARTÍCULO TERCERO.-** Se reforma el inciso f) de la fracción I del artículo 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, para quedar como sigue:

**Artículo 9.-**…

I. …

a) al e) …

f) Generar políticas del respeto del derecho de las mujeres embarazadas o madres solteras a otorgarles un empleo para el cual demuestren capacidad de desarrollo y procurar el acatamiento de sus derechos laborales. El hecho de encontrarse embarazada una mujer cuando acuda a solicitar empleo, no le impide acceder al mismo, salvo que el tipo de actividad a desarrollar, impida su desempeño por el riesgo que éste pudiera generarle.

g) …

II. a la VII. …

**ARTÍCULO CUARTO.-** Se reforma el artículo 57 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado; para quedar como sigue:

Artículo 57.- La remuneración obtenida por el interno, por su actividad realizada a destajo será igual a la que perciba un trabajador que cuente con la libertad física; el Estado implementará la distribución de sus ingresos de la siguiente manera:

a) al e) …
…

**ARTÍCULO QUINTO.-** Se reforma la fracción XVIII y se adiciona la fracción XIX del artículo 3 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, para quedar como sigue:

**Artículo 3**.-…

I. a la XVII

XVIII. Procurar en relación con las Dependencias del Ejecutivo Estatal encargadas de los sectores de desarrollo económico y laboral, se brinden las oportunidades y facilidades necesarias a los habitantes de los pueblos indígenas para que sean adiestrados y capacitados en el ámbito laboral diverso al de su comunidad, a efecto de que quien así lo desee, pueda incorporarse en la planta laboral de la entidad; o en su caso velar por que se apoyen los proyectos productivos que propicien los integrantes de los pueblos indígenas con ayuda del CEDIPIEM.

XIX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y las que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto:

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**SEGUNDO.-** Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Lo tendrá entendido el Gobernador Constitucional del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los días del mes de de dos mil once.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias a la Vicepresidencia.

Se registra la iniciativa y considerando lo establecido en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se encomienda a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia y de Equidad de Género para su estudio.

En cuanto al punto número 4, solicito a la Secretaría dé lectura a la iniciativa de decreto por el que se nombra Magistrados Numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.

**VICEPRESIDENTE DIP. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA.** Con el escudo y la leyenda del Gobierno del Estado de México.

"2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero"

Toluca, Estado de México; a 3 de marzo de 2011

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS**
**DE LA H. "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTE**

En uso de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración de esta H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, iniciativa de decreto por el que se nombran Magistrados Numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, conforme a lo siguiente:

En este sentido, la H. "LVI" Legislatura del Estado de México, mediante Decreto Número 47 publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 09 de julio del año 2007, aprobó el nombramiento del Licenciado Everardo Sáenz Salgado, para fungir como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, por el término de 10 años a partir del día siguiente a su publicación.

En ese sentido, el referido magistrado se dirigió al suscrito como titular del Ejecutivo del Estado; mediante escrito de fecha 15 de junio de 2010, con la finalidad de presentar su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que le fue conferido por esa representación popular; función pública en la que durante su ejercicio demostró profesionalismo, eficiencia y honradez; en este orden de ideas, la H. "LVII" Legislatura del

Estado de México, mediante Decreto Número 83, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 18 de junio de 2010, aprobó la renuncia del referido magistrado.

Por las razones expuestas y además con fundamento en los artículos 77 fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 206 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, he tenido a bien nombrar al Licenciado en Derecho Luis César Fajardo de la Mora, Magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el período para el cual fue designado el magistrado renunciante.

La persona nombrada es distinguida por su trayectoria profesional como conocedor del derecho y la administración de justicia, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 205 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, como se acredita en las documentales que se acompañan en la presente.

En este orden de ideas, la H. "LVII" Legislatura del Estado de México, mediante Decreto Número 162, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 9 de mayo de 2008, aprobó el nombramiento del Licenciado Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle, para fungir como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el período para el cual fue designado el Licenciado en Derecho Eduardo Segovia Abascal, en términos del Decreto Número 37 de la Diputación Permanente, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 2 de mayo de 2007.

En este sentido, el Licenciado Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle, se dirigió al suscrito como titular del Ejecutivo del Estado, mediante escrito de fecha 15 de junio de 2010, con la finalidad de presentar su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que le fue conferido por esta representación popular; misma que le ha sido aceptada; en esa tesitura la Honorable "LVII" Legislatura del Estado de México, mediante Decreto Número 107, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 30 de julio de 2010, aprobó la renuncia del referido magistrado.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 77 fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 206 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, he tenido a bien nombrar al Licenciado en Derecho José Carmen Castillo Ambríz, Magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el período para el cual fue designado el magistrado renunciante.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone en su artículo 61 fracción XV, último párrafo con fundamento en lo dispuesto con facultad de la Diputación Permanente, aprobar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que haga el titular del Ejecutivo del Estado.

Por otra parte, aprobado el nombramiento por la H. Legislatura del Estado de México, la Sala Superior determinará la adscripción de los magistrados nombrados de acuerdo con las siguientes, con las necesidades y criterios que fije.

En estricta observancia en los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General del Gobierno del Estado de México.

Por lo expuesto se somete a la consideración de este H. Cuerpo Legislativo, la presente iniciativa a fin de que, si la estiman correcta se apruebe en sus términos.

Reitero a ustedes la seguridad de mi atención y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO**
**(Rúbrica)**
**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**
**LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA**
(Rúbrica)

Es cuanto señor Presidente.

**"2011. AÑO DE CAUDILLO VICENTE GUERRERO"**

Toluca, Estado de México a 3 de marzo de 2011.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS**
**DE LA "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**P R E S E N T E S**

En uso de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción l y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración d esa H. Legislatura por el digno conducto de Ustedes, Iniciativa de Decreto por el que se nombran Magistrados Numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, conforme a la siguiente:

**EXPOCISIÓN DE MOTIVOS**

La conservación del estado de derecho y la paz social, es producto del respeto de las garantías constitucionales de los gobernados, entre las que encontramos la impartición de justicia pronta, gratuita y expedita, lo anterior constituye una de las funciones primordiales de todo gobierno democrático, lo que constituye un anhelo natural del hombre y la aspiración legítima del ciudadano a quienes las autoridades nos debemos.

Los actos ordenados, ejecutados o tratados de ejecutar por cualquier autoridad administrativa local, para su plena validez, deben ceñirse a cada uno de los principios rectores de legalidad, de lo contrario, deben ser invalidados; por lo que, con el objeto de restituir a su destinatario los derechos que le asisten o que le han sido vulnerados, han sido creados entes encargados de proporcionar justicia al ciudadano; garantizando que la actuación y el ejercicio de la autoridad se circunscriban de manera irrestricta al principio de la legalidad, consagrado por el artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y por virtud del cual, las autoridades del Estado solo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes y demás ordenamientos jurídicos.

El artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Estados integrantes de la Federación están facultados para instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los que deben ser dotados de plena autonomía para dictar sus fallos que diriman las controversias que se susciten entre la administración pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

Asumiendo tal premisa Constitucional, de acuerdo al artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conoce y resuelve las controversias que se suscitan entre las administraciones públicas estatales o municipales y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.

Este órgano administrativo, es la institución que otorga seguridad jurídica a los particulares que acuden a su competencia con la certeza de que los actos dictados, ejecutados o tratados de ejecutar por cualquier autoridad local en su contra, deberán estar debidamente fundados y motivados para ser válidos, pues en caso contrario, éstos serán declarados inválidos por dicho Tribunal Estatal.

Los representantes de este órgano colegiado, a quienes se les ha conferido la honrosa tarea de calificar la actividad de las autoridades estatales y municipales que trasciende a la esfera jurídica de los particulares, son profesionales del derecho que se han distinguido por su capacidad en el conocimiento de la Ley, honradez y probidad con la que se conducen.

En este sentido, la H. "LVI" Legislatura del Estado de México, mediante Decreto número 47, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 9 de julio del 2007 aprobó el nombramiento del Licenciado Everardo Shain Salgado, para fungir como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, por el término de diez años, a partir del día siguiente de su publicación.

En este sentido, el referido Magistrado, se dirigió al suscrito como Titular del Ejecutivo del Estado, mediante escrito de fecha 15 de junio de 2010, con la finalidad de presentar su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que le fue conferido para esa representación popular, función pública en la que durante su ejercicio, demostró profesionalismo, eficiencia, honradez; en ese orden de ideas, la H. "LVII" Legislatura del Estado de México, mediante Decreto número 83, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 18 de junio de 2010, aprobó la renuncia del referido Magistrado.

Por las razones expuestas y además, con fundamento en los artículos 77 fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 206 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, he tenido a bien nombrar al Licenciado en Derecho Luis César Fajardo de la Mora, Magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el período para el cual fue designado el Magistrado renunciante.

La persona nombrada es distinguida por su trayectoria profesional, como conocedor del derecho y la administración de justicia, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 205 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, como se acredita con las documentales que se acompañan a la presente.

En este orden de ideas, la H. "LVI" Legislatura del Estado de México, mediante Decreto número 162, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 9 de mayo de 2008, aprobó el nombramiento del Licenciado Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle, para fungir como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el período para el cual fue designado el Licenciado en Derecho Eduardo Segovia Abascal, en términos del Decreto número 37, de la Diputación Permanente, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 2 de mayo de 2007.

En este sentido, el Licenciado Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle, se dirigió al suscrito como Titular del Ejecutivo del Estado, mediante escrito de fecha 15 de julio 2010, con la finalidad de presentar su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que le fue conferido por esa representación popular, misma que le ha sido aceptada; en esa tesitura, la H "LVII" Legislatura del Estado de México, mediante Decreto número 107, publicado en el `Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 30 de julio de 2010, aprobó la renuncia del referido Magistrado.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículo 77 fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 206 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, he tenido a bien nombrar al Licenciado en Derecho José Carmen Castillo Ambríz, Magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el período para el cual fue designado el Magistrado renunciante.

La persona nombrada es distinguida por su trayectoria profesional, como conocedor del derecho y la administración de justicia, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 205 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, como se acredita con las documentales que se acompañan a la presente.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone en su artículo 61 fracción XV último párrafo, como facultad de la Diputación Permanente aprobar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México que haga el Titular del Ejecutivo del Estado.

Por otra parte, aprobado el nombramiento por la H. Legislatura del Estado de México a la Sala Superior determinará la adscripción de los Magistrados nombrados de acuerdo con las necesidades y criterios que fije.

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de este H. Cuerpo Legislativo la presente Iniciativa, a fin de que, si la estiman correcta, se apruebe en sus términos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO**

**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**
**LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA**

**DECRETO NÚMERO**
**LA H. "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**DECRETA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se aprueba el nombramiento suscrito por el Gobernador Constitucional del Estado por el que designa al Licenciado en Derecho Luis César Fajardo de la Mora, como Magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el periodo para el que fue designado el Licenciado Everardo Shain Salgado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se aprueba el nombramiento suscrito por el Gobernador Constitucional del Estado por el que designa al Licenciado en Derecho José Carmen Castillo Ambríz, como Magistrado Numerario del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, para concluir el periodo para el que fue designado el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel Gómeztagle.

**ARTÍCULO TERCERO.-**La Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo, en ejercicio de sus atribuciones, determinará la adscripción de los Magistrados de acuerdo con las necesidades y criterios que fije.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**SEGUNDO.-** Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil once.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias diputado vicepresidente.

Se registra la iniciativa y considerando lo establecido en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI; 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio.

Con apego al punto número 5 del orden del día, la Secretaría leerá la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal; del Código de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Papelería membretada del Gobierno del Estado de México.

"2011, Año del Caudillo Vicente Guerrero"

**CC. DIPUTADOS DE LA "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTES.**

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I; 77 y fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esa honorable Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal; del Código de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial: de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos del Estado de México que tiene su fundamento en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El Poder Ejecutivo a mi cargo, se ha caracterizado entre otras medidas, por impulsar todas aquellas acciones que permitan fortalecer los derechos de las mujeres, a través de dos ejes fundamentales, políticas públicas y reformas legislativas.

En este sentido, destacan múltiples

programas a cargo de las dependencias vinculadas con este sensible tema. En el rubro legislativo recientemente fue aprobada una reforma integral en materia de equidad de género, misma que tuvo su origen a partir de dos iniciativas, una de ellas presentada por el suscrito y que fuera aprobada de manera unánime por las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, representados en esa Legislatura, la cual refleja el consenso de todos los actores públicos de la Entidad, respecto a la suma de esfuerzos y la priorización del consenso a partir de un diálogo respetuoso, en el único propósito de mejorar las condiciones de vida del sector de la población que representa una mayoría en territorio mexiquense, las mujeres.

Ahora bien, a partir de las conclusiones, acciones y propuestas recopiladas en el Foro Desarrollo Integral y Plena Participación de la Mujer, celebrado en el Estado de México los días 1 y 2 de febrero de 2011, se recogió una aspiración general, en el sentido de que la atención del fenómeno de la violencia de género, debe de tener un enfoque multifactorial interdisciplinario y de carácter integral.

Este enfoque integral de la atención de la violencia de género, exige la articulación armónica de una serie de estrategias en diversos aspectos, tanto en lo que se refiere la investigación y persecución de los delitos vinculados a ella, como en materia de políticas públicas, campañas de prevención y atención a las víctimas, y ofendidos. Un primer paso fue la creación de un ente central con capacidades para concentrar y sintetizarnos acciones que en materia de procuración de justicia deben ser emprendidas en beneficio de las mujeres mexiquenses, bajo una óptica de igualdad de género.

En este sentido, para atender al requerimiento social de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la investigación y persecución de los delitos vinculados a la violencia de género, así como la atención especializada de los casos y la implementación de sistemas de orientación y auxilio a las víctimas u ofendidos, el 14 de febrero del presente año se publicó en la Gaceta del Gobierno el acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se reforman diversos artículos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en donde se establece la creación de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

El Foro "Desarrollo Integral y Plena Participación de la Mujer", no sólo dejó un sinnúmero de reflexiones para la atención del fenómeno de la violencia de género, sino que permitió recoger la petición reiterada de la ciudadanía, de participar en el seguimiento de las investigaciones concernientes a los delitos en los que se encuentra relacionada la violencia de género contra las mujeres mexiquenses.

Una de las solicitudes constantes va orientada a que los agresores de delitos vinculados con la violencia de género, no cuenten con el beneficio de sustitución de la pena que les permita terminar de forma anticipada el cumplimiento de la condena correspondiente y con ello evitar la reincidencia en este tipo de conductas.

Asimismo, en este contexto el beneficio de la suspensión del proceso, a prueba, podrá ser ampliado por primera vez con el objeto de incentivar la reparación del daño, entendida en el sentido amplio propuesto en esta reforma, sin perjuicio de que ante la comisión de otra conducta de violencia de género, sea revocada esta figura y se reinicie el proceso penal hasta su total conclusión, sin que para ello sea necesaria la existencia de una resolución judicial ejecutoria, toda vez que su revocación, podrá darse desde la investigación por el nuevo delito, a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido.

En tal virtud, dentro de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo del Estado, a mi cargo, se encuentra la presentación, al inicio del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Honorable Legislatura, de un amplio paquete legislativo que incluyera, reformas al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Acceso a las Mujeres, a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de México; así como la creación de una nueva Ley de Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito, en el Estado de México.

En estricta observancia de los artículos

80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado, por el Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Legislatura, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan, derogan, diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos del Estado de México, para que de estimarse correcto, se apruebe en sus términos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.**
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO**
**(Rúbrica)**
**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**
**LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA**
**(Rúbrica)**

Es cuanto, señor Presidente.

**"2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO"**
**CC. DIPUTADOS DE LA LVII LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**P R E S E N T E S**

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos del Estado de México, que tiene su fundamento en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El Poder Ejecutivo a mi cargo, se ha caracterizado, entre otras medidas, por impulsar todas aquellas acciones que permitan fortalecer los derechos de las mujeres, a través de dos ejes fundamentales: políticas públicas y reformas legislativas.

En este sentido, destacan múltiples programas a cargo de las dependencias vinculadas con este sensible tema; en el rubro legislativo, recientemente fue aprobada una reforma integral en materia de equidad de género, misma que tuvo su origen a partir de dos iniciativas, una de ellas presentada por el suscrito, y que fuera aprobada de manera unánime por las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios representados en la Legislatura, lo cual refleja el consenso de todos los actores políticos de la entidad, respecto a la suma de esfuerzos y la priorización del consenso a partir de un diálogo respetuoso, con el único propósito de mejorar las condiciones de vida del sector de la población que representa una mayoría en territorio mexiquense: las mujeres.

Ahora bien, a partir de las conclusiones, acciones y propuestas recopiladas en el Foro "Desarrollo Integral y Plena Participación de la Mujer", celebrado en el Estado de México los días 1 y 2 de febrero de 2011, se recogió una aspiración general, en el sentido de que la atención del fenómeno de la violencia de género debe tener un enfoque multifactorial, interdisciplinario y de carácter integral.

Este enfoque integral de la atención de la violencia de género exige la articulación armónica de una serie de estrategias en diversos aspectos, tanto en lo que se refiere a la investigación y persecución de los delitos vinculados a ella, como en materia de políticas públicas, campañas de prevención y atención a las víctimas y ofendidos. Un primer paso, fue la creación de un ente central, con capacidades para concentrar y sistematizar las acciones que, en materia de procuración de justicia, deben ser emprendidas en beneficio de las mujeres mexiquenses, bajo una óptica de igualdad de género.

En este sentido, para atender el requerimiento

social de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la investigación y persecución de los delitos vinculados a la violencia de género, así como la atención especializada de los casos y la implementación de sistemas de orientación y auxilio a las víctimas u ofendidas, el 14 de febrero del presente año, se publicó en la Gaceta del Gobierno, el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman diversos artículos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en donde se establece la creación de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

El Foro "Desarrollo Integral y Plena Participación de la Mujer", no sólo nos dejó un sinnúmero de reflexiones para la atención del fenómeno de la violencia de género, sino que permitió recoger la petición reiterada de la ciudadanía de participar en el seguimiento de las investigaciones concernientes a delitos en los que se encuentre relacionada la violencia de género contra las mujeres mexiquenses.

Del mismo Foro se derivan una serie de conclusiones orientadas a la revisión del marco legal en materia penal y procesal penal, especialmente por lo que se refiere a la tipificación de los delitos vinculados a la violencia de género y, entre ellos, el análisis particular de los elementos o supuestos en los que el homicidio doloso de una mujer se considerará feminicidio; el establecimiento de un régimen jurídico más contundente en materia de medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección a las víctimas y ofendidos, desde los primeros momentos en que se tenga noticia del evento delictivo y hasta la efectiva reparación del daño y, todo ello, bajo en enfoque de actuación integral de todas las autoridades que, en virtud del ámbito de sus funciones, deben intervenir en los procedimientos.

Una de las solicitudes constantes, va orientada a que los agresores de delitos vinculados con violencia de género no cuenten el beneficio de sustitución de la pena que les permita terminar de forma anticipada el cumplimiento de la condena correspondiente y, con ello, evitar la reincidencia en este tipo de conductas.

Asimismo, en este contexto, el beneficio de la suspensión del proceso a prueba, podrá ser aplicado por primera vez, con el objeto de incentivar la reparación del daño, entendida en el sentido amplio propuesto en esta reforma, sin perjuicio de que, ante la comisión de otra conducta de violencia de género, sea revocada esta figura y se reinicie el proceso penal hasta su total conclusión, sin que para ello sea necesaria la existencia de una resolución judicial ejecutoriada, toda vez que su revocación podrá darse desde la investigación por el nuevo delito, a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido.

Además, estas restricciones obligan a las autoridades a establecer sistemas de registro de cada caso y darles puntual seguimiento, pues sólo de esta manera se estará en condiciones de pedir la revocación de la suspensión del proceso a prueba en los términos propuestos.

En tal virtud, dentro de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo del Estado a mi cargo, se encuentra la presentación, al inicio del segundo período ordinario de sesiones de la H. Legislatura, de un amplio paquete legislativo, que incluyera reformas al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de México, así como la creación de una nueva Ley de Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de México.

La presente Iniciativa comprende las reformas necesarias en materia penal y procesal penal, tendientes a actualizar el marco legal en relación con los justos reclamos de la sociedad en materia de investigación y persecución de los delitos vinculados a la violencia de género, así como para dotar a las autoridades competentes de los instrumentos jurídicos necesarios para su actuación eficaz.

1. Código Penal del Estado de México

A. Modificación de tipos penales

a) Se incorpora el concepto de violencia de género en el delito de lesiones y se adicionan al tipo penal elementos objetivos y subjetivos específicos para su acreditación.

b) Se establecen los supuestos en los que el homicidio doloso de una mujer será considerado

feminicidio, atendiendo a los estándares internacionales y las hipótesis previstas en otros ordenamientos legales, cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias:

Por razón de violencia de género, entendiéndose por ésta, la privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo.

Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo. Para ello, es necesario que el Ministerio Público realice las diligencias necesarias a efecto de recabar antecedentes de posibles actos que demuestren que el activo realizó conductas previas de violencia de género en agravio de la pasivo.

El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo.

Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo. No es necesario para acreditar este elemento, que exista una condena previa, sino que bastará con la prueba testimonial u otros medios de prueba que acrediten la preexistencia del violencia.

Se establece como sanción, pena de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa.

c) Se reforma el delito de desobediencia, incorporando la hipótesis de incumplimiento de la imposición de medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección, impuestas por el Ministerio Público o la autoridad judicial.

B. Se amplía el esquema de reparación del daño

El esquema de reparación del daño se encuentra estrechamente relacionado con las facultades que se otorgan al Ministerio Público para imponer medidas cautelares de carácter real desde que se tenga conocimiento del evento delictivo, y consistirá en el aseguramiento de bienes del indiciado o imputado, a fin de garantizar la reparación del daño.

El concepto de reparación del daño, abarcará además:

La restitución de los derechos afectados.

La indemnización del daño material o moral causado.

La afectación al desarrollo integral de la víctima y ofendido. En este rubro, en los casos de violencia de género, se cubrirá la afectación en su entorno laboral, educativo y psicológico, así como los gastos indispensables de subsistencia de la víctima y de sus menores hijos, cuando como consecuencia del delito sufrido se haya visto imposibilitada para desarrollarse en el ámbito laboral.

C. Perdón del ofendido, se condicionan sus efectos

Tratándose de delitos cometidos con violencia de género que admitan el perdón, se condiciona la extinción de la pretensión punitiva a la reparación integral del daño y el sometimiento del inculpado a tratamientos, para evitar conductas reiteradas de violencia de género y la revictimización de las mujeres.

D. Excepción al beneficio de la sustitución de la pena.

Se establece que tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, no procederá el otorgamiento de sustitutivos penales, independientemente de la reincidencia o habitualidad del responsable.

Cabe destacar que la improcedencia del sustitutivo penal tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la condena; sin embargo se preserva en sus términos la figura de suspensión de la condena, precisamente con objeto de incentivar la plena reparación del daño.

2. Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México

A) Medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección

a) Se faculta al Ministerio Público, en el período de investigación no judicializada, para imponer medidas cautelares sujetas a revisión judicial posterior, tendientes a salvaguardar la

seguridad de las víctimas u ofendidas y garantizar la continuidad del proceso.

b) Se otorga la facultad al Ministerio Público y a la autoridad judicial para imponer medidas de protección a la víctima u ofendido y en general a todas las personas que intervengan en el proceso, con el propósito de salvaguardar su integridad; estas medidas cuando sean dictadas por la autoridad ministerial no requerirán de autorización o revisión judicial.

Asimismo, se impone la obligación de que los delitos vinculados a la violencia de género y en los casos en que las víctimas u ofendidas sean menores de edad, estas medidas sean ordenadas por el Ministerio Público, de inmediato y de oficio.

c) Se reforma el catálogo de medidas cautelares, y se establece cuáles de éstas son exclusivas de la autoridad judicial, acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Se adiciona un catálogo de medidas de protección homologado con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

e) Finalmente se establece el sistema para su imposición, así como los aspectos que deberá tomar en consideración el Ministerio Público y la autoridad judicial para la determinación de estas medidas.

B Aseguramiento de bienes por el Ministerio Público.

En la presente Iniciativa se propone facultar al Ministerio Público para ordenar de inmediato, de oficio, el aseguramiento de bienes necesarios para garantizar la reparación del daño a las víctimas u ofendidos por delitos relacionados a la violencia de género.

Lo anterior, ha permitido hacer una serie de reflexiones sobre el régimen general de aseguramiento de bienes. Ello, toda vez que el Código Procesal que regula el sistema de justicia penal acusatorio actualmente prevé el aseguramiento de bienes cuando esta medida es necesaria para resguardar los objetos que puedan constituir evidencia o elementos probatorios del hecho delictuoso y de la responsabilidad del imputado; sin embargo, no se contienen disposiciones para el aseguramiento de bienes, por parte del Ministerio Público, para efectos de preservar los bienes que, una vez concluido el proceso, deban ser decomisados, por constituir objetos, instrumentos o productos del delito.

Sin lugar a dudas, los bienes que constituyen instrumento, objeto o producto del delito pueden tener también la naturaleza de evidencia o ser útiles como elementos de prueba, así como para garantizar la reparación del daño y, por ende, los efectos de su aseguramiento por parte del Ministerio Público pueden ser distintos.

En tal virtud, la Iniciativa propone facultar al Ministerio Público para ordenar el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del hecho delictuoso. Ahora bien, cuando éstos deban ser conservados para efectos del proceso penal como elementos probatorios, deberá observar las reglas en materia de cadena de custodia, y solicitar a la autoridad judicial la audiencia de control para que determine sobre la ratificación, modificación, sustitución o revocación de la medida.

Cuando los bienes no deban ser retenidos para efectos del proceso penal, el Ministerio Público deberá notificar el aseguramiento al propietario, poseedor o persona interesada, con objeto de que manifieste lo que a su interés convenga dentro del plazo de tres meses y demuestre sus derechos sobre los mismos, apercibido que de no hacerlo, causarán abandono en beneficio del Estado. En estos supuestos se encuentran múltiples bienes que, si bien están relacionados con el hecho delictuoso, no constituyen directamente un elemento de prueba, o bien, son instrumento, objeto o producto del delito que deben ser preservados para la eventual aplicación de la pena de decomiso.

Muchos de los bienes antes referidos no son reclamados por quien tiene derecho a ellos o por quienes aparecen como sus legítimos propietarios o poseedores. En la mayoría de estos casos, la falta de reclamación de los bienes obedece a que el responsable del delito prefiere abandonarlos en aras de sustraerse a la acción de la justicia y evitar que la autoridad cuente con mayores elementos de investigación.

En tal virtud, la Iniciativa establece la aplicación

de la figura de 'abandono de bienes', la cual ya se encuentra prevista en otras legislaciones penales de las entidades federativas y en materia federal, y que tiene por objeto disponer de los bienes que no son reclamados en beneficio de la procuración de justicia, así como de las víctimas y ofendidos, e impedir su conservación por periodos prolongados, lo que incrementa sensiblemente el riesgo de su pérdida o destrucción.

Para la procedencia del abandono de bienes, en el sistema de justicia penal acusatorio, será necesario que el Ministerio Público notifique fehacientemente al propietario o a quien tenga derechos sobre ellos, de manera personal y, en caso de no conocer su identidad o domicilio, mediante edictos que deberán publicarse en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, así como en diarios de circulación estatal.

Transcurrido el plazo de tres meses, contados a partir de que surta efectos la notificación, sin que el interesado se presente reclamar los bienes o, en los casos en que habiéndose presentado no acredite tener derecho sobre los mismos, el Ministerio Público solicitará a la autoridad judicial una audiencia para que declare el abandono de los bienes. Para ello, el Juez deberá verificar que se haya realizado correctamente la notificación, la certificación del transcurso del plazo y la ausencia del interesado, o bien, la falta de acreditación de sus derechos durante el plazo referido.

El procedimiento que se establece en la presente iniciativa salvaguarda los derechos de los interesados, pues en todo caso estarán en condiciones de impugnar la medida de aseguramiento dictada por el Ministerio Público ante el Juez de Control, en los términos que establece el Código de Procedimientos Penales.

En el caso contrario –si el interesado se presenta a reclamar los bienes y deducir los derechos que tenga sobre ellos– el Ministerio Público podrá ordenar el levantamiento del aseguramiento y su devolución, siempre que no deban ser conservados para efectos del proceso, o mantendrá el aseguramiento, cuando estime que los mismos deban ser preservados para la aplicación de la pena de decomiso, una vez desahogado el proceso. Ante esta última determinación, el interesado podrá solicitar a la autoridad judicial la audiencia de control respectiva, para efectos de la ratificación, modificación, sustitución o revocación de la medida, lo que garantiza la aplicación de los principios de inmediación que rigen el proceso penal.

Es preciso aclarar que la figura de abandono de bienes ya ha sido revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2008, en la que determinó su plena validez jurídica. Además, en la misma reforma del 18 de junio de 2008, al artículo 22 de la Constitución General de la República, se estableció expresamente que "...tampoco se considerará confiscación... " de bienes, entre otros supuestos, "...la aplicación de bienes asegurados que causen abandono en términos de las disposiciones aplicables...", de donde se deriva el fundamento constitucional expreso para la regulación de esta figura.

Por último, en el caso de los bienes asegurados para efectos de garantizar la reparación del daño, es preciso advertir que, por su propia naturaleza, el sistema de justicia penal acusatorio faculta al Ministerio Público para acudir ante el Juez de Control, a fin de que ratifique la medida e incluso, la sustituya por embargo precautorio, lo que significa un indudable avance para las víctimas y ofendidos del delito, especialmente en los vinculados a la violencia de género, pues se toman medidas contundentes para evitar que los agresores dilapiden su patrimonio y aleguen imposibilidad material para reparar el daño y perjuicio causados.

C. Causa de revocación de la suspensión condicional del proceso a prueba.

Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, se revocará la suspensión del proceso a prueba cuando el imputado incurra en otro y otros delitos de naturaliza similar, independientemente de su gravedad, la cual podrá ser solicitada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido, durante la investigación iniciada por el nuevo delito o una vez realizada la imputación, sin que para ello se requiera resolución ejecutoriada.

3. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México

Se establece que el Poder Judicial contará

con jueces y magistrados especializados en violencia de género, pues es indispensable que el proceso se lleve a cabo por servidores públicos sensibilizados en la materia.

4. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México

Derivado de la reciente publicación del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman diversos artículos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue creada la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, a fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la investigación y persecución de estos delitos, así como de los delitos sexuales y aquellos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad o contra el pleno desarrollo y la dignidad de la persona. Por ello, se propone la derogación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

Asimismo, la fracción XXV se reforma integralmente, toda vez que la atribución actualmente prevista, ya que se establece en la fracción XIV.

El objetivo es crear la Visitaduría contra la Violencia de Género. Ésta se conformará por representantes de las unidades administrativas de la Procuraduría y de organizaciones no gubernamentales, relacionadas con este tema, así como por representantes de instituciones académicas, cuya línea de investigación se enfoque a la violencia de género. Su propósito central será dar a conocer a la ciudadanía las acciones en materia de procuración de justicia, evaluar políticas públicas preventivas, detectar experiencias exitosas y prácticas erróneas, emitir recomendaciones y darles seguimiento, en un contexto de transparencia y corresponsabilidad ciudadana.

En el régimen de transitoriedad, se prevé que el Procurador expida el acuerdo de creación respectivo, en el que se establecerán las disposiciones necesarias para su correcto funcionamiento.

De igual forma, se asumió el compromiso de la conformación de los Comités para la Atención y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual en las instituciones públicas, medida que busca impedir estos actos que provocan efectos perjudiciales en el bienestar personal, en el ambiente laboral y educativo de las mujeres, afectando su pleno desarrollo.

Esta reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, establece que los Comités son herramientas que permitirán prevenir y atender el hostigamiento y el acoso sexual, ya que se regirán por los principios constitucionales de respeto, libertad, derecho al trabajo e igualdad ante la ley, los cuales obligan a esta entidad federativa, como parte del Estado Mexicano, a condenar la discriminación por razón de sexo y a establecer políticas para eliminar la discriminación contra la mujer, según la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará).

Sin duda, es de afirmarse que las reformas planteadas hubieran sido difíciles de desarrollar, sin haber escuchado las voces de las mujeres, quienes expresan su definición, contenido, alcances y características, porque afecta su vida en plena libertad; en este tema en especifico, el marco jurídico ha sido insuficiente para castigar a los responsables de hostigamiento y acoso sexual, toda vez que las mujeres en muchas ocasiones, por miedo a perder su fuente de trabajo, no realizan o interponen la queja o denuncia respectiva.

En este sentido, con el fin de solidificar el entramado jurídico, se propone la creación de Comités para la Atención y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual en las dependencias y organismos auxiliares, en los ámbitos estatal y municipal; se elimina la temporalidad de las medidas de protección; y se faculta al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, para la creación de albergues y Unidades de Atención a Mujeres.

Con este paquete legislativo, se pretende enriquecer los derechos de las víctimas u ofendidos, velar por su protección, precisar las obligaciones de las autoridades competentes y fortalecer el marco jurídico en la materia, a fin de dotar de

mejores herramientas al Ministerio Público y los jueces, para lograr una mayor efectividad en la atención de delitos vinculados con la violencia de género, y propiciar un desarrollo integral y plena participación de las mujeres mexiquenses.

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos del Estado de México, para que, de estimarse correcto, se apruebe en sus términos.

Reitero a Ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO**
**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**
**LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA**

**DECRETO NÚMERO**
**LA HONORABLE "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE**
**MÉXICO**
**DECRETA:**

**PRIMERO.-** Se reforman los artículos 22, fracción III, 26, Párrafo primero, y las fracciones I y III; 29, párrafo primero; 117, párrafo primero; 238, fracción VII; y 240; se adicionan a los artículos 26, un párrafo segundo; 69, un segundo párrafo; 91, un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los subsecuentes; 117, los párrafos segundo y tercero; 237, un párrafo final; y el artículo 242.1; y se deroga del artículo 238, la fracción IX, todos del Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue:

**Artículo 22**.-
...

III. Reparación del daño; que comprenderá los rubros citados por el artículo 26 de este ordenamiento.

**Artículo 26.-** La reparación del daño deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del desarrollo integral de la víctima u ofendido, y según la naturaleza del delito de que se trate comprenderá:

I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito;

II. La restitución del bien obtenido por el delito, con sus frutos y accesiones, y de no ser posible su valor actualizado, el pago en su caso del deterioro y menoscabo, o de los derechos afectados.

La restitución se hará aun en el caso de que el bien hubiere pasado a ser propiedad de terceros; a menos que sea irreivindicable o se haya extinguido el derecho de propiedad, los terceros serán escuchados en audiencia en la forma que señala el Código de Procedimientos Penales.

Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial;

III. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a las personas con derecho a la reparación del daño, incluyendo el pago de los tratamiento que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de su salud física y psicológica; en su caso, tratándose de daño moral, la víctima u ofendido tendrán derecho a que el sentenciado, mediante disculpa pública, restablezca su honor y prestigio, a través de los mecanismos que señale la autoridad judicial.

El monto de la indemnización será el suficiente para cubrir los gastos a que se refiere el párrafo anterior.

IV. ...; y
V. El pago de salarios o percepciones correspondiente cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión.
Tratándose de los delitos de violencia familiar y lesiones que sean cometidos con violencia de género, así como el de feminicidio, la reparación del daño a la víctima y ofendida incluirá, además de las hipótesis previstas en el párrafo anterior, lo siguiente:
I. La reparación por la afectación en su entorno laboral, educativo y psicológico, a fin de lograr su restablecimiento; ante la imposibilidad de éste, la indemnización correspondiente.
La indemnización a que se refiere el párrafo anterior se cuantificará en base a diversos factores como la pérdida del empleo, la inasistencia a las jornadas laborales, la necesidad de cambio de plantel educativo o inasistencia a éste, y demás datos relevantes que permitan realizar la cuantificación correspondiente, y
II. El pago de los gastos indispensables para su subsistencia y, si los hubiere, de los hijos menores de edad o discapacitados, cuando como consecuencia del delito sufrido, se haya visto imposibilitada para desarrollarse en el ámbito laboral; lo anterior, por el tiempo que determine la autoridad judicial, atendiendo a su grado de estudios, edad y estado de salud.

**Artículo 29.-** La reparación del daño tiene carácter de pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, quien deberá acreditar su procedencia y monto, e impuesta de oficio por la autoridad judicial, una vez acreditada la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del imputado, sin menoscabo de que pueda solicitarla la víctima y ofendido en términos del Código de Procedimientos Penales y otros ordenamientos aplicables.
...

**Artículo 69.-**...
Tratándose de delitos cometidos con violencia de género, no procederán sustitutivos penales, independientemente de la reincidencia o habitualidad del responsable.
**Artículo 91.-**...
Tratándose de delitos cometidos con violencia de género que admitan el perdón, éste estará condicionado a la reparación del daño, en los términos del artículo 26 de este Código y, en su caso, a que el indiciado se someta al tratamiento necesario para evitar conductas reiterativas. Para tal efecto, el Ministerio Público deberá vigilar su efectivo cumplimiento.
...
...
**Artículo 117.-** Comete el delito de desobediencia el que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue.
También comete este delito, quien desobedezca una medida cautelar, providencia precautoria o medida de protección dictada por el Ministerio Público o por una autoridad judicial o cualquier mandato legítimo de una autoridad competente.
Al responsable de este delito, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de sesenta a doscientos días multa.

**Artículo 237.-**...
I. a III. ...
...
...

Las lesiones a que se refieren las fracciones I y II, se perseguirán por querella.

**Artículo 238.-** ...
I. a VI. ...
VII. Cuando la víctima u ofendido sea ascendiente, descendiente, hermano, pupilo, tutor, cónyuge, concubina o concubinario, o mantenga una relación sentimental o afectiva con el inculpado, se aumentarán de seis meses a dos años de prisión; y
VIII. ...
IX. Se deroga

**Artículo 240.-** Las penas a que se refiere el artículo 237 se incrementarán hasta en una mitad, sin perjuicio de las agravantes a que se refiere el artículo 238, en los siguientes casos:
a) Cuando las lesiones sean cometidas por un hombre en agravio de una mujer, con violencia de género;
Se entiende por violencia de género, para

efectos de este artículo, a las lesiones asociadas a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo, o

b) Cuando las lesiones se produzcan de forma dolosa a una mujer embarazada.

**Artículo 242.1**.- El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias:

a) Por razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo;
b) Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo;
c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo, o
d) Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo.

En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa.

**SEGUNDO.-** Se reforman los artículos 9; la denominación del Titulo Sexto y su Capítulo II; 180; 192, párrafo primero, y las fracciones IV, V y IX; 193, párrafo primero; 203, párrafo primero; y 261, párrafo quinto; se adicionan a los artículos 128, un párrafo segundo, recorriéndose el actual al tercero; los artículos 141.1; 180.1; 192, un párrafo segundo; los artículos 192.1; 193.1; 193.2; 193.3; 193.4; 219, un párrafo segundo; los artículos 258.1; 260.1; 260.2; 260.3 y 260.4; y se deroga del artículo 193, el párrafo segundo; todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 9 de febrero de 2009, para quedar como sigue:

Derecho a recurrir

Artículo 9. El imputado, así como la víctima y ofendido, podrán impugnar cualquier resolución que les cause agravio, en los supuestos previstos por este código.

Revocación de la suspensión

**Artículo 128**.- ...

Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, se revocará la suspensión del proceso a prueba cuando el imputado incurra en otro u otros delitos de naturaliza similar, independientemente de su gravedad. El Ministerio Público o la víctima u ofendido, podrán solicitar la revocación de la suspensión del proceso a prueba, durante la investigación iniciada por el nuevo delito o una vez realizada la imputación. Para la revocación de la suspensión del proceso a prueba en los casos a que se refiere este párrafo, no se requerirá resolución ejecutoriada.

...

Cuantificación de la reparación del daño

**Artículo 141.1**. El ministerio público deberá aportar los dictámenes periciales correspondientes para cuantificar la reparación del daño.

## TÍTULO SEXTO
## MEDIDAS CAUTELARES, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Principio general

**Artículo 180.** Las medidas cautelares o providencias precautorias autorizadas por la ley, tendrán como finalidades: asegurar la presencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o del ofendido, de los testigos o de la comunidad, garantizar la reparación del daño, o la ejecución de la sentencia.

La imposición de las medidas cautelares y providencias precautorias compete al juez de control y al ministerio público, conforme a lo

dispuesto en este Código.
El ministerio público impondrá medidas cautelares y providencias precautorias en la etapa de investigación, de oficio o a petición de la víctima u ofendido, las cuales serán revisadas por la autoridad judicial en los términos establecidos en el artículo 192.1 de este código.
Asimismo, la autoridad judicial, a petición del ministerio público, víctima u ofendido, después de realizada la imputación y en cualquier etapa del proceso, podrá imponer medidas cautelares o providencias precautorias.
Las medidas cautelares o providencias precautorias podrán ser modificadas, sustituidas o revocadas en cualquier estado del proceso.

Medidas de protección
**Artículo 180.1.** Las medidas de protección tienen como finalidad la protección de la víctima o del ofendido y de todos los sujetos que intervengan en el proceso, las cuales no requieren autorización o revisión judicial.
Corresponde al ministerio público y a la autoridad judicial ordenar las medidas de protección que establece este código y dictar las providencias necesarias para su debido cumplimiento y ejecución.
Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, y en los casos en que las víctimas u ofendidos sean menores de edad, el ministerio publico o la autoridad judicial, según corresponda, dictarán de inmediato, de oficio, las medidas de protección apropiadas para salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica.

## CAPÍTULO II
## MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN PERSONALES

Medidas cautelares personales
**Artículo 192.** El Juez o el Ministerio Público podrá imponer una o más de las siguientes medidas cautelares:
I. a III. ...
IV. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o el Ministerio Público;
V. La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del destinatario de la medida;
VI. a VIII. ...
IX. La separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales y cuando la víctima u ofendido conviva con el destinatario de la medida;
X a XIII. ...
Las medidas contenidas en las fracciones II, III, V, VI, X, XI, XII y XIII, serán impuestas exclusivamente por el juez a petición del ministerio público, la víctima o el ofendido.
Artículo 192.1. El ministerio público solicitará dentro del término de 24 horas siguientes a la imposición de medidas cautelares o providencias precautorias, audiencia al juez de control para su revisión.
El juez citará para audiencia dentro de los 10 días siguientes, en la que resolverá sobre la ratificación, modificación, sustitución o revocación de la medida o providencia impuesta.
Las medidas impuestas por el ministerio público tendrán plena vigencia y serán ejecutadas por conducto de las autoridades competentes y en su caso, con el auxilio de la fuerza pública, en tanto el juez de control resuelve lo conducente.
El ministerio público podrá solicitar la ampliación o prórroga de las medidas cautelares y providencias precautorias impuestas por el Juez en cualquier etapa de la investigación, así como su extensión para la protección y seguridad de personas relacionadas con la víctima u ofendido o cualesquiera otras que deban intervenir en el proceso.

Cumplimiento de medidas cautelares
Artículo 193. El agente del ministerio público o juez, según sea el caso, dictarán las órdenes necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares.
Se deroga.

Medidas de protección
**Artículo 193.1.** Son medidas de protección para los afectados de este código, las siguientes:
I. Vigilancia en el domicilio de la víctima y ofendido;

II. Protección policial de la víctima u ofendido;

III. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima y ofendido en el momento de solicitarlo;
IV. Auxilio de la fuerza pública para asegurar la inmediata entrega o devolución de objetos personales o documentos de identificación de la víctima u ofendido, así como de sus ascendientes, descendientes o dependientes económicos;
V. Realización del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la víctima u ofendido o respecto de los cuales sea titular de derechos;
VI. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes;
VII. Reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad;
VIII. Registro o inscripción en programas estatales de desarrollo personal, social, educativo y laboral;
IX. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o personas relacionadas con ellos, y
X. Las demás que determinen las disposiciones legales;

Imposición de medidas de protección
**Artículo 193.2**. Para la imposición de medidas de protección, el ministerio público o la autoridad judicial, según corresponda, deberán considerar al menos una de las siguientes hipótesis:
I. Las circunstancias de comisión de los hechos;
II. La gravedad de las lesiones y del daño causado;
III. La existencia de amenazas o riesgo de conductas violentas en perjuicio de la víctima u ofendido u otras personas relacionadas con los hechos;
IV. Las circunstancias personales del indiciado, así como de la víctima u ofendido, y
V. Los demás datos relevantes para el cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo 180.1 de este código.

Reglas para medidas de protección
**Artículo 193.3.** El ministerio público y la autoridad judicial informará a la víctima u ofendido sobre las medidas de protección pertinentes, así como las condiciones y limitantes para su aplicación y las circunstancias en que podrán ser revocadas.
Ejecución de medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección
**Artículo 193.4.** Las instituciones policiales y todas las dependencias, entidades y organismos auxiliares de la administración pública de Estado de México y de los municipios, están obligados a cumplir las órdenes que emitan el ministerio público y la autoridad judicial para la debida ejecución de las medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección que se dicten en los términos de la ley, así como a prestar el auxilio y colaboración que les sea requerido para ello.
El incumplimiento de las órdenes que dicten el ministerio público o la autoridad judicial será sancionado en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.

Ejecución de la garantía
**Artículo 203.** Cuando sin causa justificada el imputado incumpla con alguna de las medidas cautelares o alguna orden de la autoridad ministerial o judicial, omita comparecer a alguna audiencia para la que se encuentre citado, o no se presente a cumplir la pena que se le haya impuesto, la autoridad judicial requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a diez días y le prevendrá que si no lo hace o no justifica la incomparecencia, se hará efectiva la garantía.
...
...

Aplicación

**Artículo 219**....

En los casos de delitos vinculados a la violencia de género, la autoridad competente podrá designar como depositario de los bienes embargados a la víctima u ofendido o quien ejerza la patria potestad o la custodia de los menores.

Aseguramiento de bienes por el Ministerio Público
**Artículo 258.1.** El Ministerio Público ordenará el aseguramiento de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del hecho delictuoso, así como de aquéllos que puedan ser útiles para garantizar la reparación del daño.
En la práctica del aseguramiento, el Ministerio Público proveerá las medidas conducentes e inmediatas para evitar que se destruyan, alteren o desaparezcan.
En caso de que los bienes asegurados pueden servir como medios de prueba, se observarán las reglas para su resguardo y en materia de cadena de custodia.
Tratándose de los delitos vinculados a la violencia de género, el ministerio público ordenará de inmediato, de oficio, el aseguramiento de bienes suficientes para garantizar la reparación del daño.

Abandono de bienes asegurados
**Artículo 260.1.** El Ministerio Público notificará el aseguramiento al propietario o poseedor de los bienes a que se refiere el artículo 258.1, cuya retención no sea necesaria legalmente, a fin de que se presente dentro del plazo tres meses a manifestar lo que a su interés convenga respecto de los mismos, apercibido que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Estado.

Reglas de notificación
**Artículos 260.2** El Ministerio Público realizará la notificación a que se refiere el artículo anterior conforme a lo siguiente:
I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:
a. La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;
b. Quien practique la notificación deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación los datos de identificación del servidor público que la practique;
c. De no encontrarse la persona en la primera notificación, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a la persona designada para practicarla al día hábil siguiente, en la hora determinada en el citatorio, y de no encontrarse la persona o de negarse a recibir la notificación, se fijará instructivo en el lugar visible del domicilio, señalándose tal circunstancia en el acta de notificación; y
d. En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique.

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en la Gaceta del Gobierno y en un periódico de circulación estatal. Los edictos deberán contener el acuerdo por notificar.
Tratándose de inmuebles, la publicación se realizará en dos ocasiones en un plazo de un mes en la Gaceta del Gobierno y en un periódico de circulación estatal y otro de circulación nacional.
Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de su última publicación.

Solicitud de audiencia
**Artículo 260.3.** En caso de que se presente el interesado y acredite tener derechos sobre los bienes, el ministerio público podrá ordenar el levantamiento del aseguramiento y la devolución de éstos, si ello resulta procedente, o bien, mantendrá el aseguramiento para los efectos legales a que haya lugar.
Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 260.1, sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados o no haya demostrado éstos, el Ministerio Público solicitará juez de control que declare el abandono de los bienes.
El juez de control citará al interesado, a la victima u ofendido y al ministerio público a una audiencia dentro los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior.

La citación a la audiencia se realizará como sigue:

I. Al ministerio público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código;
II. A la víctima u ofendido, por conducto del ministerio público, y
III. Al interesado, de manera personal y, cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial.

Resolución de abandono

**Artículo 260.4.** El juez de control al resolver sobre el abandono verificará que las notificaciones se realizaron correctamente al interesado, que transcurrió el plazo correspondiente y que no se presentó ante el ministerio público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no fueron reconocidos.

Devolución de bienes

**Artículo 261**....

...

...

...

Concluido el procedimiento, si no fue posible averiguar a quién corresponden, se aplicarán las reglas del abandono.

**TERCERO.-** Se adiciona un párrafo segundo al artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 187.- ...

I. a V....

El Poder Judicial del Estado contará con jueces y magistrados especializados en violencia de género

**CUARTO.-** Se reforma la denominación del Capítulo Quinto del Título Primero, y los artículos 14, párrafo primero; 15; 19; y 20; se adiciona al artículo 14, un párrafo final; y se derogan del artículo 14, los párrafos segundo, tercero y cuarto; todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para quedar como sigue:

**CAPÍTULO V**
**IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN**

**ARTÍCULO 14.-** A partir de que tengan conocimiento de los hechos y en cualquier momento de la investigación, de oficio o a petición de la víctima u ofendido, el Ministerio Público impondrá una o varias de las medidas cautelares o providencias precautorias que se establecen en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y demás disposiciones aplicables, con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o del ofendido, de los testigos o de la comunidad y garantizar la reparación del daño.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

El Ministerio Público dictará las órdenes necesarias para garantizar el cumplimiento de la o las medidas cautelares o providencias precautorias.

**ARTÍCULO 15.-** Dentro del término de veinticuatro horas de la determinación de la imposición de la medida cautelar o providencia precautoria, el Ministerio Público comunicará la misma, por cualquier medio, a la oficina del Poder Judicial establecida para ello, con la finalidad de que la autoridad judicial conozca la imposición de la medida y fije día y hora para la celebración de una audiencia de revisión de las medidas.

**ARTÍCULO 19**.- A partir de que tenga conocimiento de los hechos y en cualquier momento de la investigación, de oficio o a petición de la víctima u ofendido, el Ministerio Público impondrá una o varias de las medidas de protección, que se establecen en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y demás disposiciones aplicables, con la finalidad de brindar protección a la víctima u ofendido, y de todos los sujetos que intervengan en el proceso.

El Ministerio Público dictará las órdenes necesarias para el debido cumplimiento y ejecución de las medidas de protección impuestas.

Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, y en los casos en que las víctimas u ofendidos sean menores de edad, el Ministerio Público dictará de inmediato, de oficio, las medidas de protección apropiadas para salvaguardar su

seguridad e integral física y psicológica.
El Ministerio Público informará a la víctima u ofendido sobre las medidas de protección pertinentes, así como las condiciones y limitantes para su aplicación y las circunstancias en que podrá ser revocadas.

**ARTÍCULO 20.-** En caso de que el Ministerio Público tenga conocimiento del quebrantamiento de alguna de las medidas cautelares, providencias precautorias o medidas de protección, de oficio. Iniciará la investigación correspondiente por los hechos delictuosos correspondientes.

**QUINTO.-** Se reforman los artículos 1; 3, Fracciones IX, XXV y XXVI; 7, fracciones I y V; 8, 10; la denominación del Título Cuarto y los Capítulos I y II; 29, párrafo segundo; 33; 34; 37, párrafo primero; 42, fracción III; 43, fracción III; 46, fracciones VIII y IX; 50, fracciones II,IV, V y IX; 51, fracciones XIII, XVI y XXV; 53, fracción III; 54, fracciones I y VI; y 58 párrafos primero y segundo, fracción I; se adicionan los artículos 8 Bis y 20 Bis; y los artículos 14, la fracción VIII; y 53, la fracción IV, recorriéndose en su orden la subsecuente; y se derogan de los artículos 3, las fracciones II, III, IV y V; 41, la fracción IV; 44, la fracción XI; 51, la fracción II; y 54, la fracción V; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de México, para quedar como sigue:

**Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en todo el Estado de México y tiene por objeto establecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer las políticas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, que garanticen el desarrollo integral de las mujeres.

**Artículo 3.-** Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. …
II. Se deroga.
III. Se deroga.
IV. Se deroga.
V. Se deroga.
VI. a VIII. …
IX. Programa: El Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de México;
X. a XXIV. …
XXV. Refugios: Son los centros o establecimientos constituidos por instituciones gubernamentales y por asociaciones civiles para la atención y protección de las mujeres y sus familias víctimas de violencia; y
XXVI.- Presupuestos con Perspectiva de Género: Presupuesto que en su diseño, implementación y evaluación consideran los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres. El objetivo primordial es la igualdad e integración transversal de la política de género en planes, programas y acciones gubernamentales.

**Artículo 7.-** los tipos de Violencia contra las Mujeres son:
I. La Violencia Psicológica; Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conducen a la víctima a la depresión, al aislamiento. A la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;
II. a IV. …

**Artículo 8.-** Violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

**Artículo 8 bis**.- Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, el Poder Legislativo, en el respectivo ámbito de su competencia, considerará:

I. Establecer la violencia familiar como restricción para el régimen de convivencia así como impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños; y

II. Modificar los ordenamientos penales para establecer que cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que constituyan delitos de violencia familiar puedan denunciar y posteriormente la víctima la ratifique en el término de 10 días.

**Artículo 10.-** Constituye Violencia Laboral la negativa a contratar o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo por la exigencia de pruebas sobre embarazo, imposición de requisitos sexistas en la forma de vestir, exclusión de género en ciertos cargos por la edad; igualmente constituye la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condiciones de género. Prohibición para iniciar o continuar con actividades escolares o laborales.

**Artículo 14.-** Para efectos del hostigamiento sexual y del acoso sexual, los gobiernos Estatal y Municipal deberán:

I. a VII. …

VIII. Crear Comités para la Atención y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual en las dependencias y organismos del ámbito de su competencia.

**Artículo 20 Bis**.- Los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que establézcanlos Gobiernos Estatal y Municipales, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del estado de garantizar a las mujeres seguridad. El respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para:

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia:

II. Ejecutar las medidas educativas, integrarles, especializadas y gratuitas a la persona agresora, para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía de género, y patrones misóginos que generaron violencia;

III. Evitar que la atención que reciban la víctima y la persona agresora sea proporcionada por el mismo personal profesional y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre persona agresora y la víctima;

V. Favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora con respecto a la víctima; y

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para la víctima, sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionará apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Funcionarán con una estrategia que incluya la formación, especialización y actualización permanente de todo el personal que los integra. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con cédula profesional correspondiente a la espacialidad en que desarrollen su trabajo.

N ningún caso podrán laboraren los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia.

**Artículo 29**…

I. y II. …

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas y deberán expedirse de inmediato. La autoridad competente determinará su temporalidad.

**TÍTULO CUARTO**
**DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO Y DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA**

**IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

**CAPÍTULO I**
**DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

**Artículo 33.-** Las Políticas de Gobierno que las dependencias y organismos auxiliares del Estado de México deben diseñar, ejecutar y evaluar para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, son el conjunto de orientaciones y directrices dictadas en sus diversas competencias, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, con la finalidad de abatir las desigualdades entre las mujeres y los hombres, e impulsar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y su desarrollo pleno, teniendo carácter obligatorio.

**Artículo 34.-** El Sistema Estatal y los Sistemas Municipales tienen por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. El Sistema Estatal estará en coordinación con el Sistema Nacional y los Sistemas Municipales, y deberá crear los mecanismos para recabar, de manera homogénea, la información sobre la violencia contra las mujeres, e integrarla al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia de género, así como a los Diagnósticos Estatal y Municipal sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos.
Todas las medidas que lleven a cabo sus integrantes deberán realizarse sin discriminación alguna. Por ello, considerarán el idioma, la edad, la condición social y económica, la condición étnica, la preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que puedan acceder a las políticas de gobierno en la materia.

**CAPÍTULO II**
**DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**

**Artículo 37.-** El Programa deberá ser elaborado por el Sistema Estatal y coordinado por el Ejecutivo Estatal a través del CEMyBS y es el mecanismo que contiene las acciones que en forma planeada y coordinada deberán realizar las dependencias, los organismos auxiliares y los organismos autónomos del Estado, en el corto, mediano y largo plazo. Deberá ser expedido por el titular del Ejecutivo y será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Nacional que en esta materia se establezca a nivel federal, y contendrá las acciones con perspectiva de género para:
I. a XIII. …
Artículo 41.- …
I. a III. …
IV. Se deroga.
**Artículo 42.- …**
I. y II. …
III. Asesorar a los integrantes del Sistema Estatal para asegurar la transversalidad de género en la elaboración de las partidas presupuestales destinadas al cumplimiento de las atribuciones derivadas de esta Ley; y
IV. …

**Artículo 43**.- …
I. y II. …
III. Crear programas de formación, especialización y actualización sobre Derechos Humanos de las mujeres y las niñas y violencia de género, de tal manera que se garantice una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia y la aplicación de la Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención;
IV. a XIV. …

**Artículo 44.-** …
I. a X. …
XI. Se deroga.

XII. a XIX. …

**Artículo 46**.- …
I. a VII. …
VIII. Coadyuvar a la creación de las unidades de atención integral y protección a las mujeres víctimas de violencia;
IX. Coadyuvar a la creación de refugios para las mujeres víctimas de violencia conforme al Modelo de Atención diseñado por el Sistema Nacional;
X. a XII. …

**Artículo 50**.- …
I. …
II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Estatal y Organismos Descentralizados, Organismos Autónomos, Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades e Instituciones de Educación Superior e Investigación, sobre las causas, características y consecuencias de la violencia de género, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación derivada de cada una de las instituciones encargadas de promover los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en el Estado y los Municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia;
III. …
IV. Colaborar con los integrantes del Sistema Estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;
V. Crear unidades de atención integral y protección a las víctimas de violencia prevista en la Ley;
VI. a VIII. …
IX. Crear refugios para las mujeres en situación de violencia conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Estatal;
X. a XIX. …

**Artículo 51**.- …
I…
ll. Se deroga.
III. a XII. …
XIII. Vigilar que el Ministerio Público solicite y/o ejecute de manera obligatoria y a quien corresponda, las órdenes de protección y de emergencia a favor de la víctima, con independencia de que éstas se encuentren en proceso jurisdiccional o procedimiento administrativo;
XIV. a XVI. …
XVII. Otorga a la víctima copia certificada de la investigación iniciada con motivo de violencia y de las actuaciones de la misma;
XVIII. a XXIV. …
XXV. Crear la Visitaduría contra la Violencia de Género, que deberá estar integrada por representantes de las unidades administrativas de la Institución y de organizaciones no gubernamentales, relacionadas con este tema, así como por representantes de instituciones académicas, cuya línea de investigación se enfoque a la violencia de género; el propósito central de la Visitaduría será dar a conocer a la ciudadanía las acciones en materia de procuración de justicia, evaluar políticas públicas preventivas, detectar experiencias exitosas y prácticas erróneas, y emitir recomendaciones y darles seguimiento. Para tal efecto, el Procurador deberá expedir el acuerdo de creación respectivo, en el que se establecerán las disposiciones necesarias para su correcto funcionamiento;
XXVI. a XXVIII. …

**Artículo 53**.- …
I. y II. …
III. Informar sobre los procedimientos judiciales en materia de Violencia de Género contra las mujeres;
IV. Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección y los informes sobre las circunstancias en que se da la ejecución de éstas, para efectos de rendir informes al Banco Estatal de Información de la Violencia contra las Mujeres; y
V. Las demás que le confiera esta Ley u otros ordenamientos aplicables.

**Artículo 54**.- …
I. Coordinar medidas y acciones con el Gobierno Estatal en la integración y funcionamiento del Sistema Municipal;
II. a IV. …
V. Se deroga.
VI. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal para la igualdad de Trato y

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
VII. a XIV. …

**Artículo 58**. Los refugios impulsados por organizaciones civiles deberán funcionar de acuerdo con el Programa Estatal y de Modelo de Atención aprobados por el Sistema Estatal. EL CEMYBS propondrá al Sistema Estatal, el Modelo de Atención.
Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género:
I. Aplicar el Modelo de Atención a Víctimas en los Refugios;
II. a VIII. …

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México "Gaceta del Gobierno".
**SEGUNDO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**TERCERO.-** Los hechos delictuosos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán sancionados de conformidad con las disposiciones vigentes en la fecha de su comisión.

**CUARTO.-** El Consejo de la Judicatura del Estado deberá proveer respecto de la capacitación a la que deberán sujetarse los jueces y magistrados con especialización en violencia de género y adscribirá a cada región judicial los que sean necesarios conforme a la demanda del servicio.

**QUINTO.-** El Procurador General de Justicia del Estado de México, deberá expedir el acuerdo a que se refiere la fracción XXV del artículo 51 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de la publicación del presente Decreto.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México, a los días del mes de de 2011.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias, diputado Jorge Álvarez Colín.

Se registra la iniciativa y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 47, fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y de Equidad y Género para su estudio.

Para estar en aptitud de atender el punto número 6 del orden del día, solicito a la Secretaría, dé lectura a la iniciativa de Ley de Seguridad Pública del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal.
**SECRETARIO DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** Hoja membretada del Gobierno del Estado de México.
"2011 Año del Caudillo Vicente Guerrero"
Toluca de Lerdo, México a 9 de marzo de 2011.
**DIP. SECRETARIOS DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO PRESENTES**

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esta honorable Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, que se justifica en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Que con el firme propósito de impulsar la eficiencia de la seguridad pública, es necesario replantear la política estatal, plasmada en la Ley de Seguridad Pública, preventiva del Estado de México, aprobada el 18 de febrero de 1999 y publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 9 de marzo de 1999, mediante decreto número 114 de la "LII" Legislatura del Estado de México.

Hoy, con el fin de que las autoridades garantice la plena vigencia del estado de derecho y para que las personas físicas y jurídico-colectivas, gocen del fruto de sus esfuerzos, con la confianza de que sus derechos están en buen resguardo, es pertinente homologar dicho ordenamiento, con las disposiciones de la reforma al artículo 21 constitucional, en materia de seguridad pública, así como con las determinaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, ha considerado imperativo impulsar un modelo estratégico que incorpore sistemas de investigación y de inteligencia policial, teniendo como objetivo el desarrollo de un sistema de seguridad pública y una política profesional preparada y coordinada, que genere confianza y sea eficaz.

Que las instituciones de seguridad pública requieren incrementar su funcionalidad a través de la profesionalización y de servicio de carrera consolidada, por lo que el estado se ha planteado la meta de lograr un sistema de formación policial que vaya más allá de los cursos básicos, para asegurar que a nuestros policías corresponda un perfil adecuado a su delicada función social.

Que mediante el decreto 118 de la H. "LVI" Legislatura, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 31 de diciembre de 2007, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado y el Código Financiero del Estado de México y Municipios

Que derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, el Congreso de la Unión, aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el diario oficial de la federación el 2 de enero de 2009, en la cual se tiende a satisfacer la demanda de seguridad pública de la ciudadanía, a partir de una nueva percepción que permita garantizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, gracias a un esquema equilibrado y razonable de corresponsabilidad, que al mismo tiempo dote a los integrantes de las instituciones de seguridad de un catálogo claro de sus obligaciones, a través de un régimen disciplinario ágil y congruente con la naturaleza del servicio encomendado.

Además de lo anterior, es preciso asumir nuevos compromisos a cargo del estado que consideren nuevos esquemas para cumplir con la función de la seguridad pública, en el marco de respeto a las garantías individuales, mediante la operación y administración de las modalidades de seguridad en el interior y exterior de inmuebles, custodia de bienes y valores en tránsito, así como de guardia y seguridad personal, mediante el pago de derechos por la prestación de estos servicios en el territorio de la entidad, con la finalidad de fortalecer los programas y acciones en materia de seguridad pública, que permitan al estado cumplir con mayor eficacia con estas funciones, así como regular la percepción de los ingresos provenientes de estos conceptos. Actividad que hasta el momento ha sido caracterizada y realizada por los cuerpos de seguridad auxiliar del Estado de México.

Es importante mencionar que como innovación de este ordenamiento legal, se establece un capítulo sobre la mediación policial, entendiendo como tal, al proceso en el que uno o más elementos de las instituciones policiales intervienen en cualquier conflicto social, facilitando a las partes, la comunicación, con el objeto de que éstas acuerden la solución plena legal y satisfactoria al conflicto, bajo los principios de voluntad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, oralidad y consentimiento informado.

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra bebidamente refrendado por el Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de este H. Cuerpo Legislativo la presente iniciativa, a fin de que si la estiman correcta se apruebe en sus términos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO**
**(Rúbrica)**
**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**
**LIC. ENRIQUE MIRANDA NAVA**
**(Rúbrica)**

Es cuanto.

**"2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO"**

Toluca de Lerdo, México, a 9 de Marzo de 2011.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS**
**DE LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL**
**ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTES**

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción l y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de Ustedes, la presente Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, que se justifica en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Que con el firme propósito de impulsar la eficiencia de la seguridad pública, es necesario replantear la política estatal, plasmada en la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, aprobada el 18 de febrero de 1999, y publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el 9 de marzo de 1999, mediante Decreto número 114 de la H. "LII" Legislatura del Estado de México.

Hoy, con el fin de que las autoridades garanticen la plena vigencia del estado de derecho y para que las personas físicas y jurídico-colectivas gocen del fruto de sus esfuerzos, con la confianza de que sus derechos están en buen resguardo, es pertinente homologar dicho ordenamiento con las disposiciones de la reforma al artículo 21 Constitucional en materia de seguridad pública, así como con las determinaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Que una de las prioridades de la presente administración, es el fortalecimiento de la seguridad pública, mediante el perfeccionamiento y modernización del marco jurídico, así como de la normatividad en general, siendo ésta la estrategia del Gobierno del Estado de México, para replantear su política estatal, encaminada a que las autoridades garanticen la plena vigencia del estado de derecho y el respeto a las instituciones.

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, ha considerado imperativo impulsar un modelo estratégico que incorpore sistemas de investigación y de inteligencia policial, teniendo como objetivo el desarrollo de un sistema de seguridad pública y una policía profesional, preparada y coordinada, que genere confianza y sea eficaz.

Que las instituciones de seguridad pública requieren incrementar su funcionalidad, a través de la profesionalización y del servicio profesional de carrera consolidada, por lo que el Estado se ha planteado la meta de lograr un sistema de formación policial que vaya más allá de los cursos básicos, para asegurar que a nuestros policías corresponda un perfil adecuado a su delicada función social.

Que mediante el Decreto número 118 de la H. "LVI" Legislatura, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el 31 de diciembre de 2007, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México; la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado y el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Que derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2009, la cual tiende a satisfacer la demanda de seguridad pública de la ciudadanía, a partir de una nueva percepción que permita garantizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, gracias a un esquema equilibrado y razonable de corresponsabilidad, que al mismo tiempo dote a los integrantes de las instituciones de seguridad de un catálogo claro de sus obligaciones, a través de un régimen disciplinario ágil y congruente con la naturaleza del servicio encomendado.

Que teniendo como premisa fundamental los principios constitucionales en materia de seguridad pública, resulta pertinente que el Gobierno Estatal

reitera su compromiso de rediseñar a fondo y de manera estructural la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, de tal modo que las instituciones de seguridad pública cuenten con las bases jurídicas para otorgar la certeza y confianza que la sociedad exige y que con ello se impulse el desarrollo puntual de las áreas productivas de nuestra Entidad; asimismo, para que este ordenamiento sea congruente con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, clarificando la correspondencia de diversas facultades de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otros ordenamientos.

Que en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ordenamiento que se propone considera que con el apoyo de la tecnología, las instituciones de seguridad pública de todos los niveles, deberán disponer de información homologada y relevante que permita un aprovechamiento óptimo de los recursos para el combate a la delincuencia, traduciendo las cuantiosas inversiones en este rubro, en beneficios concretos y tangibles para la ciudadanía.

Además de lo anterior, es preciso asumir nuevos compromisos a cargo del Estado que consideren nuevos esquemas para cumplir con la función de la seguridad pública, en el marco de respeto a las garantías individuales mediante la operación y administración de las modalidades de seguridad en el interior y exterior de inmuebles; custodia de bienes y valores en tránsito, así como de guardia y seguridad personal, mediante el pago de derechos por la prestación de estos servicios en el territorio de la Entidad, con la finalidad de fortalecer los programas y acciones en materia de seguridad Pública que permitan al Estado, cumplir con mayor eficacia con estas funciones, así como para regular la percepción de los ingresos provenientes de estos conceptos, actividad que hasta este momento ha sido realizada por los cuerpos de seguridad auxiliar del Estado de México, denominados:

- Cuerpo de Guardia de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán - Texcoco.
- Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.
- Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca.

De esta Iniciativa, destacan los aspectos siguientes:

El Título Primero, establece las disposiciones generales, objeto, sujetos y aplicación de la Ley, además de precisar las bases de coordinación en materia de seguridad pública, del Estado con la Federación, el Distrito Federal, entidades federativas y los Municipios de la Entidad; se determinan las bases para la organización, operación y funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública Estatal y Municipal.

El Título Segundo, señala quienes son autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública, así como sus atribuciones.

En el Título Tercero, se establece la integración del Sistema Estatal, con la información relacionada con la seguridad pública, que generen las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios, y en su caso de la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal. Se considera al Consejo Estatal como la máxima instancia de deliberación y consulta del Sistema Estatal de seguridad Pública, el cual contará con la estructura administrativa necesaria para su correcto funcionamiento, asimismo, se establece que el Consejo Estatal determinará los mecanismos idóneos y las herramientas informáticas necesarias para el buen funcionamiento del Sistema Estatal.

En este contexto considera la integración de las bases de datos del Sistema Estatal de Seguridad Pública, relativas a la información Criminal, que deberá incluir la información sobre personas imputadas, vinculadas a proceso y sentencias, incluyendo perfiles criminológicos y todos los datos con que se cuenten; Información Penitenciaria que deberá contener entre otros aspectos los registros de la población penitenciaria residente en los centro penitenciarlos del Estado; de personal de instituciones de Seguridad Pública, a base de la información sobre sus integrantes, con datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, tales como sus huellas digitales, escolaridad, antecedentes en el servicio, entre otros; el Registro de Armamento y Equipo que deberá contener los vehículos que tengan asignados los elementos de las instituciones de seguridad pública, así como las armas y municiones que les hayan

sido autorizadas por la autoridad competente, así como, el Registro Administrativo de Detenciones que estará integrado con la información relativa a la detención de cualquier persona con los datos del nombre y en su caso apodo, descripción física, motivo de la detención, nombre de quien intervino en la detención y el lugar donde será trasladado el detenido.

Se establece que dentro de la estructura del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo será el órgano operativo de este sistema, así como el enlace con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Determinando además los requisitos que deberá satisfacer y el nombramiento que correrá a cargo del Consejo Estatal, a propuesta de su Presidente.

El Título Cuarto, precisa las autoridades que integran el Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como su organización y funcionamiento, asimismo, considera la integración de los Consejos Municipales como órganos colegiados, integrados por los Ayuntamientos que conforman cada Distrito Judicial del Estado, los cuales tienen por objeto propiciar la coordinación entre los Ayuntamientos que los conforman, para contribuir a los fines de la seguridad pública, así como para dar seguimiento a los acuerdos tomados y verificar su cumplimiento.

En este orden, se establecen los Consejos Regionales de Seguridad Pública para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, cuando sea necesaria la participación coordinada del Estado con otra u otras entidades federativas, e incluso se considera el establecimiento de estos Consejos Regionales con el carácter temporal o permanente.

El Título Quinto, refiere las obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, dentro de las cuales destacan que los mismos deberán conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos, y el cumplimiento sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna, entre otras.

Precisa que para el ingreso y permanencia de los elementos de las instituciones de seguridad publica deberán contar con el Certificado y Registro correspondientes, los cuales deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Personal de las instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional y en la Base de Datos de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal, de conformidad con lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este orden, el Título de referencia considera los Derechos que en el ejercicio de sus funciones tendrán los elementos de las instituciones policiales, los que por su trascendencia destacan el de recibir la remuneración que corresponda por el desempeño de sus funciones, ser sujetos de ascensos, condecoraciones, recompensas, gozar del beneficio de la seguridad social en los términos de los ordenamientos que lo regulan, recibir asesoría y en su caso, defensa jurídica en forma gratuita por parte de la institución a la que pertenecen, siempre que los hechos sean resultado del cumplimiento de sus obligaciones legales.

El Título Sexto, establece las Obligaciones Especificas de los Elementos de las Instituciones Policiales, relativas al Registro del Informe Policial Homologado, el apoyo a las autoridades que lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres y la ejecución de los mandamientos judiciales y ministeriales, entre otras.

Es importante mencionar que como innovación de este ordenamiento legal se establece un Capitulo sobre la Mediación Policial, entendiendo como tal al proceso en el que uno o más elementos de las instituciones policiales intervienen en cualquier conflicto social, facilitando a las partes la comunicación con el objeto de que éstas acuerden la solución plena, legal y satisfactoria al conflicto, bajo los principios de voluntad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, oralidad y consentimiento informado.

En el Título Séptimo, se establecen las disposiciones para regular el Servicio de Carrera, que tendrá el carácter de obligatorio y permanente, asimismo, se dispone que el Servicio de Carrera abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones correspondientes a las diversas etapas que lo comprenden.

En el Título Octavo, se reconoce al Desarrollo

Policial, como el conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de las instituciones policiales. Asimismo, sobre las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes en términos del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, las disposiciones de esta ley y demás legales aplicables.

En este Titulo se establece el proceso de Selección, Ingreso y Permanencia de los elementos de las instituciones policiales que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para su ingreso, el periodo de los cursos de formación o capacitación concluyendo con la resolución sobre los aspirantes aceptados, así como los requisitos para continuar en el servicio activo, de ingreso y permanencia en las instituciones policiales.

Este Titulo comprende además, el proceso sobre el Régimen Disciplinario de los elemento de las Instituciones Policiales, considerando que la disciplina es la base del funcionamiento y organización de las instituciones policiales, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, ordenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor y de la justicia ética.

En este orden, se establece el procedimiento sobre el Régimen Disciplinario, para los elementos de las instituciones policiales Estatal y municipales, a cargo de un órgano colegiado denominado Comisión de Justicia, precisando las causas de remoción, tales como incurrir en falta de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o maltrato a los superiores, compañeros, subordinados o familiares de unos u otros dentro o fuera del servicio, así como las etapas del procedimiento administrativo correspondiente.

El Título Noveno considera las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos estatales y municipales para el manejo o aplicación indebida de los recursos públicos destinados a seguridad pública, que serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables por las autoridades competentes. Asimismo, se considera al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para fiscalizar los recursos públicos estatales que se ejerzan por el Estado y los Municipios en materia de seguridad pública. Se establecen las sanciones por el ingreso indebido al Sistema Estatal, la divulgación de manera ilícita de información clasificada.

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo la presente Iniciativa, a fin de que, si la estiman correcta, se apruebe en sus términos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**
**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO**
**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**
**LIC. LUIS MIRANDA NAVA**

## LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO

### TÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

### CAPÍTULO PRIMERO
### DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SUS FINES

**Artículo 1**.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado de México, y tiene por objeto:

I. Normar La distribución de competencias en materia de seguridad pública que realizan el Estado y los Municipios;

II. Establecer las bases de coordinación del Estado y los Municipios con la Federación,

el Distrito Federal, los estados y sus municipios;

III. Integrar, organizar y regular el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a su vez contribuirá con el Sistema Nacional de Seguridad Pública; y

IV. Desarrollar las bases mínimas a que deben sujetarse las Instituciones de Seguridad Pública.

**Artículo 2**.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

**Artículo 3**.- La actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

**Artículo 4**.- La función de seguridad Pública se realizará, en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de sentencias, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, y de las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

**Artículo 5**.- El Sistema Estatal de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública, y contribuir al buen funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 6**.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;
II. Bases de datos criminalísticas y de personal: las bases de datos estatal y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del sistema;
III. Centro: al Centro de Control de Confianza del Estado de México;
IV. Constitución Estatal: a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
V. Constitución Federal: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI. ASE: a la Agencia de Seguridad Estatal;
VII. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;
VIII. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;
IX. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;
X. Comisionado: al Comisionado de la ASE;
XI. Consejo Estatal: al Consejo Estatal de Seguridad Pública;
XII. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;
XIII. Consejos Municipales: a los Consejos Municipales de Seguridad Pública;
XIV. Instituciones de Procuración de Justicia: a las instituciones que integran al ministerio público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;
XV. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal;
XVI. Instituciones Policiales: a los cuerpos

de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarlos, de detención preventiva y de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal, que realicen funciones similares;

XVII. Instituto: al Instituto de Formación, de Capacitación y de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;

XVIII. Ley: a la Ley de Seguridad Pública del Estado de México;

XIX. Ley General: a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XX. Procurador: al Procurador General de Justicia del Estado de México;

XXI. Programa Estatal: al Programa Estatal de Seguridad Pública;

XXII. Secretario: al Secretario General de Gobierno del Estado de México;

XXIII. Secretario Ejecutivo: al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal;

XXIV. Sistema Estatal: al Sistema Estatal de Seguridad Pública; y

XXV. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 7**.- El Estado y los municipios desarrollarán políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

**Artículo 8**.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Federal, las Instituciones de Seguridad Pública, deberán coordinarse con las instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia, en los términos de esta Ley, para cumplir con los fines de la seguridad pública.

Las instancias de los tres órdenes de gobierno, en un marco de respeto al ámbito competencial de cada uno, deberán coordinarse, según sea el caso, para:

I. Integrar los Sistemas Nacional y Estatal, y distribuir a los Integrantes de ambos actividades específicas; para el cumplimiento de sus objetivos y fines;

II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta Ley;

IV. Proponer, ejecutar y evaluar los programas nacionales y estatales de procuración de justicia, de seguridad pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en otros ordenamientos jurídicos;

V. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública;

VI. Regular los sistemas disciplinarlos, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;

VII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las instituciones de Seguridad Pública;

VIII. Establecer y controlar los registros y bases de datos que integran a los Sistemas Nacional y Estatal, en el ámbito de sus atribuciones;

IX. Realizar acciones y operativos conjuntos entre las Instituciones de Seguridad Pública;

X. Participar en la protección y vigilancia de las instalaciones estratégicas del Estado y del país en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

XI. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;

XII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;

XIII. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos; y

XIV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.

**Artículo 9**.- Los prestadores de servicios de seguridad privada y su personal, serán auxiliares de la función de seguridad pública, y coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS

**Artículo 10**.- Se consideran instalaciones estratégicas, para efectos de esta Ley, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Federal, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

**Artículo 11**.- Las Instituciones de Seguridad Pública coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto expida el Ejecutivo Federal

Artículo 12.- Las Instituciones de Seguridad Pública están obligadas a ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional, respecto al bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico y los Centros de Readaptación Social para cumplir con los fines de la seguridad pública.

## TÍTULO SEGUNDO
## DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SUS ATRIBUCIONES

## CAPÍTULO I
## DE LAS AUTORIDADES ESTATALES

**Artículo 13**.- Son autoridades estatales de seguridad pública:

I. El Gobernador del Estado;

II. El Secretario General de Gobierno;

III. El Procurador General de Justicia;

IV. El Comisionado; y

V. Las Instituciones Policiales, así como las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

**Artículo 14**.- Son atribuciones del Gobernador del Estado:

I. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales del Estado, por sí o por conducto del Secretario a través del Comisionado, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal, esta Ley y demás disposiciones

aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

II. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales de los municipios, en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

III. Representar al Estado, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

IV. Nombrar al Comisionado, a propuesta del Secretario;

V. Celebrar convenios o acuerdos con la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en términos de la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables

VI. Suscribir convenios de asunción de funciones en materia de seguridad pública con los municipios, cuando éstos así lo requieran;

VII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, reglamentos, convenios, y demás disposiciones en materia de seguridad pública, por conducto de la dependencia competente;

VIII. Establecer las instancias de coordinación en el Estado para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional;

IX. Promover la participación de la comunidad para estimular propuestas de solución a los problemas de seguridad pública, directamente o por conducto de los servidores públicos en quienes delegue esta función;

X. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas, relativos a la seguridad pública;

XI. Establecer de forma coordinada, por conducto de la Procuraduría General de Justicia y la ASE, el Sistema Estatal, a través de los mecanismos que para tal efecto se acuerden;

XII. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública estatales, sus familias y dependientes;

XIII. Designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Consejo de Seguridad Pública del Estado, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior al de Subsecretario, para la aplicación de esta Ley; y

XIV. Las demás que le confieran la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley General, esta Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

## CAPÍTULO TERCERO
## DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

**Artículo 15**.- Son atribuciones del Secretario:

I. Transmitir y ejecutar los acuerdos y demás disposiciones que dicte el Gobernador del Estado en materia de seguridad Pública;

II. Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz públicos, la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, auxiliar a las autoridades competentes cuando así lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos y concurrir, en términos de la ley, con las autoridades en casos de siniestro o desastre;

III. Someter a consideración del Gobernador del Estado los convenios, programas y acciones estratégicas, tendientes a mejorar y ampliar la prevención del delito;

IV. Nombrar y remover a los directores generales de la ASE, a propuesta del Comisionado;

V. Aprobar los nombramientos a partir de mandos medios, acorde con la organización jerárquica de las Instituciones Policiales del Estado, a propuesta del Comisionado;

VI. Promover la formación, capacitación, profesionalización, actualización, adiestramiento y especialización de las Instituciones Policiales, conforme a lo establecido en el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales a nivel nacional y las demás disposiciones legales aplicables;

VII. Coordinar la evaluación del funcionamiento de la seguridad pública;

VIII. Supervisar el buen funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y su efectiva coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública; y

IX. Ser integrante de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

X. Las demás que establezcan la Constitución Estatal, esta Ley y demás ordenamientos de la materia, así como las que le confiera el Gobernador del Estado.

## CAPÍTULO CUARTO
## DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

**Artículo 16**.- Son atribuciones del Procurador:

I. Promover y, en su caso, establecer la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales, para la prevención e investigación de delitos;

II. Fijar criterios de cooperación y coordinación con las Instituciones Policiales, para el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales, aseguramiento de bienes y desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;

III. Verificar que toda la información generada por las Instituciones de Procuración de Justicia, sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal, salvo aquella que pueda comprometer el éxito de las investigaciones;

IV. Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;

V. Promover la capacitación, actualización y especialización de los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional de las Instituciones de Procuración de Justicia y demás disposiciones aplicables;

VI. Verificar que los elementos de las Instituciones de Procuración de Justicia se sometan a las evaluaciones de control de confianza, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;

VIII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;

IX. Proponer programas de cooperación con la Federación y las entidades federativas en materia de procuración de justicia;

X. Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, de conformidad con los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

XI. Participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

XII. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; y

XIII. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

## CAPÍTULO QUINTO
## DEL COMISIONADO DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL

**Artículo 17**.- Son atribuciones del Comisionado:

I. Ejercer el mando directo de las Instituciones Policiales del Estado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

II. Impulsar la coordinación de las Instituciones Policiales;

III. Verificar que toda la información generada por las instituciones Policiales del Estado, sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal;

IV. Promover la capacitación, actualización y especialización de los elementos de las Instituciones Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional;

V. Proponer, en el ámbito de sus facultades, la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública, con la Federación, las entidades federativas y los Municipios;

VI. Promover criterios uniformes para el desarrollo policial, en términos de esta Ley;

VII. Verificar que los elementos de las Instituciones Policiales del Estado se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

VIII. Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;

IX. Impulsar las acciones necesarias para promover la prevención de los delitos y la participación de la comunidad en materia de seguridad pública;

X. Supervisar la actuación de las Instituciones Policiales del Estado, en la investigación de delitos, bajo el mando y conducción del ministerio público;

XI. Participar en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;

XII. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;

XIII. Dirigir, coordinar y supervisar las acciones en materia de protección civil;

XIV. Vigilar y coordinar las acciones de fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos, desarrolladas en el Estado de México;

XV. Coordinar y promover acciones modernizadoras de capacitación y tecnológicas en materia pirotécnica, entre los diferentes grupos de la sociedad y las autoridades;

XVI. Generar, desarrollar y consolidar una cultura de prevención y de seguridad en materia pirotécnica;

XVII. Coordinar los servicios de seguridad,

vigilancia y protección regional en caminos y carreteras estatales o vías primarias, zonas rurales, áreas de recreo y turísticas de competencia estatal, así como las instalaciones estratégicas del Estado, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII. Promover la ejecución de operativos conjuntos entre las Instituciones Policiales de los distintos órdenes de gobierno, para cumplir con los fines de la seguridad pública;

XIX. Emitir los acuerdos, instructivos, manuales de organización y de procedimientos, y demás normatividad que rija las actividades de las Instituciones Policiales del Estado.

XX. Celebrar los contratos para la operación y administración de la modalidades de seguridad en el interior y exterior de inmuebles; custodia de bienes y valores en tránsito, así como de guardia y seguridad personal, mediante el pago de derechos por la prestación de estos servicios en el territorio de la Entidad;

XXI. Establecer y vigilar la operación de los procedimientos de administración, seguridad, control, vigilancia y apoyo logístico del sistema penitenciario, definiendo esquemas de supervisión, registro y verificación, así como estrategias de intervención y de apoyo táctico operativo;

XXII. Designar protección y seguridad cuando sea necesario mediante la asignación de elementos de los cuerpos de seguridad pública Estatal, a quienes ocupen o hayan ocupado algún cargo dentro del Gobierno del Estado, así como a sus familiares, para salvaguardar su integridad física;

XXIII. Promover la integración de grupos de coordinación interinstitucional con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, con el fin de optimizar y eficientar los recursos, así como fomentar la participación ciudadana en materia de seguridad pública, protección civil, prevención y reinserción social;

XXIV. Administrar, organizar, controlar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros de la ASE, de conformidad con la normatividad aplicable y al presupuesto asignado;

XXV. Solicitar al Gobernador del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, la expedición de las declaratorias correspondientes en caso de situaciones de emergencia o desastre;

XXVI. Coordinar administrativa y operativamente a los cuerpos de seguridad complementaria;

XXVII. Supervisar las acciones, seguimiento y control del Fondo de Seguridad Pública del Estado de México; y

XXVIII. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios e instituciones de reintegración social para adolescentes;

XXIX. Verificar que toda la información generada por los elementos a su cargo, sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal;

XXX. Impulsar por conducto de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social políticas, programas y acciones en materia de reinserción social y reintegración social para adolescentes;

XXXI. Establecer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social y de reintegración social para adolescentes;

XXXII. Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social y de reintegración social

para adolescentes;

XXXIII. Diseñar, por conducto de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social mecanismos que incentiven la participación de la iniciativa privada para generar actividades económicas para los internos, que les permita obtener un ingreso para su manutención y la de sus familias;

XXXIV. Celebrar convenios a efecto de que sentenciados por delitos del ámbito de competencia del Estado, extingan sus sentencias en centros penitenciarlos dependientes de una jurisdicción diversa, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

Verificar que los elementos a su cargo se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XXXVI. Participar en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

XXXVII. Ejecutar los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; y

XXXVIII. Las demás que le señale esta Ley, otras disposiciones jurídicas y las que le confieran el Gobernador del Estado y el Secretario.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

**Artículo 18**.- Son autoridades municipales en materia de seguridad pública:

I. Los ayuntamientos;

II. Los presidentes municipales;

III. Los directores de seguridad pública municipal; y

IV. Los elementos de los cuerpos de policía municipal en ejercicio de su función.

**Artículo 19**.- Son atribuciones de los Presidentes Municipales:

I. Ejercer el mando directo de las Instituciones Policiales a su cargo, salvo en los supuestos establecidos en la fracción ll del artículo 14 de esta Ley, en los términos de la Constitución Federal y la Constitución Estatal, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

II. Verificar que toda la información generada por las Instituciones Policiales a su cargo, sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal;

III. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación municipal en materia de segundad pública;

IV. Procurar la coordinación de los elementos a su cargo con las demás Instituciones de Seguridad Pública;

V. Supervisar la actuación de los elementos a su cargo, en la investigación de delitos, bajo el mando y conducción del ministerio público;

VI. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal;

VII. Proponer políticas públicas en materia de seguridad pública;

VIII. Diseñar programas tendientes a la prevención de los delitos y colaborar con las autoridades competentes a ejecutar los diversos programas existentes;

IX. Promover la homologación del desarrollo policial;

Proponer al Ayuntamiento el Programa Municipal de Seguridad Pública, mismo que tendrá que ser congruente con el Programa Estatal, para lo cual deberá someterlo previamente a consideración del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de verificar su congruencia;

XI. Suscribir convenios de asunción de funciones en materia de seguridad pública con el Estado o la Federación, cuando así lo requiera, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, reglamentos, convenios, y demás disposiciones en materia de seguridad pública;

XIII. Promover la participación de la comunidad en materia de seguridad pública, en el ámbito de sus atribuciones;

XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública a su cargo, así como de sus familias y dependientes;

XV. Promover la capacitación, actualización y especialización de los elementos a su cargo, conforme al Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional;

XVI. Verificar que los elementos a su cargo se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XVII. Suscribir convenios de coordinación en materia de seguridad pública con otros municipios del Estado o de otras entidades federativas, para cumplir con los fines de la seguridad pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII. Vigilar la recepción de denuncias de hechos probablemente constitutivos de delito, remitiéndolas inmediatamente al ministerio público;

XIX. Establecer las instancias de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional y del Sistema Estatal;

XX. Participar en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en caso de ser designado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública;

XXI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; y

XXII. Las demás que le confieran la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley General, esta Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

## TÍTULO TERCERO
## DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

### CAPÍTULO PRIMERO
### DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Artículo 20**.- El Sistema Estatal estará integrado con toda la información relacionada con la seguridad pública, que generen las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y de los Municipios, y, en su caso, de la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal.

La máxima instancia de deliberación y consulta del Sistema Estatal, será el Consejo Estatal.

El Sistema Estatal tendrá un Secretario Ejecutivo, que será el órgano operativo del mismo.

Asimismo, contará con la estructura administrativa necesaria para su correcto funcionamiento, que sea aprobada por el Presidente del Consejo Estatal. Los servidores públicos del Sistema Estatal serán considerados como personal de seguridad pública

de confianza, y deberán someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia.

**Artículo 21**.- Las Instituciones de Seguridad Pública están obligadas a suministrar de manera inmediata, toda la información que generen y que pueda ser útil para el Sistema Estatal.

**Artículo 22**.- Sólo las instituciones de Procuración de Justicia podrán reservar información, y en consecuencia, no compartirla con el Sistema Estatal, siempre y cuando el suministro de aquélla pueda poner en riesgo el éxito de la investigación. Cuando se haya superado tal condición, estarán obligados a compartirla con el Sistema Estatal.

**Artículo 23**.- El Consejo Estatal determinará los mecanismos idóneos y las herramientas informáticas necesarias para el buen funcionamiento del Sistema Estatal, así como las formas en que los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública podrán acceder al mismo y las medidas de seguridad y restricción de la información.

**Artículo 24**.- El Sistema Estatal deberá estar conformado, como mínimo, por las siguientes bases de datos:

I. De información Criminal;
II. De información Penitenciaria;
III. De Personal de Instituciones de Seguridad Pública;
IV. De Registro de Armamento y Equipo
V. De Registro Administrativo de Detenciones

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada al Sistema Estatal, a través de convenios con el Poder Judicial del Estado de México, y en su caso, con el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas.

**Artículo 25**.- Las bases de datos a que se refiere el artículo anterior, serán de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública.

**Artículo 26.-** El Sistema Estatal deberá contribuir a la integración del Sistema Nacional, y la información será suministrada de manera inmediata, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 27**.- La información contenida en el Sistema Estatal tendrá el carácter de confidencial, salvo aquella que pueda ser clasificada como reservada o incluso pública, de conformidad con las determinaciones del Consejo Estatal.

**Artículo 28**.- La información contenida en el Sistema Estatal no podrá ser utilizada para discriminar a ninguna persona, ni vulnerar su dignidad, intimidad, privacidad u honra.

Bajo ningún supuesto, la información servirá para que las autoridades prejuzguen sobre la inocencia o culpabilidad de persona alguna, ni justificará violaciones de derechos fundamentales.

**Artículo 29**.- Las Instituciones de Seguridad Publica y el Consejo Estatal serán responsables de la administración, guarda y custodia de la información contenida en el Sistema Estatal. Los servidores públicos que tengan acceso al mismo deberán preservar su estricta confidencialidad, y la violación de la misma será causa de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBEN CONTENER LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Artículo 30**.- La Base de Datos de información Criminal deberá incluir toda la información posible sobre personas imputadas, vinculadas a proceso y sentenciadas, incluyendo perfiles criminológicos, medios de identificación, fotografías, huellas dactilares, audios y videos disponibles para facilitar reconocimientos, modos de operación, vínculos delincuenciales y todos los datos con que se cuente.

**Articulo 31**.- La Base de Datos de información

Penitenciaria deberá contener los registros de la población penitenciaria residente en Centros Penitenciarios del Estado de México, fichas de identificación personal de cada interno con fotografía, información disponible de los internos en prisión preventiva, beneficios preliberacionales otorgados, información de procesos penales y sentencias, si la hubiera, y demás información que pueda ser útil para el Sistema Estatal, que generen las autoridades competentes.

También deberá incluir toda la información disponible y que pueda ser relevante para el Sistema Estatal, de los internos en instituciones de reintegración social para adolescentes.

**Artículo 32**.- La Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública, contendrá la información relativa a sus integrantes, tales como datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografías, escolaridad, antecedentes en el servicio, trayectoria en la seguridad pública, estímulos y reconocimientos, sanciones impuestas, cambios de adscripción, cambios de actividad o rango y razones para ello.

**Artículo 33**.- Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier orden de presentación, aprehensión u otra medida cautelar derivada de una investigación penal, así como auto de vinculación, sentencia condenatoria o absolutoria, o bien se les inicie procedimiento administrativo con motivo del ejercicio de sus funciones, y la resolución que se dicte al respecto; se les imponga una sanción administrativa; o se emita cualquier resolución con motivo de la interposición de medios de impugnación de los procedimientos principales; se notificará inmediatamente a la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública.

**Artículo 34**,- La Base de Datos del Registro de Armamento y Equipo deberá contener los vehículos que tengan asignados los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, con el número de matrícula, placas de circulación, marca, modelo, tipo, número de serie y motor; así como las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el documento respectivo de la autorización y el número de registro, marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

También deberán tenerse en la Base de Datos a que se refiere el párrafo anterior, los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.

**Artículo 35.**- Los elementos de las Instituciones de Seguridad Publica autorizados, sólo podrán portar las armas de cargo que les hayan sido asignadas individualmente o aquellas que se les hayan asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

**Artículo 36**.- En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Estatal de Armamento y Equipo, y éste a su vez al Registro Nacional de Armamento y Equipo, y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

**Artículo 37.-** La Base de Datos del Registro Administrativo de Detenciones estará integrada con la información relativa a la detención de cualquier persona y deberá contener, al menos, los datos siguientes:

I. Nombre y, en su caso, alias del detenido;

II. Descripción física del detenido;

III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;

IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido

en la detención, así como el rango respectivo y área de adscripción; y

V. Lugar a donde será trasladado el detenido.

**Artículo 38**.- Los elementos de las Instituciones Policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Sistema Estatal, y éste a su vez al Centro Nacional de Información, a través del Informe Policial Homologado, de conformidad con lo establecido en la Ley General y esta Ley.

**Artículo 39.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al Registro Administrativo de Detenciones, tan pronto reciban a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:

I. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;

II. Clave Única de Registro de Población;

III. Grupo étnico al que pertenezca, de ser el caso;

IV. Descripción del estado físico del detenido;

V. Huellas dactilares;

VI. Identificación antropométrica, y

VII. Otros medios que permitan la identificación del detenido.

Artículo 40.- El ministerio público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

Artículo 41.- A la información contenida en el Registro Administrativo de Detenciones sólo podrán tener acceso:

I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y

II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.

## CAPÍTULO TERCERO
## DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Artículo 42.-** El Secretario Ejecutivo será el órgano operativo del Sistema Estatal, responsable del correcto funcionamiento del mismo, así como el enlace con el Sistema Nacional.

**Artículo 43**.- El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Consejo Estatal, a propuesta de su Presidente, durará en su cargo cuatro años, y podrá ser reelegido hasta por un período igual, debiendo satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

III. Tener como mínimo treinta años de edad;

IV. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;

V. Tener reconocida capacidad profesional y probidad;

VI. Contar con cinco años de experiencia en materia de seguridad pública;

VII. No haber sido sentenciado por delito doloso ni inhabilitado en ningún ámbito de gobierno en el ejercicio del servicio público; y

VIII. Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia.

**Artículo 44**.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia;

II. Fungir como enlace para el Sistema Nacional;

III. Proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional a la brevedad posible, sin que en ningún caso el plazo exceda de treinta días naturales, salvo justificación fundada;

IV. Vigilar el suministro oportuno de la información correspondiente del Sistema Estatal, hacia el Sistema Nacional;

V. Solicitar información del Sistema Nacional;

VI. Impulsar mejoras para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal;

VII. Coordinar la realización de estudios especializados sobre seguridad pública;

VIII. Compilar toda la documentación relativa a las sesiones del Consejo Estatal;

IX. Rendir un informe cada cuadro meses ante el Consejo Estatal, sobre sus actividades;

IX. Celebrar los convenios de coordinación, colaboración y. concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal, previa autorización del Consejo Estatal;

XI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de seguridad pública, por cuanto hace a los fines del Sistema Estatal, e informar sobre su incumplimiento al Consejo Estatal de inmediato;

XII. Elaborar y publicar los informes de actividades del Consejo Estatal;

XIII. Colaborar con las Instituciones de Seguridad Pública, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación para el suministro de información al Sistema Estatal;

XIV. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal;

XV. Elaborar estadísticas periódicamente, y presentarlas ante el Consejo Estatal, a fin de contar con información detallada sobre los avances y resultados en materia de seguridad pública;

XVI. Las demás que le otorga esta Ley y otros ordenamientos jurídicos, así como las que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y las que le encomienden el Consejo Estatal y su Presidente.

## TÍTULO CUARTO
## DE LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

### CAPÍTULO PRIMERO
### DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Artículo 45**.- El Consejo Estatal será la máxima instancia de deliberación y consulta del Sistema Estatal, y estará integrado por:

I. El Gobernador, quien lo presidirá;

II. El Secretario;

III. El Procurador;

IV. El Comisionado;

V. Los presidentes municipales de las cabeceras de los distritos judiciales;

VI. Los Presidentes de las Comisiones de Seguridad Pública y Tránsito y de Procuración y Administración de Justicia, respectivamente, de la Legislatura del

Estado de México;

VII. Dos integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, designados por éste;

VIII. Un representante de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia y del Sistema Penitenciario, respectivamente, del ámbito federal;

IX. El titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México;

X. Dos representantes de organizaciones civiles vinculadas a temas de seguridad pública;

XI. Dos académicos especialistas en materias afines; y

XII. El Secretario Ejecutivo.

La participación de los integrantes del Consejo Estatal será de carácter honorífico

Los representantes a que se refieren las fracciones X y XI, serán elegidos por los demás integrantes del Consejo Estatal, previa convocatoria pública que para tal efecto deberán expedir, por conducto del Secretario Ejecutivo. Si hubiere más de dos aspirantes a ocupar los cargos, los representantes serán electos de acuerdo a su perfil profesional, conocimientos, experiencia en temas de seguridad pública y representatividad en el caso de organizaciones civiles.

**Artículo 46**.- El Presidente del Consejo Estatal será suplido en sus ausencias por el Secretario. Los demás integrantes deberán asistir personalmente.

**Artículo 47**.- El Consejo Estatal podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a personas que no sean integrantes, a fin de intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico.

**Artículo 48.-** El Consejo Estatal sesionará de manera ordinaria cada dos meses, y de manera extraordinaria las veces que sea necesario. La convocatoria se hará por el Presidente, por conducto del Secretario Ejecutivo.

**Artículo 49.-** El Consejo Estatal requerirá de quórum para sesionar, el cual se integrará con al menos la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes.

**Artículo 50**.- Las reglas para el desarrollo de las sesiones del Consejo Estatal, así como las disposiciones relativas a su funcionamiento, serán establecidas en el Reglamento respectivo, sin que puedan contravenir lo establecido en la presente Ley.

**Artículo 51**.- Son atribuciones del Consejo Estatal:

I. Aprobar el Programa Estatal, mismo que deberá contener los instrumentos y las políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública. Dicho Programa deberá ser congruente con el Programa Nacional de Seguridad Pública e incluir lo relativo a la Seguridad Pública del Plan Estatal de Desarrollo;

II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el buen funcionamiento del Sistema Estatal;

III. Promover la implementación de políticas públicas y programas en materia de atención y protección a víctimas del delito;

IV. Promover la efectiva coordinación de las Instituciones de Seguridad Pública;

V. Promover homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;

VI. Vigilar que tanto los recursos estatales destinados a seguridad pública como los que provengan de aportaciones federales, sean

aplicados para tales fines, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y denunciar su incumplimiento ante las autoridades competentes;

VII. Formular propuestas para el buen funcionamiento del Sistema Nacional y la efectiva coordinación entre Instituciones de Seguridad Pública del país, que deberán ser presentadas ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por conducto del Presidente;

VIII. Expedir políticas públicas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las Instituciones de Seguridad Pública, y que deba formar parte del Sistema Estatal;

IX. Establecer medidas para vincular el Sistema Estatal con el Sistema Nacional y otros de carácter estatal o regional;

X. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;

XI. Recomendar la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;

XII. Nombrar al Secretario Ejecutivo, a propuesta de su Presidente, y vigilar su correcto desempeño;

XIII. Verificar que los Programas Municipales de Seguridad Pública que sean sometidos a su consideración, sean congruentes con el Programa Estatal, y emitir las recomendaciones pertinentes para tales efectos;

XIV. Expedir el Reglamento a que se refiere el artículo 50 de esta Ley;

XV. Emitir las disposiciones que sean necesarias para la operación y adecuado funcionamiento del Sistema Estatal; y

XVI. Las demás que establezcan esta Ley, otras disposiciones jurídicas y las que sean necesarias para cumplir los fines de la seguridad Pública.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Artículo 52**.- Los Consejos Municipales serán órganos colegiados, integrados por los Ayuntamientos que conforman cada distrito judicial.

Los Consejos Municipales tendrán por objeto propiciar la efectiva coordinación entre los Ayuntamientos que los conforman, para contribuir a los fines de la seguridad pública, así como dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Estatal, y verificar su cumplimiento.

El Presidente de cada Consejo Municipal representará a los Ayuntamientos que lo integren, en el Consejo Estatal, por lo que deberá someter a su consideración los acuerdos que se tomen en el Consejo municipal respectivo e informar lo conducente.

**Artículo 53**.- Los Consejos municipales serán órganos colegiados integrados por los Ayuntamientos de los municipios cuya conformación y sede será de la manera siguiente:

I. Primer Consejo Municipal, Chalco: Chalco, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad;

II. Segundo Consejo Municipal, Cuautitlán: Cuautitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec y Tultitlán;

III. Tercer Consejo Municipal, Ecatepec de Morelos: Ecatepec de Morelos y Coacalco de Berriozábal;

IV. Cuarto Consejo Municipal, El Oro: El Oro, Acambay, Atlacomulco y Temascalcingo;

V. Quinto Consejo Municipal, Ixtlahuaca: Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso y San José del Rincón;

VI. Sexto Consejo Municipal, Jilotepec: Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Villa del Carbón;

VII. Séptimo Consejo Municipal, Lerma: Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Ateneo y Xonacatlán;

VIII. Octavo Consejo Municipal, Nezahualcóyotl: Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz;

IX. Noveno Consejo Municipal, Otumba: Otumba, Axapusco, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Tecámac y Temascalapa;

X. Décimo Consejo Municipal, Sultepec: Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Texcaltitlán, Tlatlaya y Zacualpan;

XI. Décimo Primero Consejo Municipal, Temascaltepec: Temascaltepec, Luvianos, San Simón de Guerrero y Tejupilco;

XII. Décimo Segundo Consejo Municipal, Tenango del Valle: Tenango del Valle, Almoloya del Rio, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco;

XIII. Décimo Tercero Consejo Municipal, Tenancingo: Tenancingo, Coatepec Harinas, Ixtapan de La Sal, Malinalco, Ocuilan, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán;

XIV. Décimo Cuarto Consejo Municipal, Texcoco: Texcoco, Acolman, Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Papalotla, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca;

XV. Décimo Quinto Consejo Municipal, Tlalnepantla: Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan y Nicolás Romero;

XVI. Décimo Sexto Consejo Municipal, Toluca: Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa Victoria y Zinacantepec;

XVII. Décimo Séptimo Consejo Municipal, Valle de Bravo: Valle de Bravo, Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, Otzoloapan, Villa de Allende y Zacazonapan; y

XVIII. Décimo Octavo Consejo Municipal, Zumpango: Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac y Tonanitla.

**Artículo 54**.- Cada Consejo Municipal estará integrado por:

I. Los Presidentes Municipales. Él del Municipio sede del distrito judicial, fungirá como Presidente;

II. Los Secretarios de los Ayuntamientos respectivos;

III. Los Síndicos o el Primer Síndico, en su caso;

IV. Los Directores de Seguridad Pública Municipal;

V. Dos representantes de organizaciones civiles vinculadas a temas de seguridad pública; y

VI. El Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento sede del distrito judicial.

Los representantes a que se refiere las fracción V, serán elegidos por los demás integrantes del Consejo Municipal, previa convocatoria

Pública que para tal efecto deberán expedir, por conducto del Secretario Ejecutivo. Si hubiere más de dos aspirantes a ocupar los cargos, los representantes serán electos de acuerdo a su perfil profesional, conocimientos, experiencia en temas de seguridad pública y representatividad.

El Secretario del Ayuntamiento sede del distrito judicial de que se trate, fungirá como Secretario Ejecutivo.

La participación de los integrantes del Consejo Municipal será de carácter honorífico.

Todos los integrantes deberán asistir personalmente, no pudiendo delegar su representación.

**Artículo 55**.- Los Consejos Municipales podrán invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a personas que no sean integrantes, a fin de intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico.

**Artículo 56.-** Los Consejos Municipales sesionarán de manera ordinaria cada dos meses, y de manera extraordinaria las veces que sea necesario. La convocatoria se hará por el Presidente, por conducto del Secretario Ejecutivo.

Las sesiones podrán celebrarse de manera rotativa, en cada uno de los municipios que conforman el Consejo Municipal respectivo, según lo determinen los integrantes.

**Artículo 57**.- Los Consejos Municipales requerirán de quórum para sesionar, el cual se integrará con al menos la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes.

**Artículo 58**.- Las reglas para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Municipales, así como las disposiciones relativas a su funcionamiento, serán establecidas en el Reglamento que para tales efectos emitan, respectivamente, sin que puedan contravenir lo establecido en la presente Ley.

**Artículo 59**.- Son atribuciones de los Consejos Municipales:

I. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias;

II. Proponer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública, a fin de que sean discutidas y eventualmente incluidas en el Programa Estatal, por conducto de su Presidente;

III. Emitir acuerdos para la efectiva coordinación de las Instituciones de Seguridad Pública a su cargo;

IV. Hacer propuestas para el buen funcionamiento del Sistema Estatal, a fin de que sean sometidas a consideración del Consejo Estatal, por conducto de su Presidente;

V. Promover la implementación de políticas públicas y programas en materia de atención y protección a víctimas del delito;

VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública a su cargo, y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;

VII. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública a su cargo;

VIII. Expedir el Reglamento a que se refiere el artículo 58 de esta Ley; y

IX. Las demás que establezcan esta Ley, otras disposiciones jurídicas y las que sean necesarias para cumplir los fines de la seguridad pública.

**Artículo 60.-** El Presidente del Consejo Municipal deberá informar de manera oportuna a los

integrantes, sobre los acuerdos tomados en el Consejo Estatal.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Articulo 61.- Cuando para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, sea necesaria la participación coordinada del Estado con otra u otras entidades federativas, e incluso los municipios respectivos y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, se establecerán Consejos Regionales de Seguridad Pública, con carácter temporal o permanente, en los que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

También podrán establecerse Consejos Regionales entre municipios del Estado con los de otros estados y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, previa aprobación de la Legislatura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 62.- Los Consejos Regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional, según Lo acuerden, y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación en materia de seguridad pública, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 63.- Los Consejos Regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales a que se refiere la Ley General, así como a sus respectivos Consejos Estatales, los acuerdos, programas específicos y convenios relativos a lograr una efectiva coordinación en materia de seguridad pública.

## TÍTULO QUINTO
## DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

## CAPÍTULO PRIMERO
## DE LAS OBLIGACIONES

**Artículo 64.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública tendrán las siguientes obligaciones:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos;

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;

V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias; especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciarán inmediatamente ante la autoridad competente;

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos jurídicos aplicables;

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;

X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;

XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas, de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;

XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;

XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o posibles hechos delictivos, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;

XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;

XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismos y en el personal bajo su mando;

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;

XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las instituciones;

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio o con motivo de su empleo, cargo o comisión;

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adjetivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado,

salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las instituciones;

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las instituciones, dentro o fuera del servicio;

XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tengan encomendadas. Asimismo, no podrán hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y

XXVIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 65**.- Los elementos de todas las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar, para su ingreso y permanencia, con el certificado y registro correspondientes, los cuales deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal, de conformidad con lo establecido por la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Las Instituciones de Seguridad Pública que cancelen algún certificado, deberán hacer la anotación respectiva de inmediato.

**Artículo 66.-** El documento de identificación de los integrantes de las Instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y claves de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal; así como las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

**Artículo 67.-** Todos los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, tienen la obligación de identificarse, salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.

**Artículo 68**.- En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que a resolución por la que se impone la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de cualquier ministerio público, perito o elemento de las Instituciones Policiales, es injustificada, la Institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho el servidor público, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido, de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional, y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LOS DERECHOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

**Artículo 69**.- Los elementos de las Instituciones Policiales, en el ejercicio de sus funciones, tendrán los derechos siguientes:

I. Percibir la remuneración que les corresponda por el desempeño de su servicio, salvo las deducciones y los descuentos que procedan en términos de ley;

II. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos, iguales o subalternos;

III. Ser sujeto de los ascensos, condecoraciones, recompensas y distinciones a que se hayan hecho merecedores, en términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes;

IV. Cambiar de adscripción por permuta cuando las necesidades del servicio lo permitan;

V. Recibir la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización;

VI. Registrar en sus expedientes, las notas buenas y menciones honoríficas a que se hayan hecho merecedores;

VII. Recibir el vestuario reglamentario sin costo alguno y el equipo requerido para cumplir con la comisión o servicio asignado;

VIII. Participar en los concursos de promoción y evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior, en términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes;

IX. Gozar de los beneficios de la seguridad social en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias de esta Ley;

X. Recibir asesoría y en su caso, defensa jurídica en forma gratuita, por parte de su corporación, en asuntos civiles o penales, siempre que:

a).Los hechos sean resultado del cumplimiento de sus obligaciones legales; y

b) La demanda o denuncia sea promovida por particulares;

I. Ser recluido mediante medidas especiales de seguridad, en los casos en que sean sujetos a prisión preventiva;

II. Recibir gratificación anual y disfrutar de franquicias, permisos, licencias y vacaciones en los términos de las disposiciones reglamentarias respectivas;

III. Contar con alojamiento oficial y alimentación, cuando las necesidades del servicio lo requieran;

IV. Tener un seguro de vida, en los términos que señalen las disposiciones reglamentarias respectivas;

V. Tener acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas y de recreación;

VI. Recibir el beneficio de la pensión o jubilación de acuerdo a la legislación correspondiente; y

VII. Los derechos que les sean concedidos por el Servicio Profesional de Carrera y los demás que la normatividad aplicable les reconozca.

**Artículo 70.-** La remuneración de los elementos de las instituciones policiales, será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, el Estado y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias correspondientes, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA CERTIFICACIÓN

**Artículo 71**.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por esta Ley, ante el Centro, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia; con el objeto de acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en dichas Instituciones, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su

cargo.

**Artículo 72.-** El Centro será el responsable de aplicar las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 73**.- Todos los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, sin excepción, deberán contar con el certificado que emita el Centro, para su ingreso y permanencia.

**Artículo 74**.- El Centro sólo podrá otorgar certificados si cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación a que se refiere la Ley General.

**Artículo 75.-** Los certificados que otorgue el Centro, para su validez, deberán contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

**Artículo 76**.- El Centro deberá informar a los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública respectivas, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen; asimismo, proporcionará la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia.

**Artículo 77**.- El Centro proporcionará a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARLOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECONOCIMIENTOS

**Artículo 78.-** Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos, las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado.

**Artículo 79**.- El Estado y los municipios generarán, de acuerdo a sus necesidades y presupuestos, sistemas complementarlos de seguridad social y reconocimientos, para los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública a su cargo, respectivamente.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LAS ACADEMIAS E INSTITUTOS

**Artículo 80**.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con Academias o Institutos, que serán responsables de aplicar, según sea el caso, los Programas Rectores de Profesionalización a nivel nacional, y tendrán las siguientes funciones:

I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema Nacional;

II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los elementos;

III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables;

IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la profesionalización;

V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;

VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;

VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiera el respectivo Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional;

VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de

profesionalización;

IX. Revalidar equivalencias de estudios de la profesionalización;

X. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;

XI. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los servidores públicos y proponer los cursos correspondientes;

XII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;

XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudios ante las autoridades competentes;

XIV. Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;

XV. Proponer la celebración de convenios con instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con el objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos; y

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

## CAPÍTULO SEXTO
## DEL RÉGIMEN DE SANCIONES

**Artículo 81.-** Las sanciones aplicables por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta Ley, serán al menos, las siguientes:

I. Amonestación;

II. Suspensión; y

III. Remoción.

En el caso de las Instituciones de Procuración de Justicia, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y su Reglamento, establecerán los procedimientos respectivos, debiendo realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.

# TÍTULO SEXTO
# DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES SÓLO A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

## CAPÍTULO PRIMERO
## DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

**Artículo 82**.- Los elementos de las Instituciones Policiales, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realicen;

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en tos términos de las leyes correspondientes;

III. Apoyar a las autoridades que así se los soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;

VI. Obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre ellos

funciones de mando, salvo las excepciones previstas en esta Ley, así como cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;

VII. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciban, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;

X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia; y

XI. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 83**.- Siempre que se use la fuerza Pública, se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, los elementos de las Instituciones Policiales deberán apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO

Artículo 84.- Los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado con los datos de las actividades e investigaciones que realicen, el cual contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

I. El área que lo emite;

II. El usuario capturista;

III. Los datos generales de registro;

IV. Motivo, que se clasifica en tipo de evento y subtipo de evento;

V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;

VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos;

VII. Entrevistas realizadas; y

VIII. En caso de detenciones:

a). Señalar los motivos de la detención;

b). Descripción de la persona;

c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;

d). Descripción de estado físico aparente;

e). Objetos que le fueron encontrados;

f). Autoridad a la que fue puesto a disposición; y

g). Lugar en el que fue puesto a disposición.

**Artículo 85.-** El Informe Policial Homologado debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA MEDIACIÓN POLICIAL

**Artículo 86**.- Se entiende por mediación policial al proceso en el que uno o más elementos de las Instituciones Policiales intervienen en cualquier conflicto social, facilitando a las partes la comunicación, con el objeto de que ellos mismos construyan un convenio que dé solución plena,

legal y satisfactoria al conflicto.

**Artículo 87**.- La mediación policial se regirá por los principios de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, oralidad y consentimiento informado.

**Artículo 88**.- Se exceptuará la mediación policial si el conflicto social entraña la comisión de probables hechos delictuosos.

**Artículo 89.-** Los elementos de las Instituciones Policiales procurarán, en todo momento, la mediación policial como alternativa de solución, si la naturaleza del asunto lo permite.

**Artículo 90**.- Una vez agotado el procedimiento de mediación policial, si hubiere voluntad entre las partes, se procederá a la elaboración de un acuerdo que será firmado también por el o los elementos de las Instituciones Policiales que hubieren facilitado la mediación, y será registrado en los archivos de la unidad de policía a la que pertenezcan.

**Artículo 91**.- Si el acuerdo fuere incumplido por alguna de las partes, se procederá nuevamente a la mediación policial, a fin de propiciar un nuevo acuerdo o el cumplimiento del ya firmado.

**Artículo 92**.- Si no fuere posible la mediación policial, o si una vez agotado el procedimiento para su aplicación, las partes no llegan a un acuerdo, el o los elementos de las Instituciones Policiales que hayan intentado propiciar la mediación, les informarán los derechos que tienen para agotar las instancias legales correspondientes, advirtiéndoles tanto de los beneficios como de las desventajas que, en su caso, pudieran obtener.

De lo anterior, también deberá asentarse el registro correspondiente, con la firma de las partes y del elemento o los elementos de las Instituciones Policiales.

**Artículo 93.-** Los elementos de las Instituciones Policiales, para cumplir con los propósitos de la mediación policial, deberán recibir la capacitación adecuada por parte de las instancias competentes en la materia, ya sean públicas o privadas.

**Artículo 94**.- La información derivada de los procedimientos de mediación policial, será reservada, salvo que las partes involucradas decidan que sea pública; en todo caso, deberá preservarse la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

## TÍTULO SÉPTIMO
## DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CARRERA

**Artículo 95**.- El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al ministerio público y a los peritos.

La policía ministerial se sujetará a lo dispuesto en esta Ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial; para tales efectos, las reglas, procesos y lo relativo al régimen disciplinario, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia.

Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del ministerio público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.

**Artículo 96**.- El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:

I. El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;

II. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y

III. La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 97.-** El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:

I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;

II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; y tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de procuración de justicia:

III. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos, y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;

IV. Contará con un sistema de rotación del personal;

V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;

VI. Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos;

VII. Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones;

VIII. Buscará generar el sentido de pertenencia institucional; y

IX. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, así como de las incidencias del mismo.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DEL INGRESO AL SERVICIO DE CARRERA

**Artículo 98**.- El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.

Los aspirantes a ministerios públicos y peritos que deseen ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos:

II. Contar con título de Licenciado en Derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional, para el caso de aspirantes a ministerios públicos; y tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o

cédula profesional para su ejercicio, para el caso de aspirantes a peritos;

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

IV. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público de cualquier ámbito de gobierno, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;

VII. Presentar y aprobar el curso de ingreso que establezca la Institución; y

VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, ante el Centro.

**Artículo 99**.- Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de ingreso, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional, y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal.

Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.

**Artículo 100.**- Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación básica que para tales efectos establezca el Procurador, mediante los ordenamientos jurídicos aplicables, y su duración no podrá ser inferior a quinientas horas clase.

## CAPÍTULO TERCERO

## DEL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CARRERA

**Artículo 101.**- Son requisitos de permanencia de los ministerios públicos y peritos, los siguientes:

I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;

II. Cumplir con los programas de profesionalización del Instituto, debiendo cubrir un mínimo de sesenta horas clase anuales;

III. Aprobar las evaluaciones de capacidades profesionales, de desempeño y de control de confianza;

IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;

V. Cumplir las órdenes de rotación;

VI. Cumplir con las obligaciones que les impone esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables; y

VII. En su caso, los demás requisitos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 102.**- Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 103**.- Las solicitudes de reincorporación al Servicio de Carrera se analizarán y en su caso, concederán, con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, ya sea local o federal.

## CAPÍTULO CUARTO

**DE LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE CARRERA**

**Artículo 104**.- La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, deberá prever los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia, debiendo comprender, al menos, las siguientes formas de terminación del Servicio de Carrera:

I. Ordinaria, que comprende:

a. Renuncia;

b. Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones; y

c. Jubilación.

II. Extraordinaria, que comprende:

a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia; y

b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.

**CAPÍTULO QUINTO**
**DE LOS AGENTES DEL MISTERIO PÚBLICO Y PERITOS QUE NO PERTENEZCAN AL SERVICIO DE CARRERA**

Artículo 105.- Los agentes del ministerio público y peritos que no pertenezcan al Servicio de Carrera, deberán satisfacer los requisitos que señalan los artículos 95 y 98 de esta Ley, para su ingreso y permanencia.

**TÍTULO OCTAVO**
**DEL DESARROLLO POLICIAL**

**CAPITULO PRIMERO**
**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 106**.- El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales, y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios a que se refiere el artículo 3 de esta Ley.

**Artículo 107**.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

**Artículo 108**.- Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

I. Investigación: a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información, siempre bajo el mando y conducción del ministerio público;

II. Prevención: tendiente a prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, así como acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción; y

III. Reacción: a fin de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

Artículo 109.- Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se coordinarán en los términos de esta Ley

y demás disposiciones aplicables, para el efectivo cumplimiento de sus funciones, y tendrán, entre otras, las facultades siguientes:

I. Recibir las denuncias sobre hechos delictuosos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el ministerio público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas, y dejarán de actuar cuando él lo determine;

II. Verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informar al ministerio público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;

III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del ministerio público;

IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Federal;

V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el ministerio público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;

VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al ministerio público;

VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;

VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al ministerio público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.

IX. Proponer al ministerio público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;

X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al ministerio público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;

XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;

XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al ministerio público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente; y

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales que le sean solicitados con motivo de sus funciones; y

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

Cuando para el cumplimiento de alguna de estas facultades se requiera una orden judicial, el elemento de la unidad de policía encargada de la investigación científica de los delitos informará al ministerio público, para que éste la solicite al juez de control, debiendo proveer la información en que se base para hacer la solicitud respectiva.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LAS BASES DE LA CARRERA POLICIAL

**Artículo 110.**- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

**Artículo 111**.- Los fines de la Carrera Policial son:

l. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones Policiales;

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y

V. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 112.- Las Instituciones Policiales del Estado y de los municipios, deberán establecer la organización jerárquica de las mismas, considerando al menos las categorías siguientes:

I. Comisarios;

II. Inspectores;

III. Oficiales; y

IV. Escala Básica.

**Artículo 113**,- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:

I. Comisarios:

a) Comisario General;

b) Comisario Jefe; y

c) Comisario.

ll. Inspectores:

a) Inspector General;

b) Inspector Jefe; e

c) Inspector.
III. Oficiales:

a) Subinspector;

b) Oficial; y

c) Suboficial.

IV. Escala Básica:

a) Policía Primero;

b) Policía Segundo;

c) Policía Tercero; y

d) Policía.

**Artículo 114**.- Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

**Artículo 115**.- El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será:

l. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General; y

II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

**Artículo 116.**- La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, los titulares de las Instituciones Policiales tanto del Estado como de los municipios, deberán establecer sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

**Artículo 117**.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante, antes de que se autorice su ingreso a las mismas, en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional, y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal;

II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el Centro;

III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado;

IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;

V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determina la Ley General y esta Ley;

VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los

requisitos de permanencia;

VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;

IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;

X. El cambio de un integrante de las Instituciones Policiales del Estado o de los municipios, de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por el Comisionado o el Presidente Municipal, respectivamente; y

XI. Los titulares de las Instituciones Policiales del Estado o de los municipios, respectivamente, establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

**Artículo 118.-** La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.

**Artículo 119.-** Los titulares de las Instituciones Policiales del Estado y de los municipios, respectivamente, podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA SELECCIÓN, INGRESO Y PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

**Artículo 120**.- La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.

Dicho proceso comprende el período de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en esta Ley sobre los aspirantes aceptados.

**Artículo 121**.- El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias, el período de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley.

**Artículo 122**.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

A De ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;

II. Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;

b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; o

c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.

V. Aprobar el examen de ingreso y los cursos de formación;

VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

IX. No padecer alcoholismo;

X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público en ningún ámbito de gobierno; y

XII. Los demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

A. De permanencia:

I. Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;

b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; o

c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;

VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso a que se convoque, conforme a las disposiciones aplicables;

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

X. No padecer alcoholismo;

XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;

XII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público en ningún ámbito de gobierno;

XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días; y

XV. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

## CAPÍTULO CUARTO
## DEL RÉGIMEN DE ESTÍMULOS DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

**Artículo 123**.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

**Artículo 124**.- Todo estímulo otorgado por las Instituciones Policiales será acompañado de una constancia que lo acredite, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LA PROMOCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

**Artículo 125**.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los elementos de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

**Artículo 126**.- Al elemento que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

**Artículo 127**.- Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

**Artículo 128.**- Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los elementos de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

Para tales efectos, la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:

I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales; y

II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

**Artículo 129**.- La conclusión del servicio de un elemento es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

l. Separación, por incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:

a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables; y

c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.

II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; o

II. Baja, por:

a). Renuncia;

b) Muerte o incapacidad permanente; o

c) Jubilación o retiro.

Al concluir el servicio, el elemento deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega-recepción.

Artículo 130.- Los elementos de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias Instituciones.

## CAPÍTULO SÉPTIMO
## DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

**Artículo 131**.- La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia y el escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

**Artículo 132**.- Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

**Artículo 133**.- Los elementos de las instituciones policiales Estatal y municipales, serán sancionados conforme a las disposiciones reglamentarias, cuando incumplan las obligaciones establecidas en esta Ley o en las normas que instituyan sus respectivos reglamentos y que no ameriten su remoción, independientemente de la aplicación de las sanciones que señalen otras leyes.

**Artículo 134**.- Los elementos de las instituciones policiales, podrán ser removidos de su cargo y funciones de conformidad con esta Ley, al incurrir en alguna de las causales que establece el artículo 129, o bien separados de su cargo por incumplir con alguno de los requisitos de permanencia.

**Artículo 135**.- Son causas de remoción:

I. Incurrir en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o maltrato a los superiores, compañeros, subordinados o familiares de unos u otros, dentro o fuera del servicio;

II. Faltar por más de 3 días a sus servicios sin causa justificada, en un período de 30 días o más de 5 en 90 días;

III. Destruir intencionalmente edificios, obras, equipos, vehículos, instrumentos u otros

objetos a su cargo;

IV. Cometer actos inmorales durante el servicio;

V. Revelar asuntos confidenciales o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de la prestación del servicio;

VI. Abandonar su servicio sin motivo o causa justificada;

VII. Desobedecer las órdenes verbales o escritas que reciba de sus superiores;

VIII. Asistir a sus servicios con aliento alcohólico o bajo el influjo de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes; o consumirlas durante el servicio o en el centro de trabajo;

IX. Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada;

X. La pérdida del arma de cargo por negligencia o descuido; y

XI. Dejar de observar cabalmente cualquiera de sus obligaciones establecidas en esta Ley.

**Artículo 136.-** La instauración de los procedimientos administrativos del Régimen Disciplinario, para los elementos de las instituciones policiales Estatal y municipales estará a cargo de la Comisión de Justicia, que al efecto se integre en el ámbito estatal y en cada uno de los municipios que integran esta Entidad Federativa.

**Artículo 137**.- Cuando de alguna de las causas de remoción, se desprenda la existencia de actos u omisiones que puedan constituir delitos, se procederá de inmediato a hacerlo del conocimiento del Ministerio Público.

**Artículo 138**.- Cuando la ASE o el Órgano que designe el Presidente Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, conozcan de asuntos relacionados con causas de separación del cargo o de remoción de los elementos de las instituciones policiales, abrirán un periodo de información previa, con las constancias que existan sobre el particular, a efecto de integrar el expediente respectivo, mismo que deberá ser remitido a la Comisión de Justicia o el Órgano Colegiado del Ayuntamiento para el trámite correspondiente.

**Artículo 139**.- Si del expediente recibido por la Comisión de Justicia, no se desprenden elementos para iniciar el procedimiento correspondiente, el Presidente de la citada Comisión dictará el acuerdo de improcedencia, mismo que deberá constar en el expediente personal del elemento; por el contrario, en caso de contar con los datos necesarios antes referidos, se ordenará el inicio del procedimiento administrativo del régimen disciplinario, en los términos siguientes:

I. Se notificará personalmente al elemento la instauración y naturaleza del procedimiento, citándolo para que comparezca personalmente al lugar, día y hora en que tendrá verificativo el desahogo de su garantía de audiencia, haciéndole saber los hechos que se le imputan; el objeto y alcance de la diligencia; las disposiciones legales en que se sustenta; su derecho a manifestar de manera verbal o escrita, por sí o por medio de persona de su confianza, lo que a sus intereses corresponda y a ofrecer las pruebas que considere oportunas para desvirtuar la causal de remoción o de separación que se le atribuya;

II. En caso de que no comparezca, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia y por precluido su derecho para tal efecto, procediendo a emitir la resolución que en derecho corresponda;

III. Las notificaciones y las citaciones se efectuarán por conducto del notificador, quien para el ejercicio de sus funciones estará investido de fe pública;

IV. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de cinco

días ni mayor de nueve días hábiles; contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del citatorio de garantía de audiencia;

V. Desahogadas las pruebas, si las hubiere y producidos, en su caso, los alegatos por parte del compareciente, la Comisión de Justicia Estatal o Municipal, en el ámbito de su competencia, dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes, la resolución pertinente, debidamente fundada y motivada;

VI. En la resolución se determinará si se acreditan o no los hechos que motivaron la causal de remoción o de separación del cargo que dio origen al procedimiento, notificando la resolución al interesado en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;

VII. Antes, durante o después de la audiencia a la que se refiere la fracción l del presente artículo, la Comisión de Justicia Estatal o Municipal, según sea el caso, podrá determinar la separación temporal del elemento, mediante acuerdo que le será notificado, cuando él se encuentre sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa o proceso penal, por actos u omisiones de los que puedan derivarse probables responsabilidades y cuya permanencia en el servicio, a juicio de éstas, pudiera afectar a la corporación o a la comunidad. La separación referida no prejuzga la responsabilidad que se le impute;

VIII. La separación temporal a que se refiere la fracción anterior suspenderá los efectos del nombramiento y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado;

IX. La separación cesará cuando así lo resuelva la Comisión de Justicia Estatal o Municipal, según sea el caso, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo;

X. Si los elementos separados temporalmente, no resultaren responsables de la falta que se les imputa, serán reinstalados en el empleo, cargo o comisión que venían desempeñando, pero no tendrán derecho a que se les paguen los haberes dejados de percibir durante el tiempo de la separación, en términos de la fracción I del artículo 54 de esta Ley;

XI. La resolución que se dicte, tomará en consideración la falta cometida, las pruebas aportadas y los argumentos defensivos vertidos por el elemento sujeto a procedimiento, los cuales serán analizados conforme a derecho;

XII. El procedimiento de remoción o de separación del cargo se sujetará a lo establecido en esta Ley, en el Reglamento Interior de la ASE y en el Reglamento de Cuerpos de Seguridad del Estado de México y en lo no previsto se aplicará en lo conducente en forma supletoria el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; y

XIII. Las facultades de la Comisión de Justicia Estatal o Municipal, según sea el caso, para remover o separar de su cargo a los elementos del Cuerpo de Seguridad Pública, prescribirán en el término de un año.

**Artículo 140.**- El plazo de un año para la prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la conducta irregular o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

**Artículo 141**.- De todo lo actuado se levantará constancia por escrito y las resoluciones respectivas se agregarán a los expedientes u hojas de servicio de los elementos de las instituciones policiales Estatal o municipal. Asimismo, deberá inscribirse la instauración de cualquier procedimiento y su resolución, en el expediente personal del elemento, en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional y en la Base

de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal.

**Artículo 142**.- Cualquiera que sea el medio de impugnación por el que se combata el resultado del procedimiento administrativo del régimen disciplinario de los elementos de las instituciones policiales Estatal o municipales, a que se refiere el presente artículo, no será procedente la restitución o reinstalación, sino sólo la indemnización, de conformidad con el artículo 123 apartado B fracción Xlll párrafo segundo de la Constitución Federal.

**Artículo 143**.- Cuando se desprenda la existencia de actos u omisiones que puedan ser constitutivos de hechos delictuosos, las Comisiones de Justicia procederán de inmediato a hacerlo del conocimiento del ministerio público.

**Artículo 144**.- La imposición de las sanciones que determinen, en su caso, las Comisiones de Justicia, se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, de conformidad con las leyes de la materia.

## CAPÍTULO OCTAVO
## DE LAS COMISIONES DEL SERVICIO DE CARRERA Y DE JUSTICIA DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL

**Articulo 145**.- La Comisión del Servicio de Carrera, es el órgano colegiado de la ASE, encargado de conocer y resolver toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos administrativos del Servicio de Carrera de los elementos de los cuerpos de seguridad pública estatal.

**Artículo 146**.- La Comisión de Justicia es el órgano colegiado de la ASE, encargado de conocer y resolver los procedimientos administrativos que se susciten con relación a los procedimientos del Régimen Disciplinario, sustanciados en contra de los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública Estatal.

En la integración de las comisiones serán considerados servidores públicos de las áreas de investigación, prevención y reacción; la organización y funcionamiento serán determinados en sus respectivos reglamentos.

Las comisiones de la ASE del Servicio de Carrera y de Justicia, llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán en las bases de datos del personal de seguridad pública.

## CAPÍTULO NOVENO
## DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y DE JUSTICIA

**Artículo 147**.- La Comisión Municipal del Servicio de Carrera, es el órgano colegiado encargado de conocer y resolver toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos del Servicio Profesional de Carrera de los elementos del Cuerpo Municipal.

**Artículo 148**.- La Comisión Municipal de Justicia, es el órgano colegiado encargado de conocer y resolver los procedimientos administrativos que se susciten con relación a los procedimientos del Régimen Disciplinario sustanciados en contra de los elementos del cuerpo de seguridad pública municipal.

En la integración de las comisiones serán considerados servidores públicos de las áreas de investigación, prevención y reacción; la organización y funcionamiento será determinado en sus respectivos reglamentos.

Las comisiones municipales del Servicio de Carrera y de Justicia, llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán en las bases de datos del personal de Seguridad Pública.

## TÍTULO NOVENO
## DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DE LA APLICACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A SEGURIDAD PÚBLICA

**Artículo 149**.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos estatales y municipales, por el manejo o aplicación indebidos de los recursos públicos destinados a seguridad pública, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables, por las autoridades competentes.

Articulo 150.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México fiscalizará los recursos públicos estatales que se ejerzan por el Estado y los municipios en materia de seguridad pública, en los términos de la legislación aplicable.

### CAPÍTULO SEGUNDO
### DE LOS DELITOS CONTRA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Artículo 151.-** Se sancionará con prisión de uno a cuatro años y de cien a seiscientos días multa, al servidor público que de manera dolosa, ilícita y reiterada, se abstenga de proporcionar la información a que esté obligado, al Secretario Ejecutivo, en los términos de esta Ley.

Al servidor público responsable se le impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta, para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en el servicio público.

**Artículo 152**.- Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

I. Ingrese dolosamente al Sistema Estatal previsto en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;

II. Divulgue de manera ilícita información clasificada del Sistema Estatal a que se refiere esta Ley;

III. Estando autorizado para acceder al Sistema estatal a que se refiere esta Ley, indebidamente obtenga, copie o utilice información;

IV. Inscriba o registre en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal prevista en esta Ley, como integrante de una Institución de Seguridad Pública a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita; y

V. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las Instituciones de Seguridad Pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además de la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público, y en su caso, la destitución.

Artículo 153.- Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

Artículo 154.- Las sanciones previstas en este Capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por delitos previstos en otras leyes.

## ARTÍCULOS TRANSITORIOS

**Primero.-** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**Segundo.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

**Tercero.-** Se abroga la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, el 9 de marzo de 1999 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"; y las demás disposiciones de igual o menor jerarquía, en lo que se opongan al presente Decreto.

**Cuarto.-** De manera progresiva y en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto del Centro, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes.

**Quinto.-** Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado respectivo, en los términos previstos en esta Ley y en los plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado, serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Federal.

**Sexto.-** El Estado y los municipios, respectivamente, contarán con un plazo máximo de un mes, para la instalación de las Comisiones de Justicia y Servicio de Carrera, respectivamente, a que se refiere esta Ley.

**Séptimo.-** Los procedimientos de remoción iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se sustanciarán y concluirán conforme a las disposiciones legales aplicables al momento de su instauración.

**Octavo.-** Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece esta Ley, en un plazo no mayor a un año contado a partir de su publicación.

**Noveno.-** Los senadores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en esta Ley, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

**Décimo.-** La organización jerárquica de las Instituciones Policiales, se establecerá dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación de esta Ley; en tanto, seguirán vigentes los escalafones actuales. En las nuevas estructuras organizacionales, deberán respetarse los derechos laborales de los elementos.

**Décimo Primero**.- La facultad de investigación sólo será ejercida por los elementos de las Instituciones Policiales que cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia, respectivamente, previstos en esta Ley, y que cuenten además con las certificaciones a que se refiere la propia Ley y el Certificado Único Policial, expedidos por el Centro, y estén debidamente registrados tanto en el Sistema Estatal como en el Sistema Nacional.

**Décimo Segundo**.- Las referencias realizadas en la presente Ley a reinserción social, quedarán entendidas al término vigente readaptación social, hasta en tanto se lleve a cabo la reforma penitenciaria a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

**Décimo Tercero**.- El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

**Décimo Cuarto.-** El Sistema Estatal a que se refiere esta Ley, deberá estar en funcionamiento a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes, contados a partir de la publicación del presente

Decreto. Para tales efectos, el Ejecutivo Estatal deberá prever todo lo necesario.

**Décimo Quinto**.- El Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Seguridad Pública, respectivamente, deberán instalarse en un plazo no mayor a un mes, contando a partir de la entrada en vigor de este Decreto, ordenando en el mismo acto la expedición de la convocatoria respectiva para la designación de los integrantes de las organizaciones civiles y académicas. En el caso del Consejo Estatal, en la sesión de instalación deberá nombrar al Secretario Ejecutivo.

Asimismo, en su primera sesión ordinaria deberá aprobar los reglamentos a que se refiere esta Ley.

**Décimo Sexto**.- La Legislatura del Estado de México deberá aprobar las partidas presupuestales necesarias para la instalación y operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

**Décimo Séptimo**.- El Estado y municipios, por conducto de las áreas competentes, deberán concentrar los recursos públicos destinados a seguridad pública destinados a seguridad pública en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de su presupuesto de las obligaciones a que se refiere la presente Ley.

**Décimo Octavo**.- La Legislatura del Estado de México deberá realizar las reformas procedentes a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y demás ordenamientos jurídicos que corresponda, a fin de que sean congruentes con lo dispuesto en esta Ley, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**Décimo Noveno**.- Se subrogan a la Agencia de Seguridad Estatal los derechos y obligaciones de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, denominados (CUSAEM).

**Vigésimo**.- Los recursos humanos, materiales y financieros con los que venían operando los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), se transferirán a la Agencia de Seguridad Estatal, para el cumplimiento de su objeto, en los términos que determinen las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y de la Contraloría en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Vigésimo Primero**.- Se respetarán los derechos laborales adquiridos por los elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), que pasen a formar parte de la Agencia de Seguridad Estatal.

**Vigésimo Segundo**.- Los contratos sobre las modalidades de seguridad en el interior y exterior de inmuebles; custodia de bienes y valores en tránsito, así como de guardia y seguridad personal, suscritos por los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se terminarán conforme a los términos en que fueron suscritos.

**Vigésimo Tercero**.- La Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, proveerán lo necesario a efecto de realizar las propuestas de las reformas a los ordenamientos financieros, así como la autorización de las unidades administrativas que requiera la Agencia de Seguridad Estatal para llevar a cabo la recaudación de recursos financieros y la prestación de los servicios de seguridad en el interior y exterior de inmuebles; custodia de bienes y valores en tránsito, así como de guardia y seguridad personal.

**Vigésimo Cuarto**.- El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos de las disposiciones normativas correspondientes preverá lo necesario para que los elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), que pasen a formar parte de la Agencia de Seguridad Estatal, gocen de los beneficios de la seguridad social.

**Vigésimo Quinto.**- Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), que pasen a formar parte de la Agencia de Seguridad Estatal, se regirán por las

disposiciones de la presente ley.

**Vigésimo Sexto**.- Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, previo a que se autorice su ingreso a la Agencia de Seguridad Estatal, deberán cumplir satisfactoriamente con exámenes psicológico, médico, sobre el consumo de bebidas embriagantes o de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como de control de confianza y no contar con antecedentes penales.

**Vigésimo Séptimo**.- Los recursos percibidos por el Estado, derivados de la suscripción de contratos para la operación de las modalidades de seguridad en el interior y exterior de inmuebles; custodia de bienes y valores en tránsito, así como de guardia y seguridad personal, por la Agencia de Seguridad Estatal, serán recaudados por la Secretaría de Finanzas, con apego a las disposiciones del marco normativo respectivo.

**Vigésimo Octavo**.- Las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y de la Contraloría, así como la Agencia de Seguridad Estatal proveerán lo necesario para que dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de la presente Ley, se lleve a cabo el procedimiento para la extinción de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y la subrogación de las funciones de éstos a la Agencia de Seguridad Estatal.

**Vigésimo Noveno**.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, promoverá la homologación de su Ley Orgánica conforme a las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presente Ley, en un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

**Trigésimo**.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México; a los días del mes de del año dos mil once.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS**. Muchas gracias diputada Secretaría.

Se registra la iniciativa y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio.

De conformidad con el punto número 7 del orden del día, han solicitado a esta Presidencia los diputados Hernández Lugo y el diputado Fernando Zamora, hacer uso de la palabra en este punto, para presentar la iniciativa de Ley de Educación para el Estado de México, con el objeto de no interrumpir la lectura de esta presentación, se va conceder el uso de la palabra en primera instancia al diputado Fernando Zamora y en segunda instancia al diputado Hernández Lugo, quienes en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, presentan iniciativa de Ley de Educación para el Estado de México.

**DIP. FERNANDO ZAMORA MORALES**. Con su permiso señor Presidente.

Señoras diputadas y diputados de la "LVII" Legislatura del Estado de México.

Los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, iniciativa de Ley de Educación del Estado de México, la que tiene su fundamento en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

A través de la educación, las naciones superan sus problemas, mejoran sus condiciones

de vida, alcanzan el bienestar y promueven el progreso y el desarrollo social.

Una de las primeras preocupaciones expresadas por el Congreso Constituyente del Estado de México desde 1824, fue la de establecer instituciones que dieran a la entidad, una sólida base para su desarrollo y garantizaran su existencia. Así, la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del Gobierno Interior del Estado de México, expedida el mismo año, facultó al Poder Legislativo para expedir leyes que promovieran la ilustración y prosperidad del Estado.

Durante el siglo XIX, se expidieron leyes orgánicas de instrucción pública que atendieron la necesidad de establecer más escuelas de primeras letras y de normar e impulsar las tareas educativas y adecuarlas a las realidades cambiantes del país y del estado. De esta forma, desde las propuestas del diputado José María Luis Mora, en 1824, y los contenidos de las leyes de Instrucción Pública expedidas por los gobernadores: Félix María Aburto en 1834; Mariano Riva Palacio en 1857 y Alberto García en 1872. Hasta los numerosos decretos que dieron vida a instituciones educativas de nivel técnico y superior, creadas por los gobernadores: José Zubieta y José Vicente Villada hacia finales del siglo XIX, se consolidó la tesis de que la educación es uno de los factores más importantes para alcanzar los objetivos y las metas de bienestar social y progreso.

En el siglo XX, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, consagró la garantía social de la enseñanza libre y laica. Esta disposición expresó, desde entonces, las aspiraciones y las esperanzas del pueblo de México por alcanzar mejores condiciones de vida, a través de la educación pública.

Esas expectativas, fueron recogidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, expedida en noviembre de 1917 y con base en ésta, se promulgó la Ley General de Educación Pública del Estado de México, otorgando al Ejecutivo facultades para impulsar la prestación de servicios educativos.

A la ley de referencia, le siguió la promulgada durante el gobierno del Licenciado Isidro Fabela, en 1945; época de guerra y período de reconstrucción en buena parte del mundo, que propició en el país y, singularmente, en el Estado de México, un proceso de industrialización que a su vez planteó nuevas necesidades al sistema educativo.

Otras fueron las condiciones en las que se expidió en 1981, la Ley de Educación Pública del Estado de México. Con ésta, se buscaba sustentar el desarrollo de un Sistema Educativo en rápida expansión y con metas de cobertura muy ambiciosas en todos sus niveles.

En 1997 se promulgó la Ley de Educación del Estado de México, en el marco de una de las más señaladas transformaciones que experimentara el Sistema Educativo Nacional en los últimos años del siglo pasado, que consistió en la descentralización de los servicios educativos, hasta entonces administrados por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y que constituyó la parte más importante del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal.

Esta ley, actualizó normativamente al Sistema Educativo Estatal para adecuarlo a las nuevas circunstancias; el gobierno del Estado asumió nuevas atribuciones y dispuso lo necesario para administrar y orientar la totalidad de los servicios educativos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Educación aprobada en 1993 por el Congreso de la Unión.

En 2001, la legislación aplicable a la educación pública, se incorporó al Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México. Poco después de la entrada en vigor de este Código, los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fueron adicionados para establecer la obligación de prestar el servicio de educación preescolar. La Ley General de Educación, por consecuencia, fue reformada en varios de sus artículos para instrumentar esa disposición constitucional.

Como se aprecia, a lo largo de la historia del Estado de México, la legislación educativa se ha actualizado permanentemente conforme a las cambiantes condiciones políticas y sociales.

Por ello, es imperativo reconocer, tanto a autoridades, funcionarios y educadores, los retos que México enfrenta, producto de un mundo interconectado e inmerso en la globalización,

donde el espacio local debe de convivir con las demandas que imponen la esfera nacional e internacional.

Así, la educación desde el espacio local, debe de ser capaz de ofrecer a los individuos las herramientas y oportunidades que les permitan desarrollar todo su potencial, reconociendo en este proceso el carácter único de cada persona y su vocación para escoger su futuro.

Consecuentemente, el Sistema Educativo Estatal requiere disposiciones más precisas y explícitas, e incorporar a la norma las particularidades de la educación en la entidad. Por ello, resulta oportuno y conveniente contar con una Ley de Educación que sustente y oriente las tareas, programas políticos y acciones que el Gobierno del Estado de México, lleva a cabo.

La educación abarca todo proceso de transmisión de conocimiento, costumbres, valores y formas de actuar para que la sociedad avance hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. En este orden de ideas, la iniciativa reconoce que la educación en valores es esencial para sustentar el desarrollo de la sociedad y de la nación.

La educación pública del siglo XXI deberá de contribuir a la superación de la pobreza, a entender a la cultura nacional como factor de soberanía, al combate, a la ilegalidad, al fortalecimiento de la democracia, a la defensa del medio ambiente, a la creación de empleos, a la generación de riqueza y a vincularnos con la sociedad del conocimiento y los avances de la tecnología.

Esta iniciativa valora la importancia de contar con un modelo educativo adecuado a las exigencias presentes y futuras de los mexiquenses, que sea factor determinante que permita al educando aprender a ser, aprender a aprender, a aprender a hacer y aprender a convivir, para responder a los requerimientos de una sociedad dinámica, inserta en un mundo competitivo.

La propuesta contiene un lenguaje homologado y una nueva taxonomía, a efecto de dar a los preceptos que la integran, un ordenamiento lógico que facilite su consulta pero, sobre todo, profundiza en aspectos que hasta ahora, no habían sido suficientemente regulados, e incorpora a otros nuevos. Se trata de un marco jurídico más amplio, de visión moderna y prospectiva.

Esta iniciativa, está integrada por 11 capítulos y 142 artículos, en cuyo contenido se desarrolla el derecho a la educación de los habitantes del Estado de México; el deber del Estado de proporcionar los servicios de educación básica; los principios de la educación, valores, criterio y fines, las atribuciones de las autoridades educativas, la integración, calidad, evaluación y financiamiento del Sistema Educativo Estatal; los tipos, niveles, modalidades y vertientes de la educación; la vinculación de la educación media superior y superior entre sí y con el sector productivo; el servicio social; los maestros al servicio de la educación, su formación, actualización, capacitación y superación profesional, así como sus estímulos y recompensas; de los particulares que imparten educación, validez oficial de estudios, el registro estatal de educación, la participación social en la educación, derechos y obligaciones de los padres de familia; las infracciones, sanciones y el recurso administrativo.

Hasta aquí esta primera parte.

**DIP. ANTONIO HERNÁNDEZ LUGO**. Esta iniciativa de Ley de Educación del Estado de México, recoge y hace propios los postulados del artículo 3º Constitucional y las disposiciones de la Ley General de Educación, otorga a las autoridades educativas estatales atribuciones y facultades para el cumplimiento de sus obligaciones; propicia la consolidación de un sistema educativo articulado en todos sus niveles, que responda a las exigencias del cambio tecnológico y a los requerimientos del proceso educativo.

La evaluación educativa se incorpora como un instrumento que habrá de generar información relevante sobre el desarrollo de las tareas educativas, permitiendo reorientar estrategias de operación en el marco de una cultura de corresponsabilidad y participación democrática, además de facilitar la revisión de resultados para, con base en ellos, introducir adecuaciones a los procesos y mejorar la calidad de la educación.

La propuesta incorpora medidas para la promoción de la lectura y el libro y el establecimiento de escuelas de tiempo completo donde los educandos cuenten con la orientación y tutoría con base en un horario extendido, fortaleciendo la educación integral y un mejor

aprovechamiento escolar.

Asimismo, se propone formalizar la operación del Sistema Estatal de Formación, Capacitación, Actualización y Superación Profesional, para ofrecer alternativas a los maestros de educación básica, encaminadas a mejorar su desempeño docente.

Formaliza el establecimiento de las comisiones de planeación y programación, de la educación media superior y superior, como órganos consultivos que permitan el fortalecimiento de los servicios educativos en estos niveles.

La iniciativa de ley que se presenta, busca que el marco jurídico local se articule con las disposiciones federales vigentes, a efecto de lograr la correcta y oportuna concurrencia entre las autoridades educativas y contribuir así, a elevar la calidad educativa en la entidad.

Incorpora disposiciones adecuadas a la dinámica actual y a su previsible evolución, como es el caso del seguro escolar para los alumnos de instrucciones públicas de educación primaria, quienes anteriormente no contaban con protección en caso de sufrir un accidente durante sus actividades escolares.

En este orden de ideas y para prevenir conductas que puedan afectar la integridad física, moral o psicológica de los educandos o de la comunidad escolar, se dispone que la autoridad educativa formule programas específicos para la atención de esas formas de comportamiento en la actualidad conocidas como “Bullying”.

El deterioro del medio ambiente es cada vez más evidente y su atención exige corresponsabilidad. Esta es una preocupación que encuentra en el sistema educativo una oportunidad para acrecentar el grado de conciencia social acerca de las necesidades de respetar y aprovechar racionalmente los recursos naturales, particularmente el agua, así como para impulsar la comprensión y apropiación de principios y conceptos fundamentales sobre la protección ambiental.

Con el propósito de respaldar los esfuerzos que los mexiquenses realizan para procurar la igualdad entre hombres y mujeres, esta iniciativa asume y promueve la perspectiva de género y dispone el fomento del conocimiento, y el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como evitar la discriminación en cualquiera de sus expresiones.

En favor de la equidad, también se dispone apoyar a estudiantes de bajos recursos y se establecen criterios y mecanismos para reducir el rezago educativo, facilitando el acceso, reingreso, permanencia y egreso a la población que no ha concluido su educación básica.

A efecto de ofrecer oportunidades, a todos los niños y jóvenes en el Estado, este proyecto incluye medidas de atención a educandos con discapacidades transitorias o definitivas o con capacidades o aptitudes sobresalientes en razón de la importancia que representan para el desarrollo de los educandos y de sus familias; asimismo, prevén medidas para facilitar a los migrantes su ingreso o reingreso al Sistema Educativo.

La educación es un factor determinante en la reinserción social de quienes purgan una pena por comisión de delitos, motivo por el cual en la iniciativa se da sustento a los servicios educativos que se prestan en los establecimientos de internamiento para adolescentes, y en los centros e prevención y readaptación social.

En la iniciativa se contemplan, disposiciones para prevenir la obesidad, entre los educandos, como la regulación de los establecimientos que expenden, alimentos en las instituciones de educación pública y particulares incorporadas; la coordinación de acciones con las instituciones del sector salud, para su revisión periódica y la capacitación a padres de familia o tutores para que orienten adecuadamente la educación física y nutricional de sus hijos o pupilos.

El crecimiento de la demanda educativa, particularmente en los niveles medio superior y superior, requiere alternativas que amplíen la cobertura del Sistema Educativo, por ello, se propone, el fortalecimiento de la educación a distancia, como una modalidad accesible para quienes no pueden acudir a instituciones con sistema escolarizado.

La globalización impone nuevos retos a la educación, los estudiantes en todos sus niveles, están comprometidos a lograr una creciente competitividad y a interactuar con documentos,

instituciones y personas de cualquier parte del mundo. Para ellos se requieren nuevas mejores formas de comunicación, por lo que en esta iniciativa, se establecen disposiciones para impulsar y profundizar el aprendizaje de las matemáticas, el español y las ciencias, así como el dominio de un segundo idioma, preferentemente el inglés.

La Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, obligan a considerar indispensable que los niños y jóvenes mexiquenses desarrollen habilidades en su utilización. De la misma importancia se considera el impulso al desarrollo de una cultura emprendedora que favorezca en los jóvenes sus competencias en el diseño y realización de proyectos innovadores, así como su vinculación con el sector productivo.

La Ley General de Educación faculta a las autoridades locales para proponer contenidos regionales en los planes y programas de educación básica, por lo que se precisan los contenidos que la autoridad educativa estatal, podrá incorporar, con el propósito de que los educandos aprecien la riqueza cultural del Estado y fortalezcan su identidad como mexiquense.

La consolidación de la vida democrática, requiere que la educación que se imparte en el Estado de México, promueva la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, gubernamental; en tal sentido, se establecen disposiciones para desarrollar en los educandos el conocimiento de tal derecho y fomentar su ejercicio.

Ante el aumento de la participación de los particulares para brindar servicios de formación, instrucción o de capacitación que por su naturaleza, no están incorporados al sistema educativo y no requieren autorización o reconocimiento de validez oficial, en esta iniciativa se dispone la obligación de registrarse ante la autoridad educativa del Estado.

La movilidad es otra característica de la sociedad, por lo que en esta iniciativa se reconoce la portabilidad de estudios para transitar en el Sistema Educativo Nacional entre modalidades, niveles y tipos de educación, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Múltiples factores inciden en la dinámica que se vive en los planteles educativos, muchos de ellos, imposibles de prever, y todos obligan a las autoridades educativas a actuar responsablemente; para ser frente a esa realidad, la autoridad requiere contar con atribuciones para responder oportunamente y con certidumbre ante esas situaciones y asegurar el correcto desarrollo de la actividad educativa. Por ello, se establece la facultad de implementar las medidas necesarias para atender situaciones imprevistas que pongan en riesgo la comunidad escolar.

Puesto que uno de los propósitos de esta iniciativa, es alcanzar la adecuada articulación de las autoridades educativas, se precisa y se promueve la participación de los ayuntamientos en el mejoramiento físico, el equipamiento y el mantenimiento de las escuelas. Asimismo, la iniciativa considera y regula la participación social a través de las asociaciones de padres de familia y de los Consejos de Participación Social.

La iniciativa de Ley de Educación del Estado de México que se somete a la consideración de esta representación, busca orientar adecuadamente el proceso educativo y asegurar las condiciones para lograr que los educandos desarrollen las capacidades, habilidades, destreza, actitudes y aptitudes que requieren para su propia superación y la de identidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se adjunta el proyecto de decreto, para que en caso de estimarlo adecuado, se apruebe en sus términos.

Atentamente

**DIPUTADOS Y DIPUTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**

**Dip. Ernesto Javier Nemer Álvarez**
**Coordinador del Grupo Parlamentario**

| | |
|---|---|
| **Dip. María José Alcalá Izguerra** | **Dip. Jorge Álvarez Colín** |
| **Dip. Noé Barrueta Barón** | **Dip. Manuel Ángel Becerril López** |
| **Dip. Guillermo César Calderón León** | **Dip. Miguel Ángel Cacique Pérez** |
| **Dip. Héctor Karim Carvallo Delfín** | **Dip. Flora Martha Angón Paz** |

**Dip. José Vicente Coss Tirado**
**Diop. Pablo Bedolla López**
**Dip. Pablo Dávila Delgado**
**Dip. Edgar Castillo Martínez**
**Dip. Alejandra Gurza Lorandi**
**Dip. Gregorio Escamilla Godínez**
**Dip. Oscar Jiménez Rayón**
**Dip. Marco Antonio Gutiérrez Romero**
**Dip. Vicente Martínez Alcántara**
**Dip. José Sergio Manzur Quiroga**
**Dip. Francisco Osorno Soberón**
**Dip. Fernando Fernández García**
**Dip. David Sánchez Isidoro**
**Dip. Gerardo Xavier Hernández Tapia**
**Dip. Darío Zacarías Capuchino**
**Dip. Marcos Márquez Mercado**
**Dip. Bernardo Olvera Enciso**
**Dip. Alejandro Olivares Monterrubio**
**Dip. Cristina Ruiz Sandoval**
**Dip. Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza**
**Dip. Jacob Vázquez Castillo**
**Dip. Juan Manuel Trujillo Mondragón**
**Dip. Armando Reynoso Carrillo**
**Dip. José Isidro Moreno Árcega**
**Dip. Martín Sobreyra Peña**
**Dip. Fernando Zamora Morales**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA**

**Dip. Lucila Garfias Gutiérrez**
**Coordinadora del Grupo Parlamentario.**

**Dip. Eynar de los Cobos Carmona**
**Dip. Víctor Manuel González García**
**Dip. Luis Antonio González Roldán**
**Dip. Yolitzi Ramírez Trujillo**
**Dip. Antonio Hernández Lugo**

Es cuanto señor Presidente.

Toluca de Lerdo, México, a de de 2011.

**DECRETO NÚMERO**
**LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**DECRETA:**

**Artículo Único**.- Se expide la Ley de Educación del Estado de México en los siguientes términos:

**LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO**

**CAPÍTULO PRIMERO**
**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1**.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de México y tienen como objeto regular la educación que imparten el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en términos de los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley, el Estado tomará en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo de la entidad.
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el párrafo décimo del artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.

**Artículo 2.-** Son sujetos de las disposiciones de esta Ley:

I. La Autoridad Educativa Estatal;

II. Las instituciones de educación pública en cualquiera de sus tipos, niveles, modalidades y vertientes a cargo del Estado;

III. Los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal que presten servicios educativos;

IV. Las instituciones de los particulares con

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Autoridad Educativa Estatal;

V. Los particulares que presten servicios educativos para los que no se requiera autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, conforme a los artículos 59 de la Ley General de Educación y 117 de esta Ley;

VI. Los ayuntamientos;

VII. Los educadores y educandos;

VIII. Quienes ejercen la patria potestad o la tutela; y

IX. Las asociaciones de padres de familia.

**Artículo 3.-** La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, corresponde a las Autoridades Estatal y Municipales, en los términos que la misma establece.

**Artículo 4**.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán la Ley General de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

**Artículo 5**.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridad Educativa Federal, a la Secretaría de Educación Pública;
II. Ley General, a la Ley General de Educación;

III. Estado, al Estado de México;

IV. Ejecutivo, al Poder Ejecutivo del Estado de México;

V. Secretaría, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México;

VI. Autoridad Educativa Estatal, al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y sus organismos descentralizados en el ámbito de su competencia;

VII. Sistema Educativo, al Sistema Educativo Estatal;

VIII. Municipio, a los municipios del Estado de México;

IX. Ayuntamiento, al órgano de Gobierno Municipal;

X. Autoridad Educativa Municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio;

XI. Instituciones de educación pública, a los centros escolares en cualquiera de sus tipos, niveles, modalidades y vertientes, dependientes de la Autoridad Educativa Estatal;

XII. Organismos Descentralizados, a las instituciones que prestan servicios educativos y que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios;

XIII. Maestro o educador, al profesional docente al servicio de la educación en el Estado;

XIV. Educando, al alumno o estudiante del Sistema Educativo; y

XV. Comunidad educativa, al conjunto de personas integrado por los padres de familia o tutores, los directivos, los maestros y los alumnos de cada institución educativa.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO

### SECCIÓN PRIMERA
### DEL DERECHO

**Artículo 6**.- En el Estado de México, todas las personas tienen derecho a recibir educación

y, por lo tanto, las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

**Artículo 7**.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que la población pueda cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, ofrecerá la educación media superior de conformidad con lo que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación.

Además, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y la superior- apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y en la concurrencia prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General.

**SECCIÓN SEGUNDA**
**DE LOS PRINCIPIOS**

**Artículo 8**.- La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, garantizará la libertad de creencias y se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

**Artículo 9**.- La educación que el Estado imparta será gratuita; las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

**Artículo 10**.- La educación que el Estado imparta promoverá la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social en un entorno que fomente la libertad y la democracia.

**Artículo 11**.- La educación que el Estado imparta será equitativa, por lo que las Autoridades Educativas tomarán medidas tendientes a generar condiciones que permitan el ejercicio pleno de este derecho para lograr una efectiva igualdad en oportunidades de acceso, permanencia y conclusión de los diversos niveles que integran el Sistema Educativo.

La educación se ofrecerá en igualdad de condiciones y circunstancias a las mujeres y a los hombres sin discriminación alguna de raza, edad, religión, estado civil, orientación sexual, ideología, grupo social, lengua, discapacidad, forma de vida y cualquiera otra forma de discriminación.

**Artículo 12**.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las Autoridades Educativas Estatal y Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atender de manera preferente a las escuelas ubicadas en localidades y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja;

II. Desarrollar programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades y regiones con mayor rezago educativo; para propiciar su arraigo en estas comunidades, así como para fomentar y generar las condiciones para su capacitación, actualización y superación profesional.

III. Promover la prestación de servicios educativos que apoyen en forma permanente el aprendizaje y el aprovechamiento de los educandos;

IV. Prestar los servicios educativos necesarios para que quienes se encuentren en condiciones de rezago concluyan su educación básica; otorgándoles facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso, particularmente a las mujeres;

V. Otorgar apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos;

VI. Desarrollar programas encaminados a mejorar el aprovechamiento escolar de los educandos, especialmente de aquéllos con mayor retraso;

VII. Promover la creación de servicios de educación media superior y superior en aquellas comunidades cuya ubicación geográfica facilite el acceso de los educandos;

VIII. Fortalecer la educación abierta y a distancia como opciones educativas;

IX. Promover para los educandos programas de becas y apoyos económicos con perspectiva de género;

X. Entregar reconocimientos a los particulares, instituciones, asociaciones y organizaciones civiles que contribuyan al mejoramiento de la educación pública, a la igualdad de oportunidades de acceso a la educación y al abatimiento del rezago educativo;

XI. Promover, con la participación de la sociedad, programas asistenciales, de ayuda alimenticia, campañas de salud y demás medidas tendientes a garantizar la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos;

XII. Diseñar modelos educativos complementarios que permitan diversificar la oferta educativa; y

XIII. Diseñar y aplicar programas especiales para apoyar a la población escolar afectada por contingencias naturales.

**SECCIÓN TERCERA**
**DEL CRITERIO Y LOS FINES**

**Artículo 13**.- La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, así como un factor determinante para la adquisición de conocimientos, para la formación de mujeres y hombres con sentido de solidaridad social.

**Artículo 14**.- La educación que brinde el Estado será de calidad y sustentada en valores; promoverá la identidad nacional y estatal; aportará a los educandos una visión global del conocimiento que consolide la cultura de la paz y el desarrollo sostenible; y contribuirá a la equidad, a la formación integral de la persona y a su preparación para la vida.

**Artículo 15**.- La educación que se preste en el Estado se centrará en el educando, propiciará el desarrollo integral y pertinente de sus facultades; contribuirá al fortalecimiento de sus competencias, habilidades intelectuales, actitudes y valores; y responderá a los requerimientos de una sociedad dinámica inserta en un mundo competitivo.

En los contenidos regionales de los programas de educación básica, se considerará el estudio de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones y demás características de la cultura del Estado de México.

El maestro, con el respaldo de las instituciones educativas, los padres de familia y la sociedad en general, será agente fundamental del proceso educativo y un profesional comprometido con la educación de calidad.

**Artículo 16**.- El criterio que orientará a la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra los grupos vulnerables, las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los

tres órdenes de gobierno.

I. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

II. Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; y;

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

**Artículo 17**.- La educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los establecidos en el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes fines:

I. Contribuir al desarrollo integral de la persona para que ejerza responsablemente su libertad y sus capacidades para alcanzar una convivencia armónica y comprometida con los valores de la democracia;

II. Difundir el conocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales; el conocimiento del Escudo y el Himno del Estado de México; así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del Estado y del país;

III. Impulsar, además del conocimiento del Estado y del país, la adquisición de una visión integral del mundo a fin de preparar a los educandos para enfrentar los retos personales y profesionales, regionales, nacionales e internacionales que plantea la globalización;

IV. Promover la enseñanza del inglés u otra lengua extranjera acorde a las necesidades sociales, culturales y económicas de los mexiquenses;

V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de gobierno y como sistema de vida que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento la sociedad, fortaleciendo nuestro sentido de pertenencia al Estado, a la Nación y al mundo;

VI. Conocer las instituciones del Estado y fomentar su respeto;

VII. Promover el valor de la justicia, la observancia de la ley y la igualdad de las personas ante ésta, así como el conocimiento y el respeto a los derechos humanos;

VIII. Promover la educación para la paz, la tolerancia y el respeto a la individualidad de las personas;

IX. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad crítica de observación, análisis y reflexión, vinculando la teoría con la práctica;

X. Fomentar el interés por la ciencia y las actitudes que estimulen la investigación científica y el desarrollo tecnológico;

XI. Promover el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, así como para el desarrollo de competencias en los educandos;

XII. Promover y fomentar la lectura;

XIII. Desarrollar una formación humanística que armonice con la ciencia y la tecnología;

XIV. Fortalecer las formas de expresión y comunicación lingüística, artística y matemática, mediante el uso de lenguajes y nuevas tecnologías;

XV. Promover la creatividad estimulando en los educandos la curiosidad, la imaginación y el pensamiento crítico e innovador;

XVI. Promover el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y del Estado, así como el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a conservarla. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español;

XVII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación y, particularmente, del Estado;

XVIII. Promover la equidad de género y contribuir a erradicar la discriminación;

XIX. Contribuir al desarrollo de una cultura de la salud, promoviendo la educación física, la práctica del deporte, los hábitos de higiene y de sana alimentación, así como la educación sexual y la prevención de adicciones;

XX. Difundir los derechos y deberes de los niños, los adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, y promover su respeto;

XXI. Propiciar la preservación de la familia como célula básica de la sociedad para desarrollar actitudes solidarias en los individuos, a fin de fomentar la salud, la planeación familiar, los valores fundamentales y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como el rechazo a los vicios y adicciones, difundiendo el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XXII. Fomentar actitudes positivas y solidarias para el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XXIII. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;

XXIV. Inculcar los principios y conceptos fundamentales para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible;

XXV. Fomentar la cultura del agua, para darle un uso racional y responsable;

XXVI. Impulsar una cultura de protección civil orientada a la prevención de desastres, así como al cuidado de la seguridad personal; y

XXVII. Fomentar la justicia, la libertad, la igualdad, la equidad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la honradez y los demás valores que favorezcan la convivencia social armónica.

**SECCIÓN CUARTA**
**DE LOS VALORES**

**Artículo 18**.- Los valores orientan el comportamiento humano y mejoran la relación

del individuo con los demás; son esenciales en la formación integral de la persona, ya que le permiten ejercer plenamente sus capacidades en un marco de responsabilidad con su comunidad.

**Artículo 19**.- La educación en valores promoverá las conductas y los comportamientos en el ámbito personal, familiar, social e institucional que favorezcan la armonía y la convivencia social.

**Artículo 20**- La Autoridad Educativa Estatal impulsará la educación en valores, promoviendo en todos los niveles del Sistema Educativo el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la cultura de la paz, la identidad cultural, el respeto a la diversidad, el estado de derecho, las formas democráticas de convivencia, y la prevención de todo tipo de violencia.

**Artículo 21**.- Los valores desarrollarán la responsabilidad social y cívica de los educandos, para fortalecer su compromiso con la comunidad y promover su participación en asuntos de interés general. Asimismo, fomentarán la solución pacífica de conflictos, en el marco de una forma de vida basada en la justicia y el derecho.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y SUS ATRIBUCIONES

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS

**Artículo 22**.- Para efectos de la presente Ley, son autoridades educativas, el Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Educación, los ayuntamientos y los organismos descentralizados estatales con funciones educativas.

**Artículo 23**.- Corresponde a las autoridades a que se refiere el artículo anterior, el ejercicio de las atribuciones aludidas en la Ley General, en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y las previstas en esta Ley.

### SECCIÓN SEGUNDA
### DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL

**Artículo 24**.- Son atribuciones exclusivas de la Autoridad Educativa Estatal las siguientes:

I. Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, la especial, así como la normal y demás para la formación de maestros;

II. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros;

III. Ajustar el calendario escolar para la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros, con respecto al calendario fijado por la Autoridad Educativa Federal, cuando ello resulte necesario para atender requerimientos específicos del Estado. Dicho calendario deberá contener doscientos días de clase para los educandos y será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno";

IV. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros, de conformidad con las disposiciones aplicables;

V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con la normatividad respectiva;

VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, la normal y demás para la formación de maestros;

VII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias; y

VIII. Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General, esta Ley y otras disposiciones

aplicables.

**Artículo 25**.- Son atribuciones concurrentes de la Autoridad Educativa Estatal con la Autoridad Educativa Federal las siguientes:

I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del artículo anterior, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

II. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos a los previstos en la fracción I del artículo 12 de la Ley General;

III. Otorgar equivalencias y revalidar estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo anterior, de acuerdo con los lineamientos generales que se expidan;

IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros que impartan los particulares;

V. Editar libros y producir materiales de apoyo didáctico, distintos a los señalados en la fracción III del artículo 12 de la Ley General;

VI. Prestar servicios de información a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema Educativo Nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística;

VII. Promover el desarrollo de la investigación que sustente la innovación y el mejoramiento de la calidad educativa;

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación humanística, científica y tecnológica;

IX. Fomentar y difundir actividades artísticas, culturales, de activación física y deportivas en todas sus manifestaciones;

X. Promover e impulsar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el libro;

XI. Vigilar el cumplimiento de la Ley General y de sus disposiciones reglamentarias; y

XII. Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General, esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 26**.- La Autoridad Educativa Estatal podrá celebrar convenios con la Autoridad Educativa Federal para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquellas atribuciones que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13 de la Ley General.

**Artículo 27.-** Además de las atribuciones a que se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, la Autoridad Educativa Estatal tendrá las siguientes:

I. Fortalecer la educación pública en el Estado;

II. Promover la educación indígena, bilingüe y bicultural, previendo lo necesario para ofrecer una adecuada preparación y capacitación a sus maestros;

III. Generar condiciones adecuadas para facilitar la incorporación de migrantes al Sistema Educativo;

IV. Impartir la educación especial en todos los niveles de educación básica, para que las personas con discapacidades transitorias o definitivas, o con capacidades y aptitudes sobresalientes, logren el desarrollo de su personalidad y se favorezca su integración social;

V. Establecer, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría General de

Gobierno, las bases conforme a las cuales se prestarán los servicios educativos a las personas que se encuentren internas en los centros de prevención y readaptación social del Estado y en las escuelas de reintegración social y los albergues temporales a que se refiere el artículo 224 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México;

VI. Publicar en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", los planes y programas de estudio que la Autoridad Educativa Federal determine, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley General;

VII. Establecer el calendario escolar para las instituciones de educación media superior de la Secretaría, el cual deberá considerar cuando menos doscientos días de clase y publicarse en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno";

VIII. Evaluar el Sistema Educativo, con énfasis en la calidad de los servicios que se ofrecen, así como en los niveles de logro en el aprendizaje e informar a la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre los resultados;

IX. Incluir en las políticas educativas los principios de equidad de género y no discriminación entre mujeres y hombres, y promover de manera especial el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

X. Diseñar y operar sistemas de créditos, equivalencias y portabilidad de estudios, que faciliten el tránsito de educandos de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;

XI. Revalidar los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional, de conformidad con los lineamientos generales que la Autoridad Educativa Federal expida;

XII. Formular e implementar programas específicos con el propósito de prevenir y, en su caso, atender conductas que puedan afectar la integridad física, moral o psicológica del educando y de la comunidad escolar;

XIII. Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica y alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura;

XIV. Procurar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, especialmente al servicio gratuito de internet en espacios educativos para el uso de los educandos;

XV. Prestar en forma coordinada con las Autoridades Educativas Federal y Municipales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, conforme a lo dispuesto, por la Ley General y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior;

XVI. Distribuir en forma oportuna, completa y eficiente los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios;

XVII. Publicar previo al inicio de cada ciclo escolar en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", la relación de las instituciones a las que se haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo, publicar la de aquéllas a las que se les revoque o retire la autorización o el reconocimiento respectivo;

XVIII. Incorporar en forma progresiva la enseñanza del inglés u otra lengua extranjera, en todos los tipos y niveles educativos;

XIX. Promover la transformación de las escuelas del sistema tradicional por turno, en escuelas de tiempo completo, de acuerdo con la capacitación del personal docente, las condiciones presupuestales y la infraestructura física educativa;

XX. Establecer y fomentar sistemas de educación a distancia, mediante el uso de tecnologías de información y comunicación;

XXI. Otorgar becas, así como estímulos a los educandos que lo requieran por su situación socioeconómica y desempeño académico, en términos de la reglamentación respectiva;

XXII. Promover el trámite de la cartilla de salud para la incorporación de los estudiantes a los servicios de atención médica;

XXIII. Proporcionar a los educandos de instituciones públicas de educación primaria un seguro escolar contra accidentes;

XXIV. Establecer programas para la activación física diaria de los educandos durante la jornada escolar;

XXV. Fomentar la educación ambiental, las bellas artes y el deporte;

XXVI. Fomentar y estimular en los educandos de todos los niveles educativos una cultura emprendedora, que favorezca el desarrollo de sus competencias para el diseño y realización de proyectos productivos e innovadores;

XXVII. Establecer estímulos y recompensas a los maestros de instituciones de educación pública, cuyos resultados en el trabajo con los educandos hayan sido sobresalientes;

XXVIII. Reconocer el desempeño de las instituciones de educación pública a partir del logro académico de sus educandos;

XXIX. Desarrollar programas y acciones que permitan una adecuada selección de aspirantes a ingresar a las instituciones formadoras de docentes en el Sistema Educativo, de conformidad con la normatividad aplicable;

XXX. Formar maestros para la educación indígena, la educación especial y la educación física;

XXXI. Impulsar servicios de capacitación y actualización pedagógica para maestros de educación media superior;

XXXII. Vigilar que las instituciones educativas cumplan con lo establecido en los preceptos legales aplicables para la prestación del servicio social;

XXXIII. Promover la participación de la sociedad en la educación, en términos de lo previsto por las disposiciones legales aplicables;

XXXIV. Promover la vinculación de las instituciones de educación media superior y superior con los sectores productivos;

XXXV. Promover acciones de capacitación y difusión, dirigidas a padres de familia o tutores, para que orienten adecuadamente la educación física y nutricional de sus hijos o pupilos, así como para fortalecer la integración familiar;

XXXVI. Promover la utilización de los medios de comunicación del Estado, para fomentar la educación y la cultura;

XXXVII. Regular los establecimientos que expenden alimentos en las instituciones de educación pública y particulares incorporadas, considerando que deben contribuir a una sana y adecuada nutrición de los educandos;

XXXVIII. Coordinar acciones con las instituciones del sector salud para revisar periódicamente el tipo y calidad de los alimentos y bebidas que se expenden en las instituciones de educación pública y las particulares incorporadas;

XXXIX. Participar con las Autoridades Educativas Federal y Municipales en la planeación y ejecución de programas y acciones para ampliar y consolidar la infraestructura física y el equipamiento de las instituciones de educación pública;

XL. Propiciar, en coordinación con las instituciones del Sector Salud y asistenciales, así como con los ayuntamientos, la incorporación a los servicios de educación básica de los menores de edad que se encuentren en situación vulnerable;

XLI. Velar por la seguridad de los escolares y de las instituciones de educación pública en coordinación con las autoridades competentes;

XLII. Impulsar el establecimiento de centros de desarrollo infantil, con apoyo de los municipios y, en su caso de los beneficiarios de estos servicios;

XLIII. Promover la educación para la salud y la educación sexual mediante la adecuada coordinación entre las dependencias del Estado, sus organismos descentralizados y los municipios;

XLIV. Celebrar acuerdos y convenios con la Autoridad Educativa Federal, los ayuntamientos y los particulares, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General y de la presente Ley;

XLV. Vigilar el cumplimiento de las políticas, planes y programas del sector, a través de revisiones y supervisiones que se realicen a las instituciones de educación pública y a las de los particulares, en todos los tipos, niveles, modalidades y vertientes;

XLVI. Dictar las medidas que se estimen necesarias para resolver y atender situaciones emergentes o imprevistas que pongan en riesgo a la comunidad escolar;

XLVII. Expedir los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia general en el sector educativo;

XLVIII. Realizar acciones encaminadas a mejorar permanentemente la condición de vida para el educador; y

XLIX. Las demás que establezcan la Ley General, esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**SECCIÓN TERCERA**
**DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL**

**Artículo 28**.- La Autoridad Educativa Municipal podrá:

I. Promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo, nivel y modalidad, con sujeción a las disposiciones aplicables al servicio educativo de que se trate, en coordinación con la Autoridad Educativa Estatal;

II. Celebrar convenios con la Autoridad Educativa Estatal para coordinar, unificar y realizar actividades educativas;

III. Establecer bibliotecas públicas;

IV. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales, de activación física y deportivas en todas sus manifestaciones;

V. Participar en la construcción de obras de infraestructura y en el equipamiento y mantenimiento de las instituciones de educación pública, en coordinación con la Autoridad Educativa Estatal;

VI. Coadyuvar en la vigilancia y seguridad de los planteles escolares;

VII. Coordinarse con las autoridades del sector salud para la revisión de las condiciones de higiene con que se expendan alimentos y bebidas en establecimientos cercanos a las instituciones educativas y emitir la normatividad correspondiente;

VIII. Promover la gestión de recursos para contribuir en la atención de las necesidades educativas, sin perjuicio de la participación directa de otras instancias;

IX. Destinar recursos para otorgar becas a

educandos;

X. Propiciar que los padres de familia o tutores inscriban a sus hijos o pupilos en edad escolar en el nivel educativo que corresponda y que asistan a la escuela;

XI. Promover y apoyar programas y actividades para abatir el rezago educativo;

XII. Aportar a la Autoridad Educativa Estatal, predios con la superficie suficiente para la edificación de nuevas escuelas;

XIII. Coadyuvar con la Autoridad Educativa Estatal a fin de que los particulares que ofrecen servicios educativos cuenten con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios correspondientes; y

XIV. Vigilar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de la presente Ley.

## CAPÍTULO CUARTO
## DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LA INTEGRACIÓN

Artículo 29.- Integran el Sistema Educativo:

I. Los educandos y los maestros;

II. Las autoridades educativas y su estructura administrativa;

III. Las instituciones educativas del Estado, de sus organismos descentralizados y de los municipios;

IV. Los establecimientos de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;

V. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía;

VI. El Consejo Estatal Técnico de la Educación;

VII. El Instituto de Evaluación Educativa del Estado de México;

VIII. Las Comisiones Estatales de Planeación y Programación de la Educación Media Superior y de Planeación de la Educación Superior; y

IX. Los planes, programas, métodos, libros de texto, materiales educativos y cualquier otro elemento que se utilice para la impartición de la educación.

### SECCIÓN SEGUNDA
### DE LA CALIDAD

**Artículo 30**.- La calidad en la educación implica un proceso de mejora continua del sistema educativo, a través de acciones corresponsables de las autoridades educativas, los educadores, los padres de familia y los diferentes sectores de la sociedad, que conduzcan al logro de los fines establecidos en esta Ley.

**Artículo 31**. La Autoridad Educativa Estatal orientará el Sistema Educativo con criterios de equidad, pertinencia, cobertura, eficacia, eficiencia y utilidad social.

**Artículo 32**. Para satisfacer las necesidades de la población y elevar la calidad educativa, las autoridades educativas promoverán acciones para:

I. Establecer y modernizar los centros educativos de todos los tipos, niveles y modalidades;

II. Dotar a los planteles educativos con instalaciones, personal y equipo necesarios y adecuados para atender satisfactoriamente la demanda educativa;

III. Construir, rehabilitar y mantener permanentemente los edificios escolares, así como las adaptaciones y modificaciones para la atención adecuada de los alumnos con necesidades educativas especiales;

IV. Establecer sistemas efectivos para supervisar la calidad del servicio educativo;

V. Capacitar a los educadores en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación;

VI. Establecer programas y realizar campañas de manera periódica para disminuir el rezago educativo;

VII. Realizar programas de formación, capacitación, actualización y profesionalización de los docentes y directivos;

VIII. Incentivar la investigación educativa;

IX. Crear y mantener una red de información educativa que enlace al Sistema Educativo Estatal, en los términos que establezca el reglamento respectivo;

X. Establecer mecanismos para que los centros escolares cuenten con el mobiliario, equipos y materiales educativos para estar acorde con los avances de la ciencia y la tecnología;

XI. Disponer de las herramientas tecnológicas que permitan al educando tener acceso a fuentes de información que fortalezcan sus aprendizajes; y

XII. Simplificar los procedimientos administrativos en la prestación de servicios educativos.

**SECCIÓN TERCERA**
**DE LA EVALUACIÓN**

**Artículo 33**.- La evaluación es un elemento integrador y orientador del proceso educativo que se traduce en una actividad sistemática y permanente, para obtener un juicio valorativo integral.

**Artículo 34**.- La Autoridad Educativa Estatal evaluará de manera continua al Sistema Educativo, sin perjuicio de la que realice la autoridad educativa federal en su respectivo ámbito de competencia. Los responsables de las instituciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán los resultados de las evaluaciones como base para decidir las acciones que habrán de realizarse para mejorar la calidad educativa.

**Artículo 35.-** Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, la Autoridad Educativa Estatal contará con el Instituto de Evaluación Educativa del Estado de México; órgano que tendrá por objeto planear, programar, dirigir y ejecutar las acciones específicas que sean necesarias para la evaluación del Sistema Educativo que contribuyan a la eficiencia, eficacia y calidad del proceso educativo.

**Artículo 36**.- Las instituciones educativas establecidas por el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, brindarán al Instituto todas las facilidades y colaboración para la evaluación del Sistema Educativo.

**Artículo 37**.- El Instituto dará a conocer a los maestros, educandos, padres de familia o tutores, y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realice y la información que permita medir el desarrollo y los avances de la educación.

**Artículo 38**.- La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

**SECCIÓN CUARTA**
**DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN**

**Artículo 39**.- El Estado, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirá con la Autoridad Educativa Federal al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.

Los recursos federales recibidos por el Estado

no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la Entidad.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
Artículo 40.- Conforme a las disposiciones legales aplicables, el Estado proveerá lo conducente para que los municipios reciban recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que, en términos del Artículo 15 de la Ley General, estén a su cargo.

**Artículo 41**.- El monto del financiamiento estatal deberá mantenerse creciente en términos reales y nunca inferior al monto autorizado en el ejercicio presupuestal previo.

**Artículo 42**.- Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares.

**Artículo 43**.- En el presupuesto del Estado se considerarán recursos para la atención de personas y grupos que se encuentren en rezago educativo.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LOS TIPOS, NIVELES, MODALIDADES Y VERTIENTES DE LA EDUCACIÓN

### SECCIÓN PRIMERA
### CLASIFICACIÓN GENERAL

**Artículo 44**.- La educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, comprende los tipos, niveles, modalidades y vertientes siguientes:

A) Tipos y niveles:

I. Tipo básico. Está compuesto por los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

II. Tipo medio superior. Comprende el nivel de bachillerato y los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes como antecedente; y

III. Tipo superior. Es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

B) Modalidades:

I. Escolarizada;

II. No escolarizada;

III. Mixta; y

IV. A distancia.

C) De las Vertientes:

I. En preescolar: indígena, especial y general;

II. En primaria: indígena, especial y general;

III. En secundaria: telesecundaria, técnica y general;

IV. En la media superior: bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller y profesional medio; y

V. En la superior: universitaria, normal, tecnológica y sus equivalentes.

**Artículo 45**.- En el Sistema Educativo quedan comprendidas la educación inicial, la educación especial y la educación para los adultos.

### SECCIÓN SEGUNDA
### DE LA EDUCACIÓN INICIAL

**Artículo 46.-** La educación inicial tiene

como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos, en los términos de la reglamentación correspondiente.

**Artículo 47**.- Compete a la Autoridad Educativa Estatal vigilar que los requisitos pedagógicos establecidos por la Autoridad Educativa Federal para el desarrollo de la educación inicial sean incluidos en los planes y programas que formulen y apliquen.

Artículo 48.- Los particulares que ofrezcan servicios de educación inicial deberán registrar sus establecimientos ante la Autoridad Educativa Estatal, en los términos de la normatividad aplicable.

**SECCIÓN TERCERA**
**DE LA EDUCACIÓN BÁSICA**

**Artículo 49.-** La educación básica, que se integra con los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, contribuirá al desarrollo armónico e integral del niño y del adolescente y tendrá por objeto la formación de hábitos, actitudes y competencias básicas que los preparen para el aprendizaje permanente, para el desenvolvimiento de sus potencialidades creativas y para la formación de una conciencia histórica y una actitud cívica sustentadas en valores universales.

La educación básica aportará a los educandos las competencias necesarias para el aprendizaje de las matemáticas, del español, de las ciencias, de un segundo idioma, el desarrollo de la educación física, artística y la utilización de las tecnologías de información y la comunicación.

**Artículo 50**.- Los planes y programas de estudio para la educación básica serán los que determine la Autoridad Educativa Federal.

**Artículo 51**.- La Autoridad Educativa Estatal propondrá a la Autoridad Educativa Federal la incorporación de contenidos regionales en programas y materiales educativos, con el propósito de que los educandos de los niveles básicos adquieran el conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres y las tradiciones que integran la riqueza cultural del Estado y fortalezcan su identidad.

**Artículo 52**.- Es responsabilidad de la Autoridad Educativa Estatal ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación básica, así como abatir el rezago educativo, por lo que, en coordinación con las Autoridades Educativas Federal y Municipales, realizará la planeación de las acciones necesarias para su adecuada atención.

**Artículo 53**.- Las Autoridades Educativas Estatal y Municipales realizarán acciones tendientes a procurar la permanencia del educando en el Sistema Educativo.

**Artículo 54.-** En los servicios educativos se tomarán las medidas necesarias para preservar la integridad física, psicológica y social de los educandos, a partir del respeto a su dignidad y autoestima.

**Artículo 55**.- Las escuelas a las que se refiere la fracción XII apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serán reguladas conforme a las disposiciones de la Ley General.

**APARTADO PRIMERO**
**DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA**

**Artículo 56**.- Compete a la Autoridad Educativa Estatal impartir la educación básica indígena.

**Artículo 57**.- Mediante el desarrollo de la educación intercultural indígena se favorecerá la alfabetización, la educación en sus distintos niveles y la capacitación productiva, buscando preservar sus tradiciones, costumbres, valores culturales, así como mejorar su calidad de vida, de acuerdo a lo que establece el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en

español.

**Artículo 58**.- La educación básica indígena deberá adaptarse a las características de cada uno de los pueblos originarios, promoviendo su participación para definir y evaluar las estrategias en la planificación de programas educativos de contenido regional.

**Artículo 59**.- Para favorecer el desarrollo de la educación indígena, la Autoridad Educativa Estatal promoverá:

I. La formación docente para los distintos niveles educativos; y
II. La investigación, difusión y respeto de la realidad sociocultural y etnolingüística de los pueblos indígenas.

**APARTADO SEGUNDO**
**DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL**

**Artículo 60**.- La educación especial está destinada a menores de edad con discapacidades transitorias o definitivas, o con capacidades y aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social.

**Artículo 61**.- Tratándose de menores de edad con discapacidades transitorias o definitivas, o con capacidades y aptitudes sobresalientes, la educación especial propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante estrategias y apoyos específicos. Para quienes no logren esa integración, se procurará la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva.

**Artículo 62**.- Los servicios de educación para menores de edad con discapacidades transitorias o definitivas, o con capacidades y aptitudes sobresalientes, deberán contar con las instalaciones y material didáctico adecuados a su condición, por lo que se llevarán a cabo las habilitaciones físicas correspondientes. La integración de los grupos se hará con el número de educandos que permita darles una atención especializada.

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como la capacitación a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a educandos con necesidades especiales.

**APARTADO TERCERO**
**DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS**

**Artículo 63**.- La educación para los adultos está dirigida a las personas de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria o secundaria y considera la alfabetización, la educación primaria y la secundaria; asimismo, comprende la capacitación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población.

**Artículo 64.-** La educación para los adultos complementa la educación escolar y propicia las condiciones necesarias para que este grupo de población pueda:

I. Acceder a los beneficios que proporciona;

II. Desarrollar competencias y ampliar sus oportunidades laborales; y

III. Mejorar su calidad de vida familiar y comunitaria.

**Artículo 65**.- La educación para los adultos podrá cursarse en los espacios que la Autoridad Educativa Estatal autorice para tal efecto y en aquellos que se designen en los convenios que celebre con otras instancias públicas, privadas y sociales. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

**APARTADO CUARTO**
**DE LA EDUCACIÓN FISICA Y ARTISTICA**

**Artículo 66**.- La educación física contribuirá al desarrollo armónico del educando y será obligatoria. Será promovida en asociación con el deporte; y atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones físicas.

Tratándose de educandos con discapacidades o

con necesidades educativas especiales, promoverá su integración mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

**Artículo 67**.- La educación física que se imparta en el Sistema Educativo Estatal, tendrá los siguientes propósitos:

I. Estimular la disciplina del ejercicio físico y la práctica del deporte;

II. Concientizar sobre la preservación de la salud;

III. Promover la participación de los educandos en competencias deportivas para fortalecer la integración social y la convivencia armónica; y

IV. Fomentar el conocimiento y la práctica de las diversas actividades deportivas.

**Artículo 68**.- La educación artística comprende la formación en distintas expresiones artísticas para los educandos, en la educación básica.

**Artículo 69**.- La Autoridad Educativa Estatal promoverá una educación artística que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de los educandos, que valore y proteja el patrimonio cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran el Estado de México.

**APARTADO QUINTO**
**DEL CONSEJO ESTATAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN**

**Artículo 70**.- La Autoridad Educativa Estatal contará con un Consejo Técnico de la Educación como órgano de consulta, que tendrá como funciones:

I. Realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño de espacios, mobiliario y equipos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios;

II. Hacer un seguimiento permanente, en el ámbito de su competencia, del funcionamiento y calidad de los servicios de educación básica así como de sus resultados, y proponer a las autoridades educativas, para su consideración, las medidas y reformas de carácter técnico que consideren pertinentes; y

III. Emitir opinión fundada respecto a planes y programas de estudio que proponga la autoridad competente, las actualizaciones de libros de texto, los libros y materiales didácticos y los contenidos educativos.

Su integración, organización y funcionamiento se regirán por el reglamento respectivo.

**SECCIÓN CUARTA**
**DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

**Artículo 71**.- La educación de tipo medio superior es la que se imparte después de la secundaria, y tiene por objeto propiciar la adquisición de las competencias necesarias para acceder a la educación superior o, en su caso, al sector productivo.

**Artículo 72**.- La educación media superior tiene como objetivos:

I. Articular los conocimientos y aprendizajes de los niveles previos con los de la enseñanza superior;

II. Consolidar e integrar el conjunto de conocimientos que permitan al estudiante desarrollar habilidades de investigación, comunicación y pensamiento crítico, así como aptitudes que enriquezcan su capacidad para tomar decisiones;

III. Promover en el educando, el desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales, para propiciar su formación integral;

IV. Formar hombres y mujeres que valoren el carácter pluricultural del Estado y contribuyan a fortalecer la identidad estatal; y

V. Fomentar en el estudiante la capacidad de convivir sanamente, promoviendo la libertad, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas.

**Artículo 73**.- Forman parte de la educación del tipo medio superior del Sistema Educativo, las escuelas preparatorias dependientes de la Autoridad Educativa Estatal y de sus organismos descentralizados; los bachilleratos de instituciones autónomas, las instituciones que prestan servicios de este nivel en la modalidad no escolarizada y las particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios.

**Artículo 74**.- La educación media superior permite a los alumnos:

I. Transitar a la educación superior en la vertiente de bachillerato general;

II. Incorporarse al mercado laboral en la vertiente de profesional medio; o

III. Transitar a la educación superior e incorporarse al mercado laboral en la vertiente de bachillerato tecnológico.

**Artículo 75**.- Los planes y programas de educación media superior que se apliquen en las instituciones de educación pública, de los organismos descentralizados del Estado, o de los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, serán aprobados por las Autoridades Educativas Federal y Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 76.-** Los organismos descentralizados someterán a la aprobación de sus órganos de gobierno, los planes y programas de estudio de educación media superior de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 77.-** Los planes y programas de estudio de educación media superior, deberán registrarse ante la Autoridad Educativa Estatal.

**Artículo 78.-** La Autoridad Educativa Estatal integrará una Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior como órgano consultivo en materia de planeación, programación, coordinación, fortalecimiento, desarrollo y mejoramiento de los servicios educativos del tipo medio superior. Su integración, organización y funcionamiento se establecerán en el reglamento correspondiente.

**SECCIÓN QUINTA**
**DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

**Artículo 79**.- La educación de tipo superior es la que se imparte después del bachillerato o sus equivalentes, y tiene por objeto preservar, generar, transmitir y difundir los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, a fin de formar a los profesionales requeridos para el desarrollo estatal y nacional.

**Artículo 80.-** Forman parte de la educación de tipo superior los organismos descentralizados que prestan servicios de este nivel, las escuelas normales y demás para la formación de maestros, así como las dependientes de organismos autónomos y las particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios.

**Artículo 81**.- La educación de tipo superior en el Sistema Educativo comprende:

I. El técnico superior universitario, que forma al estudiante para el ejercicio de una actividad técnica y constituye un nivel de alta calificación;

II. La licenciatura, que forma al estudiante para el ejercicio de una profesión, dotándolo de principios e instrumentos de carácter teórico y práctico;

III. La especialidad, que proporciona a los profesionales conocimientos específicos, tanto teóricos como prácticos, en un área determinada del conocimiento y es posterior a la licenciatura;

IV. La maestría, que es posterior a la licenciatura y busca ampliar los conocimientos de una disciplina, así como formar recursos humanos orientados a la docencia y a la investigación; y

V. El doctorado, que tiene como finalidad profundizar y especializar los conocimientos de los profesionales y formar investigadores de alto nivel que procuren la generación de nuevos conocimientos.

**Artículo 82**.- La educación superior que imparta la Autoridad Educativa Estatal directamente o a través de sus organismos descentralizados, tendrá las finalidades siguientes:

I. Formar profesionales para satisfacer las necesidades sociales, económicas, culturales y científicas del desarrollo estatal y nacional;

II. Impulsar la formación integral del individuo a través de planes y programas de estudio que permitan incorporar oportunamente los descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas para atender las transformaciones y necesidades de su entorno, propiciando en el educando un sentido crítico y propositivo;

III. Desarrollar en el estudiante las competencias que lo orienten, lo estimulen para el aprendizaje permanente y lo capaciten para el trabajo;

IV. Llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica que conduzca a la solución de los problemas prioritarios de la sociedad, así como difundir y extender sus beneficios; y

V. Investigar, extender y difundir la cultura, así como preservar los valores y las tradiciones estatales y nacionales.

**Artículo 83**.- Los planes y programas de educación superior que se apliquen en las instituciones de educación pública, de los organismos descentralizados del Estado, o de los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, serán los aprobados por las Autoridades Educativas Federal y Estatal en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 84.-** Los organismos descentralizados someterán a la aprobación de sus órganos de gobierno, los planes y programas de estudio de educación superior de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 85**.- Los planes y programas de estudio de educación superior deberán registrarse ante la Autoridad Educativa Estatal.

**Artículo 86.-** Los programas de investigación científica y desarrollo tecnológico que realicen los organismos descentralizados de educación superior del Estado, concurrirán al logro de los objetivos del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.

**Artículo 87**.- La Autoridad Educativa Estatal integrará una Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior como órgano consultivo en materia de planeación, programación, coordinación, fortalecimiento, desarrollo, extensión y mejoramiento de los servicios educativos en el tipo superior. Su integración, organización y funcionamiento se establecerán en el reglamento correspondiente.

**SECCIÓN SEXTA**
**DEL SERVICIO SOCIAL**

**Artículo 88**.- Se denomina servicio social al conjunto de actividades de carácter obligatorio y temporal que prestan los educandos y pasantes de las carreras técnicas y profesionales para coadyuvar

al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en el que aplicarán los conocimientos humanísticos, científicos y técnicos, adquiridos en su formación.

**Artículo 89**.- Los educandos y pasantes beneficiados directamente por los servicios educativos de carácter técnico o profesional, deberán prestar servicio social, en la forma y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. La prestación del servicio social será requisito para obtener el título.

**Artículo 90**.- La Autoridad Educativa Estatal podrá equiparar al servicio social con otras prácticas tales como las estadías y la asesoría en tareas relativas a la educación para los adultos, en términos de las disposiciones legales aplicables.

**SECCIÓN SÉPTIMA**
**DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA**

**Artículo 91**.- La educación a distancia es una modalidad educativa que ofrece alternativas de aprendizaje flexible, así como de acreditación y certificación de estudios.

**Artículo 92**.- La Autoridad Educativa Estatal fomentará la educación a distancia para ofertar el servicio educativo en sus diversos tipos y niveles, ampliar la cobertura y mejorar la calidad.

**SECCIÓN OCTAVA**
**DE LA VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

**Artículo 93**.- La Autoridad Educativa Estatal impulsará la vinculación de las instituciones de educación media superior y superior con los sectores productivos, a fin de dar pertinencia a la oferta educativa, incentivar una cultura emprendedora y fomentar oportunidades laborales para los egresados.

**Artículo 94**.- La Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal y la Autoridad Educativa Municipal, deberá:

I. Promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la planeación institucional e interinstitucional de la educación media superior con la superior, así como con los objetivos, lineamientos y prioridades que demande el desarrollo integral del Estado;

II. Auspiciar la celebración de convenios para el fomento y desarrollo de la educación media superior y superior;

III. Convocar la participación de los sectores público, privado y social para fortalecer la educación media superior y superior; y

IV. Realizar las demás acciones previstas en esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO SEXTO**
**DE LOS MAESTROS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL**

**SECCIÓN PRIMERA**
**DE LOS MAESTROS**

**Artículo 95**.- El maestro es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

**Artículo 96**.- Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en cada caso, señalen las autoridades competentes.

Se requerirá que quienes desempeñen esa labor cuenten con estudios concluidos del nivel licenciatura o su equivalente, y satisfagan los requisitos establecidos en las demás disposiciones legales aplicables.

**SECCIÓN SEGUNDA**
**DE LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN,**

**CAPACITACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE LOS MAESTROS**

**Artículo 97**.- La Autoridad Educativa Estatal constituirá el Sistema de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional de los Maestros, que formará parte del Sistema Nacional, con las siguientes finalidades:

I. La formación con nivel de licenciatura de los maestros que requiera el Sistema Educativo;

II. La nivelación profesional, para la acreditación con grado de licenciatura, de los educadores en servicio;

III. La actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio;

IV. La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades del Sistema Educativo; y

V. El desarrollo de la investigación educativa vinculándola con el mejoramiento de la práctica docente, el aprendizaje de los educandos y la difusión de la cultura pedagógica.

**Artículo 98.-** El Sistema de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros se integrará con las escuelas normales del Estado, las instituciones de formación y actualización docente dependientes de organismos descentralizados y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México.

**Artículo 99.-** La Autoridad Educativa Estatal atenderá la formación de maestros que requiera el Sistema Educativo, procurando que esta formación ofrezca las competencias necesarias para:

I. Promover, como principios de su acción y de sus relaciones con la comunidad, los valores de respeto y aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, democracia, solidaridad, tolerancia, honradez y apego a la verdad;

II. Fomentar el uso racional de los recursos naturales, y ser capaces de hacer que sus educandos aprendan a proteger el ambiente, individual y colectivamente;

III. Incorporar a sus programas de trabajo escolar, prácticas cotidianas de activación física y de orientación nutricional, propiciando la participación de los padres de familia o tutores;

IV. Estimular el desarrollo de habilidades intelectuales y el dominio de los contenidos de enseñanza que les permita planear, realizar y evaluar sus actividades docentes; y

V. Crear conciencia sobre el significado social del trabajo docente y el mejoramiento de la calidad educativa.

**Artículo 100**.- Los candidatos a ingresar como educandos a las escuelas normales y demás instituciones formadoras de maestros, estarán sujetos a un proceso de evaluación vocacional y académica, de conformidad con la normatividad respectiva.

**Artículo 101**.- La Autoridad Educativa Estatal determinará la matrícula de las escuelas normales y demás instituciones formadoras de maestros, conforme a las necesidades del Sistema Educativo.

**Artículo 102**.- Las escuelas del Sistema Educativo deberán colaborar con las instituciones formadoras de maestros, en el desarrollo de prácticas y proyectos educativos que coadyuven a la formación profesional de los futuros maestros.

**Artículo 103**.- La autoridad educativa desarrollará programas de capacitación y actualización de personal con funciones directivas y de supervisión

escolar, de conformidad con la normatividad aplicable.

**Artículo 104**.- La actualización, capacitación y superación profesional constituyen una responsabilidad de los maestros. La Autoridad Educativa Estatal dispondrá lo necesario para atenderla.

**SECCIÓN TERCERA**
**DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS**

**Artículo 105.**- Las Autoridades Educativas, formularán y ejecutarán, de acuerdo con sus presupuestos, programas que promuevan el otorgamiento de recompensas y estímulos encaminados a reconocer el trabajo y méritos de los maestros, considerando para ese objeto los resultados del trabajo académico con sus educandos.

**Artículo 106**.- La presea de "Honor Estado de México", se otorgará a los profesionales al servicio de la educación que se distingan en grado eminente por su eficiencia, constancia y méritos profesionales en el servicio de la educación pública en sus diversos tipos, modalidades y niveles educativos del Sistema Educativo. La presea se otorgará anualmente. Para su otorgamiento, la Secretaría contará con un Consejo Técnico, cuya integración y funcionamiento se regirá por la reglamentación correspondiente.

**CAPÍTULO SÉPTIMO**
**DE LOS PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN**

**Artículo 107**.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos, niveles, modalidades y vertientes.

**Artículo 108**.- La incorporación al Sistema Educativo se obtendrá mediante la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, siempre que los particulares cumplan con los requisitos previstos en la normatividad aplicable.

**Artículo 109**.- Para impartir la educación básica, los particulares deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa de la Autoridad Educativa Estatal.

**Artículo 110**.- Tratándose de estudios distintos a los mencionados en el artículo anterior, los particulares podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios, siempre que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad aplicable.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios.

**Artículo 111**.- Los particulares que soliciten la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán contar:

I. Con personal que acredite la preparación correspondiente para impartir el nivel de educación solicitado, de conformidad con lo establecido en la reglamentación y acuerdos respectivos;

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones pedagógicas de seguridad e higiene que la autoridad educativa determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento;

III. En el caso de educación distinta de la básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación, la Autoridad Educativa Estatal aprobará los planes y programas de estudio que considere procedentes; y

IV. Con los demás requisitos que señalen otros ordenamientos aplicables.

**Artículo 112**.- Una vez obtenida la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, el titular de los derechos de incorporación no podrá modificar las instalaciones o cambiar de domicilio sin la autorización de la Autoridad Educativa Estatal.

**Artículo 113**.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento

de validez oficial de estudios, deberán:

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables;

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado procedentes;

III. Mencionar en la documentación y publicidad la leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo;

IV. Proporcionar becas en los términos del reglamento respectivo;

V. Facilitar y colaborar en las actividades de supervisión y evaluación que las autoridades competentes ordenen o realicen a sus instalaciones y archivos; y

VI. Cumplir con los requisitos previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 114.-** Las Autoridades Educativas Estatal y Municipales verificarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, que los servicios educativos que presten los particulares cuenten con las licencias, autorizaciones o permisos, así como con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, que requieren para su funcionamiento. En su caso, impondrán las sanciones correspondientes, en términos de la legislación y normatividad aplicables.

**Artículo 115**.- En el caso de que el particular por cualquier motivo deje de prestar los servicios educativos autorizados o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la Autoridad Educativa Estatal dictará las medidas que estime pertinentes para proteger los intereses de los educandos.

**Artículo 116.-** En el caso de la educación inicial y básica deberán, además de contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir ese tipo de educación y con instalaciones que satisfagan las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad que la Autoridad Educativa Estatal determine, cumplir los requisitos a que alude la fracción VIII del artículo 12 de la Ley General, así como las medidas a que se refiere el artículo 42 del mismo ordenamiento, y facilitar la supervisión y vigilancia de las autoridades competentes.

**Artículo 117.-** Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios que no requieren de reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán obtener su registro ante la Autoridad Educativa Estatal, en términos de la reglamentación correspondiente y mencionarlo en su documentación y publicidad.

## CAPÍTULO OCTAVO
## DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LA EQUIVALENCIA Y LA REVALIDACIÓN

**Artículo 118**.- Compete en forma exclusiva a la Autoridad Educativa Estatal otorgar equivalencias y revalidación de estudios de educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, y de manera concurrente con la Autoridad Educativa Federal, respecto de estudios de educación media superior y superior conforme a las especificaciones siguientes:

I. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes con los realizados dentro del Sistema Educativo, por niveles educativos, grados escolares, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la normatividad respectiva;

II. Los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional podrán adquirir

validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean equiparables con los autorizados en el Estado;

III. La Autoridad Educativa Estatal otorgará equivalencias y revalidaciones únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudio que se impartan en el Estado;

IV. Las equivalencias y revalidaciones otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 63 de la Ley General;

V. Para el caso de la educación media superior, deberá considerarse el reconocimiento de la portabilidad de estudios y el libre tránsito de educandos entre subsistemas de este tipo, en los casos en que proceda; y

VI. La reglamentación respectiva señalará los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.

**SECCIÓN SEGUNDA**
**DE LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS**

**Artículo 119.-** Las Instituciones del Sistema Educativo expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas correspondientes, y éstos tendrán validez en toda la República, en términos de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General.

**Artículo 120.-** El certificado de estudios es el documento oficial mediante el cual la Autoridad Educativa Estatal reconoce que los educandos han concluido un nivel educativo determinado, en los tipos de educación básica, media superior y superior.

**Artículo 121**.- Para expedir el certificado de estudios, la instancia correspondiente revisará y, en su caso, cotejará con sus archivos, que el educando haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos de los planes y programas de estudio del nivel que corresponda.

**SECCIÓN TERCERA**
**DEL REGISTRO ESTATAL DE EDUCACIÓN**

**Artículo 122**.- La Autoridad Educativa Estatal, establecerá y operará el Registro Estatal de Educación que contendrá:

I. Planes y programas de educación básica;

II. Planes y programas de estudio de educación media superior y superior;

III. Instituciones educativas;

IV. Servicios educativos incorporados al Sistema Educativo;

V. Educandos y maestros;

VI. Certificados, diplomas de especialidad, títulos y cédulas profesionales de educación básica, media superior y superior;

VII. Cédulas de pasante y autorizaciones temporales para el ejercicio de una actividad profesional;

VIII. Colegios de profesionistas; y

IX. Certificaciones Profesionales, expedidas por los colegios o asociaciones de profesionistas.

**CAPITULO NOVENO**
**DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**Artículo 123**.- La Autoridad Educativa Estatal promoverá la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública y ampliar la cobertura de los servicios.

**Artículo 124.-** En cada institución pública de educación básica se promoverá el establecimiento de una asociación de padres de familia; en las

instituciones públicas de educación media superior podrán integrarse asociaciones similares.

**Artículo 125.**- La Autoridad Educativa Estatal promoverá el establecimiento de un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Este consejo se integrará con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de sus organizaciones sindicales, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, así como sectores sociales.

**Artículo 126.**- En cada municipio del Estado operará un consejo municipal de participación social en la educación, integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

**Artículo 127.**- En cada institución pública de educación básica operará un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como con miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia institución.

**Artículo 128**.- En las escuelas particulares de educación básica, incorporadas al Sistema Educativo, podrán operar asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social, cuya integración y funcionamiento serán análogos a lo dispuesto para las instituciones públicas de educación básica.

**Artículo 129**.- Las materias relacionadas con las asociaciones de padres de familia y los consejos de participación social serán desarrolladas por el reglamento respectivo, en términos de la Ley General y de los acuerdos dictados por la Autoridad Educativa Federal.

**Artículo 130**.- La Autoridad Educativa Estatal promoverá el uso pedagógico de los medios de comunicación, para lo cual procurará establecer convenios de coordinación y colaboración.

**Artículo 131**.- Los medios de comunicación social pertenecientes al Gobierno del Estado, proporcionarán tiempos y espacios para difundir y promover actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas y de impulso a la cultura de la transparencia, relacionadas con los planes y programas de estudio de educación básica, media superior y superior.

## CAPÍTULO DÉCIMO
## DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA

**Artículo 132**.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

II. Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solución;

III. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;

IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere el capítulo anterior;

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen;

VI. Conocer la capacidad profesional de la

planta docente así como el resultado de las evaluaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de la Ley General;

VII. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

VIII. Recibir un servicio educativo de calidad para sus hijos o pupilos;

IX. Conocer la aplicación de las aportaciones voluntarias que acuerden al inicio de cada ciclo escolar y de su administración; y

X. Pedir que se respete la lengua y cultura de sus hijos o pupilos, por parte de autoridades, profesores y estudiantes de la institución.

**Artículo 133**.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

II. Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos;

III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen;

IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios;

V. Inculcar que sus hijos o pupilos respeten a los educadores, así como las normas de convivencia del centro educativo; y

VI. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos.

## CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
## DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y DEL RECURSO ADMINISTRATIVO

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LAS INFRACCIONES

**Artículo 134**.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos, las siguientes:

I. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 113 de la presente ley;

II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

III. Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

IV. No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria;

V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;

VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;

VIII. Realizar o permitir se realice publicidad

dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos;

IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos;

X. Ocultar a los padres o tutores las conductas de los educandos que notoriamente deban ser de su conocimiento;

XI. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna;

XII. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella;

XIII. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XIV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XV. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos;

XVI. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;

XVII. Omitir en su documentación y publicidad la mención de que los servicios educativos que imparten no tienen reconocimiento de validez oficial;

XVIII. Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente;

XIX. Condicionar la inscripción al servicio educativo, las calificaciones o su permanencia en el mismo al pago de cuotas;

XX. Fomentar o permitir que se realice propaganda política en el plantel escolar; y

XXI. Atentar contra la integridad física, moral o psicológica de los educandos.

Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los directivos, maestros y trabajadores de instituciones educativas a cargo del Estado, sus municipios y organismos descentralizados, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas en la forma y términos que establece la legislación aplicable.

**SECCIÓN SEGUNDA**
**DE LAS SANCIONES**

Artículo 135.- Tratándose de sanciones aplicables a los particulares se estará a lo siguiente:

I. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica en que se cometa la infracción cuando se incurra en cualquiera de las infracciones a que se refiere el artículo anterior. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia;

II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente, cuando se incurra en las fracciones I, VI y VII del artículo anterior;

III. Cuando el infractor haya reincidido en las conductas señaladas en la fracciones II, III, IV, V, IX, X, XI y XII del artículo anterior procederá la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios;

IV. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten;

V. Clausura en el caso de incurrir en los supuestos previstos en las fracciones XVI, XVII y XVIII del artículo anterior, independiente de la multa señalada en la fracción primera de este artículo.

**Artículo 136.-** Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro de un plazo de quince días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.

La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás constancias que obren en el expediente.

**Artículo 137.-** Para determinar la sanción se considerarán las siguientes circunstancias:

I. La gravedad de la infracción en que se incurra;

II. Los antecedentes del infractor;

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;

IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso; y

V. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de obligaciones, si lo hubiere.

**Artículo 138**.- Para sustanciar el procedimiento mediante el cual la Autoridad Educativa competente aplique las sanciones a que se refiere este Capítulo, se observarán las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Las sanciones a que se refiere esta sección serán aplicadas por la unidad administrativa que haya expedido el acuerdo de incorporación correspondiente.

**Artículo 139.**- La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares, produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial. La Autoridad Educativa adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos.

**Artículo 140.-** En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél concluya.

**Artículo 141.**- La Autoridad Educativa Estatal dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás constancias que obren en el expediente.

**SECCIÓN TERCERA**
**DEL RECURSO ADMINISTRATIVO**

Artículo 142.- Contra los actos y resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades en la aplicación de la presente Ley, los afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de

inconformidad, ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".

**SEGUNDO**.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".

**TERCERO**.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto.

**CUARTO.-** El Ejecutivo del Estado expedirá los reglamentos necesarios para la aplicación de esta Ley.

**QUINTO.-** Las disposiciones reglamentarias vigentes, continuarán aplicándose en tanto no se opongan al presente Decreto.

**SEXTO**: Las autoridades competentes se obligan a respetar íntegramente los derechos de los maestros y trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de las relaciones laborales colectivas de sus organizaciones sindicales en los términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedir esta Ley.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los días del mes de de dos mil once.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias a los diputados Zamora y Hernández Lugo.

Se registra la iniciativa y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio.

En atención al punto número 8 del orden del día, se conceder el uso de la palabra al diputado Óscar Sánchez Juárez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien dará lectura a la iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que incorpora las directrices que en el ámbito de las penas y atenciones de víctimas, plantea la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

**DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ.** Gracias señor Presidente.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y del artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, el suscrito diputado Óscar Sánchez Juárez, a nombre de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, somete a la consideración del H. Congreso del Estado de México, la presente iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de México.

La iniciativa que hoy eleva a la distinguida estimación de todos ustedes, tiene por objeto el garantizar una real cooperación y coordinación en el combate al delito del secuestro en sus diversas modalidades: tradicional, express y virtual, mediante un adecuado esquema de relación intergubernamental que permita hacer frente con mayor eficacia al delito del secuestro en el Estado de México.

En el año 2009, se presentaron mil 521 secuestros, oficialmente registrados ante las autoridades, un 28% más que en el 2008. En las Zonas Metropolitanas del centro del país, la selección de la víctima, en un secuestro express, sigue definiéndose por el perfil de acceso a recurso que presenta la víctima, como su tipo de auto y su forma de vestir o de gastar. En la Zona Metropolitana del Valle de México se continúa con el secuestro express, utilizando de dos a tres plagiarios con armas cortas por medio de taxis y coches particulares, en esta zona se cometen en promedio 677 secuestros express cada 24 horas, la víctima es privada durante un lapso de tiempo que

va de las 6 a las 14 horas y el botín por cada caso, en promedio, suma los 6 mil pesos.

Los taxis son empleados en esta modalidad en un 85% de los casos, 10% ocurren agravios de peatones y transeúntes, y el 5% restante interviene un vehículo particular. Algunas bandas llegan a realizar hasta seis secuestros en un día y resulta uno de los delitos más complejos de atacar, ya que por una parte, la gran mayoría de las víctimas no presenta ningún tipo de denuncia y al no existir negociación con terceras personas, el único testigo es la propia víctima.

La extorsión telefónica continúa a la alza, se presentan nuevas modalidades de extorsión psicológicas, donde falsamente se engaña a las víctimas. Esta eventualidad se acrecienta en las comunidades donde existe un mayor índice de violencia, publicitada por acciones de narcotráfico, principalmente, haciendo este efecto a la población más susceptible al chantaje. La mayoría de las llamadas por falsas extorsiones continúan, siendo, principalmente, desde los centros penitenciarios.

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de garantizar una real cooperación y coordinación en el combate al delito del secuestro en sus diversas modalidades, tradicional, express y virtual, mediante un adecuado esquema de relaciones intergubernamentales que permitan hacer frente con mayor eficacia al delito de secuestro en el Estado de México, adjunto el proyecto de decreto respectivo para que se apruebe en sus términos.

**ARTÍCULO PRIMERO**. Se reforman los artículos 259, 260, 261 y 266; y la denominación del capítulo sexto, se adicionan los artículos 259 Bis, 259 Ter, 259 Quater, 260 Bis, 261 Bis, 261 Ter y 261 Quater; y se deroga el Capítulo Tercero, todos del Código Penal del Estado de México.

**ARTÍCULO SEGUND**O. Se reforma la denominación del capítulo tercero del título cuarto; la fracción VI del artículo 148 y el segundo párrafo de la fracción IX de artículo 153 y se adicionan los artículos 131 Bis y 151 Bis, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de México.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**SEGUNDO**. Quedan sin efecto las disposiciones que a la entrada en vigor del presente Decreto contravengan las disposiciones del mismo.

Palacio del Poder Legislativo, Toluca de Lerdo, Estado de México, a los diez días del mes de marzo de dos mil once.

Es cuanto señor Presidente.

**QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO PARA INCORPORAR LAS DIRECTRICES QUE PLANTEA LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ A NOMBRE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PAN.**

Honorable Asamblea:

El suscrito, Diputado Local de la LVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del Artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y del Artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; somete a la consideración del Honorable Congreso del Estado de México, la presente iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el Estado de México el fenómeno del secuestro, el debilitamiento del estado d derecho y la actuación impune de las bandas criminales han provocado que la sociedad mexiquense exija se atienda de manera inmediata este flagelo. Exigencia que ha llevado a nuestros gobiernos locales a actuar de manera reactiva y desorganizada ante este problema; por lo que los resultados que hasta hoy hemos entregado a los mexiquenses reflejan un total fracaso; ya que el secuestro sigue en aumento y cada vez con mayor crueldad se afecta a más sectores de la población. La sociedad mexiquense que aspirar a un desarrollo armónico con garantías

mínimas para sus ciudadanos, se siente amenazado por este lastre y en la actualidad ya no está dispuesta a seguir aguantando y permitiendo esta situación; por ello, demanda acciones efectivas que lleven a extirpar de raíz este mal social.

En este contexto de inseguridad pública, el secuestro es uno de los delitos más crueles y devastadores; las secuelas sicológicas que padece la víctima y sus familiares son graves y permanentes; en general entre la sociedad la noticia de un secuestro provoca zozobra y miedo a este delito; paralelamente ahuyenta inversionistas y espanta a potenciales inversiones. El secuestro como negocio delictivo se ha convertido en altamente rentable, pero simultáneamente, su rechazo ha aumentado e incluso ha generado la conformación de grupos especiales antisecuestros y de organizaciones no gubernamentales que luchan por su combate.

Recordemos que el delito de secuestro se desarrolla perfectamente: cuando impera el desorden, cuando son rebasadas o se involucran las autoridades con las bandas criminales, y cuando los centros de rehabilitación se degeneran y se convierten en Universidades del Crimen.

El delito de secuestro, se define al acto donde se priva de la libertad a una persona y se pide a cambio de su libertad una condición o una recompensa en dinero o en especie. Este delito se hace presente en tres modalidades, que se pueden definir como:

1. Secuestro Tradicional. Es aquel mediante el cual se retiene y oculta a una persona con el propósito de exigir por su libertad algún provecho, cualquier utilidad o para que se haga u omita algo o con fines económicos, publicitarios o de carácter político. Este tipo de secuestro se da cuando los delincuentes exigen una suma de dinero por la liberación de su víctima y existe negociación con los familiares o personas cercanas a la víctima en ese proceso, se da en dos tipos:

- Bandas del crimen organizado dedicadas exclusivamente a ese delito y operan principalmente en el centro del país.
- Narco secuestro. Operado por grupos criminales con nexos al crimen organizado del narcotráfico. Actualmente operan en todo el país.

2. Secuestro Exprés. Se da cuando se retiene a una o más personas por un período corto de tiempo (unas horas), durante el cual, los delincuentes exigen sumas pequeñas de dinero a los familiares de las víctimas para su liberación o a la propia víctima; es decir cuando los delincuentes retienen a la víctima y la someten a sacar dinero de cajeros automáticos o electrónicos. También le pueden robar pertenencias de valor y dejarla luego abandonada en algún sitio. Existen casos donde a este secuestro se suma el llevar a la víctima no sólo a los cajeros automáticos sino también a cobrar cheques o a ir a tiendas a comprar artículos de valor. Operan principalmente en el centro del país o grandes metrópolis.

3. Secuestro Virtual. Es aquel relacionado con lo que ahora conocemos como extorsión, se basa en que el delincuente aleatoriamente marca un número telefónico y a la persona que contesta le habla la voz, por lo general de un menor, diciendo mamá o papá dependiendo, y la víctima al escuchar esa voz cae fácilmente diciendo el nombre de su hijo o hija, con lo cual el delincuente comienza la extorsión; es decir, es la extorsión de un falso secuestro realizada por bandas criminales llevadas a cabo, principalmente desde centros penitenciarios. Opera en todo el país, vía telefónica.

Antecedentes del Secuestro.

Durante las décadas de 1960 y 1970, fueron los grupos guerrilleros los que secuestraron a figuras políticas y empresariales con propósitos tanto políticos como económicos. Durante los años 80´s la Dirección Federal de Seguridad, del Servicio Secreto del DF, cambio a la tortura como medio de extorsión contra familiares de personas que secuestraban. En los años 90´s se dio la modalidad de plagios de larga duración y donde los rescates implicaban montos sin precedentes.

Durante la primera década del siglo XXI, el secuestro es combinado con “los levantones” por parte del narcotráfico, que gozan de alta protección policiaca, con grupos que antes eran antisecuestro y que hoy son secuestradores; en fin, a un esquema de delincuencia organizada, pero de grupos independientes que no le reportan a una sola organización o a una persona en particular, y que cohabitan en las mismas regiones geográficas. Estos grupos tienen fines y objetivos primordialmente económicos; usualmente buscan obtener ganancias con estas actividades ilícitas, actuando por lo general con células establecidas

en una o varias entidades federativas, detectándose incluso que muchas se dirigen desde el interior de centros de reclusión.

Las cifras del secuestro

Durante el año 2007 se cometieron 6,500 secuestros en sus tres modalidades (denunciados y no denunciados ante las autoridades), lo que equivaldría a poco más de 17 secuestros al día en el país.

En el año 2009, se presentaron mil 521 secuestros oficialmente registrados ante las autoridades; un 28 % más que en 2008.

En las zonas metropolitas del centro del país, la selección de la víctima en un secuestro exprés, sigue definiéndose por el perfil de acceso a recursos que presenta la víctima, como: su tipo de automóvil y su forma de vestir o gastar. En la Zona Metropolitana del Valle de México, se continúa con el secuestro exprés utilizando de 2 a 3 plagiarios con armas cortas por medio de taxis y coches particulares. En esta zona, se cometen en promedio 677 secuestros exprés cada 24 horas. La víctima es privada durante un lapso de tiempo que va de 6 a 14 horas y el botín por caso llega a los 6 mil pesos. Los taxis son empleados en esta modalidad en el 85% de los casos 10% ocurre en agravio de peatones sin intervención de vehículos y el 5% restante, interviene un auto particular. Algunas bandas llegan a realizar hasta 6 secuestros en un día y resulta uno de los delitos más complejos de atacar ya que por una parte la gran mayoría de las víctimas no presenta denuncia y al no existir negociación con terceras personas, el único testigo es la propia víctima.

El terrorismo por extorsión telefónica continúa al alza, se presentan nuevas modalidades de extorsión psicológica donde falsamente se engaña a las víctimas. Esta eventualidad se acrecienta en comunidades donde existe una mayor violencia publicitada por acciones del narcotráfico, haciendo este efecto en la población más susceptible al chantaje; la mayoría de las llamadas por falsas extorsiones continúan siendo, principalmente desde centros penitenciarios.

Por lo anteriormente expuesto; y con el fin de garantizar una real cooperación y coordinación en el combate al delito de secuestro en sus diversas modalidades (tradicional, exprés y virtual), mediante un adecuado esquema de Relaciones Intergubernamentales, que permita hacer frente con mayor eficacia al delito de secuestro en el Estado de México, nos permitimos poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente:

Iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de México.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 259, 260, 261, 266 y la denominación del capítulo VI; se adicionan los artículos 259 Bis, 259 Ter, 259 Quater, 260 Bis, 261 Bis, 261 Ter y 261 Quater, y se deroga el capítulo III; todos del Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue:

**CAPITULO II**
**SECUESTRO**

**Artículo 259.-** Al que por cualquier medio prive a otro de la libertad se le aplicarán:

I. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:

a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;

b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera;

c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o

d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.

**Artículo 259** Bis. Las penas a que se refiere el artículo 259 del presente Código se agravarán:

I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;

b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

c) Que se realice con violencia;

d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra;

e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;

II. De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;

b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;

c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en la fracción III del artículo 237 y las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 238 del presente Código;

d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;

e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

**Artículo 259 Ter.** Si la víctima de los delitos de secuestro previstos en el presente Código es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa.

**Artículo 259 Quater**. Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 259 de este Código y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la víctima sea rescatada con vida.

La pena señalada en el párrafo primero de este artículo se aplicará a aquél que habiendo participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hecho o, ya cometido, antes de que se libere a la víctima, proporcione, los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima.

No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere

causado alguna lesión de las previstas en la fracción III del artículo 237 y las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 238 del presente Código, la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

En caso de que espontáneamente se libere a la víctima del secuestro dentro de los primeros diez días, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 259 del presente Código, y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.

**Artículo 260**. Se impondrá pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con alguno de los propósitos señalados en el artículo 259 del presente Código.

**Artículo 260 Bis.** Siendo el secuestro en cualquiera de sus modalidades, un delito de los que se persiguen de oficio, la autoridad tendrá en todos los casos la obligación de intervenir en la investigación de los hechos y persecución del inculpado, tan pronto como tenga conocimiento del ilícito y aun cuando el ofendido o sus familiares se opongan a ello o no presenten denuncia formal. A los servidores públicos que teniendo el deber de hacerlo, no procedan en los términos de esta disposición, se les impondrán de tres meses a tres años de prisión y de treinta a cien días multa.

**Artículo 261**. A quien en relación con las conductas sancionadas por este capítulo y fuera de las causas de exclusión del delito y de la responsabilidad penal, se le impondrán:

I. De dos a ocho de prisión y de doscientos a mil días multa, cuando:

a). Colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la información;

b). Actúe con fines de lucro, como asesor o intermediario de quienes representen o gestionen en favor de la víctima;

c). Aconseje no presentar la denuncia del secuestro cometido o bien no colaborar u obstruir la actuación de las autoridades;

d). Reciba cualquier pago con motivo de su intervención en el secuestro, y

e). Actúe como asesor o intermediario de quienes representen o gestionen en favor de la víctima y evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión de secuestro.

II. De dos a ocho años de prisión y de setecientos a mil quinientos días multa, al que:

a). Actúe como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la víctima;

b). Intimide a la víctima, a sus familiares, a sus representantes o gestores, durante o después del secuestro para que no colaboren con las autoridades competentes;

c). Después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 259 y 259 Bis del presente Código, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia;

d). Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 259 y 259 Bis de este Código, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la liberación de la víctima;

e). Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las

conductas previstas en los artículos 259 y 259 Bis de este Código, con conocimiento de esta circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe;

f). Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos a que se refiere este capítulo, y

g). Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 259 y 259 Bis de este Código, o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

III. De dos a ocho años de prisión y de doscientos a mil días multa, al servidor público que:

a). Divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial, relacionada con los delitos sancionados por este capítulo, salvo que se refiera a la información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, en este caso se aplicará lo dispuesto por el presente Código en esta materia, o

b). Revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la investigación o persecución de los delitos previstos en el presente capítulo.

Si el sujeto es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, la pena será de cuatro años seis meses a trece años de prisión, así como también, la multa y el tiempo de colocación de dispositivos de localización y vigilancia se incrementarán desde un tercio hasta dos terceras partes.

IV. De cuatro años seis meses a trece años de prisión y de doscientos a mil días multa al servidor público que teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o penitenciaria, se abstenga de:

a). Denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, o

b). Hacer saber de inmediato al Ministerio Público información, evidencias o cualquier otro dato relacionado, directa o indirectamente, con la preparación o comisión de las conductas previstas en este capítulo.

**Artículo 261 Bis**. A todo sentenciado por cualquiera de los delitos previstos en este capítulo que sea o hubiere sido servidor público de cualquiera de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública, se le aplicará como parte de la pena la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, desde un plazo igual al de la pena de prisión que se le imponga por el delito en que incurrió hasta la inhabilitación definitiva.

Cualquier otro servidor público quedará inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por un plazo igual al de la pena de prisión que se imponga. Dicha inhabilitación correrá a partir de que concluya la pena de prisión.

**Artículo 261 Ter**. Los sentenciados por los delitos a que se refiere el presente capítulo, no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena.

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al presente Código y la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que

concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:

I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión;

II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento;

III. El sentenciado sea primodelincuente;

IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;

V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado;

VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando;

VII. Cuente con fiador, y

VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos.

**Artículo 261** Quater. La autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido condenadas por conductas previstas en el presente ordenamiento queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

La misma medida podrá imponerse de manera cautelar tratándose de inculpados en libertad con las reservas de ley e indiciados durante el tiempo que dure la averiguación previa o el proceso.

**CAPÍTULO III**
Derogado

**CAPITULO VI**
**EXTORSION Y SECUESTRO VIRTUAL**

**Artículo 266**. Al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo un lucro o beneficio para sí o para otro, se le impondrán de uno a siete años de prisión y de cuarenta a doscientos días multa.

Al que simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el artículo 259 de este Código, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de setecientos a mil quinientos días multa.

La misma pena se impondrá al que amenace de cualquier modo a una persona con privarla de la libertad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con quien esté ligada por algún vínculo, con alguno de los propósitos señalados en el artículo 259 del presente Código.

Si en la comisión de este delito participa algún miembro de una corporación policíaca o servidor público, será considerado como delito grave y se impondrá desde un plazo igual al de la pena de prisión que amerite por el delito en que incurrió hasta la inhabilitación definitiva para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública.

Artículo Segundo. Se reforman la denominación del capítulo III, del Titulo Cuarto, la fracción VI del artículo 148 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 153, y se adicionan los artículos 131 Bis y 151 Bis; todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, para quedar como sigue:

**TÍTULO CUARTO**
**JUSTICIA RESTAURATIVA**
**CAPÍTULO III**
**ACCIÓN PARA OBTENER LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS**

Solicitud de oficio

**Artículo 131 Bis.** El ministerio público deberá restituir a las víctimas del delito de secuestro el goce de sus derechos en cuanto sea posible y solicitará la reparación del daño.

En su caso, la restitución de derechos y la reparación del daño se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin perjuicio de ejercer las acciones que correspondan en contra del sentenciado.

Dentro de la reparación del daño a las víctimas del delito de secuestro, se incluirán los gastos alimentarios, de transporte y hospedaje a cargo de ésta, con motivo del procedimiento penal.

En caso de que el producto, los instrumentos u objetos de los delitos de secuestro hayan desaparecido o no se localice, el Ministerio Público pedirá el embargo y, en su oportunidad, la aplicación respectiva de bienes del sentenciado cuyo valor equivalga a dicho producto, instrumentos u objetos a fin de que el juez ordene la reparación del daño correspondiente, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio.

Víctima
**Artículo 148**. …

Cuando con motivo del delito muera el ofendido, se considerarán víctimas:
I.…
…
VI. El Estado a través del área encargada de la atención a las víctimas del delito, en caso los casos en que haya cubierto el costo de los tratamientos curativos y psicoterapéuticos necesarios para las personas víctimas del delito.

Victimas especiales
Artículo 151 Bis. Las víctimas del delito de secuestro, tendrán los siguientes derechos:

I. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el inculpado;

II. Obtener la información que se requiera a las autoridades competentes o correspondientes;

III. Solicitar y recibir asesoría por parte de las autoridades competentes, la cual deberá ser proporcionada por un experto en la materia, quien informará sobre la situación del proceso y procedimientos, así como de los beneficios o apoyos a que se refieren en este Código;

IV. Solicitar ante la autoridad judicial competente, las medidas precautorias o cautelares procedentes en términos de la legislación aplicable, para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito de secuestro y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

V. Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma deberá sentenciar a la reparación del daño a favor de la víctima;

VI. Contar con apoyo permanente de un grupo interdisciplinario que las asesore y apoye en sus necesidades;

VII. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

VIII. Participar en careos a través de medios electrónicos;

IX. Estar asistidos por sus abogados, médicos y psicólogos durante las diligencias;

X. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de la diligencia en la que intervienen;

XI. Aportar pruebas durante el juicio;

XII. Conocer el paradero del autor o partícipes del delito del que fue víctima o testigo;

XIII. Ser notificado previamente de la libertad del autor o autores del delito del que fue víctima o testigo, y ser proveído de la protección correspondiente de proceder la misma;

XIV. Ser inmediatamente notificado y proveído de la protección correspondiente, en caso de fuga del autor o autores del delito del que fue víctima o testigo, y

XV. Podrán contar con la asistencia gratuita de un asesor en materia penal, que será designado por el Poder Judicial competente, con el fin de que le facilite; la promoción efectiva de sus derechos, la orientación para hacer efectivos sus derechos, la posibilidad efectiva de que puedan reclamar sus derechos mediante el ejercicio de las acciones que prevén las leyes ante los órganos de procuración y administración de justicia y la defensa jurídica para obtener las restituciones o reparaciones en el goce de los mismos.

Derechos del imputado

**Artículo 153**. El imputado, de manera enunciativa más no limitativa, tiene los siguientes derechos:

I. …

…..

IX. …

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que el delito sea el secuestro o que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

**Transitorios**

**Primero.** La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico "Gaceta del Gobierno".

**Segundo.** Quedan sin efecto las disposiciones que a la entrada en vigor del presente, contravenga las disposiciones del mismo.

Palacio del Poder Legislativo, Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 10 días del mes de marzo de 2011.

**Diputado Local: Oscar Sánchez Juarez**
**(Rúbrica).**

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias, señor diputado Sánchez Juárez.

Se registra la iniciativa y considerando lo establecido en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI; 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio.

De acuerdo con el punto número 9 del orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Mondragón, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dará lectura a la iniciativa de reforma y adiciones a diversos ordenamientos del Código Administrativo del Estado de México, en materia de prevención y erradicación de la violencia escolar, fenómeno conocido como "Bullying".

**DIP. MA. GUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ.** Gracias Presidente.

Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas, Presidente de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados.

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 51 fracción II; 53 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esta H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, en mí carácter de diputada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en conjunto con el Partido de la Revolución Democrática, presento la siguiente iniciativa de decreto que presenta reformas y adiciones a diversos ordenamientos del Código Administrativo del Estado de México, en materia de prevención y

erradicación de la violencia escolar, "bullying", conforme a la siguiente:

**EXPOSCIÓN DE MOTIVOS.**

La violencia escolar es conocida en México y diversos países como "bullying", palabra holandesa que significa "acoso". El "bullying" está presente en cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad, ni guarda relación con el sexo de generadores y víctimas, aunque los agresores son en su mayoría varones. Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las víctimas, el generador acosa a la víctima cuando está solo, en los baños, en los pasillos, en los comedores o en edificios escolares. Por esta razón los profesores muchas veces no se enteran de las situaciones de violencia escolar; sin embargo, no se trata de un simple empujón o comentario, es una situación que si no se detiene a tiempo puede provocar severos daños emocionales a la víctima.

Esta práctica se ve frecuente en los niveles de secundaria y preparatoria; por otro lado, el acceso de los infantes y jóvenes a la tecnología da como resultado el "cyber Bullying"; es decir, el acoso a través de Internet , específicamente, en páginas "web", "blogs" y correos electrónicos.

A la fecha se han identificado diversas clases de violencia escolar o "bullying", entre ellas:

1. Sexual, cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual;
2. Social, cuando se ignora, se aísla y se excluye a otro;
3. Verbal, que consiste en insultos y menosprecio para no poner o para poner en evidencia a la persona débil, a quien sufre desventaja física o económica;
4. Psicológico, en este caso existe una persecución, intimidación, chantaje, manipulación y amenazas al otro;
5. Físico, se da cuando hay golpes.

Las causas del "bullying" se presentan porque el niño generador que actúa de manera agresiva, sufre intimidaciones de algún tipo dentro de su propia familia, esta conducta se adquiere generalmente cuando el generador de violencia es o fue frecuentemente humillado por sus padres, otros adultos o bien, sufre de dolencia familiar.

Estas situaciones de no recibir un tratamiento psicológico oportuno, pueden generar un comportamiento agresivo en los menores y llevarlos a la violencia o a otro tipo de conductas antisociales, cuando sean adolescentes o incluso en su mayoría de edad.

Por otro lado, los nuevos modelos educativos a que son expuestos los niños, aunados a la ligereza con que se tratan y ponen en práctica los valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han influido para que este tipo de comportamientos se presente con mayor frecuencia.

En las escuelas a este factor se suma la falta de control físico, la ausencia de vigilancia y respeto ante la humillación, amenaza o la exclusión entre personal docente y alumnos; lo cual conlleva a propiciar que el Estado incida ya, desde este momento, con políticas públicas de atención sicológica, destinadas a que el generador detenga la violencia y la víctima reciba tratamiento.

En el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Entidad, ha reconocido sólo 50 casos de "bullying" atendidos entre 2010 y enero del presente año, en donde media docena contaba con agresiones en la que participaba todo el salón de clases o su gran mayoría, pero dicha cifra no refleja la realidad del fenómeno en nuestro Estado, dado que el hostigamiento escolar va en aumento. Por su parte, el Distrito Federal al aplicar acciones concretas a iniciativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Asamblea Capitalina, reveló 190 suicidios derivados de este tipo de agresiones.

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de garantizar una real cooperación y coordinación mediante un adecuado esquema de relaciones intergubernamentales que permita hacer frente con mayor eficacia a este problema social, me permito poner a la consideración de esta H. Asamblea la presente:

**INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN**

**Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, FENÓMENO CONOCIDO COMO "BULLYING".**

**DECRETO**

**ÚNICO**. Se reforma la fracción XVII del artículo 2.16 y se recorre el anterior XVII para pasar a ser XVIII; se reforma la fracción IV del artículo 2.21, se reforma el primer y segundo párrafos del numeral 3.6, se reforma la fracción XI del artículo 3.8, todos del Código Administrativo del Estado de México.

TRANSITORIOS

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

**SEGUNDO**. Las Secretarías de Educación y de Salud, las instituciones de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, darán a conocer las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia escolar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Es cuanto señor Presidente.

Toluca de Lerdo, México, Marzo 10 de 2011

**INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, FENÓMENO CONOCIDO COMO "BULLYING".**

**C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA**
**DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA**
**H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO**

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 51 fracción II, 53 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esta H. LVII Legislatura, por el digno conducto de ustedes, en mi carácter de diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento la siguiente iniciativa de decreto que presenta reformas y adiciones a diversos ordenamientos del Código Administrativo del Estado de México, en materia de prevención y erradicación de la violencia escolar "bullying", conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La violencia escolar es conocida en México y diversos países como "bullying", palabra holandesa que significa "acoso". El término "bullying" en el sentido de "acoso escolar" fue aplicado por Dan Olweus, quien implantó en la década de los setenta en Suecia un estudio a largo plazo, que culminaría con un completo programa anti-acoso para las escuelas de ese país.

El bullying está presente en cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad, ni guarda relación con el sexo de generadores y víctimas, aunque los agresores son predominantemente varones. Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las víctimas; el generador acosa a la víctima cuando está solo, en los baños, en los pasillos, en el comedor o en el patio. Por esta razón los profesores muchas veces ni se enteran de las situaciones de violencia escolar; sin embargo, no se trata de un simple empujón o comentario, es una situación que si no se detiene a tiempo, puede provocar severos daños emocionales a la víctima.

Esta práctica se vuelve frecuente en los niveles de secundaria y preparatoria públicas y privadas, en otras partes del mundo, incluyendo nuestro país y sin ser la excepción nuestra Entidad. Por otro lado el acceso de los infantes y jóvenes a la tecnología, da como resultado el "cyber bullying"; es decir, el acoso a través de internet específicamente en páginas "web", "blogs" y correos electrónicos.

A la fecha se han identificado diversas clases de violencia escolar o "bullying", entre ellas:

1. Sexual, cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual;
2. Social, cuando se ignora, se aísla y se excluye a otro;
3. Verbal, que consiste en insultos y menosprecio en público para poner en evidencia al débil, a quien sufre desventaja física o económica;
4. Psicológico, en este caso existe una persecución, intimidación, chantaje, manipulación y amenazas al otro;
5. Físico, se da cuando hay golpes, empujones o se organiza una paliza al acosado.

Las causas del "bullying" se presentan porque el niño generador, que actúa de manera agresiva,

sufre intimidaciones de algún tipo dentro de su propia familia, esta conducta se adquiere generalmente cuando el generador de violencia es o fue frecuentemente humillado por sus padres u otros adultos, o bien sufre de violencia familiar. Estas situaciones de no recibir un tratamiento psicológico oportuno, pueden generar un comportamiento agresivo en los menores y llevarlos a la violencia o a otro tipo de conductas anti-sociales cuando sean adolescentes o incluso ya en su mayoría de edad.

Por otro lado, los nuevos modelos educativos a que son expuestos los niños, aunados a la ligereza con que se tratan y ponen en práctica los valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han influido para que este tipo de comportamiento se presente con mayor frecuencia.

En la escuela a este factor se suma la falta de control físico, la ausencia de vigilancia y respeto ante la humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos; lo cual conlleva a propiciar que el Estado incida ya desde este momento, con políticas públicas de atención psicológica destinadas a que el generador detenga la violencia y la víctima reciba tratamiento.

El Distrito Federal fue punta de lanza con una serie de acciones concretas para prevenir el fenómeno; sin embargo, en Acción Nacional estamos convencidos de que la problemática se resolverá con acciones de fondo y permanentes que combatan el problema de raíz previniendo sus causas, informando a los educandos y demás comunidad sobre sus derechos y obligaciones, en coordinación estrecha entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, así como la participación activa de las instituciones de seguridad pública y la Procuraduría General de Justicia, cuando dicho acoso se convierta en delito.

En el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Entidad, ha reconocido sólo 50 casos de "bullying" atendidos, entre 2010 y enero del presente año, en donde media docena contaba con agresiones en la que participa todo el salón de clase o su gran mayoría, pero dicha cifra no refleja la realidad del fenómeno en el Estado de México, dado que el hostigamiento escolar va en aumento.

Por su parte el Distrito Federal al aplicar acciones concretas, a iniciativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Asamblea Capitalina, revelo 190 suicidios derivados de este tipo de agresiones.

En el Estado de México no hay cifras concretas sobre el problema, para el grueso de la población quedan tras de los muros escolares, es decir, no se denuncian y permanecen en el anonimato; situaciones que quedan al arbitrio y discrecionalidad de los docentes, directores o inspectores, como fue el caso de una alumna herida de bala por su compañero en la Escuela 117, Moisés Sáenz, ubicada en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, en donde el director ocultó el incidente cinco horas para negociar con los padres de familia antes de dar parte a las autoridades, tan sólo por citar un ejemplo. De hecho, el Senado de la República colocó el suicidio infantil y la violencia entre estudiantes de enseñanza básica, como uno de los temas que el Estado debe atender de manera prioritaria.

Según la Paido-psiquiatra Raquel González Burns del Centro de Atención Integral de Salud Mental de Estancia Breve, el 50.6% de los padres, ignoran que su hijo está siendo objeto de agresiones, y el 67.4% se enteró por sus hijos y no por los maestros, pues son éstos los últimos en enterarse de lo que pasa en los planteles escolares e incluso en las mismas aulas.

Tenemos la convicción de que el proyecto de decreto que anexo será de utilidad para prevenir y erradicar este mal que causa comportamientos anti-sociales o incluso puede inducir al suicidio, al tiempo que generará espacios educativos libres de violencia, protegerá la dignidad humana de los educandos y salvaguardará la paz de la comunidad educativa en general.

Por lo anteriormente expuesto; y con el fin de garantizar una real cooperación y coordinación mediante un adecuado esquema de Relaciones Intergubernamentales, que permita hacer frente con mayor eficacia a este problema social, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

**INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN**

**Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, FENÓMENO CONOCIDO COMO "BULLYING".**

**DECRETO:**

**ÚNICO.-** Se reforma la fracción XVII del artículo 2.16 y se recorre el anterior XVII para pasar a ser XVIII; se reforma la fracción IV del artículo 2.21; se reforma el primer y segundo párrafos del numeral 3.6; se reforma la fracción XI del artículo 3.8, todos del Código Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue:

"Artículo 2.16.- Los servicios de salud que presta el Estado en materia de salubridad general son:

XVII. Programas de salud mental para la prevención y erradicación de la violencia escolar;

XVIII. Los demás que se establezcan en la Ley General de Salud y otras disposiciones aplicables.

Artículo 2.21.- El sistema estatal de salud tiene los objetivos siguientes:

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; así como, coordinarse con la Secretaría de Educación para prestar ayuda psicológica a generadores y víctimas de violencia escolar;

Artículo 3.6.- El Estado está obligado a garantizar el derecho a la educación a través de la prestación de los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria, en el marco del federalismo y la concurrencia, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación; asimismo, deberá promover y apoyar la educación media superior y superior en todas sus modalidades.

El Estado garantizará a los educandos el acceso a la educación libre de violencia e implementará políticas públicas concretas para prevenir y erradicar la violencia escolar, que se entiende como la acción u omisión ejercida por alumnos, profesores, padres, personal educativo que lesionan física o emocionalmente al educando, profesor u otro miembro del personal educativo y que se produce dentro de las instalaciones educativas o bien, en los espacios en donde se desarrollan actividades extraescolares.

Artículo 3.8.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación:

XI. Garantizar y velar, en coordinación con los municipios, por la seguridad de los escolares y de los establecimientos educativos, generando políticas que prevengan y erradiquen la violencia escolar, en coordinación con la Secretaría de Salud, las Instituciones de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;"

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO**.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".

**SEGUNDO**.- Las Secretarías de Educación y de Salud, las instituciones de seguridad pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, darán a conocer las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia escolar, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS DÍAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias, diputada Mondragón.

Se registra la iniciativa y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI; 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio.

Para sustanciar el punto número10 del orden del día, puede hacer uso de la palabra la

diputada Gabriela Gamboa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, quien dará lectura a la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para prevenir y erradicar el feminicidio en el Estado de México.

**DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ. Gracias.**

**CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**

Honorable Asamblea con sustento con lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28 fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por mi conducto a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática presento la iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para prevenir y erradicar el feminicidio en el Estado de México al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Una de las obligaciones del Poder Legislativo es crear marcos legales necesarios y suficientes para que los bienes jurídicos tutelados de los gobernados estén a salvo.

Los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática señalamos que la protección penal de bienes obedece a las necesidades de garantizar socialmente los derechos esenciales de los hombres y de las mujeres, y en el ámbito de lo personal, de los que le son inherentes, así como aquellos que van adquiriendo en el ámbito de lo material, de su situación, de su cultura y costumbres. Por lo tanto, existen bienes jurídicos irrenunciables como lo es la vida y se da el caso de que el día de hoy, nuestros marcos legales, no han sido suficientes para garantizarla de una manera adecuada, como todos sabemos en el Estado de México, tiene la mayor incidencia delictiva en el país, la cual deriva en una lógica natural, ya que es en el que existen mayor concentración de habitantes.

Nuestra entidad, ocupó el cuarto lugar nacional en homicidios en el año 2010, según el secretariado ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 2 mil 361 personas fallecidas bajo este delito, esto quiere decir que 16 de cada 100 mil habitantes, mueren por esta causa en nuestra Entidad. Es alarmante la situación que estamos viviendo en nuestra entidad; pero más alarmante aún, que al desglosar esta estadística, cuando se analizan estos datos, nos damos cuenta que por género, nuestra Entidad ocupa el primer lugar nacional de homicidios de mujeres, hoy llamado feminicidio, resulta que de estas 2 mil 361 personas ultimadas en la entidad, 200 personas, casi el 10% de ellas fueron mujeres y lo más alarmante en que la gran mayoría de los casos, existen agravantes de abusos sobre ellas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el estudio más reciente disponible, sobre dolencia de género, arrojó que 61 de cada 100 mujeres casadas en el Estado de México, sufran algún tipo de evento violento, cuando la media nacional, era del 47% y se desprende de este que de 513 mil mujeres, el 30% del total de casadas, habían parecido violencia de extrema gravedad, a mano de su conyugue, como ser pateadas, amarradas o ahorcadas.

Además el número de mujeres asesinadas en los últimos 6 años, hasta noviembre del 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, sólo había conseguido que el Poder Judicial, condenara al autor material, en únicamente 145 casos, en tanto que otros 217, presuntos homicidas, siguen todavía bajo proceso penal.

Esta terrible situación que nos afecta a todos, no debe ser sujeto de botines políticos, es un tema que vincula a todas las fuerzas políticas de la entidad, con la sociedad y que no puede ser sujeto de divisiones por ningún motivo.

Permítanme compartirles una anécdota, platicando con un destacado político en el sur del

Estado, le pregunté sobre un caso de una activista política oposición a él y le preguntaba, me habían comentado que la habían golpeado, a lo que él me contestó, muy penosamente, que no había sido golpeada, que sólo la habían llevado jalándola de los cabellos.

Compañeros legisladores, legislar sobre el feminicidio, es legislar sobre el resultado fatal, debemos de establecer una cultura de prevención, sin dejar de lado, elevar las penas en caso de que se dé el supuesto, es necesario que el Estado establezca una promoción incesante sobre la prevención de la violencia contra la mujer. No podemos justificar los feminicidios, como estadística, ni una muerta más, no somos un sexo débil, todos los aquí presentes, reconocemos la importancia de la mujer, la equidad de género, es en relación a que nos sean otorgados los derechos y la igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo educativo, laboral, político y social. No es posible que seamos siendo sujetas de violencia por el color de nuestra piel, por la forma de vestir o caminar o por tratar de acceder a una oportunidad que por el simple hecho de ser personas nos pertenece. No tratemos al femenicidio como un tema que si se aumentan las penas y se crean fiscalías va a desaparecer, recordemos que el femenicidio muchas veces es antecedido por golpes, abusos sexuales y psicológicos, tortura y humillaciones a un ser humano.

Como gobierno debemos de promover una cultura de respeto e igualdad entre los géneros y castigar a los que no lo entiendan o no lo quieran entender. Como mujer, como madre y como legisladora, hago un llamado desde esta tribuna a los representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, para que juntos con el honorable Legislatura, tomemos acciones muy puntuales, para prevenir el resultado fatal o el llamado femenicidio.

La sociedad nos exige pronta solución a un problema que no se puede resolver de inmediato, pero si pueden ver que las acciones que se tomen, son preventivas, enérgicas, sólidas y que darán soluciones a este problema.

A un año y medio de tener el honor de ser su compañera, considero que en esta "LVII" Legislatura podemos hacer la diferencia, creo que cada uno de nosotros tenemos la capacidad necesaria para que desde la trinchera del Poder Legislativo, hagamos lo que es nuestra obligación y dotemos a los poderes ejecutivo y judicial, herramientas para que juntos podamos dar solución a este gravísimo problema.

Muchas gracias.

**INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL FEMINICIDIO EN EL ESTADO DE MÉXICO**

Toluca, Capital del Estado de México, Abril 29 de 2010

**CIUDADANOS**
**SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA DE LA**
**H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE**
**Y SOBERANO DE MÉXICO**

Honorable Asamblea:

Con sustento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por su digno conducto, como diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y de La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para prevenir y erradicar el feminicidio en el Estado de México, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Los homicidios dolosos de mujeres forman parte del catálogo de delitos que tienen una repercusión importante en el ámbito familiar y social en nuestro Estado. En nuestro país, es relativamente reciente el reconocimiento de que éstos ocurren bajo características muy particulares que se acunan desde la violencia social, laboral, económica, psicológica, física y sexual, circunstancias que fueron ocultadas por circunstancias de carácter político.

La violencia de género se muestra en su expresión

más cruel cuando con la finalidad de someter a una mujer, humillarla, castigarla o intimidarla, se producen lesiones que van de moderadas, hasta aquellas que pueden causarle la muerte.

El delito de homicidio se encuentra contemplado en todos los códigos penales del país, sin embargo, solo en 27 estados y en el propio Código Penal Federal se considera como homicidio calificado cuando se comente contra el o la cónyuge; en 21 y en el Código Penal Federal, cuando se comete contra la concubina o concubino, en 5 cuando se comete contra la pareja, aunque no se cumplan los requisitos del concubinato y, solo en cuatro Códigos Penales estatales, se hace el señalamiento expreso, "por motivos de género", cuando la víctima sea mujer, entre los que se encuentran Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Veracruz, mismos en los que se define el tipo penal de homicidio por motivos de género, cuando la víctima es mujer.

El feminicidio es la privación de la vida a una mujer por su condición de género, en donde el sujeto activo reúne condiciones o patrones culturales con tendencia a prácticas misóginas o de una ideología de desprecio y discriminación contra la mujer y que culmina en un crimen de odio.

Acción Nacional como partido político de corte humanista, sostiene que los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales; así lo declaró la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Viena, Austria, en 1993, que la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y, por tanto, deben ser eliminadas.

Congruentes con la visión humanista de nuestro instituto político con representación en esta H. LVII Legislatura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento, físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Así como aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra.

La comunidad jurídica local en México, como en el ámbito internacional, dejan de manifiesto que la violencia de género no es un fenómeno natural, sino que se incuba en la sociedad como producto de creencias y mitos ancestrales respecto a las mujeres, como el lastre del machismo, tan anclado en la idiosincrasia de los mexicanos. En la violencia de género, particularmente la que deriva en la muerte de una mujer, la mayoría de las veces las agresiones mortales provienen de parejas, parientes, novios, acompañantes, visitas, colegas, es decir, de personas en las que las propias mujeres habían depositado su confianza; otras más provienen de extraños o de grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, numerosos estudios muestran que el denominador común de estas muertes es una visión, una convicción, una creencia arraigada de que la mujer es un objeto que se usa y se desecha, que es una persona de menor valor y susceptible de ser castigada con infinita crueldad, situación que a la vista del avance democrático y al tenor de un punto de partida humanista, resulta retrogrado, aberrante e inaceptable.

En el feminicidio, se conjuntan una serie de elementos que lo disimula como el silencio, la omisión, la negligencia y la complicidad. Por eso es que cuando las autoridades encargadas de prevenir, sancionar y erradicar estos crímenes, no ofrecen garantías para la víctima no pierda la vida a manos de su agresor por el simple hecho de ser mujer. Cuando esto ocurre, se puede afirmar con toda certeza que ocurre violencia institucional.

Con gran preocupación, en el Estado de México se han identificado un número crecientes de homicidios cometidos en contra de las mujeres que, con características distintas relativas a la edad, la etnia, las relaciones de parentesco o a otras condiciones particulares, tienen en común relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que genera una situación de mayor vulnerabilidad y de limitación para las damas en el disfrute de sus derechos humanos, en especial, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y al debido proceso. Cabe destacar la lucha que sostuvo el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se desagregaran las

cifras de homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres, para evidenciar estas circunstancias, situaciones que por razones de imagen pública, el Gobierno Estatal había mantenido en lo oculto.

Ante estas circunstancias y en respuesta al imperativo profesional, legal y ético que tenemos como legisladores para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, ponemos a disposición esta Soberanía, la presente iniciativa de reforma y adición a diversos ordenamientos del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que ataje la impunidad en los ilícitos cometidos en contra de la mujer como las lesiones y el feminicidio.

La presente iniciativa se propone como un mecanismo que garantice a la mujer el acceso a la justicia y dará elementos para una investigación criminal con perspectiva de género, que atienda todos aquellos detalles que configuran el ciclo de la violencia, el perfil de la víctima y el victimario y la serie de elementos que se configuran en la relación violenta y que puede dar paso al feminicidio.

Si bien es cierto que, la teoría de los derechos humanos es conocida por muchos funcionarios, no menos verídico resulta que los instrumentos internacionales y las leyes nacionales y locales que protegen los derechos de las mujeres no son conocidos y decididamente usados en el ámbito de la procuración de justicia, por lo que esta reforma busca ser un impulso en el complejo camino para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La iniciativa que hoy someto a la estimación de la Asamblea, tiene por objeto tipificar y castigar los homicidios dolosos en contra de la mujer cuando en estos ocurran una o más de las causas siguientes: se ejecute por misoginia; existan actos previos de violencia familiar, dictaminados en sentencia por un Juez Familiar o en sentencia condenatoria por un Juez Penal por el delito de Lesiones; el activo lesiones de forma denigrante o humillante contra el sujeto pasivo; se cometan lesiones infamantes o en zonas genitales al sujeto pasivo; si media la intención o selección previa de realizar un delito sexual, independientemente de que el ilícito se consume o no, en concurso con el feminicidio; si el activo realizó el feminicidio por homofobia; si existen pruebas de que el sujeto pasivo se encontraba en estado de indefensión; sí el activo era novio, amigo o compañero de trabajo del sujeto pasivo, imponiendo una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa. Estas mismas a agravantes, operarán para el delito de lesiones, incrementando la penalidad que corresponda al hecho delictuoso hasta en un tercio.

La Procuraduría contará una Subprocuraduría Especializada en Delitos Dolosos Cometidos en Contra de la Mujer, que tendrá a su cargo las Fiscalías necesarias para el cumplimiento de sus fines. Se encargará de recibir noticias criminales, denuncias o querellas, en forma permanente e inmediata, generando protocolos especializados de investigación de los ilícitos, indagando el entorno social, los perfiles de personalidad y la conducta propiamente realizada, en cada hecho que tenga conocimiento.

En mérito de las consideraciones planteadas, someto a la estimación de la Asamblea la presente iniciativa para que, de estimarla conducente, se apruebe en sus términos, anexando el proyecto de decreto correspondiente.

"Por una patria ordenada y generosa"

**DIP. OSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ**

Presentante

**DECRETO No**

**LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**

**DECRETA**:

**PRIMERO**.- Se adiciona un artículo 242 bis al Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 238 bis.- Se incrementará en una tercera parte las penas impuestas al sujeto activo del delito de lesiones cuando ocurra una o más de las siguientes conductas:

I. Se ejecute con motivo de misoginia.

II. Existan actos previos de violencia familiar, dictaminados en sentencia por un Juez Familiar o en sentencia condenatoria por un Juez Penal por el delito de Lesiones.

III. El activo realice las lesiones de forma

denigrante o humillante contra el sujeto pasivo.
IV. Se cometan lesiones infamantes o en zonas genitales al sujeto pasivo.
V. Si media la intención o selección previa de realizar un delito sexual, independientemente de que el ilícito se consume o no.
VI. Si el activo realizó el delito por homofobia.
VII. Si existen pruebas de que el sujeto pasivo se encontraba en estado de indefensión.
VIII. Sí el activo era novio, amigo o compañero de trabajo del sujeto pasivo.

Artículo 242 bis.- Comete el delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer cuando ocurra una o más de las siguientes conductas:

I. Se ejecute con actos de odio o misoginia.
II. Existan actos previos de violencia familiar, dictaminados en sentencia por un Juez Familiar o en sentencia condenatoria por un Juez Penal por el delito de Lesiones.
III. El activo realice el feminicidio de forma denigrante o humillante contra el sujeto pasivo.
IV. Se haya cometido mediante lesiones infamantes o en zonas genitales al cuerpo del sujeto pasivo.
V. La intención o selección previa de realizar un delito sexual, independientemente de que el ilícito se consume o no.
VI. Si el activo realizó el delito por homofobia.
VII. Si existen pruebas de que el sujeto pasivo se encontraba en estado de indefensión.

Al responsable de feminicidio, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa, incrementándose en una cuarta parte las penas, sí el activo era cónyuge, concubino, novio, amigo o compañero de trabajo del sujeto pasivo.

**SEGUNDO**.- Se adiciona un artículo 32 bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 32 BIS**.- *La Procuraduría contará una Subprocuraduría Especializada en Delitos Dolosos Cometidos en Contra de la Mujer, que tendrá a su cargo las Fiscalías necesarias para el cumplimiento de sus fines. Se encargará de recibir noticias criminales, denuncias o querellas, en forma permanente e inmediata, generando protocolos especializados de investigación de los ilícitos, indagando el entorno social, los perfiles de personalidad y la conducta propiamente realizada, en cada hecho que tenga conocimiento.*

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO**.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**SEGUNDO**.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

"DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL ONCE."

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS**. Muchas gracias a la diputada Gamboa.

Se registra la iniciativa y considerando lo establecido en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y de Equidad y Género, para su estudio.
En observancia del punto número 11 del orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada Karina Labastida, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa de decreto por los cuales se crea la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México.

**DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO**. Muchas gracias Presidente, con su venia.

Honorable Asamblea, a nombre de la diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado y de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, someto a su elevada consideración, por tan digno conducto, iniciativa que contiene 3 proyectos de decreto, por los cuales se expide la Ley que crea y regula al Instituto de la Mujer del Estado de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En la normativa del Estado de México, si bien, se han alcanzado importantes cambios desde el punto de vista legislativo para lograr la igualdad y equidad para las mujeres, entre los que podemos citar, el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley; la inclusión de la violencia familiar, el fraude conyugal y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el catalogo de delitos. El establecimiento de procedimiento de violencia familiar en el Código de Procedimientos Civiles y otros mecanismos no menos importantes de protección de los derechos humanos de las mujeres, lo cierto es que a esa igualdad y equidad formal, requerimos acompañarla de acciones realmente efectivas, que involucren a todas las instituciones públicas y privadas de nuestra Entidad Federativa.

Y es que para las mujeres que constituimos más de la mitad de la población de nuestro Estado, existen desigualdades aún no superadas, que no permiten su incorporación efectiva en el desarrollo, como la pobreza, el analfabetismo, el desempleo, las diferencias sociales, desigual acceso a la educación, salud y vivienda, y el no reconocimiento del trabajo dentro del hogar, entre otras.

Uno de los asuntos que merece especial atención, que no se ha erradicado ni disminuido, y que limita el desarrollo integral de las mujeres, es el fenómeno social de la violencia que se ejerce en su contra, la que ocurre en mayor proporción dentro del ámbito comunitario y familiar.

Las mujeres del Estado de México, nos enfrentamos también a la violencia femenicida, basta recordar que somos la entidad federativa con el mayor número de homicidios dolosos de mujeres y que según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, han sufrido un alarmante aumento desde el año 2005.

Por ello, ante el contexto de violencia que padecemos las mexiquenses, resulta una tarea impostergable que establezcamos una nueva institucionalidad pública, con las competencias y capacidades necesarias para el establecimiento de políticas públicas a favor del desarrollo integral de la mujer.

Con la fortaleza para articular y dar seguimiento a las acciones interinstitucionales de la administración pública estatal y de los demás órdenes de gobierno, que tenga por objeto promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres; el ejercicio pleno de los derechos plenos de las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos público y privado, bajo el criterio de transversalidad en las políticas públicas y con un enfoque que permita identificar y valorar la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres, para generar un cambio mediante estrategias y líneas de acción que propicien la equidad social.

Esta iniciativa establece la creación del Instituto de la Mujer del Estado de México, como un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines que tendrá su domicilio legal en el Municipio de Toluca de Lerdo, con la posibilidad de establecer oficinas alternas en otros municipios de la entidad de acuerdo a sus posibilidades presupuestales.

Al Instituto de la Mujer del Estado de México, se le otorgarán facultades para promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en todos los

ámbitos, bajo el criterio de transversalidad en las políticas públicas.

En ese sentido, será el encargado de proponer al Ejecutivo del Estado el diseño de políticas públicas de estado, de acuerdo a los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento y evaluar sistemáticamente el impacto de su aplicación, y se le otorgan las facultades necesarias para dirigir la formulación de políticas públicas e impulsar las propuestas de la sociedad, para alcanzar la igualdad para la mujer en los ámbito público y privado, entre otros.

La iniciativa contiene la estructura orgánica del instituto, requisitos y atribuciones de órganos, y propone la abrogación de decreto del Ejecutivo del Estado, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social; publicado el 24 de enero de 2006, estipulándose que cuando en otros ordenamientos legales y administrativos, y demás documentos y papelería, se haga referencia al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se entenderá al Instituto de la Mujer del Estado de México.

Contiene además reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y a la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, para adecuar su texto a la presente iniciativa.

En mérito de lo anteriormente expuesto y con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el proyecto de decreto para que de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.

"Por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos"

Es cuanto Presidente.

**TOLUCA, MÉXICO, MARZO 10 DE 2011**
**CIUDADANOS**
**SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**HONORABLE ASAMBLEA:**

Con fundamento en los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así como 28 fracción I y 81 fracciones I, II y III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 68 de su Reglamento; la suscrita Diputada Jael Mónica Fragoso Maldonado, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática , someto a su elevada consideración, por tan digno conducto, iniciativa que contiene tres proyectos decreto por los cuales, se expide la **LEY QUE CREA Y REGULA AL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE MEXICO Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DEL ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE MÉXICO,** con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En la normativa del Estado de México, si bien se han alcanzado importantes cambios, desde el punto de vista legislativo, para lograr la igualdad y equidad para las mujeres, entre los que podemos citar el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley; la inclusión de la violencia familiar, el fraude conyugal y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el catálogo de delitos; el establecimiento del procedimiento de violencia familiar en el Código de Procedimientos Civiles y otros mecanismos no menos importantes de protección de los derechos humanos de las mujeres, lo cierto es que a esa igualdad y equidad formal, requerimos acompañarla de acciones realmente efectivas que involucren a todas las instituciones públicas y privadas de nuestra entidad federativa.

Y es que para las mujeres, que constituyen más de la mitad de la población de nuestro estado, existen desigualdades aún no superadas que no permiten su incorporación efectiva en el desarrollo, como: la pobreza, el analfabetismo, el desempleo, las diferencias salariales, desigual acceso a la educación, salud y vivienda y el no reconocimiento del trabajo dentro del hogar, entre otras.

Uno de los asuntos que merece especial atención, que no se ha erradicado ni disminuido y que limita el desarrollo integral de las mujeres es el fenómeno social de la violencia que se ejerce en su contra, la que ocurre en mayor proporción dentro del ámbito comunitario y familiar, tal y como consta con el

| AÑO/ TIPO DE VIOLENCIA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR | **2352** | **2184** | **9364** | **4381** | **1797** | **2448** |
| DOCENTE | **2** | **1** | **9** | **7** | **17** | **168** |
| LABORAL | **20** | **12** | **103** | **200** | **40** | **1264** |
| INSTITUCIONAL | **11** | **7** | **7** | **105** | **8** | **1686** |
| COMUNITARIA | **158** | **22** | **74** | **487** | **296** | **2866** |
| TOTALES | **2543** | **2218** | **9557** | **5180** | **2158** | **8432** |

"Registro de Atención Jurídica Brindada por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el periodo 2005-2011" y que a continuación se desglosa:

Además de la violencia familiar y comunitaria, las mujeres del Estado de México, se enfrentan también a la violencia feminicida, basta recordar que somos la entidad federativa con el mayor número de homicidios dolosos de mujeres y que

| CONCEPTO / AÑO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMICIDIOS REGISTRADOS | **98** | **138** | **161** | **176** | **205** | **225** |

éstos, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, han sufrido un alarmante aumento desde el año 2005, como se desglosa en el siguiente cuadro:

Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado de México nuestra entidad ocupa el más alto índice de muertes maternas.

Por ello, ante el contexto de violencia que padecen las mexiquenses resulta una tarea impostergable que establezcamos una nueva institucionalidad pública con las competencias y capacidades necesarias para el establecimiento de políticas públicas a favor del desarrollo integral de la mujer, con la fortaleza para articular y dar seguimiento a las acciones interinstitucionales de la Administración Pública Estatal y de los demás ordenes de gobierno que tenga por objeto promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos público y privado, bajo el criterio de transversalidad en las políticas públicas y con un enfoque que permita identificar y valorar la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres para generar un cambio mediante estrategias y líneas de acción que propicien la equidad social.

En ese sentido, proponemos una acción concreta para seguir avanzando en la igualdad y equidad para las mujeres, que permita elevar el perfil del actual mecanismo estatal de la mujer a un ente coordinador y articulador de los programas y proyectos necesarios para superar las desigualdades e inequidades.

Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la igualdad ante ley del hombre y la mujer y prohíbe toda discriminación motivada por género (arts. 4º segundo párrafo y 1º párrafo tercero).

Reconociendo que la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como Carta de los

Derechos Humanos de las Mujeres (CEDAW), ratificada por México el 23 de marzo de 1981, establece:

"Los Estados Partes, condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen:

a. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio.

b. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

ch. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

d. Tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

e. Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; y,

f. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer". (art. 2)

Que el artículo 3 preceptúa: 'Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre".

Y que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), ratificada por nuestro país el 12 de noviembre de 1998, nos comprometimos en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para

prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y promover el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia (artículo 8).

Esta iniciativa establece la creación del Instituto de la Mujer del Estado de México como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines que tendrá su domicilio legal en municipio de Toluca de Lerdo, con la posibilidad de establecer oficinas alternas en otros municipios de la Entidad de acuerdo a sus posibilidades presupuestales.

Al Instituto de la Mujer del Estado de México, se le otorgarán facultades para promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en todos los ámbitos, bajo el criterio de transversalidad en las políticas públicas. En ese sentido, será el encargado de proponer al Ejecutivo del Estado el diseño de la política del Estado, de acuerdo a los planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento y evaluar sistemáticamente el impacto de su aplicación y se le otorgan las facultades necesarias para dirigir la formulación de políticas públicas e impulsar las propuestas de la sociedad, para alcanzar la igualdad de para la mujer en los ámbitos público y privado, entre otras.

La iniciativa contiene la estructura orgánica del Instituto, requisitos y atribuciones de sus órganos y propone la abrogación del decreto del Ejecutivo del Estado mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal denominado Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, publicado el 24 de enero de 2006, estipulándose que cuando en otros ordenamientos legales y administrativos y demás documentos y papelería se haga referencia al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se entenderá al Instituto de la Mujer del Estado de México.

Contiene además reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y a la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, para adecuar su texto a la presente iniciativa.

En mérito de lo anteriormente expuesto, y con motivo del Día Internacional de Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, me permito someter a la consideración de ésta H. Asamblea los siguientes proyectos de decreto, para que de estimarlo procedente, se aprueben en sus términos.

**POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS"**

**ATENTAMENTE**

**DIP. JAEL MONICA FRAGOSO MALDONADO**
**DIPUTADA PRESENTANTE**
**DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

| | |
|---|---|
| **GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.** | **GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA** |
| **DIP. OSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA** |
| **DIP. FLORENTINA SALAMANCA ARELLANO** | **DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO** |
| **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** | **DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ** |
| **DIP. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA** | **DIP. JUAN HUGO DELA ROSA GARCÍA** |
| **DIP. M. GUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ** | **DIP. MARÍA ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS** |
| **DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS** | **DIP. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA** |
| **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** | **DIP. FRANCISCO JAVIER VELADIZ MEZA** |
| **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** | |

**DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN**

**DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO**

**DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES**

**Decreto Número**
**LA LVII LEGISLATURA**
**DECRETA:**

**ARTÍCULO ÚNICO**.- Se expide la Ley que crea y regula al Instituto de la Mujer del Estado de México, que queda como sigue:

**LEY QUE CREA Y REGULA AL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE MEXICO**

**Capítulo I**
**Disposiciones Generales**

**Artículo 1**.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de México, promueve la equidad de género en todo el Estado de México, promueve la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y tiene por objeto establecer las bases y mecanismos para el funcionamiento del Instituto de la Mujer para el Estado de México.

**Artículo 2**.- Se crea el Instituto de la Mujer del Estado de México, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

**Artículo 3**.- El Instituto de la Mujer del Estado de México, tiene su domicilio legal en municipio de Toluca de Lerdo, con la posibilidad de establecer oficinas alternas en otros municipios de la Entidad de acuerdo a sus posibilidades presupuestales.

**Artículo 4**.- Son sujetos de esta Ley las mujeres y hombres que se encuentren en el territorio del Estado de México, sin importar origen étnico, edad, estado civil, raza, idioma, cultura, condición social, trabajo o profesión, discapacidad, estado de salud, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.

A**rtículo 5**.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

**INSTITUTO**: al Instituto de la Mujer del Estado de México.

**CONSEJO DIRECTIVO**: al Consejo Directivo del Instituto de la Mujer del Estado de México;

**CONSEJO CONSULTIVO**: al Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer del Estado de México.

**TRANSVERSALIDAD:** a la manera integradora en que deberá expresarse el Programa Estatal de de la Mujer en los programas de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal, como una de sus dimensiones.

Capítulo II
Del objeto, objetivos y atribuciones del Instituto

**Artículo 6**.-El objeto del Instituto es promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos público y privado, bajo el criterio de tranversalidad en las políticas públicas y con un enfoque que permita identificar y valorar la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres, para generar un cambio mediante estrategias y líneas de acción que propicien la equidad social.

**Artículo 7**.- EI Instituto tiene como objetivos específicos los siguientes:

I. Formar conciencia en la sociedad y en las instituciones del Estado, de la trascendencia de crear oportunidades equitativas para hombres y mujeres;

II. Lograr una sociedad respetuosa de los derechos de todas las personas, para potenciar sus capacidades y desarrollarse con plenitud;
III. Extender los valores democráticos en la sociedad, para la convivencia armónica entre hombres y mujeres;
IV. Difundir las garantías individuales que otorga el orden jurídico mexicano para fomentar en la sociedad una cultura de legalidad, con especial énfasis en las que determinan la igualdad del hombre y la mujer ante la ley;
V. Lograr que las oportunidades de trabajo para las mujeres se desarrollen en igualdad de oportunidades con respecto de los hombres, y que gocen de retribuciones justas a trabajo igual;
VI. Hacer conciencia de la importancia de lograr una atención equitativa en los servicios de salud;
VII. Fomentar la igualdad de oportunidades en materia educativa, para así desarrollar en forma equitativa las capacidades de mujeres y hombres;
VIII. Cultivar el respeto entre hombres y mujeres al interior de las familias, para que desde la célula básica de la sociedad sean fomentados los valores de tolerancia, solidaridad e igualdad;
IX. Lograr que las mujeres y los hombres reciban información clara, objetiva, sin prejuicios y tolerante sobre sexualidad;
X. Propiciar el acceso y desarrollo de las mujeres y los hombres en igualdad de oportunidades en el ámbito del deporte, la cultura y la política;
XI. Contribuir al fomento del desarrollo económico en el Estado, procurando la inclusión equitativa de hombres y mujeres en los diversos ámbitos de la vida laboral y productiva, y
XII. Promover y llevar a cabo acciones enfocadas a erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres.

**Artículo 8**.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer al Ejecutivo el diseño de la política del Estado dirigida a lograr la igualdad de oportunidades y derechos de hombres y mujeres, de acuerdo a los planes Estatal y Nacional de Desarrollo, ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento y evaluar sistemáticamente el impacto de su aplicación;
II.- Diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa Estatal para la Mujer
III.- Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y la cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades competentes por la violación de los mismos;
IV.- Apoyar la formulación de políticas públicas e impulsar las propuestas de la sociedad, para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para la mujer en los ámbitos público y privado;
V.- Establecer un sistema de coordinación de trabajo con los órganos homólogos al Instituto de la entidad federativa y Distrito Federal que, con el Estado de México, conforman la zona metropolitana;
VI.- Impulsar la incorporación de los lineamientos del Programa Estatal de la Mujer en el programa anual de cada dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado, así como en el de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos;
VII.- Impulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de la Administración Pública acciones y políticas públicas contra la violencia, la discriminación y en materia de salud, educación, empleo, capacitación y deporte tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades, verificando la adopción de medidas y programas establecidos;
VIII.- Promover ante los poderes públicos del Estado, acciones dirigidas a mejorar la condición social de las mujeres generando igualdad de oportunidades para su desarrollo y erradicando toda forma de discriminación en su contra;
IX.- Establecer vínculos de colaboración con la Legislatura y con los ayuntamientos del Estado, para promover acciones legislativas y reglamentarias que garanticen a las mujeres la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo y a la promoción de la equidad entre hombres y mujeres;

X.- Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en los ayuntamientos para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas, y acciones en materia de igualdad de oportunidades y desarrollo para las mujeres;

XI.- Promover la prestación de servicios de seguridad social en apoyo a madres trabajadoras;

XII.- Promover ante las autoridades competentes que los contenidos y materiales educativos estén libres de prejuicios discriminatorios contra las mujeres y que fomenten la igualdad de derechos y oportunidades;

XIII.- Promover ante las autoridades competentes que se garantice el acceso de la mujer, y se aliente su permanencia o reingreso a las instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades, impulsando además a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, así como desarrollar campañas para crear en la sociedad la conciencia sobre la importancia de permitir el acceso de las mujeres a la educación;

XIV.- Propiciar y fomentar el acceso de las mujeres de la tercera edad, discapacitados y pertenecientes a minorías étnicas, a todo tipo de programas destinados a la mujer;

XV.- Promover ante las autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia de salud, el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención a la salud, considerando las características particulares de su ciclo de vida y condición social:

XVI.- Promover en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo, acciones de combate a la pobreza, marginación y exclusión de las mujeres de las actividades económicas, culturales y sociales de la entidad, especialmente en el medio rural e indígena;

XVII.- Estimular y fomentar la participación activa de las organizaciones que actúan en la promoción y defensa de los derechos de la mujer, en las tareas de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones públicas orientadas al desarrollo integral de la mujer;

XVIII.- Promover e impulsar acciones que contribuyan a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra la mujer;

XIX.- Promover acciones tendientes a reconocer las aportaciones de la mujer, derivadas de su participación en el desarrollo del Estado;

XX.- Impulsar en los medios de comunicación, una cultura de igualdad entre el hombre y la mujer, reconociendo y dignificando su imagen ante la sociedad;

XXI.- Servir de enlace con organizaciones locales, nacionales e internacionales que apoyen proyectos dirigidos a la mujer, para lograr la captación de recursos y su adecuada distribución;

XXII.- Concertar y suscribir acuerdos y convenios de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;

XXIII.- Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, así como de las municipales, y de los sectores social y privado, en materia de equidad e igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres;

XXIV.- Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento público de las mujeres, así como para la difusión nacional e internacional de las actividades que las benefician;

XXV.- Consolidar conjuntamente con las instancias competentes, el establecimiento de un sistema de información y estadística que genere indicadores para el diseño, seguimiento y evaluación de impacto de las condiciones sociales, políticas, económicas, laborales, civiles, familiares y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad y su impacto en los programas de las dependencias;

XXVI.- Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información en los ámbitos de su

competencia sobre los temas de las mujeres;
XXVII.- Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley;
XXVIII.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, interesadas en apoyar el logro de la equidad entre hombres y mujeres;
XXIX.- Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en la materia de equidad entre hombres y mujeres, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XXX.- Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Estatal de la Mujer;
XXXI. Fungir, a través de su titular, como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, llevando al efecto las acciones que la Ley de la materia y su reglamento le atribuyen;
XXXII. Brindar atención personalizada en materia jurídica y psicológica a las personas que lo soliciten, preferentemente a mujeres, cuando sea factible, según la problemática, o canalizarlas a las instituciones competentes;
XXX.- Las demás que señale el reglamento de esta Ley.

## CAPITULO III

Del Programa Anual del Instituto

**Artículo 9**.- El Programa Anual del Instituto es el documento que contiene las políticas generales, los planes sectoriales y las tareas concretas que deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos y atribuciones del mismo.

Artículo 10.- El Programa Anual debe elaborarse en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, con base en los resultados de los estudios e investigaciones realizados por el Instituto, y tomando en consideración las propuestas del Consejo Consultivo y Social. En su elaboración se incluirá la coordinación y concertación con los sectores público, privado y social de la Entidad, de conformidad con el Reglamento de esta Ley, y será utilizado como indicador para medir el desempeño del Instituto.

## CAPITULO IV

De la Estructura Orgánica del Instituto

**Artículo 11**.- Para el cumplimiento de su objeto y desempeño de sus atribuciones el Instituto cuenta con los siguientes órganos:

I. De gobierno:
a) Una Junta Directiva;

II. De dirección.
a) Dirección General;

III. Consultivos
a) Consejo Consultivo y Social;

IV. De operación:

a) Área administrativa.
b) Área de investigación y evaluación de políticas.
c) Área de planeación y vinculación.
d) Área de comunicación social.
e) Área de atención ciudadana, y
f) Área de capacitación.

**Artículo 12**.- Los órganos de operación dependen de la Dirección General, y son responsables de la ejecución de políticas públicas y de las atribuciones del Instituto para el debido cumplimiento de sus objetivos.

**Artículo 13**.- El Instituto tendrá un Contralor Interno, que tendrá las atribuciones que le señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, quien será nombrado por la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.
**Artículo 14**.- El Reglamento Interior del Instituto debe establecer la estructura orgánica, atribuciones y funciones específicas de las áreas operativas

del mismo, con la posibilidad de crear nuevas áreas, siempre que se justifiquen y obedezcan al cumplimiento de los objetivos del Instituto.

**CAPITULO V**
De la Junta Directiva del Instituto

**Artículo 15**.- La Junta Directiva se integra de la siguiente forma:

I. El Gobernador del Estado, quien será el Presidente de la misma, o en su caso la persona que él designe;

II. Los titulares de las dependencias, entidades y áreas de la administración pública siguientes:

a) Secretaría General de Gobierno.
b) Secretaría de Desarrollo Social.
c) Secretaría de Planeación del Desarrollo.
d) Secretaría de Educación.
e) Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
f) Procuraduría General de Justicia.
g) Secretaría de Salud.
h) Secretaría del Trabajo.
i) Secretaría de Transporte.
j) Secretaría de Finanzas
k) Secretaría de Desarrollo Económico
l) Secretaría de Desarrollo Metropolitano.
ñ) Instituto Mexiquense de Cultura Física y del Deporte.
o) Instituto Mexiquense de la Juventud.
p) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
q) Radio y Televisión Mexiquense

III. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y

IV. Una Secretaría Técnica, que es encabezada por la persona titular de la Dirección General del Instituto.

V. Cinco integrantes del Consejo Consultivo y Social.

Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará a un suplente, que puede sustituirlo en su ausencia, con todas las atribuciones que corresponden al propietario.

**Artículo 16**.- La el Presidente o la Secretaria Técnica de la Junta Directiva, podrá invitar de manera permanente, hasta cinco integrantes de la Legislatura del Estado, con voz pero sin voto.

**Artículo 17**.- Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y ejercicio de sus atribuciones, la Junta Directiva o la Secretaria Técnica de la Junta Directiva, en los casos en que lo consideren necesario, pueden invitar a las sesiones de la misma, a representantes de las diversas dependencias y organismos descentralizados de Gobierno del Estado y de los municipios; asimismo, a los representantes de las dependencias federales con representación en la Entidad y a instituciones y organizaciones públicas o privadas, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto.

**Artículo 18**.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

I. Establecer los programas y políticas del Instituto, sujetándolos a las leyes de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público del Estado, y en su caso, a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizados;
II. Autorizar los programas y los presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, en términos de la legislación aplicable;
III. Conocer y aprobar o rechazar, según proceda, los estados financieros del Instituto;
IV. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto y sus modificaciones, y enviarlas para su sanción y publicación al Ejecutivo del Estado;
V. Analizar, aprobar o rechazar, según proceda, los informes que rinda la Directora General;
VI. Emitir la convocatoria y nombrar a los miembros del Consejo Consultivo y Social, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior;
VII. Autorizar la celebración de convenios de coordinación y colaboración con el sector público federal, estatal y municipal, así como los sectores privado y social, para el

cumplimiento de los objetivos del Instituto, así como delegar dicha facultad a la Directora del mismo;

VIII. Autorizar en su caso, las delegaciones representativas del Instituto en los distintos municipios del Estado;

IX. Coadyuvar en la formación de los programas operativos anuales del Instituto y colaborar con los sistemas de evaluación, seguimiento y control de información;

X. Participar en el análisis, discusión y valoración de los proyectos desarrollados en materia de equidad entre mujeres y hombres, identificando el impacto de los mismos y buscando adecuar y coordinar las funciones desarrolladas por las dependencias que los miembros de la Junta Directiva dirigen y/o representan;

XI. Otorgar a favor de la titular de la Dirección, la representación legal del Instituto con todas las facultades que correspondan al mandato general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como las que requieran cláusula especial en los términos del Código Civil para el Estado de México;

XII. Recibir las recomendaciones de la Directora General del Instituto, o del Consejo Consultivo y Social, para mejorar las políticas, programas o proyectos que en materia de equidad entre mujeres y hombres sean establecidos por las dependencias que los miembros de la Junta Directiva dirigen y/o representan;

XIII. Establecer, con el apoyo del Consejo Consultivo y Social, los indicadores de desempeño del Instituto, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado;

XIV. Aprobar en su caso, la propuesta que presente el Gobernador del Estado para ocupar la titularidad de la Dirección del Instituto, de acuerdo con el artículo 22 de la presente Ley, y

XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

**Artículo 19**.- La Junta Directiva puede sesionar válidamente con la asistencia de cuando menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente o quien legalmente lo sustituya. Sus decisiones se toman por mayoría de votos; en caso de empate, el Presidente tiene voto de calidad.

**Artículo 20.-** La Junta Directiva sesiona en forma ordinaria por lo menos cada tres meses, y de manera extraordinaria cuando sea necesario, debiendo operar en los términos que disponga el Reglamento Interior del Instituto.

En cada sesión debe levantarse acta que, previa aprobación de la misma en la sesión siguiente, será firmada por quien la haya presidido y por la Secretaría Técnica.

El Reglamento Interior debe determinar los requisitos para emitir la convocatoria y los demás términos y condiciones relativas a las sesiones de la Junta.

**Artículo 21.-** Los cargos de la Junta Directiva son honoríficos y por su desempeño no se percibe retribución o compensación alguna.

## CAPITULO VI

De la Dirección General y Órganos de Operación

**Artículo 22**.- Son requisitos para ser titular de la Dirección del Instituto:

I. Ser del sexo femenino;

II. De nacionalidad mexicana, y ciudadana del Estado;

III. Encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

IV. Haber desempeñado cargos de nivel directivo, cuyo ejercicio requiera conocimiento y experiencia en materia administrativa, y

V. Ser una persona reconocida por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, así como contar con experiencia en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de género.

**Artículo 23.-** La Directora General del Instituto durará en su encargo tres años a partir de su nombramiento; pudiendo ser ratificada por la Junta

Directiva por un período más, con el propósito de dar continuidad a los planes en favor de la equidad.

**Artículo 24**.- La Dirección General tiene las siguientes atribuciones:

I. Desempeñar la Secretaria Técnica de la Junta Directiva;
II. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva, así como atender las recomendaciones del órgano de control interno;
III. Proponer ante la Junta Directiva para su aprobación el proyecto del Programa Anual del Instituto, así como los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo;
IV. Representar legalmente al Instituto como apoderado legal para actos de administración y para pleitos y cobranzas, con las facultades generales o especiales que determine la Junta Directiva;
V. Dirigir y coordinar las actividades del Instituto, así como ejercer su presupuesto;
VI. Someter a la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto, así como sus modificaciones, avances y resultados;
VII. Presentar a la Junta Directiva, conforme a la periodicidad que ésta determine, el informe del desempeño de las actividades del Instituto, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes con sus respectivos indicadores;
VIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeña el Instituto, y presentar los resultados a la Junta Directiva con la periodicidad que ésta indique;
IX. Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;
X. Promover y suscribir convenios, en las condiciones que autorice la Junta Directiva, con las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, con los sectores social y privado, instituciones de educación superior públicas y privadas, y con los organismos nacionales e internacionales que se requiera, siempre y cuando la suscripción de estos convenios no sean facultad exclusiva del Gobernador del Estado;
XI. Suscribir los contratos que regulen las relaciones laborales del Instituto con sus trabajadores;
XII. Someter a consideración de la Junta Directiva el proyecto de Reglamento Interno;
XIII. Elaborar y mantener permanentemente actualizados el Manual General de Organización y demás instrumentos de apoyo administrativo necesarios para el funcionamiento del Instituto, informando de ello a la Junta Directiva;
XIV. Delegar en los funcionarios del Instituto, las atribuciones que expresamente determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo;
XV. Presentar oportunamente ante las instancias correspondientes, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, previamente aprobado por la Junta Directiva;
XVI. Proporcionar a la Junta Directiva, así como al Consejo Consultivo y Social, la información que requiera para el desempeño de sus funciones, y
XVII. Las demás que le asigne este ordenamiento, la Junta Directiva y otras disposiciones en la materia.

**Artículo 25**.- Los responsables de cada área de operación del Instituto tienen las siguientes atribuciones:

I. Auxiliar dentro del ámbito de su competencia a la Directora General en el ejercicio de sus funciones;
II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del área a su cargo;
III. Ejecutar las tareas que le asigne la Directora General en lo referente a su área, e informar oportunamente sobre su desarrollo;
IV. Someter a la Dirección General los proyectos que se elaboren en el área a su cargo;

V. Observar el debido cumplimiento de las disposiciones legales en los asuntos que le competan;
VI. Presentar los programas y proyectos de presupuesto correspondientes a su área;
VII. Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo del área a su cargo;
VIII. Proporcionar, previa autorización de la Directora General, la información que sea requerida por las dependencias de gobierno estatal o federal, o por las unidades administrativas del propio Instituto;
IX. Coordinar sus actividades con las demás áreas, procurando con ello un mejor funcionamiento del Instituto;
X. Emitir opiniones e informes que le sean solicitados por la Directora General, y
XI. Desempeñar las demás funciones que establezca el Reglamento Interno del Instituto.

## CAPITULO VII

Del Consejo Consultivo y Social

**Artículo 26**.- El Instituto cuenta con un Consejo Consultivo y Social que funciona como órgano asesor en materia de equidad entre mujeres y hombres; y como promotor de las acciones del Instituto.

**Artículo 27**.- El Consejo Consultivo y Social se integrará de la siguiente forma:

I. Por Ciudadanos o ciudadanas con conocimientos y experiencia en materia de género en los diversos asuntos de atención del Instituto, y
II. Por representantes de las diversas organizaciones o asociaciones civiles relacionadas con el objeto del Instituto.

Los y las integrantes del Consejo Consultivo y Social serán nombrados por la Junta Directiva conforme a la convocatoria que al efecto se expida, en términos del Reglamento Interior del Instituto.
El número de integrantes del Consejo Consultivo y Social será determinado por la Junta Directiva, pero en ningún caso podrá ser menor a siete miembros.

**Artículo 28.-** Los integrantes del Consejo Consultivo y Social no perciben retribución o compensación alguna por el desempeño de su función; excepción hecha de los viáticos necesarios para el ejercicio de sus encomiendas o sus traslados.

**Artículo 29**.- Los integrantes del Consejo Consultivo y Social desempeñan su encargo por tres años a partir de su nombramiento, pudiendo ser ratificados por la Junta Directiva.

**Artículo 30**.- Son funciones del Consejo Consultivo y Social:

I. Asesorar a la Junta Directiva, y a la Directora del Instituto, en la formulación de políticas, planes y programas que les competen de conformidad con la presente Ley;
II. Proponer medidas para impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones relacionadas con el objeto de esta Ley;
III. Proponer mecanismos para apoyar la formación y el fortalecimiento de las organizaciones que tengan por objeto acciones a favor de la equidad entre mujeres y hombres;
VI. Dar seguimiento a las políticas, programas, proyectos y acciones que emprenda el Instituto en cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones legales que le corresponda, y proponer, en su caso, las modificaciones tendentes a perfeccionarlas;
V. Atender las solicitudes de consulta o asesoría que le formulen la Junta Directiva, o la Directora del Instituto, relacionadas con la naturaleza de sus funciones;
VI. Hacer llegar en todo tiempo al Instituto, para su atención, la información y planteamiento de problemas concretos que deriven de situaciones de discriminación o inequidad por cuestiones propias del género de las personas en la Entidad, y
VII. Coadyuvar con la Junta Directiva en la formulación de los indicadores de desempeño del Instituto.

**CAPITULO VIII**

Del patrimonio, presupuesto y
control de los recursos del instituto

**Artículo 31**.- El patrimonio del Instituto estará constituido por:

I. Las aportaciones, participaciones, subsidios y demás recursos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

III. Los legados y donaciones otorgadas a su favor y los recursos de los fideicomisos en los que se le señale como beneficiario.

IV. Los derechos, bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, aportaciones, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

VI. Todos los demás bienes que se asignen u obtengan legalmente.

**Artículo 32**.- El Instituto queda sujeto a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable a la administración estatal.

**CAPITULO IX**

Del Régimen Laboral del Instituto

**CAPITULO X**

Régimen Laboral y de Seguridad Social

**Artículo 33.-** El Instituto se constituye como patrón sustituto del personal del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y reconoce por tanto sus derechos laborales

**Artículo 34**.- Las relaciones laborales que se generen entre el personal y el Instituto, se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

**Artículo 35**.- Los servidores públicos del Instituto gozarán de la seguridad social que instituye la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO**.- Publíquese el Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

**ARTÍCULO SEGUNDO**.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

**ARTICULO TERCERO.-** Para el inicio de actividades del Instituto, la Junta Directiva deberá quedar integrada e instalada a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente Decreto, debiéndose nombrar a la Directora en términos de lo dispuesto en la presente Ley, dentro de los diez días siguientes a la instalación de la misma.

**ARTICULO CUARTO**.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento Interior del Instituto, dentro de los noventa días siguientes al de la entrada en vigor del presente ordenamiento.

**ARTICULO QUINTO**.- Los Consejos Consultivo y Social del Instituto, se conformarán e instalarán de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, en un plazo no mayor a treinta días contados a partir de la fecha de publicación del Reglamento Interior.

**ARTICULO SEXTO**.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, queda sin efecto el Decreto del Ejecutivo del Estado mediante el cual se crea el Organismos Público Descentralizado de carácter estatal denominado Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, publicado el 24 de enero de 2006.

Cuando en otros ordenamientos legales y administrativos y demás documentos y papelería se haga referencia al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se entenderá al Instituto de la Mujer del Estado de México.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los días del mes de de dos mil once.

**Decreto Número**
**LA LVII LEGISLATURA**
**DECRETA:**

**ARTÍCULO UNICO**. Se reforman la fracción XII del artículo 3, la fracción II del artículo 35, la fracción X del artículo 40 y el párrafo primero del artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para quedar como sigue:

**Artículo 3**.- …

I a XII. …

XII. Instituto de la Mujer. Instituto de la Mujer del Estado de México.

XIII a XXVI. …

**Artículo 35.-** …

I. …
II. El Instituto de la Mujer, que se hará cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema;
III. a XV. …
…

**Artículo 40**.-…

I a IX. …

X. Realizar a través del Instituto de la Mujer del Estado de México y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis de la protección integral de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, en el conocimiento de las leyes, las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

XI a XXVII. …

**Artículo 50**.- Corresponde al Instituto de la Mujer del Estado de México

I a XIX. …

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO**.- Publíquese el Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

**ARTÍCULO SEGUNDO**.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los días del mes de de dos mil once.

**Decreto Número**
**LA LVII LEGISLATURA**
**DECRETA:**

**ARTICULO UNICO**. Se reforman la fracción VIII, del artículo 2, la fracción I del artículo 3, el párrafo primero del artículo 11 y la fracción II del artículo 24 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México.

**Artículo 2**.-…

I. a VII. …

VIII. Instituto. Instituto de la Mujer del Estado de México.

IX. a XV. …

**Artículo 3**.-…

I. Al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto de la Mujer del Estado de México; y
II. …

**Artículo 11**.- Corresponde al Instituto de la Mujer del Estado de México:

I. a IX. …

**Artículo 24**.- …

I. …
II. Un Secretario Técnico, que será la Directora del Instituto de la Mujer del Estado de México;
III. …

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO**.- Publíquese el Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

**ARTÍCULO SEGUNDO**.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los días del mes de de dos mil once.

**VICEPRESIDENTE DIP. CRISOFORO HERNÁNDEZ MENA.** Gracias, diputada Karina.

Se registra la iniciativa y considerando lo establecido en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI; 51, 57, 59, 82 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia, y Equidad y Género.

Con base en el punto número 12 del orden del día, hace uso de la palabra la diputada Angélica Linarte Ballesteros, en nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, para la lectura de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Estado de México, para prevenir la violencia y las agresiones por motivo de género.

**DIP. ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS.**
**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.**
**PRESENTES**

En ejercicio de las facultades que nos confiere lo establecido por los artículos 51 fracción II; 56, 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I; 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 68, 70 y 73 de su reglamento, los diputados: Angélica Linarte Ballesteros y Víctor Manuel Bautista, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática e integrantes del Partido Acción Nacional, por mi conducto sometemos a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Estado de México, para prevenir la violencia y las agresiones por motivo de género, de conformidad con la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El pasado 11 de enero del año en curso, con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México, por los casos de feminicidio.

Las representantes que votaron en contra de la alerta fueron, entre otros, Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas; en tanto, entre quienes argumentaron su procedencia, se encuentran además de la representación del Distrito Federal, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el de Jalisco, el Instituto Nacional de las Mujeres, FEVIMTRA, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría General de la República y finalmente hubo dos abstenciones que corresponden a los mecanismos para el adelanto de las mujeres de los Estados de Baja California y Guanajuato.

Con esta decisión, se demuestra que para aquellos gobiernos, las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, no son un tema prioritario, quienes lejos de atenderlo de manera inmediata y buscar establecer acciones urgentes de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, prefieren proteger los

intereses políticos de sus gobernantes.

La solicitud de alerta de género, formulada por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, se sustentó con información oficial del propio Estado de México, emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión de Derechos Humanos entre otras instituciones, información que demuestra la existencia de alarmantes niveles de violencia contra las mujeres, un patrón sistemático de violencia de feminicidio y un contexto de impunidad que caracteriza la forma de cómo proceden las autoridades en estos casos.

Entre los alarmantes datos que se destacaron para sustentar la petición, se encuentran los proporcionados por la propia Procuraduría del Estado de México, que reportó 4 mil 773 denuncias por violación en año y medio; 922 homicidios dolosos contra mujeres, cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010, de los cuales destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.52 de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida, pareja, familiar o vecino, la autoridad conoce la identidad del victimario, lo que se presentó en el 35.47 de los casos, lo que además desvirtúa a los intentos sistemáticos de las autoridades estatales, que han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.

La violencia feminicida documentada por los organismos mencionados, se refieren a los 10 municipios más poblados, siendo estos, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, los que mayor incidencia demuestran.

Cabe mencionar, además que en el IV Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en tránsito por México, el Estado de México es una de las tres entidades del país, con los niveles más altos de violencia contra este sector.

A pesar de los argumentos sólidos y contundentes que justificaban la declaratoria de alerta de género, la votación en la que participaron las representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas, determinaron que la declaratoria era improcedente.

Quienes se opusieron irracional e intransigentemente a la aprobación de la investigación preliminar a la declaratoria de alerta, refirieron una supuesta falta de certeza de las estadísticas expuestas, manipulación de intereses partidistas, la utilización de las mujeres como un pretexto para atacar al Gobernador del Estado y una clara politización como trasfondo de este asunto.

La representante del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Lorena Cruz Sánchez y la asesora jurídica de la entidad, demostraron que su preocupación fundamental no se encuentra en la defensa de las mujeres mexiquenses; lejos de argumentar razones de fondo, se concretaron a desacreditar las acciones de la Secretaría Ejecutiva del Subsistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señalando que las acciones fueron sesgadas, pues la notificación sobre la solicitud de alerta fue realizada en día inhábiles y sin que se haya realizado una investigación a fondo sobre los señalamientos referidos por las organizaciones sociales.

Por su parte, la Directora General del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México, Martha Lucía Micher Camarena, defendió la procedencia de la solicitud presentada y aclaró que esta figura no es un enjuiciamiento para el Estado de México, sino un procedimiento administrativo preventivo y de investigación que busca inicialmente conformar un grupo de expertos y expertas en perspectiva de género, que daría su opinión para que posteriormente se analizara la procedencia o no de la declaratoria de alerta de violencia de género.

Así mismo, precisó enfáticamente que la investigación preliminar busca garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y que se concreta mediante el conjunto de acciones de emergencia que el gobierno en su caso, implementaría para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

La alerta de género, de acuerdo con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, tiene como objetivo garantizar la seguridad de

las mujeres y el cese de la violencia en su contra. De haber aprobado, el Gobierno del Estado de México, tendría la obligación de implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, así como elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres, y asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta, entre otras medidas.

Por otro lado, no hay que olvidar según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, nuestra entidad ocupa el primer lugar en violencia de género de enero de 2007 a diciembre de 2009 se registraron 2 mil 15 homicidios dolosos en contra de mujeres y niñas, en 18 de las 32 entidades federativas de nuestro país y según los últimos datos que reportan entre el año 2005 y 2010 hay 922 homicidas en el Estado de México, donde se destaca el uso de arma de fuego, el traumatismo craneoencefálico, las heridas punzo cortantes y la asfixia, entre otros casos de homicidios dolosos de género, que según el Instituto Nacional de las Mujeres en la gran mayoría de estos casos permanecen impunes.

Las cifras son evidentes para todos, pero no suficientes para tomar medidas reales y decididas en la materia, así lo demuestra el hecho de que el transporte exclusivo para mujeres siga sin ser operado, a pesar de ser una disposición ya aprobada por esta Legislatura y reformar el Código Penal del Estado de México para sancionar el acoso sexual, en el transporte público o para solicitar a los poderes Ejecutivo y Judicial la realización de estudios sobre la comisión del delito de actos libidinosos de acuerdo al lugar en que ocurran.

Por esta razón y con la finalidad de dejar una clara y contundente evidencia de la convicción que compartimos, los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional, para exigir la inmediata instrumentación de acciones tendientes a combatir el feminicidio, atacando aquellas conductas, que por ser cotidianas, parecen instalarse dentro de la normatividad de una sociedad acostumbrada cada vez más a la violencia, que premie con la impunidad de las autoridades, el desprecio a la dignidad de las personas y la comisión de actos de odio.

Es el mérito de lo anterior que sometemos a su consideración, la presente iniciativa de reformas a diversas disposiciones legales del Estado de México, para prevenir la violencia y las agresiones por motivo de género, en el tenor del siguiente proyecto de decreto.

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ACCIÓN NACIONAL**

**ATENTAMENTE**

**Gracias.**

| | |
|---|---|
| **DIP. MARÍA ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS** | **DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO** |
| **DIP. ARTURO PIÑA GARCIA** | **DIP. CRISOFORO HERNANDEZ MENA** |
| **DIP. VICTOR MANUEL BAUTISTA LOPEZ** | **DIP. FRANCISCO JAVIER VELADIZ MEZA** |

**DIP. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA**

ATENTAMENTE

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

| | |
|---|---|
| **DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **DIP. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA** |
| **DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO** | **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** |
| **DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN** | **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** |
| **DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS** | **DIP. JAEL MÓNICA FRAGOSO MALDONADO** |
| **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** | **DIP. FLORENTINA SALAMANCA ARELLANO** |
| **DIP. MA GUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ** | **DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES** |

**LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO DECRETA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se reforman los artículos 218 y 269 Bis del Código Penal del Estado de México para quedar en los siguientes términos:

**CAPITULO V**
**VIOLENCIA FAMILIAR**

**Artículo 218**.- Al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física, moral, psicoemocional, patrimonial, sexual, económica o contra los derechos reproductivos, en contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen.

Por núcleo familiar debe entenderse el lugar en donde habitan o concurran familiares o personas con relaciones de familiaridad en intimidad, o el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe entre las personas con base en la filiación o convivencia fraterna.

Este delito se perseguirá por querella iniciada por la víctima o cualquier persona que se percate de los hechos, salvo cuando los ofendidos sean menores de edad o incapaces; en cuyo caso, se perseguirá de oficio.

El inculpado de este delito, durante la investigación del mismo y al rendir su declaración, será apercibido por el Ministerio Público para que se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiere causar daño a los pasivos, para lo cual el Ministerio Público podrá detener hasta por 48 horas inmediatas en contra de quienes empleen la violencia física sin beneficio de la libertad condicional hasta en tanto el juez determine la situación jurídica del agresor.
De igual forma se gestionará la reparación del daño en beneficio de la víctima, las medidas que aseguren el derecho a la protección que van desde la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor, la prohibición para cercarse a la víctima, la entrega inmediata de documentos y objetos personales y la prohibición a los responsables de comunicarse con la víctima o con los testigos.

Si el inculpado de este delito lo cometiese de manera reiterada, se le impondrá la perdida de los derechos inherentes a la patria potestad, tutela o guarda y cuidado del menor o incapaz agraviado, a quien tenga el ejercicio de ésta, por resolución judicial.
…
**Artículo 269 Bis**.- Comete el delito de acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente, para la víctima.

Así como aquella persona que en el transporte público, y aprovechándose de las condiciones de concurrencia, persiga, produzca, fije, grabe, videograbe, fotografíe o filme e imprima de cualquier forma imágenes, sonidos o la voz de una persona sin su consentimiento, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio forma imágenes, sonidos o la voz de una persona sin su consentimiento.

En ambos casos se impondrán de seis meses a dos años de prisión o de treinta a ciento veinte días multa.
…
**ARTÍCULO SEGUNDO**.- Se adiciona un artículo 4 Bis a la Ley para prevención y erradicación de la violencia familiar del Estado de México en el tenor siguiente:

**Artículo 4 Bis**.- Es obligación de todas las autoridades del Estado de México garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la general de la república, en los tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, en la presente y demás leyes y en general los derechos fundamentales del ser humano.

Se obligan a impulsar, promover, gestionar y

garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social del Estado de México. Asimismo, impulsarán y fortalecerán acciones para promover una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación.

**ARTICULO TERCERO**.- Se reforma el artículo 162 en su fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en los siguientes términos:

**Artículo 162.**- El bando municipal regulará al menos lo siguiente:
…

VII. Programa Estratégico para lograr la equidad de género, incluyendo las sanciones de tipo administrativo en contra de quienes cometan actos de discriminación, violenten los derechos de las niñas, niños, mujeres embarazadas, grupos vulnerables, contra quienes ejerzan violencia física contra algún integrante de su familia o afecten la seguridad e integridad de las personas, en términos de sus responsabilidades;
…

**ARTICULO CUARTO**.- Se solicita al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia la declaración de una alerta por violencia de género en el Estado de México con motivo de los casos de feminicidio.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Se exhorta respetuosamente, al Ejecutivo del Estado para que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos Relacionados con el Transporte instale un mayor número de Agencias del Ministerio Público Especializadas en el Territorio Mexiquense.

**ARTICULO SEXTO**.- Que en la difusión de la instalación de estas nuevas Agencias del Ministerio Público Especializadas, se contenga una campaña orientada a desalentar o inhibir conductas de hostigamiento sexual en el transporte público, tomando como base el artículo 270 del Código Penal del Estado de México.

**ARTÍCULO SEPTIMO**.- Se exhorta respetuosamente, al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, transfiera a la brevedad los recursos programados para el año fiscal 2010 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y sean instaladas las Agencias del Ministerio Público Especializadas programadas por la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos Relacionados con el Transporte.

**ARTICULO OCTAVO.-** Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que, sin mayor demora, inicie la operación del transporte público con unidades destinadas para uso exclusivo de mujeres en los términos aprobados ya por anterioridad por parte de esta Legislatura.

**ARTÍCULO NOVENO.-** Para dar seguimiento al presente punto de acuerdo se solicita a al Ejecutivo del Estado para que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, remita a esta Soberanía informes trimestrales que permita identificar el número de denuncias iniciadas y consignaciones realizadas en nuestra entidad por el delito de hostigamiento sexual en el transporte público y por el delito de actos libidinosos, desglosando la información en categorías relacionadas con el lugar en el que fueron cometidos los hechos, identificando particularmente los ocurridos en el transporte público,, con la finalidad de que sea un instrumento en la revisión y dictamen de iniciativas relacionadas con esta materia.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO**.- Publíquese el presente acuerdo en la "Gaceta del Gobierno".

**ARTICULO SEGUNDO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México a los días del mes de 2010.

**VICEPRESIDENTE DIP. CRISOFORO HERNÁNDEZ MENA.** Gracias, diputada Angélica.

Se registra la iniciativa y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 47, fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se encomienda a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia y Equidad de Género, para su estudio.

Para dar trámite al punto número 13 del orden del día, se otorga el uso de la palabra al diputado Constanzo De la Vega Membrillo, quien a nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México, adicionando el artículo 292 Bis.

**DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO.** Muchas gracias, Presidente, con su venia.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA**

**DE LA HONORABLE "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 51, fracción II y 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, el que suscribe, diputado Constanzo De la Vega Membrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito someter a la consideración de esta "LVII" Legislatura, del Estado Libre y Soberano de México, iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de México, adicionando un artículo 292 Bis, con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El robo de autos, asegurados en México, creció un 16.6% en 2010, año en el que fueron robados un total de 78 mil 870 unidades frente a las 67 mil 653 unidades del año 2009, de acuerdo con la asociación mexicana de instituciones de seguros. Cifras de la misma dependencia, mencionan que del 2004, al 2010, en el país, el robo de autos, creció un 74.3%.

En 12 entidades federativas con mayor índice de robo, este delito aumentó en 2010, menos en la ciudad de México donde se redijo un 7.5% y en Baja California donde disminuyó el 27.9% con relación al año anterior.

Por el contrario, este tipo de delitos aumentó en 2010 en Tamaulipas un 106.1%; Durango 86.2%, Sinaloa 71.9%, Nuevo León 41.7%, Veracruz 29.2%, Jalisco 20.9%, Estado de México 14.5%, Chihuahua 13.3%, Morelos 9.5% y en el de Puebla 4.9%. El año pasado, de todos los autos robados, las autoridades pudieron recuperar 27 mil 759 unidades, o sea, el 35.2% del total.

Por otra parte, la AMIS precisó que el 53% de los robos de autos en 2010, fueron automóviles estacionados y el resto 47% fueron hurtos cometidos con violencia.

8 entidades federativas sumaron el año pasado 79% de todos los robos a nivel nacional, el Estado de México con 22% del total, el Distrito Federal con 18%, Nuevo León con 13%, Chihuahua 8%, Jalisco 8%, Sinaloa 5%, Tamaulipas 3% y Veracruz 2%, mientras que en los 24 estados restantes ocurrió el 21% de los robos.

Por lo anterior, la ciudadanía del Estado de México no se siente segura, respecto de su patrimonio vehicular, por lo que la iniciativa busca frenar la comercialización, posesión, traslado, enajenación y custodia de aquellos vehículos que han sido robados.

Si bien es cierto, los ciudadanos exigimos a la autoridad encargada de brindarnos seguridad, realice las acciones necesarias para frenar los altos índice de violencia e inseguridad que existen en nuestro Estado, la contraparte es que los ciudadanos hacemos poco por ayudar a frenar estos altos índices de violencia e inseguridad.

Las razones que muchos de los que somos propietarios de automóviles, en algunos casos,

se ven sorprendidos con la comercialización de autopartes a bajo precio, es de esta forma como la delincuencia logra permear al mercado automotriz, ofreciendo refacciones, partes de colisión, accesorios, llantas y un sinfín de piezas de automóviles, que provienen del despojo de las unidades de sus legítimos propietarios, mismos que muchas veces son despojados de éstos, aún a costa de su vida.

Por lo que la presente iniciativa busca hacer corresponsable al ciudadano de frenar la comercialización, ya sea en unidades completas o en partes de éstas. Muchos ciudadanos al adquirir un vehículo automotor, no tenemos el cuidado necesario de revisar que la documentación y posesión del vehículo sea legal, compramos argumentando la buena fe de este tipo de transacciones entre particulares o lotes dedicados a la venta de automóviles, lo que se traduce en la oportunidad del delincuente, para poder seguir comercializando unidades robadas o las partes de los vehículos robados.

Si bien es cierto, autoridad y ciudadanía deben trabajar de manera coordinada para frenar el robo de autos, si bien es cierto que poco hace la autoridad para dar certeza al ciudadano, cuando un ciudadano acude a las agencias especializadas de robo de vehículos con la que cuenta la Procuraduría, se encuentra en primera instancia con que tiene que hacer un pago por la verificación de procedencia del vehículo que está próximo a comprar, misma que según establece la Procuraduría de Justicia del Estado de México debe de ser gratuita y no recibe documento que ampare que acudió de manera voluntaria a verificar que no existe reporte de robos sobre la unidad que va adquirir.

Por lo anterior exigimos trabajo y responsabilidad a la autoridad judicial, pero de igual manera pedimos a los ciudadanos cumplir con las leyes vigentes para evitarse problemas judiciales por conducir un automóvil producto del robo de sus legítimos propietarios. Con esta reforma, buscamos que el ciudadano se sienta protegido en su patrimonio, toda vez que agotará los extremos legales para verificar la procedencia lícita del vehículo o de las autopartes que adquiera.

Con la reforma al Código Penal, no buscamos otra cosa, más que frenar el alto índice de vehículos a nuestro Estado, frenar la comercial de autopartes y sobretodo, evitar que el ciudadano se vea afectado en su patrimonio.

El Código Penal vigente establece las sanciones para quienes comenten el delito de robo, por lo que se busca tipificar aquellas conductas que aún sin haber cometido el robo, sí se vean beneficiados por la comercialización de las unidades y/o de sus partes.

Con esto, una vez más, el Grupo Parlamentario del PRD demuestra que es crítico de las situaciones que lastiman a la ciudadanía, como la inseguridad y la violencia en nuestra entidad, pero también somos propositivos y buscamos ante todo el beneficio de todos los mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta H. "LVII" Legislatura la siguiente iniciativa.

**DECRETO**

**LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.**

**DECRETA:**

Artículo 292 Bis. Se equipara al delito de robo en los siguientes términos, a quien aún sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores y se realice una o más de las siguientes conductas:

I. Desmantele uno o más vehículos robados; enajene, o trafique conjunta o separadamente la partes que lo conforman.

II. Enajene o trafique de cualquier manera, con uno o más vehículos robados.

III. Detente o posea un vehículo robado, salvo que demuestre la adquisición de buena fe.

IV. Custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o los medios de identificación originales de algún o algunos vehículos robados.

V. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero.

VI. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.

VII. Utilice el o los vehículos robados en la prestación de un servicio público o actividad oficial.

En esto casos, se impondrán de cinco a veinte años de prisión y de uno a tres veces el valor del vehículo robado.

Si bien en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución, sanción del delito o de ejecución de penas, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará la pena de prisión en una mitad más y se le inhabilitará por 20 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO**. Los propietarios de vehículos automotores que hayan realizado un contrato de compra-venta, sin verificar la procedencia del vehículo, contarán con un plazo de 120 días naturales a partir de la entrada en vigencia de la reforma al Código Penal, para que de manera voluntaria acudan a las agencias especializadas de robo de vehículos a realizar el trámite de verificación correspondiente.

**SEGUNDO**. La Procuraduría de Justicia del Estado de México, a través de las agencias especializadas de robo de vehículos, deberá verificar que el trámite sea gratuito y que de la revisión se entregue impreso, con fecha y sello de la dependencia, reporte de verificación de procedencia.

**TERCERO**. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

**CUARTO.** La presente ley entra en vigor al día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil once.

Muchas gracias.

Toluca, México, 10 marzo de 2011

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA**
**DE LA H LVII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE**
**Y SOBERANO DE MÉXICO**
**P R E S E N T E S**

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; el que suscribe Diputado Constanzo de la Vega Membrillo, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, me permito someter a la consideración de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, Iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de México, adicionando un artículo 292 Bis, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El robo de autos asegurados en México creció un 16,6% en 2010, año en el que fueron robados un total de 78.870 unidades, frente a las 67.653 unidades de 2009, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); cifras de la misma dependencia mencionan que de 2004 a 2010 en el país el robo de autos creció en un 74.3%

En doce entidades federativas, con mayor índice de robo, este delito aumentó en 2010, menos en la Ciudad de México, donde se redujo un 7,5%, y en Baja California, donde disminuyó el 27,9% con relación al año anterior.

Por el contrario, este tipo de delito aumentó en 2010 Tamaulipas (106,1%), Durango (86,2%), Sinaloa (61,9%), Nuevo León (41,7%), Veracruz (29,2%), Jalisco (20,9%), Estado de México (14,5%), Chihuahua (13,3%), Morelos (9,5%) y en el Puebla (4,9%).

El año pasado, de todos los autos robados, las autoridades pudieron recuperar 27.759, el 35,2% del total.

Por otra parte, la AMIS precisó que el 53% de los robos de autos en 2010 fueron de automóviles estacionados, y el resto (47%) fueron hurtos cometidos con violencia.

Ocho entidades federativas sumaron el año pasado el 79% de todos los robos a nivel nacional: Estado de México (con 22% del total), Distrito Federal (18%), Nuevo León (13%), Chihuahua (8%), Jalisco (8%), Sinaloa (5%), Tamaulipas (3%) y Veracruz (2%), mientras que en los 24 estados restantes ocurrió el 21% de los hurtos.

Por lo anterior la ciudadanía del Estado de México no se siente segura respecto de su patrimonio vehicular por lo que la iniciativa busca frenar la comercialización, posesión, traslado, enajenación y custodia de aquellos vehículos que han sido

robados.

Si bien es cierto los ciudadanos exigimos a la autoridad encargada de brindarnos seguridad, realice las acciones necesarias para frenar los altos índices de violencia e inseguridad que existen en nuestro estado, la contraparte es que los ciudadanos hacemos poco por ayudar a frenar estos altos índices de violencia e inseguridad.

La razón es que muchos de los que somos propietarios de automóviles, en algunos casos, se ven sorprendidos con la comercialización de autopartes a bajo precio, es de esta forma como la delincuencia logra permear al mercado automotriz ofreciendo refacciones, partes de colisión, accesorios, llantas y un sinfín de piezas de automóviles que provienen del despojo de las unidades de sus legítimos propietarios, mismos que muchas veces son despojados de éstos, aun a costa de su vida.

Por lo que la presente iniciativa busca hacer corresponsable al ciudadano de frenar la comercialización ya sea en unidades completas o en partes de estas; muchos ciudadanos al adquirir un vehículo automotor, no tenemos el cuidado necesario de revisar que la documentación y posesión del vehículo sea legal, compramos argumentando la buena fe en este tipo de transacciones entre particulares o lotes dedicados a la venta de automóviles, lo que se traduce en la oportunidad del delincuente para poder seguir comercializando unidades robadas o las partes de los vehículos robados.

Si bien es cierto autoridad y ciudadanía deben de trabajar de manera coordinada para frenar el robo de autos, también es cierto que poco hace la autoridad para dar certeza al ciudadano, cuando un ciudadano acude a las Agencias Especializadas de Robo de vehículos con las que cuenta la Procuraduría, se encuentra en primera instancia con que tiene que hacer un pago por la verificación de procedencia del vehículo que está próximo a comprar, misma que según establece la Procuraduría de Justicia del Estado de México, debe de ser gratuita, y no recibe documento que ampare que acudió de manera voluntaria a verificar que no existe reporte de robo sobre la unidad que va adquirir.

Por lo anterior exigimos trabajo y responsabilidad de la autoridad judicial pero de igual forma pedimos a los ciudadanos cumplir con las leyes vigentes para evitarse problemas judiciales por conducir un automóvil producto del robo de sus legítimos propietarios, con esta reforma buscamos que el ciudadano se sienta protegido en su patrimonio, toda vez que agotará los extremos legales para verificar la procedencia lícita del vehículo o de las autopartes que adquiera.

Con la reforma al Código Penal no buscamos otra cosa más que frenar el alto índice de robos de vehículos en nuestro Estado, frenar la comercialización de autopartes y sobre todo evitar que el ciudadano se vea afectado en su patrimonio.

El Código Penal vigente establece las sanciones para quienes cometen el delito de robo, por lo que se busca tipificar aquellas conductas que aun sin haber cometido el robo, si se vean beneficiados por la comercialización de las unidades y/o de sus partes.

Con esto una vez más el Grupo Parlamentario del PRD demuestra que es crítico de las situaciones que lastiman a la ciudadanía como la inseguridad y la violencia en nuestra entidad, pero también somos propositivos y buscamos ante todo el beneficio de todos los mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta H. LVII Legislatura la siguiente iniciativa:

**ATENTAMENTE**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

| | |
|---|---|
| **DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO** | **DIP. CRISOFORO HERNANDEZ MENA** |
| **DIP. ARTURO PIÑA GARCIA** | **DIP. MARÍA ANGÉLICALINARTE BALLESTEROS** |
| **DIP. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA** | **DIP. FRANCISCO VELADIZ MEZA** |

**DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LOPEZ**

**ATENTAMENTE**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

| | |
|---|---|
| **DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS** |
| **DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO** | **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** |
| **DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN** | **DIP. MA GUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ** |
| **DIP. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA** | **DIP. JAEL MÓNICA FRAGOSO MALDONADO** |
| **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** | **DIP. FLORENTINA SALAMANCA ARELLANO** |
| **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** | **DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES** |

**PROYECTO DE DECRETO**
**DECRETO NÚMERO**
**LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**
**DECRETA:**

Artículo 292.- …

Artículo 292 Bis.- Se equipara al delito de robo en los siguientes términos, a quien aun sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores, y que realice una o más de las siguientes conductas:

I. Desmantele uno o más vehículos robados, enajene o trafique conjunta o separadamente las partes que los conforman;

II. Enajene o trafique de cualquier manera con uno o más vehículos robados;

III. Detente, posea, un vehículo robado, salvo que demuestre la adquisición de buena fe.

IV. Custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o los medios de identificación originales de algún o algunos vehículos robados;

V Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero;

VI. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos; y

VII. Utilice el o los vehículos robados en la prestación de un servicio público o actividad oficial.

En estos casos, se impondrán de cinco a veinte años de prisión y de uno a tres veces el valor del vehículo robado.

Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución, sanción del delito o de ejecución de penas, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará la pena de prisión en una mitad más y se le inhabilitará por veinte años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos.

**TRANSITORIOS**

**Primero**: Los propietarios de Vehículos automotores que hayan realizado un contrato de compra-venta, sin verificar la procedencia del vehículo, contarán con un plazo de ciento veinte días naturales a partir de la entrada vigencia de la reforma al Código Penal, para que de manera voluntaria acudan a las Agencias Especializadas de Robo de vehículos, a realizar el trámite de verificación correspondiente.

**Segundo**: La Procuraduría de Justicia del Estado de México a través de las Agencias Especializadas de Robo de Vehículos, deberá verificar que el trámite sea gratuito y que de la revisión se entregue impreso, con fecha y sello de la dependencia reporte de verificación de procedencia.

**Tercero**: Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

**Cuarto**: La presente Ley entra en vigor al día siguiente de publicación en el Periódico Oficial

"Gaceta de Gobierno".

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los días del mes de del dos mil once.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias diputado De la Vega.

Se registra la iniciativa y con fundamento en preceptuado en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI; 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se envía a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio.

En el punto número 14, se concede el uso de la palabra al diputado Crisóforo Hernández Mena, en nombre del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley de Educación del Estado de México.

**DIP. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA.** Con su venia señor Presidente.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO.**
**PRESENTES**

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I; 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; y 68, 70 y 73 de su reglamento, el que suscribe diputado Crisóforo Hernández Mena, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley de Educación del Estado de México, de conformidad con la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Desde una perspectiva de los derechos inherentes a todos los seres humanos, el derecho a la educación se encuentra establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la educación; misma que debe ser gratuita y obligatoria, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental; asimismo, señala que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y a las libertades fundamentales.

Sobre este particular, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el mismo sentido, establece el derecho de todo individuo a recibir educación, porque el Estado está obligado a impartir educación preescolar, primaria y secundaria; promover y atender todos los tipos, niveles y modalidades, incluyendo la superior, apoyar la investigación científica y tecnológica y atender el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

La educación como garantía constitucional es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad con derecho a un servicio público, ya que está destinada a satisfacer necesidades sociales, la educación no es nada más la enseñanza y el aprendizaje, sino también debe de preparar al hombre para vivir una vida en plenitud y a la vez fomentar en él, aprecio a la dignidad, a las personas, la fraternidad, la tolerancia, la libertad e igualdad.

En nuestro país la educación tiene su propia historia, en los primeros años de vida independiente, se distinguen por sus inquietudes educativas, Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, y el conservador Lucas Alamán. Estos pensadores a pesar de sus divergencias ideológicas y concepción de la forma de gobierno que debería de adoptar nuestro país, coincidían en que la instrucción era uno de los más poderosos medios de propiedad; por tanto la educación no debería concretarse a enseñar a leer y escribir, sino que se hacía necesario dotar a

los ciudadanos de una formación moral y política acorde al sistema de gobierno que adoptaba nuestra nación.

El crecimiento educativo de México, posteriormente en 1867, se vio interrumpido por las guerras constantes del país, atravesando desde el Porfiriato hasta la Revolución Mexicana. Como resultado de las exigencias sociales emanadas del movimiento revolucionario de 1910 los constituyentes de 1917, redactaron el artículo 3° inspirado en los principios de justicia social al consagrar la educación gratuita, obligatoria y laica para que todo niño mexicano tuviera acceso a ella. Estos principios establecidos en la nueva Constitución era necesario que los pusieran en práctica y fue en el gobierno de Álvaro Obregón cuando el país entró en la etapa constructiva y la educación recibía el impulso vital de José Vasconcelos, que desde la rectoría de la universidad impulsa y fundamenta la idea de la necesidad de establecer una Secretaría de Estado, que se encargue de la educación, a fin de diseñar y administrar todo lo referente a la cultura de la sociedad del México.

Estos antecedentes, sin duda, han marcado el desarrollo de nuestro sistema educativo, al respecto tenemos que desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas, actualmente se ha conseguido una cobertura significativa en educación primaria y una tasa importante de expansión en secundaria, media superior, además se ha fortalecido el sistema educativo a partir de cambios constitucionales importantes como la introducción a la carrera magisterial, en educación básica y consejos de participación social en las escuelas.

Este resultado ha sido también posible, gracias a importantes avances en la producción de datos del sistema educativo, tanto a través de la implementación anual, de la prueba enlace que ha llevado a la disponibilidad de un sistema de mediación y diagnóstico general, sobre el desempeño escolar a lo largo del tiempo, como a través de las informaciones, de la información generada por el sistema nacional de información educativa.

El rezago en educación básica se estima, es más de 30 millones de personas de más de 15 años que no concluyeron o que nunca cursaron la primaria o la secundaria, de ello la mitad de jóvenes entre 15 y 35 años. Actualmente los años de escolaridad promedio de las personas entre 15 y 24 años, es de 9.7 un indicador relevante, para entender el problema de la calidad educativa es el desempeño de estudiantes de primaria y secundaria, éste continúa siendo muy bajo y en lo referente a la comprensión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas.

Con respecto al Estado de México nuestra entidad se sostiene como el sistema educativo más grande del país, pues cuenta con un total de 4 millones 427 mil alumnos, 219 mil docentes y más de 23 mil escuelas, contabilizados durante el ciclo escolar 2009-2010, lo que significa que en la entidad se brinde educación a los 12 de cada 100 estudiantes de la República Mexicana, que representan 12.6% de la matricula nacional.

En cuanto a servicios educativos, el Estado de México tiene un nivel superior a la media nacional, como lo muestran los indicadores, la población analfabeta mayor a 15 años es de 6.4% frente a un promedio nacional de 8.2%. La población con primaria incompleta asciende a 12.3% frente al 15.8% nacional y el grado de escolaridad es superior en medio año, a la media nacional del 8.6 frente al 8.0.

De acuerdo con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado, por cada 100 niños que ingresan a la primaria en la entidad, 93 concluyen, proporción que desciende a 79; en caso de la secundaria, de cada 100 alumnos que concluyen la educación básica 84 ingresan a la educación media superior y de estos sólo 55 la constituyen. Este porcentaje es similar para la educación superior a la que ingresan 80 de cada 100 alumnos que concluyen la educación media superior.

No obstante que las cifras reflejadas, reflejan una alta asistencia escolar, el analfabetismo en algunos municipios es severo y superior, en varios puntos a la media nacional de 8.2%, la situación más apremiante se presenta en Sultepec con 27.5%, Donato Guerra con 27.4%, San Felipe del Progreso con 27% y en Tlatlaya con 26.7%.

En general, los resultados en escolaridad y

aprendizaje son insatisfactorios, persisten focos de inclusión y de deficiente desempeño, el Estado de México cuenta con un sistema educativo amplio y diversificado que aún enfrentan limitaciones en la cobertura de los servicios de preescolar, secundaria, media superior y superior con débil capacidad para incorporar las transformaciones tecnológicas a los nuevos conocimientos y para flexibilizarse, así como para atender la participación social.

A ello debe sumarse que hoy en día el Estado de México es una de las pocas entidades que carecen de una ley de educación, las disposiciones sobre la educación que rige nuestra entidad están contenidas en el Libro Tercero del Código Administrativo, pero dicho libro además de la educación, también regula el ejercicio profesional a la investigación científica y tecnológica, así como a la cultura, el deporte, las instituciones educativas y el mérito civil.

El Libro Tercero del Código Administrativo, aprobado en el 2001, regula disposiciones de diversa índole, que no necesariamente guarda relación con la materia educativa.

En razón a lo anterior, las disposiciones contenidas en este dicho libro, consecuentemente resultan poco acordes a nuestra realidad para afrontar la tarea educativa del Estado, ya que los servicios educativos se han ampliado de manera excepcional al multiplicarse escuelas de diferentes tipos, niveles y modalidades, diversas en la pedagogía y diferentes planes y programas de estudio.

Tal situación ha provocado y continuará provocando hasta en tanto no se corrijan severas incongruencias entre las nuevas exigencias sociales y las limitaciones normativas del Libro Tercero del Código Administrativo, que nuestro marco jurídico sea ajeno a las grandes transformaciones que en la normatividad educativa ha sufrido en el ámbito nacional.

En este marco, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional, consideran la inminente necesidad de fortalecer el marco jurídico que regule los servicios educativos en la entidad, argumentamos que es preciso crear una Ley de Educación del Estado de México que integre un sistema educativo adecuado para la sociedad, acorde con la normatividad federal, la participación social y ciudadana, así como por los nuevos retos educativos, por ello, necesitamos mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje, abrir oportunidades más congruentes, con las necesidades y demandas actuales. En suma, integrar la participación de todos y cada uno de los sectores institucionales y particulares que tienen interés especial en el desarrollo educativo del Estado.

Consideramos pertinente la creación de esta ley y su puesta en vigor, así como su efectiva aplicación, en el presente proyecto de ley, se considera plasmar el fundamento legal para regular la educación, de conformidad con lo establecido en el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General de Educación.

El presente proyecto, integrado por 8 títulos y 32 capítulos, que contienen un total de 164 artículos, plantea:

- Que la educación es un proyecto fundamental del ser humano que tiene como propósito su desarrollo integral, es un medio fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura, contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, es factor determinante para la adquisición de conocimientos para formar a mujeres y hombres con sentido de responsabilidad y solidaridad social, para que sean auténticos, reflexivos y analíticos,
- Que los fines de la educación serán, contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerzan plenamente sus capacidades, fomentar la cultura democrática, promover la educación para la paz, la tolerancia y el respeto a la diversidad humana, fomentar la ciencia, la tecnología y las instituciones que estimulen la investigación, la innovación científica y tecnológica, proteger, acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural del Estado y coadyuvar en el fortalecimiento de los tipos, niveles y modalidades de educación entre otros.
- Que el criterio que orientará a la educación, se basará en los resultados del progreso científico, artístico, tecnológico y humanista, luchará contra la ignorancia y los efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

• Que en el Estado, todo individuo, tiene el derecho inalienable e imprescindible a recibir educación con las mismas oportunidades de acceso, calidad y permanencia en todos los tipos, niveles y modalidades, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables, prever la evaluación del Sistema Educativo Estatal para que los servicios presentados por las instituciones estatales, municipales y organismos descentralizados o por los particulares, una autorización o reconocimiento de validez de estudios, sean motivo de revisión permanente y sistemática y que los maestros, alumnos, padres, de familia y la sociedad en general, conozcan la pertinencia y calidad de aquellos servicios.

• Que la educación constituye una actividad prioritaria del Estado, que por las inversiones educativas que realizan las autoridades educativas, se consideran de utilidad e interés social. Para tal efecto, el Estado y los municipios, al elaborar sus respectivos programas de gobierno, procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar los recursos presupuestarios necesarios, para tal fin.

• La obligatoriedad del Estado para atender, promover y brindar la educación básica, media y media superior, así como el impulso de la educación superior. De igual forma apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, nacional y universal.

• Que la educación que imparte el Estado, será de calidad gratuita, laica e incluyente.

• Los tipos, niveles y modalidades de la educación, misma que comprende la educación básica, media superior y superior, así como el apoyo a la educación especial, la indígena, para adultos mayores, la extraescolar y de formación para el trabajo.

• Las atribuciones de las autoridades educativas, locales en concurrencia, con la autoridad educativa federal, así como las que en forma explosiva realiza el Estado y los Municipios en el ámbito de su competencia.

• El desarrollo de un Programa de Educación Estatal en el que se determinen los objetivos, estrategias y lineamientos para dar cumplimiento a las disposiciones y fines, contenido en la presente ley.

• Los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los educadores y educandos, así como de los particulares que imparten educación.

• Los medios para promover la participación social de las autoridades educativas estatales y municipales, de los padres de familia, de los directivos de las escuelas, maestros, alumnos, así como de los demás miembros de la comunidad, interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley de Educación del Estado de México, para que de estimarla procedente, se apruebe en sus términos.

**ATENTAMENTE**
**DIPUTADOS DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**
**DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

Es cuanto Presidente.

Toluca, México, a 10 de marzo de 2011

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA**
**DIRECTIVA DE LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTES**

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; y, 68, 70 y 73 de su Reglamento, el que suscribe Dip. Crisóforo Hernández Mena, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Educación del Estado de México, de conformidad con la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Desde una perspectiva de los derechos inherentes a todos los seres humanos, el derecho a la educación se encuentra establecido en el artículo

26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la educación, misma que debe ser gratuita y obligatoria, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. Asimismo, señala que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y a las libertades fundamentales.

Sobre este particular el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el mismo sentido establece el derecho de todo individuo a recibir educación. Por lo que el Estado está obligado a impartir educación preescolar, primaria y secundaria; promover y atender todos los tipos, niveles y modalidades, incluyendo la superior; apoyar la investigación científica y tecnológica, y alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

La educación que imparta el Estado, en nuestro país, será invariablemente obligatoria, gratuita y laica, el criterio con que se debe orientar este servicio público se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, además será democrática y nacionalista.

La educación como garantía constitucional es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Como derecho, es un servicio público, ya que está destinada a satisfacer necesidades sociales, la educación no es nada más la enseñanza y el aprendizaje, sino también debe preparar al hombre para vivir una vida en plenitud y a la vez, fomentar en él, el aprecio de la dignidad de las personas, la fraternidad, la tolerancia, la libertad e igualdad.

La educación es, en sí, un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), es una herramienta privilegiada para el cambio social y para la construcción de un mundo más justo. Es, una forma eficaz para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación, pero sobre todo es un factor imprescindible en el desarrollo de las naciones.

En nuestro país, la educación tiene su propia historia, en los primeros años de vida independiente se distinguen por sus inquietudes educativas Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías y el conservador Lucas Alamán. Estos pensadores a pesar de sus divergencias ideológicas y concepción de la forma de gobierno que debería adoptar nuestro país, coincidían en que la instrucción "era uno de los más poderosos medios de prosperidad" por tanto, la educación no debería concretarse a enseñar a leer y escribir, sino que se hacía necesario dotar a las ciudadanos de una formación moral y política acorde al sistema de gobierno que adoptara nuestra nación.

No obstante no fue sino hasta la Constitución de 1857 que en el artículo tercero constitucional, se afirma que "la enseñanza es libre, la ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir". Posteriormente para 1867, Juárez promulgo la Ley de Instrucción Pública en la que se contempla la instrucción primaria "gratuita para los pobres y obligatoria en los términos que expondrá el reglamento".

El crecimiento educativo de México posteriormente a 1867 se vio interrumpido por las guerras constantes del país atravesando desde el Porfiriato hasta la revolución mexicana. Como resultado de las exigencias sociales emanadas del movimiento revolucionario de 1910, los constituyentes de 1917 redactaron el artículo 3° inspirado en los principios de justicia social al consagrar la educación gratuita, obligatoria y laica, para que todo niño mexicano tuviera acceso a ella. Estos principios establecidos en la nueva Constitución era necesario que los pusieran en práctica y fue en el gobierno de Álvaro Obregón cuando el país entro en la etapa constructiva y la educación recibe el impulso vital de José Vasconcelos, que desde la Rectoría de la Universidad impulsa y fundamenta la idea de la necesidad de establecer una Secretaria de Estado que se encargue de la educación a fin de diseñar y administrar todo lo referente a la cultura que la sociedad del México.

Estos antecedentes, sin duda, han marcado el desarrollo de nuestro sistema educativo, al respecto tenemos que desde la creación de la Secretaria de Educación Pública en 1921, se

han alcanzado importantes logros en las últimas décadas. Actualmente, se ha conseguido una cobertura significativa en educación primaria, y una tasa importante de expansión en secundaria, media superior y superior. Además, se ha fortalecido el sistema educativo a partir de cambios institucionales importantes como la introducción de la Carrera Magisterial en educación básica y los Consejos de Participación Social en las escuelas.

Este resultado ha sido también posible gracias a importantes avances en la producción de datos del sistema educativo, tanto a través de la implementación anual de la prueba ENLACE, que ha llevado a la disponibilidad de un sistema de medición y diagnóstico general sobre el desempeño escolar a lo largo del tiempo, como a través de la información generada por el Sistema Nacional de Información Educativa.

No obstante los importantes avances, aún persisten retos importantes en la educación. Los más importantes son la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de tecnología e información. Otro reto ligado al anterior es superar la desvinculación entre la educación media superior y superior y el sistema productivo.

El rezago en educación básica se estima en más de 30 millones de personas de más de 15 años que no concluyeron, o que nunca cursaron, la primaria o la secundaria. De ellos, la mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años. Actualmente los años de escolaridad promedio de las personas entre 15 y 24 años, es de 9.7. Un indicador relevante para entender el problema de la calidad educativa es el desempeño de estudiantes de primaria y secundaria. Éste continúa siendo muy bajo en lo referente a la comprensión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas.

Con respecto al Estado de México, nuestra entidad se sostiene como el Sistema Educativo más grande del País, pues cuenta con un total de 4 millones 427 mil alumnos, 219 mil docentes y más de 23 mil escuelas, contabilizados durante el Ciclo Escolar 2009-2010, lo que significa que en la entidad se brinda educación a 12 de cada 100 estudiantes en la República Mexicana, que representan 12.6% de la matrícula nacional.

En cuanto a servicios educativos, el Estado de México tiene un nivel superior a la media nacional, como lo muestran los indicadores: la población analfabeta mayor de 15 años es de 6.4%, frente a un promedio nacional de 8.2%; la población con primaria incompleta asciende a 12.3%, frente a 15.8% nacional, y el grado de escolaridad es superior en medio año a la media nacional (8.6 frente a 8.0).

De acuerdo con el Instituto de Información e Investigación Geográfica Estadística y Catastral del Estado (IGECEM), por cada 100 niños que ingresan a la primaria en la entidad, 93 la concluyen; proporción que desciende a 79 en el caso de la secundaria. De cada 100 alumnos que concluyen la educación básica, 84 ingresan a la educación media superior y de éstos, sólo 55 la concluyen. Este porcentaje es similar para la educación superior, a la que ingresan 80 de cada 100 alumnos que concluyen la educación media superior.

No obstante que las cifras reflejan una alta asistencia escolar, el analfabetismo en algunos municipios es severo y superior en varios puntos a la media nacional (8.2%). La situación más apremiante se presenta en: Sultepec con 27.5%; Donato Guerra con 27.4%; San Felipe del Progreso con 27% y Tlatlaya con 26.7%.

En general, los resultados en escolaridad y aprendizaje son insatisfactorios, persisten focos de exclusión y de deficiente desempeño. El Estado de México cuenta con un sistema educativo amplio y diversificado que aún enfrenta limitaciones en la cobertura de los servicios de preescolar, secundaria, media superior y superior, con débil capacidad para incorporar las transformaciones tecnológicas y los nuevos conocimientos y para flexibilizarse, así como para alentar la participación social.

A ello debe sumarse que, hoy en día, el Estado de México es una de las pocas entidades que carece de una Ley de Educación. Las disposiciones sobre la educación que rigen nuestra entidad, están contenidas en el Libro Tercero del Código Administrativo, pero dicho Libro además de la educación, también regula el ejercicio profesional, a la investigación científica y tecnológica, así como a la cultura, el deporte, las instalaciones educativas y el merito civil.

El Libro Tercero del Código Administrativo

aprobado en 2001, regula disposiciones de diversa índole que no necesariamente guarda relación con la materia educativa. En razón de lo anterior, las disposiciones contenidas en dicho Libro, consecuentemente, resultan poco acordes con nuestra realidad para afrontar la tarea educativa del Estado, ya que los servicios educativos se han ampliado de manera excepcional, al multiplicarse escuelas de diferentes tipos, niveles y modalidades, diversas en la pedagogía y diferentes planes y programas de estudio.

Tal situación ha provocado y continuará provocando hasta en tanto no se corrijan severas incongruencias entre las nuevas exigencias sociales y las limitaciones normativas del Libro Tercero del Código Administrativo, que nuestro marco jurídico sea ajeno a las grandes transformaciones que la normatividad educativa ha sufrido en el ámbito nacional.

En este marco, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, considera la inminente necesidad de fortalecer el marco jurídico que regula los servicios educativos en la entidad, argumentamos que es preciso crear una Ley de Educación del Estado de México que integre un sistema educativo adecuado para la sociedad, acorde con la normatividad federal, la participación social y ciudadana, así como por las nuevos retos educativos. Para ello, necesitamos mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje, abrir oportunidades más congruentes con las necesidades y demandas actuales. En suma, integrar la participación de todos y cada uno de los sectores institucionales y particulares que tienen interés especial en el desarrollo educativo del Estado.

Consideramos pertinente la creación de esta Ley y su puesta en vigor, así como su efectiva aplicación.

En el presente proyecto de Ley, se considera plasmar el fundamento legal para regular la educación de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México y la Ley General de Educación.

El presente proyecto integrado por VIII Títulos y 32 Capítulos, que contienen un total de 164 artículos, plantea:

- Que la educación es un proyecto fundamental del ser humano que tiene como propósito su desarrollo integral, es medio fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura; contribuye al desarrollo al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y hombres con sentido de responsabilidad y solidaridad social; para que sean autocríticos, reflexivos y analíticos.
- Que los fines de la educación serán: contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plenamente sus capacidades; fomentar la cultura democrática; promover la educación para la paz, la tolerancia y el respeto a la diversidad humana; fomentar la ciencia, la tecnología y las actitudes que estimulen la investigación, la innovación científica y tecnológica; proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural del Estado; y, coadyuvar en el fortalecimiento de los tipos, niveles y modalidades de educación, entre otros.
- Que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, artístico, tecnológico y humanista, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
- Que en el Estado, todo individuo tiene el derecho inalienable e imprescriptible a recibir educación con las mismas oportunidades de acceso, calidad y permanencia en todos los tipos, niveles y modalidades, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
- Prevé la evaluación del Sistema Educativo Estatal, para que los servicios prestados por las instituciones estatales, municipales, organismos descentralizados o por los particulares con autorización o reconocimiento de validez de estudios, sean motivo de revisión permanente y sistemática, y que los maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general conozcan de la pertinencia y calidad de aquellos servicios.
- Que la educación constituye una actividad prioritaria del Estado, por lo que las inversiones educativas que realicen las autoridades educativas se considerarán de utilidad e interés social. Para tal efecto, el Estado y los municipios, al elaborar sus respectivos programas de gobierno, procurarán

fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar los recursos presupuestarios necesarios para tal fin.

- La obligatoriedad del estado para atender, promover y brindar la educación básica y media superior, así como el impulso de la educación superior. De igual forma, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, nacional y universal.
- Que la educación que imparta el Estado será de calidad, gratuita, laica e incluyente.
- Los tipos, niveles y modalidades de educación, misma que comprende la educación básica, media superior y superior, así como el apoyo a la educación especial, la indígena, para adultos mayores, la extra escolar y de formación para el trabajo.
- Las atribuciones de las autoridades educativas locales en concurrencia con la autoridad educativa federal, así como las que en forma exclusiva realiza el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia.
- El desarrollo de un Programa de Educación Estatal en el que se determinen los objetivos, estrategias y lineamientos para dar cumplimiento a las deposiciones y fines contenidos en la presente Ley.
- Los derechos y obligaciones de quines ejercen la patria potestad o tutela, de los educadores y educandos, así como de los particulares que impartan educación.
- Los medios para promover la participación social de las autoridades educativas estatales y municipales, de los padres de familia, directivos de escuelas, maestros, alumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación del Estado de México, para que, de estimarla procedente se apruebe en sus términos.

**A T E N T A M E N T E**
**"DEMOCRACIA YA. PATRIA PARA TODOS"**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

| | |
|---|---|
| **DIP. CRISOFORO HERNANDEZ MENA** | **DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO** |
| **DIP. ARTURO PIÑA GARCIA** | **DIP. MARÍA ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS** |
| **DIP. VICTOR MANUEL BAUTISTA LOPEZ** | **DIP. FRANCISCO JAVIER VELADIZ MEZA** |

**DIP. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA**

**ATENTAMENTE**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

| | |
|---|---|
| **DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS** |
| **DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO** | **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** |
| **DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN** | **DIP. MA GUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ** |
| **DIP. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA** | **DIP. JAEL MÓNICA FRAGOSO MALDONADO** |
| **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** | **DIP. FLORENTINA SALAMANCA ARELLANO** |
| **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** | **DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES** |

**PROYECTO DE DECRETO**
**DECRETO NÚMERO**
**LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**DECRETA:**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se expide la Ley de Educación del Estado de México, para quedar como sigue:

**LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE**

**MÉXICO**
**TÍTULO PRIMERO**
Del Sistema de Educación del Estado de México

**CAPÍTULO I**
Disposiciones Generales

**Artículo 1**.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general, tienen por objeto regular la educación que imparten el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

**Artículo 2.-** La educación es un proyecto fundamental del ser humano que tiene como propósito su desarrollo integral, es medio fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura; contribuye al desarrollo al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y hombres con sentido de responsabilidad y solidaridad social; para que sean autocríticos, reflexivos y analíticos.

**Artículo 3**.- En el Estado, todo individuo tiene el derecho inalienable e imprescriptible a recibir educación con las mismas oportunidades de acceso, calidad y permanencia en todos los tipos, niveles y modalidades, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

**Artículo 4**.- Todos los habitantes del Estado deberán cursar de forma obligatoria la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones aplicables. Atendiendo al derecho de todo individuo de recibir educación, es obligación de los padres o tutores que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación correspondiente a estos niveles.

**Artículo 5**.- La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a si mismas conforme a las leyes que rigen a dichas instituciones.

**Artículo 6.-** El Estado esta obligado a prestar servicios para que la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior; así como promover y atender -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativas, incluida la educación superior. De igual forma, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, nacional y universal.
Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y conforme a la función social educativa establecida en la presente Ley.

**Artículo 7**.- La educación que se imparta en el Estado, será conforme a los términos establecidos en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, la Ley General de Educación, las normas contenidas en la presente ley, los reglamentos y demás disposiciones aplicables en la materia.

**Artículo 8**.- Quedan sujetos a esta Ley y a las disposiciones jurídicas que de la misma emanen:

I. Los funcionarios encargados de las tareas educativas en el Estado.
II. Las instituciones de educación pública en cualquiera de sus tipos, niveles y modalidades a cargo del Estado.
III. Los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, que presten servicios educativos en la entidad.
IV. Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, conforme a los artículos 59 de la Ley General de Educación y 115 de esta ley.
V. Los educadores y los educandos, los que

ejercen la patria potestad o tutela y las asociaciones de padres de familia en aquéllas que específicamente les correspondan.

**Artículo 9**.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, compete al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación, a los ayuntamientos y a los organismos descentralizados en el ámbito de sus respectivas competencias, en la forma y términos que la misma establece y lo que prevea las disposiciones aplicables.

**Artículo 10**.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridad educativa estatal: Al Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Educación del Estado, así como a los organismos descentralizados que, en su caso, se establezcan para el ejercicio de la función educativa.
II. Autoridad educativa municipal: Al Ayuntamiento de cada municipio.
III. Autoridad educativa federal: A la Secretaria de Educación Pública de la Administración Pública Federal.
IV. Educación básica: A la educación preescolar, primaria y secundaria.
V. Educador: Al orientador, facilitador, promotor, coordinador y agente del proceso educativo.
VI. Educando: A la persona racional, reflexiva y creativa, a quien va dirigido el proceso educativo.
VII. Estado: Al Estado Libre y Soberano de México.
VIII. Incorporación: El proceso por el cual una institución educativa se integra oficialmente al sistema educativo estatal otorgándosele la autorización, validación y el reconocimiento de validez oficial de estudios.
IX. Institución particular: A la escuela que cuenta con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, administrada por particulares y sostenida con recursos privados en su modalidad de colegiaturas o aportaciones privadas.
X. Institución pública: La que ofrece servicios de educación de forma gratuita y es administrada por el Estado.
XI. Ley General: A la Ley General de Educación.
XII. Organismo descentralizado: A las instituciones que prestan servicios educativos de carácter estatal o municipal;
XIII. Secretaría: A la Secretaría de Educación del Estado de México.
XIV. Secretaría Federal: A la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal.
XV. Tipos y modalidades de educación: Comprende la educación inicial, básica, media superior, superior, especial, indígena, para adultos y de formación para el trabajo.

## CAPÍTULO II

Fines de la educación

**Artículo 11**.- La educación que se imparta en los términos de esta Ley, tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plenamente sus capacidades.
II. Favorecer el desarrollo de habilidades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica.
III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios, las instituciones nacionales y regionales, así como la valorización de las tradiciones y particularidades culturales del país y del Estado.
IV. Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional que es el español, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger e impulsar el desarrollo de las lenguas indígenas. Los habitantes de lenguas indígenas en el Estado de México, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español.
V. Fomentar la cultura democrática en todos los niveles educativos, dando a conocer

los principios fundamentales del Estado de Derecho e impulsar a los educandos a participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad.

VI. Respetar y difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

VII. Promover la educación para la paz, la tolerancia y el respeto a la diversidad humana;

VIII. Fomentar el interés humanista, la ciencia, la tecnología y las actitudes que estimulen la investigación, la innovación científica y tecnológica.

IX. Impulsar la creación artística, así como la adquisición, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores universales, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación y particularmente del Estado.

X. Promover en todos los tipos y niveles educativos la conciencia del uso racional de los recursos naturales y la responsabilidad personal, para lograr una vida en armonía con el medio ambiente y en particular desarrollar una cultura de agua; promoviendo prácticas como el uso eficiente, reuso y reciclaje.

XI. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana.

XII. Contribuir a la construcción de una cultura de la salud, promoviendo la educación física, la práctica del deporte, los hábitos de higiene y sana alimentación evitando así la obesidad infantil, así como la educación sexual y la erradicación de la violencia familiar.

XIII. Fomentar los valores de respeto, libertad, justicia, democracia, igualdad, solidaridad, tolerancia, equidad y las características que han identificado a la población del Estado de México: el trabajo, el ahorro y el bienestar social, la capacidad emprendedora, la responsabilidad, la creatividad, la honestidad, principios del cooperativismo, la voluntad para enfrentar retos, adversidades y una visión del futuro de sí mismo y de la sociedad y las características que han identificado a la población del Estado; así como propiciar el conocimiento y práctica de los derechos humanos y el respeto a los mismos.

XIV. Establecer la mejora continua en la calidad de los procesos académicos y administrativos del sistema educativo.

XV. Preparar a los alumnos de acuerdo a las necesidades actuales y futuras del Estado y del país, impulsando y facilitando la adquisición de las variadas formas de los lenguajes matemático, simbólico y artístico, incluyendo los idiomas extranjeros más usuales que demanda el entorno social, cultural y laboral de la entidad.

XVI. Promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

XVII. Desarrollar programas educativos para prevenir la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra adicción que afecte la salud física y mental del individuo;

XVIII. Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en todos los niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la información e informática con el propósito de dotar de modernas herramientas a los estudiantes del Estado como una forma de prepararlos para comprender y adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en el que vivimos.

XIX. Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural del Estado y hacerlos accesibles a la colectividad.

XX. Incorporar asignaturas relacionadas con la enseñanza de algún idioma extranjero, en todos los niveles, tipos y modalidades educativas.

XXI. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.

**Artículo 12**.- El criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, artístico, tecnológico y humanista, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

I. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
II. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia y soberanía política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.
III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
IV. Preservará los valores éticos de la libertad, la justicia, la paz, la honradez, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la autoestima y sentido crítico, y todos aquellos que contribuyan a una mejor convivencia humana.
V. Considerará las necesidades educativas de la población de la entidad y las características particulares de los grupos sociales que la integran, respetando, protegiendo e impulsando su diversidad cultural.

**Artículo 13**.- La educación que imparta el Estado, será:

I. De calidad, impartida por profesionales de la enseñanza, en instalaciones apropiadas, con contenidos, recursos didácticos y metodológicos acordes a los servicios educativos.
II. Gratuita, las donaciones destinadas a dicha educación, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones por el servicio educativo.
III. Laica, manteniendo su carácter autónomo a cualquier doctrina religiosa.
IV. Incluyente, todos los individuos podrán participar sin distinción alguna.

Artículo 14.- Los particulares que presten servicios de educación preescolar, básica, media superior y superior en el Estado, deberán ajustarse, sin excepción, a lo que establece el artículo 3º Constitucional, y a los fines y criterios dispuestos en los artículos 11 y 12 de esta Ley.

## CAPÍTULO III

De las autoridades y sus atribuciones

**Artículo 15.-** Son atribuciones de las autoridades educativas estatales, en concurrencia con la autoridad educativa federal:

I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones II y IX del artículo 16 de esta Ley, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y Estatales.
II. Determinar y formular planes y programas de estudio distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12 de la Ley General.
III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción X del artículo 16 de esta Ley, de acuerdo con los lineamientos generales que expida la Autoridad Educativa Federal.
IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares.
V. Editar libros y producir otros materiales de apoyo didáctico, incluyendo medios en lengua indígena, que favorezcan el proceso educativo, distintos a los libros de texto gratuitos.
VI. Prestar servicios de consulta a través de

bibliotecas públicas y medios electrónicos de acceso a la información, con el fin de apoyar al sistema educativo estatal, a través de la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística.

VII. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa.

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica vinculándolo con el sector productivo y social.

IX. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y deportivas en todas sus manifestaciones.

X. Ofrecer orientación y apoyo a los padres de familia o tutores, en los procesos de integración y desarrollo familiar que impacten en el trabajo escolar.

XI. Fomentar las relaciones internacionales en materia de intercambio, investigación, cooperación educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, educación física y deportiva.

XII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias.

XIII. Las demás que con tal carácter establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.

El Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios con la autoridad educativa federal para coordinar o unificar las actividades educativas a las que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, le confiere el artículo 13 de la Ley General.

**Artículo 16**.- Son atribuciones de la autoridad educativa estatal las siguientes:

I. Promover el fortalecimiento de la educación pública en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.

II. Prestar los servicios de educación preescolar, básica y media superior, - incluyendo la indígena, para adultos mayores- la especial, la normal y demás para la formación de maestros.

III. Proponer a la autoridad educativa federal, los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

IV. Promover la educación indígena, - bilingüe y bicultural -, con la adecuada preparación y capacitación de profesores.

V. Promover la educación especial para que los discapacitados, logren un mayor desarrollo de la personalidad y se favorezca su integración social.

VI. Establecer las bases conforme a las cuales la Secretaría, en coordinación con la autoridad educativa federal y la Secretaría General de Gobierno, prestará servicios educativos a las personas que se encuentren internas en los Centros de Prevención y Readaptación Social del Estado, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad.

VII. Establecer progresivamente escuelas de tiempo completo de educación básica, que impulsen y favorezcan el desarrollo de competencias definidas en los planes y programas de estudio.

VIII. Publicar en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, los planes y programas de estudios que la autoridad educativa federal determine.

IX. Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respecto al calendario fijado por la autoridad educativa federal.

X. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine.

XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos

generales que la autoridad educativa federal expida.

XII. Otorgar, negar y/o revocar la autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la que la autoridad educativa federal determine.

XIII. Celebrar acuerdos, convenios y contratos con la autoridad educativa federal, los municipios de la entidad y los particulares, a efecto de cumplir eficientemente las atribuciones que en esta materia le encomienda la Ley General y la presente Ley.

XIV. Evaluar periódicamente el sistema estatal de educación de manera sistemática y permanente, a fin de identificar si las necesidades del servicio educativo, se encuentran acorde a los lineamientos generales de evaluación que la autoridad educativa federal determine, a efecto de solucionar oportunamente los problemas, optimizar los procedimientos e informar a la sociedad de los resultados.

XV. Establecer y mantener actualizado un registro estatal de los educandos y maestros, títulos académicos y establecimientos educativos que formen parte del sistema educativo estatal.

XVI. Participar con la autoridad educativa federal y municipal en la realización de las acciones necesarias para que los planteles educativos a cargo del Estado y de sus organismos descentralizados, cuenten con las condiciones de infraestructura física y equipamiento, para un adecuado funcionamiento.

XVII. Procurar los recursos para el apoyo de los servicios educativos a cargo del Estado y de sus organismos descentralizados, atendiendo a los principios de cobertura, calidad y equidad.

XVIII. Concurrir al financiamiento de los servicios educativos, proveyendo los recursos humanos y materiales que aseguren el cumplimiento de los fines contenidos en la presente Ley.

XIX. Favorecer en coordinación con las Instituciones del Sector Salud y asistenciales, la integración de los niños en edad escolar, condición vulnerable e infortunio familiar, a los servicios de educación básica.

XX. Propiciar en términos de la legislación federal sobre la materia y de la Ley General, la utilización de los medios de información y comunicación colectiva, para extender la educación y la cultura en la Entidad.

XXI. En coordinación con los municipios garantizar y velar por la seguridad de los escolares y de los establecimientos educativos.

XXII. Expedir los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia general en el ámbito de su competencia.

XXIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones.

**Artículo 17**.- Son facultades de la autoridad educativa municipal las siguientes:

I. Sin perjuicio de la concurrencia de la autoridad educativa federal y estatal, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo, nivel o modalidad.

II. Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos a los libros de texto gratuitos.

III. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica.

IV. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico - deportivas en todas sus manifestaciones.

V. Establecer y promover los espacios necesarios para el desarrollo deportivo, artístico y cultural de sus habitantes.

VI. Participar con la autoridad educativa federal y estatal en la construcción, conservación, mejoramiento y mantenimiento de las escuelas públicas ubicadas en el territorio municipal, de acuerdo con los programas y recursos disponibles.

VII. Celebrar convenios entre sí y con la autoridad educativa estatal, con el fin de

coordinar, unificar y realizar actividades educativas.

VIII. Vigilar que las escuelas cuenten con sistemas de seguridad para salvaguardar la integridad física de los educandos en casos de desastres naturales.

IX. Vigilar en el ámbito de su competencia la aplicación de esta Ley.

X. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 18**.- De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley General, las autoridades educativas federales, estatales y municipales, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa.

## CAPÍTULO IV

De los Servicios Educativos

**Artículo 19.-** La educación que impartan el Estado, los municipios que lo integran, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, tienen el carácter de un servicio público.

**Artículo 20.-** Será responsabilidad de las autoridades educativas estatales y municipales, realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría Federal les proporcione.

**Artículo 21**.- La autoridad educativa estatal y municipal, conformarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, el sistema estatal de formación, actualización, capacitación y superación profesional para docentes; cuyos propósitos serán:

I. La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica, incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación indígena, especial y de educación física.

II. La actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior.

III. La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de la entidad.

IV. El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa.

V. La regularización, con nivel de licenciatura, de educadores en servicio que por cualquier circunstancia tengan un nivel de estudios inferior al del perfil requerido.

VI. La motivación y desarrollo de aptitudes y competencias en los educadores para hacerlos partícipes de innovaciones en materia educativa, así como para seguir perfeccionando la propia formación, la práctica de trabajo en equipo, el estudio interdisciplinario.

VII. Impulsar el desarrollo y socialización de la investigación en el aula, que permita al docente utilizar alternativas de solución a la problemática que se le presente en su labor cotidiana.

VIII. Preparar a los educadores para que participen activamente en la elaboración de programas educativos, así como de materiales y equipos de enseñanza.

Las autoridad educativas podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a as finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de la necesidades hagan recomendables proyecto regionales.

**Artículo 22**.- El educador es y será el promotor, el coordinador y agente directo del proceso educativo. Las autoridades educativas estatales y municipales, así como las instituciones que promuevan y sostengan la educación en el Estado, deberán:

I. Proporcionarle todos los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento, actualización y en general fortalezcan su ejercicio profesional.

II. Otorgar un salario profesional para que los educadores alcancen un nivel de vida decoroso para su familia; puedan arraigarse

en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de una vida digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional.

III. Establecer mecanismos que propicien la permanencia de los maestros frente a grupo, con la posibilidad para éstos de obtener mejores condiciones de vida y un mayor reconocimiento social.

IV. Otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y gratificaciones a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien un mayor reconocimiento social por la labor magisterial.

**Artículo 23**.- Las autoridades educativas estatales y municipales, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con el fin de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y lograr la prestación del servicio educativo con mayor eficacia y eficiencia.

**Artículo 24**.- Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa del Estado.

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con las instalaciones y elementos necesarios para realizar su función en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa del Estado a sus trabajadores en igualdad de circunstancias.

La autoridad educativa estatal, podrá celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente artículo.

**Artículo 25**. - Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las leyes y disposiciones reglamentarias correspondientes. La prestación del servicio social será requisito previo para obtener el título o grado académico.

El servicio social se efectuará preferentemente en actividades relacionadas con la formación profesional del estudiantado y con una orientación de beneficio social.

**Artículo 26.-** Las instituciones del sistema educativo estatal expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos según el caso, a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con las disposiciones aplicables y demás requisitos establecidos en los programas de estudio correspondientes.

## CAPÍTULO V

De los Integrantes del Sistema Educativo

**Artículo 27**.- El sistema educativo estatal es el instrumento permanente de coordinación institucional, está constituido por la educación que imparta el Estado, los ayuntamientos, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

El sistema educativo del Estado está constituido por los siguientes elementos:

I. Los educandos y educadores.

II. Las autoridades educativas estatales y municipales.

III. El Consejo Técnico de Educación.

IV. Los planes, programas, métodos y materiales educativos.

V. Las instituciones educativas oficiales de los diferentes tipos, niveles y modalidades

del Estado y de sus organismos descentralizados.
VI. Las instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios;
VII. Las instituciones de educación superior a los que la Ley otorga autonomía.
VIII. La organización sindical de los trabajadores de la educación del Estado de México.
IX. Las agrupaciones de estudiantes.
X. Los padres de familia y tutores.
XI. Las asociaciones de padres de familia.
XII. Un organismo público autónomo especializado en evaluación para garantizar la calidad y el seguimiento de los servicios educativos en la entidad.

## CAPÍTULO VI

De la Planeación Educativa

**Artículo 28.-** El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría administrará, planeará y supervisará el desarrollo educativo del Estado, en los términos que esta Ley establece.

**Artículo 29.-** La planeación y coordinación institucional de la educación en el Estado, tendrá como finalidad:
I. Planear, programar, presupuestar, ejercer, vigilar y evaluar con responsabilidad, eficacia y transparencia los recursos económicos, materiales, servicios personales y profesionales, destinados a la operación del sistema educativo estatal.
II. Fortalecer el sistema de educación en todos sus tipos, niveles y modalidades.
III. Gestionar ante las Instancias correspondientes, el incremento de la inversión educativa en la entidad.
IV. Vincular de manera congruente la educación básica, media superior y superior.
V. Estimular y promover el eficaz desempeño del personal especializado, de apoyo y asistencia a la educación.
VI. Apoyar la formación inicial, continua y desarrollo profesional de los docentes.
VII. Estimular la investigación que propicie la creatividad y la innovación tanto a educadores como a educandos en todos los niveles educativos.
VIII. Elaborar materiales, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
IX. Promover la renovación y fortalecimiento de las escuelas normales de la entidad.
X. Promover la calidad en la educación.
XI. Las demás acciones que tiendan a mejorar de manera permanente el funcionamiento institucional.

**Artículo 30.-** La planeación y el desarrollo del sistema estatal de educación se orientará a proporcionar un servicio educativo pertinente, equitativo, innovador y de calidad en todos sus tipos y modalidades, teniendo como fundamento el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de la Federación, el Programa Estatal de Educación, el Programa Anual de Actividades y las demás disposiciones legales relativas al tema.

**Artículo 31**.- La planeación que realice la autoridad educativa estatal considerará la coordinación de acciones con la Federación y los municipios, la concertación con los sectores social y privado y la inducción de acciones de los particulares, de conformidad a lo previsto en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y la presente Ley.

**Artículo 32.-** La Secretaría coordinará la elaboración y operación de un Programa Estatal de Educación de acuerdo con las disposiciones federales vigentes, tomando en cuenta todos los tipos, niveles y modalidades educativos. Considerará la legislación educativa vigente, los aspectos cuantitativos y cualitativos de las actividades educativas presentes y futuras.

**Artículo 33**.- El Programa Estatal de Educación deberá cumplir con lo siguiente:
I. Presentarse en un lapso no mayor de sesenta días hábiles posteriores a la toma de posesión el Ejecutivo del Estado.
II. Desarrollar los fines y propósitos señalados en esta Ley.
III. Apoyarse en el Plan Nacional de Desarrollo,

Plan Estatal de Desarrollo, los diagnósticos y evaluaciones de los sistemas nacional y estatal de evaluación.

IV. Tomar en cuenta las propuestas de los sectores involucrados en la educación así como la de los Consejos de participación social, para mejorar la calidad de la educación.

V. Formularse con visión a largo plazo, contemplando el período de transición de los alumnos desde la educación inicial hasta la educación superior.

VI. Incluir en su estructura de forma enunciativa, no limitativa, el diagnóstico del sistema educativo estatal, estrategias de acción y mecanismos de seguimiento y evaluación.

Podrá ser modificado cuando así lo requieran las necesidades del entorno social y educativo con la participación de los organismos, instituciones y demás instancias que contribuyeron en su elaboración.

Deberá ser publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno y será de cumplimiento obligatorio para todo el sistema educativo estatal.

**Artículo 34.-** La autoridad educativa estatal integrará un sistema de información que contenga una base de datos actualizada y los indicadores necesarios para la planeación educativa.

**Artículo 35**.- Las autoridades educativas estatales y municipales, deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos, metas, estrategias y prioridades del Programa Estatal de Educación, a fin de cumplir con los fines y criterios señalados en esta Ley.

## CAPÍTULO VII

Del Financiamiento de la Educación

**Artículo 36**.- La educación constituye una actividad prioritaria del Estado y una inversión de alta utilidad social. Las inversiones educativas que realicen la Federación, el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares se considerarán de interés social.

Las autoridades educativas estatales y municipales, al elaborar sus respectivos programas de gobierno, procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar los recursos presupuestarios necesarios para tal fin.

**Artículo 37**.- La concurrencia de los recursos federales, estatales y municipales asignados a la educación, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público, serán intransferibles, inembargables e irreductibles, y deberán aplicarse exclusiva, íntegra y obligatoriamente a la prestación de los servicios y demás actividades educativas en el propio Estado.

La distracción, desviación, dispendio, negligencia e incorrecta aplicación de los recursos económicos destinados a la educación se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

**Artículo 38**.- El Ejecutivo del Estado deberá publicar, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el monto de los recursos que le son autorizados y transferidos por el Gobierno Federal. Así como el desglose, por nivel, programa educativo y establecimiento escolar; de su utilización y destino.

**Artículo 39**.- El monto del financiamiento que se destine a la educación pública no podrá ser inferior, en términos reales, al asignado para el ejercicio fiscal del año anterior. Este monto deberá ser conocido por los órganos de representación social que se especifican en esta Ley y corresponderá con la satisfacción de las demandas y requerimientos de la sociedad y del desarrollo estatal y nacional.

**Artículo 40**.- La autoridad educativa estatal, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada municipio reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos de la presente Ley estén a cargo de la autoridad municipal.

**Artículo 41**.- En el gasto educativo del Estado

se deberá tomar en cuenta, prioritariamente a los factores que determinan la calidad y mejoría de los servicios educativos, tales como el salario profesional de los profesores, la formación, actualización y capacitación de los docentes, la innovación e investigación educativa, la orientación vocacional, la dotación de materiales curriculares de calidad, los desayunos escolares, las becas, la inspección y la evaluación del sistema educativo estatal.

**Artículo 42**.- La autoridad educativa estatal, en un marco de respeto y colaboración prestará todas las facilidades para que, en su caso, la autoridad educativa federal, así como el Consejo Técnico de Educación del Estado, verifiquen la correcta aplicación de los recursos destinados al sistema educativo estatal.

**Artículo 43**.- La autoridad educativa estatal, conforme a las recomendaciones del Consejo Estatal Técnico de la Educación, propondrá a la Legislatura del Estado un presupuesto suficiente para la prestación del servicio educativo. Además, informará anualmente al pleno de la H. Legislatura del Estado del destino y utilización de esos recursos.

**Artículo 44.-** El presupuesto destinado a la educación se ejercerá en su totalidad y se entregará oportunamente para la ejecución de los programas y proyectos establecidos en el plan educativo, así como la ejecución de obras en beneficio de las escuelas públicas del Estado.

**Artículo 45**.- Para un mejor financiamiento de la educación, la autoridad educativa estatal podrá establecer convenios con instituciones educativas públicas y particulares, con la autoridad educativa federal, con los gobiernos de otras entidades de la república, y en su caso con organismos internacionales, con el objeto de apoyar programas de desarrollo educativo e investigación.

## CAPÍTULO VIII

De la Evaluación del Sistema Educativo

**Artículo 46**.- El sistema educativo estatal será evaluado en forma permanente durante todo el ciclo escolar a efecto de conocer los niveles de aprovechamiento de los educandos, los avances de planes y programas, el desempeño directivo y docente, la efectividad de aplicación de recursos y demás aspectos que conforman el sistema educativo, a fin de que se adopten las medidas que procedan en base a lo que establezca la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sección 4 del capítulo II de la Ley General.

**Artículo 47**.- Corresponde a la Secretaria por conducto del Consejo Técnico de Educación, la evaluación del sistema educativo en la entidad, sin menoscabo de la que realicen los municipios, en el ámbito de su competencia. Dicha evaluación serán sistemáticas y permanentes, y se llevarán a cabo por niveles, al término de cada ciclo escolar. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

**Artículo 48.-** La evaluación es un procedimiento riguroso para la toma de decisiones respecto del cambio, adecuación e innovación de la educación; aquélla debe ser totalizadora, delimitada a su contexto histórico, comprensivo y transformador; involucrará a los actores del proceso enseñanza-aprendizaje; y comprenderá al menos los siguientes campos:

I. Diagnóstico de la situación y calidad en la que se encuentra la educación.
II. Recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la ejecución de los proyectos, así como la distribución de los mismos en cada uno de los niveles educativos.
III. Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades en el logro de los mismos.
IV. Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos programáticos.
V. Los obstáculos encontrados en la ejecución del proyecto, causas que los generaron y propuestas para superarlos.
VI. Actualización de los proyectos.

**Artículo 49**.- Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por los municipios, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a la Secretaria todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que refiere este capítulo, en los términos que establece esta Ley.

**Artículo 50**.- La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio será un proceso permanente y sistemático que permita conocer si los objetivos programados se han cumplido, así como conocer los niveles de aprovechamiento de los educandos, y la pertinencia de las actividades del personal docente y no docente en los centros escolares. Los resultados de evaluación determinarán la planeación de los cursos del ciclo lectivo de cada instancia educativa, así como las medidas que deben ser adoptadas en los centros educativos para mejorar su funcionamiento.

**Artículo 51.-** Para conocer la evaluación del educando se referirá a los saberes propios de su nivel, así como al logro de los propósitos considerados en los planes y programas de estudio: la adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, y el desarrollo de habilidades y destrezas. Los planes y programas deberán contener los criterios, normas y procedimientos de evaluación y acreditación del aprendizaje. La evaluación servirá, también, de diagnóstico para estudios subsecuentes.

**Artículo 52**.- Las autoridades educativas estatales darán a conocer a los educadores, educandos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en la entidad. Cada plantel educativo deberán informar a los padres de familia o tutores acerca de las evaluaciones del alumno.

## CAPÍTULO IX

De la Equidad en la Educación

**Artículo 53**.- Las autoridades educativas estatales y municipales tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

**Artículo 54**.- Para garantizar el acceso y la permanencia de los individuos en los servicios educativos, las medidas señaladas en el artículo anterior estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones de desventajas económicas, sociales u otras, considerando las características particulares de los grupos y regiones.

**Artículo 55.-** El servicio educativo se ofrecerá en igualdad de condiciones y circunstancias a los hombres y mujeres sin discriminación alguna de género, raza, edad, religión, estado civil, preferencias sexuales, capacidades diferentes, ideología, grupo social, lengua y forma de vida.

**Artículo 56.-** Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo las autoridades educativas estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Realizarán programas educativos para erradicar el analfabetismo, así como para elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población de la entidad.
II. Atenderán de manera especial las escuelas que se encuentren en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas por considerarse con mayor posibilidad de rezagos, atrasos o deserciones, a través de la asignación de los recursos materiales y humanos necesarios para enfrentar los problemas educativos específicos de dichas localidades.
III. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades.
IV. Promoverán la creación de centros de desarrollo infantil, centros de integración

social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje del educando.

V. Crear, mantener y apoyar centros culturales y recreativos en las zonas que lo requieran.

VI. Prestarán servicios educativos que faciliten la terminación de la primaria y la secundaria a quienes no las hayan cursado.

VII. Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos sociales con requerimientos educativos específicos, a través de programas encaminados a superar los retrasos o las deficiencias en el aprovechamiento escolar.

VIII. Establecerán sistemas de educación a distancia.

IX. Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a los educandos.

X. Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia o tutores que les permitan dar mejor atención a sus hijos o pupilos.

XI. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza.

XII. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo.

XIII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en la presente Ley.

XIV. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos para alcanzar los propósitos mencionados en la presente Ley.

El Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, podrán gestionar y promover programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

## CAPÍTULO X

De la Calidad en la Educación

**Artículo 57**.- La calidad en la educación implica un proceso de mejora continua del sistema educativo, a través de las acciones que correspondan a las autoridades educativas, maestros y su organización sindical respectiva; alumnos, padres de familia y los diferentes sectores de la sociedad.

**Artículo 58.-** La autoridad educativa estatal orientará el sistema educativo hacia la calidad mediante estrategias y acciones, considerando entre otras, la equidad, pertinencia, relevancia, eficacia y eficiencia, que permitan mejorar cualitativamente los procesos y resultados educativos.

**Artículo 59**.- La autoridad educativa estatal promoverá en las escuelas una cultura de la calidad que tenga como finalidad el crecimiento y desarrollo de los individuos y el mejoramiento de su nivel de vida. Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a los grupos sociales más desprotegidos.

Debe garantizar que la inversión dirigida a los recursos humanos impacte en una mejor condición de vida para el trabajador y su familia, en el aprovechamiento escolar, la preparación académica del magisterio y en la eficiencia de la gestión escolar.

Proporcionará al personal docente los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

**Artículo 60**.- La Secretaría desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones:

I. Dotar los planteles educativos con instalaciones, personal y equipo adecuado para atender alumnos con necesidades especiales.

II. Construir y dar mantenimiento a los centros de educación especial.

III. Establecer programas de capacitación, actualización y superación pedagógica de los docentes.

IV. Mantener y rehabilitar permanentemente los edificios escolares, sus anexos y el equipo educativo.

V. Satisfacer la demanda de personal docente,

técnico, especializado y de apoyo a la educación, necesario para atender a todos los educandos en forma óptima.

VI. Proponer a la autoridad educativa federal la revisión permanente de los planes, programas y contenidos de estudio de la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que se imparte en los centros formadores de maestros, para adecuarlos al desarrollo socioeconómico, político, cultural, y a los avances en el campo de la investigación pedagógica.

VII. Proveer a las escuelas de equipos y materiales educativos adecuados a los avances de la ciencia y la tecnología.

VIII. Establecer y mantener una red de información educativa del Estado que enlace a los planteles de los diferentes niveles.

IX. Promover la edición de obras representativas de la cultura del Estado, nacional y universal, así como las de valor formativo para los educandos y los docentes.

X. Simplificar los procedimientos administrativos en la prestación de servicios educativos.

XI. Inspeccionar y supervisar los establecimientos privados que impartan educación, para que cumplan con los planes y programas de estudio oficiales, exigiendo rigurosidad y apego a los mismos, particularmente en aquellos de educación especial, para adultos, técnica y abierta.

**Artículo 61**.-La autoridad educativa estatal apoyará a las instituciones educativas públicas que desarrollen programas y proyectos de innovación para mejorar la calidad; y brindará asesoría técnico-pedagógica a las instituciones educativas particulares para el mismo fin.

## TÍTULO SEGUNDO
Del Proceso Educativo
### CAPÍTULO I
De los Tipos, Niveles y Modalidades de Educación

**Artículo 62.-** La educación que se imparta dentro del sistema educativo estatal se integra por:

a) De los tipos y niveles:

I. El tipo básico está compuesto por el nivel preescolar o inicial, el de primaria y el de secundaria.

II. El tipo medio superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a este, así como también la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.

III. El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes, está compuesto por la licenciatura, la Especialidad, la Maestría y el Doctorado, así como también por opciones terminales previas a la conclusión de la Licenciatura, comprende la Educación Normal en todos sus niveles y especialidades.

b) De las modalidades:

La educación a que se refiere el presente Capítulo tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta.

c) De las Vertientes:

En la entidad como apoyo al desarrollo de los tipos y niveles educativos operarán los siguientes servicios de educación: educación especial, indígena, para adultos mayores, específica, extraescolar y de formación para el trabajo.

### CAPÍTULO II
De la Educación Inicial

**Artículo 63**.- La educación inicial comprende la que se imparta en los centros de desarrollo infantil y en las guarderías y tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores a cuatro años de edad. Se orientará de acuerdo al plan y programas de estudio establecidos por las autoridades educativas federal y estatal de manera concurrente. Incluye la orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos.

El Gobierno del Estado creará los planteles necesarios para atender la demanda de educación inicial y fomentará en los padres o tutores que sus hijos o pupilos accedan a ella.

### CAPÍTULO III

De la Educación Básica

**Artículo 64**.- La educación de tipo básico está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Tiene como propósito el desarrollo integral y armónico de los educandos para que adquieran los valores cívicos y éticos, actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas que se requieran para su vida presente y futura, en beneficio propio y el de la sociedad.

**Artículo 65**.- Las autoridades educativas estatales y municipales brindarán todos los apoyos necesarios para garantizar la permanencia del educando hasta la conclusión de la educación básica; ampliará la cobertura y combatirá los rezagos, así como la implementación de otros programas educativos adecuados a las condiciones y necesidades de las regiones donde están ubicadas las escuelas.

**Artículo 66.-** La educación preescolar comprende tres años. Tiene como propósito estimular el desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor del niño en un contexto pedagógico adecuado a sus características y necesidades, así como el fomento de hábitos, habilidades y destrezas.

**Artículo 67**.- La educación primaria comprende seis grados. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos fundamentales; se propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolle sus capacidades para procesar y analizar información que les permita resolver problemas y tomar decisiones en forma individual y colectiva y formar en ellos una conciencia histórica, orientada por valores cívicos y democráticos.

**Artículo 68**.- La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprende tres grados educativos; será de carácter formativo, contribuirá al desarrollo armónico e integral del educando, estimulará la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes positivas.

**Artículo 69**.- Las escuelas de educación básica en el Estado contarán con profesores de carrera egresados de las escuelas normales. Para ejercer la docencia en la educación básica se requiere contar como mínimo con estudios concluidos de licenciatura en escuelas formadoras de docentes y estar titulado.

Los profesores en activo sin formación normalista que ejerzan la docencia en escuelas de educación básica, deberán capacitarse obligatoriamente en los Centros de Actualización Magisterial o en las escuelas normales, de acuerdo a los lineamientos que expida la Secretaría.

Para ejercer las funciones de dirección de los centros escolares, jefaturas de enseñanza y de inspección y supervisión de educación básica, el personal interesado en dichos cargos no sólo deberá satisfacer las condiciones del escalafón, sino que también deberá cumplir con los requisitos de habilidades y formación específica del puesto. En todos estos casos se accederá al puesto por concurso de oposición. Los titulares que ya poseen los cargos mencionados deberán actualizarse permanentemente para cumplir con eficiencia sus funciones, de acuerdo a los lineamientos que expida la Secretaría de Educación.

## CAPÍTULO IV

De la Educación Media Superior

**Artículo 70.-** La educación media superior comprende el bachillerato y los demás estudios equivalentes a éste, así como la educación profesional media que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Propiciará en el educando la adquisición de conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al conocimiento científico y humanista.

Desarrollará actitudes y habilidades para el autoaprendizaje; fomentará un sistema de valores, a partir de principios universales y nacionales racionalmente compartidos y estimulará la participación crítica en los problemas sociales. Además, capacitará al educando para acceder en forma creativa al mundo del trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel

superior.

**Artículo 71**.- La educación media superior podrá ser propedéutica, terminal o bivalente.

I. Será propedéutica la que se oriente hacia la formación del alumnado para continuar con estudios de educación superior.
II. Será terminal la que ofrezca una preparación que permita a quienes egresen su integración al sector productivo.
III. Será bivalente la que atienda al carácter terminal sin dejar de ser propedéutica.

**Artículo 72.-** La Secretaría, en colaboración con las instituciones públicas que imparten el tipo de educación a que se refiere este capítulo, hará las recomendaciones que estime pertinentes sobre el crecimiento, calidad y evaluación del servicio educativo, evitando duplicidades; buscará que los planteles que ofrezcan servicios de bachillerato o equivalente se complementen para responder a las necesidades de la entidad.

**Artículo 73**.- La educación media superior impartida en los planteles dependientes del Gobierno del Estado, estará permanentemente vinculada con las comunidades aledañas, principalmente en las zonas marginales, con el fin de hacer labor social, estudiar y promover soluciones a su problemática y difundir la cultura.

**Artículo 74.**- Secretaría desarrollará e impulsará el sistema de educación abierta en las instituciones de educación media superior que dependan de ella.

## CAPÍTULO V

De la Educación Superior

Artículo 75.- La educación superior es la que se imparte después del bachillerato y sus equivalentes. Comprende la educación tecnológica y la universitaria e incluye estudios encaminados a obtener la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado o cualquier otro estudio de posgrado, con el objetivo de producir y divulgar conocimientos del más alto nivel y de formar académica, científica y humanísticamente a los profesionales que se requieren para el desarrollo del Estado y del país, en los diversos aspectos de la cultura.

Las funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

**Artículo 76.-** La educación superior se impartirá por las siguientes instituciones:

I. La Universidad Autónoma del Estado de México, y las autorizadas e incorporadas a ésta a través de la Secretaria.
II. Las instituciones particulares de educación superior que se rigen por su propio estatuto constitutivo autorizado por las autoridades educativas, y aquéllas que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios.
III. Las escuelas normales, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, así como las demás instituciones públicas y particulares que ofrezcan estudios para la formación de docentes, en todos sus niveles y especialidades.
IV. Las instituciones superiores de educación tecnológica.
V. Las instituciones que ofrezcan educación que requieran como antecedente el bachillerato o su equivalente.

**Artículo 77**.- Las instituciones de educación superior se vincularán académicamente con los distintos tipos y niveles que conforman el sistema educativo estatal, así como con el entorno social y productivo en sus ámbitos local, nacional e internacional.

**Artículo 78**.- En los términos del artículo anterior, la Secretaría integrará y coordinará un consejo que coadyuve a la planeación, desarrollo, evaluación y supervisión de la educación media superior y superior en el Estado. Este organismo estará conformado de manera plural, incluyendo como invitados a representantes de la sociedad y tendrá las siguientes funciones:

I. Formular alternativas para el desarrollo de la educación de acuerdo a las necesidades económicas y socioculturales de la entidad.
II. Proponer políticas o estrategias y emitir recomendaciones respecto a la creación de nuevas carreras e instituciones en el Estado,

de acuerdo a las posibilidades económicas y socioculturales de la entidad.
III. Conocer sobre la supervisión en la aplicación de planes y programas de estudios que ofrezcan las instituciones educativas.
IV. Promover la comunicación y acuerdos interinstitucionales.
V. Emitir recomendaciones académicas ante las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de las instituciones particulares.
VI. Definir estándares educativos.
VII. Acreditar a las instituciones que cumplan con los estándares de calidad educativa.

## CAPÍTULO VI

De la Educación Especial

Artículo 79.- La educación especial está destinada a individuos con capacidades diferentes, transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Esta educación establecerá estrategias que permitan a personas con necesidades educativas especiales incorporarse a la educación en condiciones adecuadas a sus requerimientos y a su desarrollo integral.
Tiene como principios la equidad social y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, tiene como objetivo propiciar el logro de los propósitos de la educación básica a través del apoyo psicopedagógico y de la capacitación laboral de los alumnos con algún tipo de discapacidad intelectual, física, ambas, temporal o definitiva, o en situación de riesgo.

Los alumnos con aptitudes o capacidades sobresalientes también recibirán ayuda psicopedagógica para su formación integral. La educación especial se impartirá en planteles educativos oficiales y en los particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

**Artículo 80**.- Para cumplir con los fines de la educación especial, la Secretaría deberá brindar servicios en todos los niveles de educación básica, impulsando la media superior y superior, asignando a cada escuela donde exista la necesidad docentes y especialistas en educación especial, psicólogos, así como, trabajadores sociales que apoyen el proceso de integración escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales.
La asignación de dicho equipo se hará en las escuelas donde exista la necesidad y que no cuenten con un Centro de Educación Especial cercano.

**Artículo 81**.- Tienen derecho a la educación especial las personas que presenten determinada necesidad educativa especial temporal o permanente, resultante de alguna discapacidad sensorial, de lenguaje, de motricidad o intelectual, de capacidades y aptitudes sobresalientes, de situación de riesgo, o alguna otra causa que les impida acceder al currículo básico.

Para esto se aplicarán programas que permitan alcanzar dentro del mismo sistema los propósitos establecidos con carácter general para todos los alumnos, sin menoscabo de sus diferencias individuales o de grupo. Asimismo, se elaborará material didáctico específico para los alumnos que por su situación no se encuentren en posibilidad de acceder a la educación básica.

**Artículo 82**-. Los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes serán atendidos de manera adecuada a sus condiciones con el fin de promover la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje. Además, se establecerán mecanismos que favorezcan su movilidad escolar con base en la reglamentación que expidan las autoridades educativas federales y estatales.

**Artículo 83.-** Es facultad y obligación de la Secretaría diseñar e implantar los programas compensatorios preventivos, simultáneos y de corrección que favorezcan el adecuado desarrollo integral de las personas con necesidades educativas especiales. Así como establecer y formular las líneas generales para realizar las adecuaciones curriculares pertinentes y las dará a conocer a los docentes en servicio y en formación, de los diversos niveles educativos.

**Artículo 84.-** La evaluación de los resultados obtenidos por cada uno de los alumnos con

necesidades educativas especiales se realizará en forma permanente.

**Artículo 85**.- La Secretaría fomentará la investigación sobre educación especial. Los resultados de la misma serán la base de la evaluación y reformulación de programas de formación, actualización y atención a las necesidades educativas especiales. Para ello, podrá establecer convenios con las instituciones formadoras de docentes, universidades y organizaciones de atención a la discapacidad, para la planeación, intercambio, difusión y coordinación de trabajos de investigación.

Es obligación de la Secretaría difundir los programas de atención a las necesidades educativas especiales para el conocimiento, desarrollo, cobertura y participación de todas las instancias directamente involucradas y de la sociedad en general.

**Artículo 86**.- El servicio de educación especial se ofrecerá a las personas que lo requieran, de acuerdo con sus características en Centros de Educación Especial que integren a los alumnos en el ámbito de la escuela regular, o en centros de atención para las personas no integrables a la educación regular que permitan aprendizajes para la satisfacción de sus necesidades básicas y autonomía.

Los centros de educación especial serán atendidos por un equipo multidisciplinario, integrado por profesionales de diversas áreas del conocimiento quienes contaran con título legalmente expedido y cuya responsabilidad principal sea apoyar a las personas que requieran de los servicios de educación especial se constituirá por especialistas titulados y demás personal profesional que demande el servicio.

Los integrantes de este equipo deberán ejercer funciones acordes con su formación, estarán encargados del apoyo a las personas con necesidades educativas especiales, mediante la operación de procesos de detección, determinación, atención, evaluación y seguimiento. La función académica será exclusiva de profesores egresados de las instituciones formadoras de docentes.

**Artículo 87.-** Es derecho y obligación de los padres de familia o tutores de personas con necesidades educativas especiales recibir la debida orientación con el fin de interactuar con las instituciones en la integración de las personas con necesidades educativas especiales y participar en los programas de toma de decisiones así como en aquellos en que se promueva el desarrollo integral de sus hijos o pupilos.

Artículo 88.- El Gobierno del Estado tiene la obligación de asignar un presupuesto necesario para cumplir con los objetivos de la educación especial pública y distribuirlo eficientemente para lograr el desarrollo integral de las personas con necesidades educativas especiales. Para ello construirá, adaptará y mantendrá los centros educativos indispensables para este fin. En caso de requerirlo las personas con necesidades educativas especiales podrán contar con beca de estudios.

## CAPÍTULO VII

De la Educación Indígena

**Artículo 89-** La educación indígena es la que el Estado ofrece a los grupos indígenas de la entidad, para responder a sus características lingüísticas y culturales.

El Estado tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Por lo que, éste protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la educación.

**Artículo 90.-** Compete al Estado, municipios y organismos descentralizados, impartir la educación básica indígena, con apego a las disposiciones de los artículos 13 fracción I y 38 de la Ley General, respetando sus tradiciones y costumbres.

**Artículo 91**.- Las autoridades educativas estatales deberán reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a

la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

**Artículo 92**.- Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades educativas, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Asegurar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
II. Garantizar el desarrollo, operación y creación de las Universidades Interculturales en la Entidad, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
III. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles.
IV. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, en consulta con las comunidades indígenas y de acuerdo con las leyes de la materia.
V. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el Estado.
VI. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo educativo con programas especiales de educación y otorgar estímulos para favorecer su educación y participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria, así como velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

**Artículo 93**.- La educación básica en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas asentados en el territorio de la entidad, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

**Artículo 94**.- Mediante la impartición de la educación indígena, se preserva el conocimiento y desarrollo de las lenguas y valores culturales de los grupos étnicos asentados en la entidad, al tiempo que contribuye a elevar el nivel de vida de pueblos y comunidades, a facilitar el acceso a la preparación escolar y a la formación para el trabajo.

## CAPÍTULO VIII

De la Educación para los Adultos

**Artículo 95**.- La educación para los adultos comprende: entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Está destinada a las personas de quince años o más que no cursaron o concluyeron la educación básica.

**Artículo 96**.- El Gobierno del Estado, en concurrencia con la Federación o los municipios, impartirá educación a los adultos, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, semi escolarizada y abierta y en todos los niveles educativos.

Los estudios efectuados por los adultos en el sistema abierto tendrán validez oficial. Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos mediante exámenes parciales o globales, conforme a las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 97**.- La Secretaría organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos; otorgará las facilidades necesarias a sus trabajadores para estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria, media superior y superior.

Los pasantes de carreras de educación superior que participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a la educación para adultos, previa capacitación, tendrán derecho a que se les acredite como servicio social o prácticas profesionales, según sea el caso.

**Artículo 98**.- La Secretaría podrá, sin perjuicio de las disposiciones de las autoridades educativas federales, emitir lineamientos referidos en materia de formación para el trabajo en la entidad, con el

objeto de definir los conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como los procedimientos de evaluación correspondientes.

**Artículo 99**.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad que resulte productiva.

**Artículo 100.**- La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación integral y armónica para el trabajo se imparta por las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares, en el marco del artículo 45 de la Ley General y demás disposiciones de carácter legal aplicables.

La formación para el trabajo que se imparta en los términos del presente artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## CAPÍTULO IX

De la Educación Específica

**Artículo 101**.- En el sistema educativo estatal se consideran escuelas con funciones educativas específicas aquellas que no están comprendidas en la categoría de planteles de educación especial y centros de escolarización regular, como son las de readaptación para infractores de leyes penales, las de tratamiento para personas con adicción.

**Artículo 102**.- La Secretaría garantizará a toda la población que lo requiera, el acceso a las escuelas con funciones educativas específicas.

## CAPÍTULO X

De la Educación Extraescolar

**Artículo 103.-** Las autoridades educativas estatales y municipales están obligadas a promover e impartir servicios educativos con esta modalidad. La educación extraescolar complementa la educación escolar.

**Artículo 104**.- Para propiciar el desarrollo de las comunidades del Estado, la Secretaría impulsará la educación extraescolar, fomentando el trabajo colectivo e individual a través de las siguientes acciones:

I. Fomentar el desarrollo artístico y artesanal.
II. Rescatar las experiencias populares de artesanía regionales a través de acciones como ferias y muestras.
III. Crear escenarios especiales para la difusión y exposición de las obras de los creadores del arte.
IV. Llevar el arte y a sus creadores a las escuelas y a las plazas públicas.
V. Crear centros de encuentro musical con un amplio espacio para conciertos al aire libre.
VI. Ampliar la participación de los creadores y los usuarios de la cultura como hacedores, gestores y evaluadores de la política cultural en el Estado.
VII. Eliminar cualquier forma de censura hacia las manifestaciones culturales y sus maneras de difundirse.
VIII. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de los habitantes del Estado.
IX. Difundir programas educativos de preservación y mejoramiento de la salud.
X. Establecer programas educativos de conservación del medio ambiente y sus recursos naturales.
XI. Formar, en las colonias y barrios, redes de enseñanza-aprendizaje que respondan a sus intereses y difundan los oficios, las técnicas, el deporte, las artes, las ciencias y las humanidades.
XII. Fomentar la producción y difusión de libros, revistas y demás formas de comunicación.
XIII. Fomentar la lectura en las diferentes regiones de cada municipio.
XIV. Otras que propicien el desarrollo armónico e integral del individuo.

**Artículo 105.**- El Gobierno Estatal utilizará los medios masivos de comunicación y hará uso de los avances de la tecnología para impulsar el desarrollo de la educación extraescolar.

## CAPÍTULO XI

De la Formación para el Trabajo

**Artículo 106**.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, que permitan a quien la recibe, desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados.

**Artículo 107**.- La formación para el trabajo, será conforme a lo siguiente:

I. Se respetará lo establecido en el Artículo 45 de la Ley General de Educación respecto al régimen federal.
II. La autoridad educativa estatal se regirá por los lineamientos federales respecto a la definición de los conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las disposiciones que la propia autoridad estatal emita en atención a requerimientos particulares.
III. Las instituciones públicas y los particulares legalmente acreditados para tal efecto otorgarán los certificados, constancias o diplomas correspondientes.
IV. La autoridad educativa estatal podrá celebrar convenios para ofrecer formación para el trabajo así como para que ésta pueda ofrecerse por los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares en el marco de los lineamientos de carácter general.
V. Las autoridades estatales competentes de otras áreas de la administración pública definirán mecanismos que integren la oferta de formación para el trabajo. Tendrán como prioridad la atención de los grupos sociales excluidos.
VI. En la determinación de los servicios de formación para el trabajo, que serán ofrecidos por las dependencias y entidades del gobierno del estado, se considerarán las necesidades, propuestas y opiniones de los sectores productivos de la entidad.
VII. La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del apartado A) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## TÍTULO TERCERO

De la Educación que Impartan los Particulares

## CAPÍTULO ÚNICO

**Artículo 108.-** Los particulares podrán impartir educación en cualquiera de sus tipos, niveles y modalidades.

Por lo que concierne a la educación preescolar primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa de la dependencia que indique la Ley General. Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para el caso de nuevos estudios se requerirá una nueva autorización o el reconocimiento respectivo.

Las instituciones que obtengan la autorización o el reconocimiento respecto de sus planes o programas de estudio serán incorporadas al sistema educativo nacional.

**Artículo 109**.- La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios, cuando los solicitantes, además de reunir los requisitos legales exigidos, cuenten con lo siguiente:

I. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y reúna los requisitos previstos por la presente Ley.
II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la Secretaría determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento.

III. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante determine procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

**Artículo 110**.- El Ejecutivo del Estado publicara anualmente en la Gaceta del Gobierno y diarios de mayor circulación del Estado, una relación de las instituciones a las que haya expedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios durante el año anterior a la publicación. Asimismo, publicará oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión del acuerdo por el que se otorguen, nieguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.

**Artículo 111**.- De acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley General, los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tienen las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, en la Ley General, en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.
II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes.
III. Utilizar los libros de texto gratuitos y demás materiales didácticos que la autoridad educativa federal determine para la educación básica obligatoria.
IV. Proporcionar un mínimo de 5% de becas del total de la matrícula de la institución educativa de que se trate, para alumnos destacados académicamente y/o de escasos recursos económicos. Los planteles que estén en posibilidad de incrementar dicho porcentaje podrán hacerlo.
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la autoridad educativa estatal o escolar realice u ordene. Para el caso de las preparatorias abiertas, la autoridad educativa estatal será la que realice la evaluación.
VI. Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que realicen, donde se incluyan las estadísticas correspondientes, además de los aspectos relativos a la organización, escolaridad y técnicos de la institución.
VII. Cumplir con los requisitos y disposiciones previstos en esta Ley y sujetarse a los acuerdos y demás disposiciones que dicte la autoridad educativa para los planteles escolares en la entidad.

**Artículo 112**.- La Secretaría inspeccionará y vigilará los servicios educativos que presten los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, conforme a lo siguiente:

I. Para realizar una visita de inspección, la persona encargada deberá identificarse y mostrar la orden correspondiente expedida por la autoridad competente. La visita se realizará en el lugar y fecha indicada y versará sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden.
II. Desahogada la visita se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos testigos, mismos que serán nombrados por el visitado. En su caso se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado.
III. Los particulares podrán inconformarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inspección, presentando a las autoridades educativas la documentación relacionada con la visita.

**Artículo 113**.- La revocación de la autorización para impartir educación preescolar, primaria, secundaria, normal y de más para la formación de maestros de educación básica, procederá a juicio de la autoridad, cuando se hubiesen infringido los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la presente Ley y demás normas aplicables. Para revocar una autorización, la autoridad

deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

**Artículo 114**.- Cuando la revocación de la autorización otorgada a particulares para impartir educación en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la institución podrá seguir funcionando para evitar perjuicios a los educandos, a juicio y bajo vigilancia de la autoridad, hasta que concluya el año escolar.

**Artículo 115**.- Los particulares que impartan estudios en diferentes tipos, niveles y modalidades, sin autorización o sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionar esta circunstancia en su correspondiente publicidad y documentación, la cual deberá aceptar expresamente el educando o sus padres o tutores al ingresar a la institución educativa y deberán además registrarse en la Secretaría Federal, sin que esta circunstancia implique derechos a su favor o la incorporación al sistema educativo estatal.

Deberán cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del Artículo 12 de la Ley General; tomar las medidas para cumplir con lo establecido en el artículo 42 de la misma.

**Artículo 116**.- Para proporcionar educación abierta, por correspondencia y por cualquier medio de comunicación, los prestadores de estos servicios deberán cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad educativa estatal, así como con las leyes y reglamentos relativos al medio de comunicación que utilicen.

**Artículo 117**.- Los estudios realizados en el sistema educativo estatal tendrán validez en toda la República con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la Ley General.

Las instituciones del sistema educativo estatal, conforme a los lineamientos que establezca la Secretaria Federal, expedirá certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes.

**Artículo 118**.- Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, o por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

**Artículo 119.-** Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí con los del sistema educativo estatal, por niveles educativos, grados escolares, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

**Artículo 120**.- La Secretaría no reconocerá los documentos expedidos por instituciones que carezcan de reconocimiento de validez oficial de estudio.

**Artículo 121**.- Las autoridades educativas estatales, en concordancia con la Secretaría Federal, por acuerdo de su titular, establecerá procedimientos por medio de los cuales se puedan expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral.

**Artículo 122**.- Las personas que efectuaron su preparación en el extranjero podrán obtener la validez oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, Esta ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa.

## TÍTULO CUARTO
De los Derechos y Obligaciones
## CAPÍTULO I

De Quienes Ejercen la Patria Potestad o Tutela

**Artículo 123**.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela:

I. Obtener la inscripción escolar para que sus hijos o pupilos menores de dieciocho años reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior o, en su caso, la educación especial.
II. Coordinarse con las autoridades escolares y con los educadores en la solución de los problemas relacionados con la educación de sus hijos o pupilos.
III. Ser informados periódicamente del estado que guarda el proceso de enseñanza aprendizaje, así como sobre los aspectos formativos de sus hijos o pupilos.
IV. Formar parte de los consejos de educación y de las asociaciones de padres de familia.
V. Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca de la calidad y oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el centro escolar y ser informados de la atención a sus demandas.
VI. Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de su administración.
VII. Exigir el respeto a la lengua y cultura de sus hijos o pupilos por parte de autoridades, profesores y estudiantes de la institución educativa en la que estén inscritos sus hijos.
VIII. Hacer propuestas para la mejora del funcionamiento de la institución educativa en la que estén inscritos sus hijos, así como del sistema educativo en general.

**Artículo 124**.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela:

I. Hacer que sus hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en las escuelas oficiales o particulares con autorización o, en su caso, educación especial en dichos niveles.
II. Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas relacionados con los educandos.
III. Informarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijos o pupilos.
IV. Participar, de acuerdo con los educadores, en el tratamiento de los problemas de aprendizaje de sus hijos o pupilos.
V. Colaborar, en actividades que sean de su competencia, con los planteles educativos en los que estén inscritos sus hijos o pupilos.

## CAPÍTULO II

De los Educandos

**Artículo 125**.- Los alumnos de los diferentes tipos, niveles y modalidades tendrán derecho a:

I. Recibir educación de calidad.
II. Inscribirse en escuelas de educación pública para que realicen los estudios de preescolar, primaria, secundaria, de acuerdo con los requisitos establecidos.
III. Inscribirse en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades educativas especiales.
IV. Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, científicas, culturales, tecnológicas, sociales, deportivas y recreativas que realice la escuela.
V. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso correspondiente y los criterios para asignar calificaciones.
VI. Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de los estudios efectuados.
VII. Obtener becas cuando demuestren que sus recursos económicos son escasos, en los términos de los reglamentos respectivos.
VIII. Ser escuchados y atendidos por los docentes y las autoridades de su plantel en relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su actividad escolar.
IX. Integrar sociedades de alumnos para fortalecer la cultura de participación democrática.
X. Participar como miembros de la cooperativa escolar, recibir informes sobre su estado financiero y las utilidades correspondientes al término del ciclo escolar.
XI. Tener acceso gratuitamente a los servicios médicos que proporcione el Gobierno del Estado.

XII. Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos de las instituciones en las que están inscritos.
XIII. A la protección y cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
XIV. Desarrollar su autoestima y ser tratado con respeto y tolerancia a sus diferencias individuales.
XV. No interrumpir su proceso educativo sin que medie causa legal alguna, ni aún en caso de embarazo.

**Artículo 126**.- Es obligación de los educandos cumplir con las normas contenidas en los reglamentos de las instituciones educativas en las que están inscritos.

## CAPÍTULO III
De los Educadores

**Artículo 127.-** Los educadores deberán acreditar la preparación y capacidad necesarias para el desempeño del curso o asignatura que imparten, sujetándose a lo que establece la Ley General, esta Ley y las demás disposiciones aplicables para el ejercicio de la profesión.

**Artículo 128.-** Los docentes de educación básica y media superior destinarán el tiempo necesario de su nombramiento, a fin de atender para la institución, en la que laboran, funciones de fortalecimiento curricular, tales como la planeación, evaluación, seguimiento e investigación, y actividades curriculares en general.

**Artículo 129**- Los educadores dependientes de la Secretaría obtendrán un salario profesional suficiente para que ellos y sus familias satisfagan sus necesidades normales en el orden material, social y cultural, que les permita tener un nivel de vida digno, en los términos que establece el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 130**.- Las autoridades estatales garantizarán en todo momento la seguridad laboral y las mejores condiciones de trabajo a los educadores de las escuelas oficiales.

**Artículo 131**- El Ejecutivo del Estado otorgará los beneficios de la seguridad social a los servidores de la educación pública, de acuerdo con la ley vigente en la materia.

**Artículo 132.-** Los profesores de tiempo completo o cuya suma de horas sea equivalente, con plaza de base, tendrán derecho al año sabático y a becas para realizar estudios de profesionalización y estudios de posgrado.

**Artículo 133**.- Los candidatos a ingresar como alumnos a las escuelas normales públicas y particulares estarán sujetos a un proceso de evaluación diagnóstica, vocacional y académica de conformidad con la normatividad federal existente y con derecho a revisión a petición de parte.

**Artículo 134.-** Los docentes tienen las siguientes obligaciones:
I. Adecuar el proceso de enseñanza a las diferencias individuales del alumnado manteniendo una actitud abierta y respetuosa a la diversidad.
II. Fomentar una mayor socialización con los alumnos para reforzar la labor formativa de la familia.
III. Desarrollar actividades que propicien su integración con la comunidad.

## TÍTULO QUINTO
De los Planes y Programas de Estudio
## CAPÍTULO ÚNICO

**Artículo 135.-** Los planes y programas de estudio establecen las tareas y actividades educativas y permiten cumplir los objetivos de la propuesta para la educación en el Estado.

**Artículo 136**.- La autoridad educativa, en concurrencia con la Secretaría Federal, determinarán, y formularán los planes y programas de estudio a los que se refiere la fracción II del artículo 16 de esta Ley. Éstos deberán tener

articulación con los planes y programas de la educación básica.

**Artículo 137.-** En los planes de estudio que por ley corresponda elaborar a la Secretaría en cada tipo, nivel y modalidad se deberán establecer:

I. Los propósitos de formación general y específicos y, en su caso, de adquisición de las habilidades y las destrezas que correspondan a cada nivel educativo.
II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo.
III. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los educandos y los requerimientos del avance económico, social, político y cultural de las diferentes comunidades que conforman el Estado.
IV. La interrelación de la educación escolarizada y la no escolarizada para generar actividades que permitan al educando conocer los distintos aspectos de la realidad del Estado.
V. Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular y los niveles que constituyen los tipos educativos.
VI. Los recursos y materiales didácticos recomendables.
VII. Las estrategias didácticas y la metodología.
VIII. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación que permitan verificar que el educando ha cumplido con los propósitos de cada tipo, nivel y modalidad educativos.
IX. La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

**Artículo 138**.- La autoridad educativa estatal propondrá para su consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría Federal, contenidos regionales que, sin mengua del carácter nacional de los planes y programas de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones y demás aspectos propios de la Entidad y municipios respectivos.

**Artículo 139.-** Para cumplir con los planes, programas y contenidos en la educación básica, la educación especial, la educación para adultos y la educación para indígenas, la Secretaría dotará a las escuelas públicas de los materiales adecuados para el mejor desempeño de la tarea docente. Entre éstos, el libro de texto para cada asignatura de la educación básica será otorgado gratuitamente al inicio del curso escolar por las autoridades educativas.

Sin detrimento del libro de texto gratuito, la Secretaría podrá producir los materiales de apoyo que considere pertinentes a fin de ayudar al cumplimiento de los objetivos del plan y los programas de estudio.

**Artículo 140**.- Para lograr los fines y objetivos de la educación, se promoverá la utilización de metodologías de la enseñanza y el aprendizaje centradas en la participación activa del alumnado, la interacción social y el respeto a sus necesidades educativas.

**Artículo 141.-** En la elaboración de planes y programas de estudio que le correspondan, la Secretaría deberá considerar las opiniones relevantes del magisterio y de los diversos sectores de la sociedad, así como del Consejo Técnico de Educación.

**Artículo 142.-** Los planes y programas de estudio del sistema educativo del Estado se basarán en los fines y criterios establecidos en los artículos 11 y 12 de esta Ley.

**Artículo 143.-** Los planes y programas de estudio que determine la Secretaria Federal, así como las adecuaciones que por ley sean permitidas a la autoridad educativa local, serán publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

**TITULO SEXTO**
Del Calendario Escolar
**CAPÍTULO ÚNICO**

Artículo 144.- Los docentes y alumnos del sistema educativo del Estado deberán cumplir con los planes y programas de estudio oficiales, de acuerdo con el calendario escolar establecido, el cual deberá ser publicado oportunamente en el Periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado.

**Artículo 145**.- En días de calendario oficial las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente y a las actividades educativas con los educandos, de acuerdo con lo previsto en los planes y programas de estudio establecidos.

En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales o naturales, las autoridades educativas del Estado harán los ajustes que se requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo perdido.

Los maestros serán debidamente remunerados si la modificación al calendario escolar implica más días de clase para los educandos que los citados en calendario oficial.

**Artículo 146.-** La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá ser autorizada por la autoridad escolar correspondiente.
Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario escolar autorizado.

**TÍTULO SEPTIMO**
De la Participación Social
**CAPÍTULO I**
De los Consejos Escolares

**Artículo 147.-** En cada plantel educativo se constituirá un Consejo Escolar, que será un órgano colegiado integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

**Artículo 148.-** Será responsabilidad de la autoridad de cada institución pública y particular de educación básica vincularse activa y constantemente con la comunidad. Las autoridades educativas estatales y municipales darán toda su colaboración para tales efectos. La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela de educación básica opere un consejo escolar de participación social.

Este consejo:
a) Conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización.
b) Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y los educadores y autoridades educativas.
c) Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan perjudicar al educando.
d) Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos.
e) Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos.
f) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela, así como también propondrá los criterios de evaluación óptimos y necesarios para dar cumplimiento de esta Ley.
g) Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos.
h) Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar.
i) Alentará el interés familiar y comunitario

por el desempeño del educando.
j) Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos.
k) Promoverá convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares.
l) Podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

## CAPÍTULO II
De los Consejos Municipales

**Artículo 149**.- En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa estatal:
a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio.
b) Conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas.
c) Llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica del propio municipio;
d) Estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales.
e) Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
f) Hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio.
g) Podrá opinar en asuntos pedagógicos.
h) Coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar.
i) Promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares.
j) Promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa.
k) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares.
l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública.
m) Podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

## CAPÍTULO III
Del Consejo Estatal

**Artículo 150.**- El consejo estatal de participación social en la educación, es un órgano de consulta, orientación y apoyo, el cual se integrará por:
I. Padres de familia y representantes de sus asociaciones.
II. Maestros y representantes de sus organizaciones sindicales.
III. Autoridades educativas estatales.
IV. Autoridades educativas municipales.
V. Instituciones formadoras de maestros.
VI. Representantes de los sectores sociales de la entidad.

**Artículo 151.**- Corresponde al Consejo Estatal de Participación Social:
I. Realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño de espacios, mobiliario y equipos

y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios.

II. Hacer un seguimiento permanente, en el ámbito de su competencia, del funcionamiento y calidad de los servicios de educación básica así como de sus resultados, y proponer a las autoridades educativas, para su consideración, las medidas y reformas de carácter técnico que consideren y resulten pertinentes.

III. Emitir opinión fundada respecto a planes y programas de estudio que proponga la autoridad competente, las actualizaciones de libros de texto, los libros y materiales didácticos y los contenidos educativos, así como los requisitos académicos de los planes y programas de estudio de los particulares.

IV. Conocer las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los Consejos Escolares y Municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo.

V. Conocer los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborar con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.

VI. Los demás asuntos que el reglamento respectivo establezca.

**Artículo 152**.- Los consejos de participación a que se refiere este título se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas, ni religiosas.

## CAPÍTULO IV

De las Asociaciones de Padres de Familia

**Artículo 153**.- En cada institución de educación básica deberá constituirse una asociación de padres de familia que se acreditará ante las autoridades educativas estatales y municipales.

**Artículo 154.-** Las asociaciones de padres de familia deberán constituirse exclusivamente por padres de familia y tutores que cuenten con hijos o pupilos inscritos en el plantel y tendrán por objeto:

a) Representar ante las autoridades escolares y educativas los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados.

b) Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles.

c) Someter a consideración de los padres de familia y el alumnado, de forma enunciativa y no limitativa; la fijación de cuotas voluntarias, la contratación de servicios, la adquisición de bienes, entre otras.

d) Colaborar con las autoridades escolares y educativas en las actividades y campañas de beneficio social, cultural, sanitarias, de la salud y de educación ambiental y cultural que se efectúen en sus escuelas;

e) Decretar las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos establecidos en las fracciones anteriores.

f) Informar a las autoridades educativas estatales y escolares sobre cualquier irregularidad de que sea objeto el alumnado o el servicio que el establecimiento educativo preste a la comunidad escolar.

g) Informar a las autoridades educativas de cualquier irregularidad o anomalía cometida en detrimento del alumnado, del plantel educativo, la sociedad de padres de familia o la propia comunidad;

h) Rendir de forma escrita ante autoridades escolares, el alumnado y padres de familia un informe trimestral sobre el manejo, la utilización o destino de los recursos económicos o financieros económicos o financieros, recabados y erogados por contratación de servicios o adquisición de bienes.

i) Recavar las cooperaciones, previa entrega del recibo correspondiente, y sin que ello se constituya como condicionante para inscribir a los alumnos, entregar constancias, diplomas, certificados o documentos de naturaleza análoga.

j) Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos técnico-

pedagógico y laboral de los establecimientos educativos.

k) Las incidencias que surjan respecto al funcionamiento de las asociaciones de padres de familia serán resueltas por las disposiciones que establezca la autoridad educativa estatal competente para ello.

**Artículo 155**.- La organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetará a las disposiciones que la autoridad educativa señale.

**Artículo 156**.- Conjuntamente los padres de familia y autoridades escolares llevarán a cabo una rendición de cuentas al término de cada ciclo escolar en relación a las cooperaciones en numerario, bienes y servicios a que se hayan hecho acreedores durante el mismo.

## TÍTULO OCTAVO
De las Infracciones, Sanciones y Recursos
## CAPÍTULO ÚNICO

**Artículo 157.-** Para efectos de esta Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan servicios educativos, las siguientes:

I. Abstenerse de cumplir cualquiera de las obligaciones previstas en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, de la Ley General, de la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia.
II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, a excepción de los casos específicamente señalados por la Ley.
III. Realizar o permitir la publicidad o comercialización de bienes o servicios no autorizados dentro del plantel escolar notoriamente ajenos al proceso educativo.
IV. Ocultar a los padres o tutores las conductas del alumnado que deben ser de su conocimiento.
V. No utilizar los libros de texto y materiales educativos que la autoridad educativa autorice y determine para la educación primaria y secundaria.
VI. Dar a conocer antes de su aplicación los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación a quienes habrán de presentarlos.
VII. Incurrir en conductas que pongan en riesgo la salud o la seguridad del alumnado.
VIII. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna.
IX. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos legales correspondientes.
X. Incumplir con los lineamientos generales para el uso de material educativo en la educación primaria y secundaria.
XI. Ostentarse como plantel incorporado sin contar con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.
XII. Incumplir con lo dispuesto en el artículo108 de esta Ley, en lo relativo a abstener de mencionar en su publicidad o documentación que se trata de planteles educativos que no cuentan con la autorización o reconocimiento de validez oficial para impartir educación en todos los tipos, niveles y modalidades.
XIII. Impartir la educación primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de profesores de educación básica sin contar con la autorización correspondiente.
XIV. Imponer a los educandos medidas disciplinarias que resulten violatorias de sus derechos fundamentales.
XV. Realizar o favorecer de cualquier forma actividades políticas de cualquier tipo partidista dentro del plantel o en la prestación del servicio educativo.
XVI. Incumplir cualquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones reglamentarias que de ella se deriven.
XVII. Celebrar o favorecer cualquier tipo de actividad que resulte contraria al Principio

de Laicidad en la educación.

**Artículo 158**.- Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por la autoridad educativa competente en la forma siguiente:

I. Amonestación por escrito.
II. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario diario mínimo general vigente en la región del Estado donde se encuentra ubicada la institución educativa y en la fecha en la que se cometa la infracción.
III. Revocación temporal o definitiva de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondientes,
IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 149, además de la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo.

Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las normas específicas para ellos.

**Artículo 159**.- Cuando la Secretaría considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor, aplicando lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado para garantizar el derecho de audiencia.

**Artículo 160.**- La Secretaría dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás constancias que obren en el expediente.

**Artículo 161**.- Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socio - económicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia.

**Artículo 162**.- La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares, produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial.

**Artículo 163**.- La Secretaría adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos.

En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad educativa, hasta que aquél concluya.

**Artículo 164**.- Contra los actos y resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades competentes en la aplicación de la presente ley, los afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad, ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO:** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno".

**SEGUNDO:** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

**TERCERO:** Continuarán vigentes las disposiciones del Código Administrativo del Estado en materia educativa, siempre que no contravengan las disposiciones de la presente Ley.

**CUARTO:** El Ejecutivo del Estado presentará el reglamento de la presente Ley dentro de los noventa días siguientes a su publicación.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo a los días del mes de del año dos mil once.

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias diputado Hernández Mena.

Se registra la iniciativa y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se encomienda a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio.

De acuerdo con el punto número 15 del orden del día, la diputada Yolitzi Martínez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentará la iniciativa presentará la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Código Civil del Estado de México, para incluir como causal del divorcio, la incompatibilidad de caracteres, a fin de que la disolución de vínculo matrimonial pueda ser promovida por alguna de las partes y así evitar que se den situaciones que van desde la indiferencia hasta casos de violencia familiar o de abandono de persona.

**DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** Con su venia señor Presidente.

**DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTES.**

De conformidad con los artículo 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28 fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, someto a la consideración de esta Legislatura por el digno conducto de ustedes, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 4.90 del Código Civil del Estado de México, sobre el agregado de la incompatibilidad de caracteres como causal de divorcio al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La sociedad finca su génesis en la unión de dos personas bajo la regulación de un contrato social denominado legalmente "matrimonio", el cual establece derechos y obligaciones de los contrayentes. Cuando esa relación se ve trastocada y los involucrados consideran la separación o disolución del vínculo matrimonial, la ley considera esta posibilidad a través del procedimiento del divorcio, que es un proceso legal que extingue la relación de matrimonio conforme a derecho.

El Código Civil del Estado de México, en su artículo 4.90 enuncia las causas de divorcio en voluntario y necesario. El divorcio voluntario es la separación por mutuo acuerdo; mientras el necesario contempla 20 causales dentro de las cuales no se encuentra incluida la de incompatibilidad de caracteres; y ésta considera la intolerancia de un miembro del matrimonio a otro, o bien, de manera mutua. La incompatibilidad de caracteres se manifiesta en diversas formas, generando situaciones que van desde la indiferencia hasta casos de violencia familiar o abandono de personas.

Atendiendo a los principios del derecho civil, el divorcio es la expresión legal que extingue el contrato de matrimonio, cuyas causas suelen ser innúmeras y pueden ser solicitadas por una o ambas partes.

La disolución matrimonial o divorcio, otorga a los directamente involucrados, la defensa de sus derechos como individuos con capacidad de elección, a la vez que brinda la posibilidad de que estos mismos, queden en completa libertad de decidir sobre la posibilidad de crear una nueva unión conyugal.

Se conoce como antecedente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, han emitido jurisprudencia con respecto de la incompatibilidad de caracteres como causal de divorcio, que se constituye por la intolerancia de los cónyuges, exteriorizada en diversas formas, que revelan una permanente aversión que hace imposible mantener la unión conyugal.

La incompatibilidad de caracteres implica una imposibilidad física y psicológica hacia la tolerancia entre los miembros de la pareja, la cual se manifiesta claramente en la convivencia diaria matrimonial.

Es sumamente complejo hablar de la personalidad de los cónyuges y del vínculo sentimental que los une, ya que se trata de elementos subjetivos de los individuos; sin embargo, las relaciones interpersonales sujetas a un vínculo

matrimonial, sufren transformaciones a través del tiempo, pasando de un estado armonioso a uno en el que puede prevalecer la falta de comunicación y/o entendimiento, haciendo que la vida en pareja se convierta en una pugna constante y lleve a sus integrantes a la autodestrucción.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que existen variables que hacen que la relación en pareja sea incompatible, como las relaciones de agresión-sumisión. En estos vínculos hay un cónyuge que sufre los maltratos del otro y se ve imposibilitado a desvincularse por temor, escenario que suele arrastrar a todos los integrantes de la familia; asimismo, relaciones como éstas, pueden originar enfermedades traumáticas, que con el tiempo se agravan. es por esto que la inclusión de la incompatibilidad de caracteres en el Código Civil del Estado de México como causal para disolver el matrimonio, es una vía que debe contemplarse.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, consideramos de observancia el derecho al divorcio consagrado en el Código Civil del Estado de México; y en el que proponemos se reconozca dicha incompatibilidad, debido a que responde a un fenómeno por el que actualmente las parejas se separan, lo que no implica necesariamente que se divorcien al no existir esta causal y propicia mayores daños y rispidez; asimismo, esta causal permitirá divorciar aquellas parejas, hoy separadas, y que no han arreglado su situación jurídica.

La finalidad de esta propuesta, solicita que el cónyuge que pretenda iniciar el proceso de disolución, no se ve obligado a fundamentar su solicitud en los supuestos previstos en la norma vigente, cuando su motivación no corresponda a ninguna de ellos, como sucede en muchos casos hoy en día.

Lo anterior permitirá fortalecer el estado de derecho, a fin de no obligar a los cónyuges a que compartan su vida con quienes no lo deseen, poniendo fin al vínculo matrimonial, resguardando el interés superior de su familia, procurando aminorar el deterioro económico, así como emocional, que pueda causar la disolución al establecer relaciones equitativas en el futuro entre los cónyuges y sus familias.

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, proyecto de decreto adjunto, para que de estimarlo correcto se apruebe en sus términos.

Es cuanto.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS**
**DE LA H. LVII LEGISLATURA DEL**
**ESTADO DE MÉXICO**
**P R E S E N T E S**

De conformidad con los artículos 51, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, la Diputada Yolitzi Ramírez Trujillo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, someto a la consideración de esta H. LVII Legislatura del Estado de México, por el digno conducto de ustedes, iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XXI, al artículo 4.90 del Código Civil del Estado de México, sobre el agregado de la incompatibilidad de caracteres como causal de divorcio al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La sociedad finca su génesis en la unión de dos personas bajo la regulación de un contrato social denominado legalmente matrimonio, el cual establece derechos y obligaciones de los contrayentes. Cuando esta relación se ve trastocada y los involucrados consideran la separación o disolución del vínculo matrimonial, la ley considera esta posibilidad a través del procedimiento de divorcio, que es un proceso legal que extingue la relación de matrimonio conforme a derecho.

El Código Civil del Estado de México en su artículo 4.90, enuncia las causas de divorcio en voluntario y necesario. El divorcio voluntario es la separación por mutuo acuerdo; mientras el necesario contempla veinte causales dentro de las cuales, no se encuentra incluida la de incompatibilidad de caracteres, y esta considera la intolerancia de un miembro del matrimonio a otro, la incompatibilidad de caracteres se manifiesta en diversas formas, generando situaciones que van desde la indiferencia hasta casos de violencia familiar o abandono de personas.

Atendiendo a los principios del derecho civil, el divorcio es la expresión legal que extingue el

contrato de matrimonio cuyas causas suelen ser innúmeras y pueden ser solicitadas por una o ambas partes.

La disolución matrimonial o divorcio otorga a los directamente involucrados, la defensa de sus derechos como individuos con capacidad de elección, a la vez que brinda la posibilidad de que estos mismos queden en completa libertad de decidir sobre la posibilidad de crear una nueva unión conyugal.

Se conoce como antecedente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, han emitido jurisprudencia con respecto de la incompatibilidad de caracteres como causal de divorcio, que se constituye por la intolerancia de los cónyuges, exteriorizada en diversas formas, que revelan una permanente aversión que hace imposible mantener la unión conyugal.

La incompatibilidad de caracteres implica una imposibilidad física y psicológica hacia la tolerancia entre los miembros de la pareja, la cual se manifiesta claramente en la convivencia diaria matrimonial.

Si dos personas unidas por el vínculo del matrimonio no congenian, e incluso llegan a no tolerar la presencia de su pareja por diferencias de carácter, se propicia una clara incapacidad de mantener una vida en común, lo que lleva a la imposibilidad natural a compartir la vida junto a su cónyuge, situación en la que no se puede atribuir culpa alguna por ello, pues es producto de diversas causas, las cuales son inevitables e inimputables a los individuos.

Es sumamente complejo hablar de la personalidad de los cónyuges y del vínculo sentimental que los une, ya que se trata de elementos subjetivos de los individuos. Sin embargo, las relaciones interpersonales sujetas a un vínculo matrimonial, sufren transformaciones a través del tiempo pasando de un estado armonioso, a uno en el que puede prevalecer la falta de comunicación y/o entendimiento, haciendo que la vida en pareja se convierta en una pugna constante y lleve a sus integrantes a su autodestrucción.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que existen variables que hacen que la relación en pareja sea incompatible, como las relaciones de agresión-sumisión. En estos vínculos hay un cónyuge que sufre los maltratos del otro y se ve imposibilitado a desvincularse por temor, escenario que suele arrastrar a todos los integrantes de la familia. Asimismo, relaciones como éstas, pueden originar enfermedades traumáticas que con el tiempo se agravan, es por esto que la inclusión de la incompatibilidad de caracteres en el Código Civil del Estado de México como causal para disolver el matrimonio, es una vía que debe contemplarse.

Por lo anterior, la iniciativa que hoy se propone ante el Pleno, solicita incluir la causal de incompatibilidad de caracteres como un elemento más dentro del marco jurídico que posibilite la disolución del matrimonio, causal que prevendrá daños mayores mediante la argumentación de la manifestación de voluntad.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos de observancia el derecho al divorcio consagrado en el Código Civil del Estado de México, y en el que proponemos se reconozca dicha incompatibilidad, debido a que responde a un fenómeno por el que actualmente las parejas se separan, lo que no implica necesariamente que se divorcien al no existir esta causal y propicia mayores daños y rispidez. Asimismo, esta causal permitirá divorciar a aquella parejas, hoy separadas y que no han arreglado su situación jurídica.

Cabe señalar que la incompatibilidad de caracteres no atenta contra la sociedad ni contra la familia; por el contrario, protege y fortalece la tranquilidad familiar al tratar de evitar conflictos en la disolución del vínculo matrimonial, así como enfrentamientos entre personas y familias que alienten la posibilidad de odio, violencia, egoísmo y acciones maliciosas.

La finalidad de esta propuesta, solicita que el cónyuge que pretenda iniciar el proceso de disolución no se vea obligado a fundamentar su solicitud en los supuestos previstos en la norma vigente cuando su motivación no corresponda a ninguno de ellos, como sucede en muchos casos hoy en día.

Esta propuesta tampoco incidiría en la figura de divorcio voluntario, pues en ésta se presupone la voluntad de ambos cónyuges, mientras que en la de incompatibilidad de caracteres, sólo se requiere la solicitud de uno de ellos.

En aras de dar certeza jurídica a las partes en la diversas situaciones que se puedan presentar, se cree en la necesidad de salvaguardar las causales de divorcio contempladas en el Código Civil del Estado de México, ya que los presupuestos ahí establecidos, pueden ser considerados como delitos previstos en el Código Penal, los cuales permiten salvaguardar a la persona y a su familia, pudiendo ejercer acción legal contra el responsable.

De lo anterior no perdamos de vista la correlación existente entre normas civiles y penales que puedan generar causales de divorcio mediante sentencia pronunciada por un juez penal.

Lo anterior permitirá fortalecer el Estado de Derecho a fin de no obligar a los cónyuges a que compartan su vida con quienes no lo deseen, poniendo fin al vinculo matrimonial, resguardando el interés superior de su familia, procurando aminorar el deterioro económico, así como emocional que pueda causar la disolución al establecer relaciones equitativas en el futuro entre los cónyuges y sus familias.

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el proyecto de decreto adjunto, para que, de estimarlo correcto, se apruebe en sus términos.

**A T E N T A M E N T E**

| | |
|---|---|
| **DIP. LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ** | **DIP. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ ROLDÁN** |
| **DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO** | **DIP. ANTONIO HERNÁNDEZ LUGO** |
| **DIP. EYNAR DE LOS COBOS CARMONA** | **DIP. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA** |

**PROYECTO DE DECRETO**

La LVII Legislatura el Estado de México

Decreta:

Artículo Primero.- Se adiciona la fracción XXI, al artículo 4.90 del Código Civil del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 4.90.- …

I a XX. …

XXI. La incompatibilidad de caracteres.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Publíquese el presente decreto en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.

**SEGUNDO.-** Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo a los días del mes de de dos mil once.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias a la diputada Yolitzi Martínez.

Se registra la iniciativa y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado del Libre y Soberano de México, se remite a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio.

Antes de continuar con el orden del día, quisiera agradecer la presencia y darle la bienvenida al Licenciado Adrián Flores González, Coordinador de la Universidad Pedagógica Nacional; así como a todos los alumnos de la Unidad Número 151 de Acambay, Estado de México, que hoy nos acompañan, sean ustedes bienvenidos.

Prosiguiendo con el desarrollo de la sesión y en observancia del punto número 16, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Sámano Peralta, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dará lectura a la iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y su Reglamento, con el objeto de implementar el Sistema Electrónico de Asistencia y Votación, en el Congreso Local.

**DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA.** Con su venia señor Presidente.

Compañeras, compañeros diputados; saludo la presencia del Licenciado Adrián Flores González, Coordinador de la Universidad Pedagógica Nacional; Unidad 151, subsede Acambay y a los alumnos que hoy nos acompañan.

En ejercicio de las facultades que la Constitución y las leyes me confieren, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta Honorable Legislatura, iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Una de las principales características de las sociedades contemporáneas, es la creciente utilización de las tecnologías de la información y comunicación, para mejorar los procesos y resultados de las actividades que desarrollamos. Con mayor frecuencia, se puede observar la incorporación de herramientas electrónicas como computadoras, Ipads y teléfonos celulares, en actividades escolares, de esparcimiento y laborales.

Entre los principales factores que fomentan esta tendencia en las instituciones públicas, destacan la facilidad para acceder e intercambiar información en menos tiempo; contar con mayores elementos para la toma de decisiones, reducir los costos y ampliar la gama de trámites que pueden realizarse de forma virtual.

Las iniciativas de modernización de los poderes del Estado, han permitido en las últimas décadas contar con instituciones de gobierno más ágiles y transparentes.

Recientemente y con el objeto de hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación, esta Honorable Legislatura aprobó la Ley para el uso de Medios Electrónicos del Estado de México, iniciativa, por cierto, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.

La función legislativa no está exenta de esta tendencia, por el contrario, representa un área de oportunidad para mejorar los procesos parlamentarios, así ha quedado demostrado en el Congreso de la Unión, con la incorporación de la votación electrónica a partir de 1998, a su vez, algunos congresos estatales, como Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, han adoptado la votación electrónica como un medio para mejorar su labor parlamentaria, el Estado de México es la entidad más poblada del país, por esta circunstancia demográfica, cuenta con una Legislatura, que además de ser la más numerosa, entre las entidades federativas, tiene el reto de crear un marco jurídico moderno, eficaz y acorde a las expectativas y necesidades de más de 15 millones de habitantes.

El desarrollo de una sociedad tan compleja, diversa y dinámica, como la que integramos los mexiquenses, exige un trabajo legislativo moderno y en plena consonancia con los avances de la tecnología.

Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista y del Partido Revolucionario Institucional, consideramos viable y de especial atención la instrumentación de un sistema de votación electrónica, que permita agilizar el proceso legislativo tradicional en el Congreso mexiquense. Entre las ventajas que ofrece esta herramienta destacan las siguientes:

Reconoce la asistencia de forma inmediata; registra la votación de cada diputado y el sentido en que lo realiza; permite la contabilización inmediata de los votos emitidos y las abstenciones; fortalece la transparencia; promueve el ahorro de papelería, protegiendo al medio ambiente y facilita la integración de la memoria parlamentaria.

Ello, permitirá avanzar en la modernización y adecuación de nuestro marco jurídico; así como en el perfeccionamiento de los procesos legislativos, que hoy por hoy son una herramienta impostergable.

Por las razones expuestas, se estima pertinente que las tareas legislativas a nuestro cargo, puedan aprovechas las ventajas que ofrece la tecnología en el quehacer público, en aras de ofrecer mejores respuestas a la ciudadanía, se anexa a la presente propuesta de decreto.

Es cuanto señor Presidente.

**C. PRESIDENTE DE LA H. LVII LEGISLATURA**

**DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**
**PRESENTE**

Toluca, México; marzo 8 de 2011.

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción II, 56 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la respetuosa consideración de esta Honorable Legislatura por su digno conducto, la Iniciativa de Decreto, por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

Una de las principales características de las sociedades contemporáneas, es la creciente utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar los procesos y resultados de las actividades que desarrollamos, tanto de forma individual como colectiva.

Con mayor frecuencia, se puede observar la incorporación de herramientas electrónicas como computadoras, Ipads y teléfonos celulares, para el desarrollo de actividades escolares, productivas, de esparcimiento y, por supuesto, en el sector público.

Entre los principales factores que fomentan esta tendencia en las instancias públicas, destacan la facilidad para acceder e intercambiar información en menos tiempo; contar con mayores elementos para la toma de decisiones; reducir los costos y ampliar la gama de trámites que pueden realizarse de forma remota.

Las iniciativas de modernización de los poderes del Estado, han facilitado y potenciado en las últimas décadas el desarrollo de instituciones de gobierno más ágiles y transparentes.

En este tenor y con objeto de hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación en diversas tareas gubernamentales, la LVII Legislatura del Estado de México aprobó la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México, a través del Decreto N° 142, publicado el 3 de septiembre de 2010 en la Gaceta del Gobierno; Iniciativa que en su momento presentó el Ejecutivo Estatal a esta Soberanía.

La función legislativa no está exenta de esta tendencia. Por el contrario, ha representado un área de oportunidad para mejorar los procesos parlamentarios. Así ha quedado demostrado en el Congreso de la Unión con la incorporación de la votación electrónica, mecanismo adoptado para registrar el sentido del voto de los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

A su vez, algunos Congresos Estatales como en Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz han adoptado la votación electrónica como un medio para mejorar la labor parlamentaria. En suma, se trata de un esfuerzo por poner la tecnología al servicio de la representación popular.

El Estado de México es la entidad más poblada del país. Por esta circunstancia demográfica, cuenta con una Legislatura que, además de ser la más numerosa entre las de las Entidades Federativas, tiene el reto de crear un marco jurídico moderno, eficaz y acorde a las expectativas y necesidades de más de 15 millones de habitantes.

El desarrollo de una sociedad tan compleja, diversa y dinámica como la que integramos los mexiquenses, exige un trabajo legislativo de resultados, moderno y en plena consonancia con los avances de la tecnología propios de la sociedad del conocimiento.

Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LVII Legislatura Local, consideramos viable y de especial atención, la instrumentación de un sistema de votación electrónica que permita agilizar el proceso legislativo tradicional en el Congreso mexiquense.

Entre las ventajas que ofrece esta herramienta, destacan las siguientes: reconocer la asistencia de forma inmediata; registra la votación de cada diputado y el sentido en que lo realiza; permite la contabilización inmediata de los votos emitidos y las abstenciones; fortalece la transparencia y facilita la integración de la memoria parlamentaria.

En conjunto todo ello, permitirá aligerar el resultado de la actividad parlamentaria.
Es incuestionable la importancia de la función que desarrolla el Poder Legislativo para la consolidación democrática y el fortalecimiento institucional.
Por ello la modernización y adecuación de nuestro marco jurídico, así como el perfeccionamiento de los procesos legislativos, son una tarea impostergable.
Por las razones expuestas, se estima pertinente que las tareas legislativas a nuestro cargo, puedan aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología al mejoramiento del quehacer público, en aras de ofrecer mejores respuestas a la ciudadanía.
Anexo al presente Proyecto de Decreto.
**DIPUTADO MIGUEL SÁMANO PERALTA**
**COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO D I P U T A D O GERARDO XAVIER HERNÁNDEZ TAPIA**
**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**

**DECRETO NÚMERO:**
**LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**
**DECRETA:**

**ARTÍCULO PRIMERO**.- Se Reforma la fracción segunda del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, recorriéndose las 14 fracciones subsecuentes en su numeración; se Adiciona un segundo párrafo al artículo 50 y 89 ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:

**Artículo 50**.- …
…
II. Supervisar el sistema electrónico de asistencia y votación;
…
…
…

El pase de lista, la verificación del quórum, el cómputo y registro de la votación nominal y, en su caso, la votación de asuntos que la legislatura determine, podrán realizarse a través del sistema electrónico de asistencia y votación.

**Artículo 89**.- …
…
…
Las votaciones nominales podrán realizarse mediante el sistema electrónico de asistencia y votación, a efecto de facilitar dichas actividades.

**ARTÍCULO SEGUNDO.**- Se Reforma la fracción VIII y XI del artículo 152; la fracción XXI del artículo 160, recorriéndose las 2 fracciones subsecuentes en su numeración, todos del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se Adiciona un artículo 113 BIS al Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:

**Artículo 152**.- …
…
…
…
VIII.- Atender y en su caso controlar los servicios de estenografía y/o taquigrafía, grabación, sonido, sistema electrónico de asistencia y votación y cualquier otro mecanismo técnico autorizado;
…
…
XI.- Administrar y resguardar los archivos que genere el sistema electrónico de asistencia y votación;
…
…
…

**Artículo 160.-** …
…
…
…
…
…
XXI. Mantener, conservar y proveer los apoyos técnicos, humanos y financieros que se requieran, para la operación del sistema electrónico de

asistencia y votación;
…
…

Artículo 113 BIS.- La votación nominal se podrá efectuar mediante el sistema electrónico de asistencia y votación, de conformidad con las siguientes reglas:

I.- El sistema electrónico de asistencia y votación, se abrirá y cerrará previa instrucción de la Secretaría, hasta por el tiempo que señale la Presidencia de la Mesa Directiva, después de lo cual, el Secretario en funciones preguntará si falta algún diputado por emitir su voto, y de ser así y habiendo vencido el término establecido para hacerlo, lo registrará de manera nominal o económica según sea el caso.

II.- En caso de que las sesiones del pleno se efectúen fuera del recinto legislativo o por imprevistos que afecten el adecuado funcionamiento del sistema electrónico de asistencia y votación, se utilizará el sistema tradicional.

III.- En los casos en que se requiera la verificación del quórum, el Presidente de la Mesa Directiva ordenará abrir el sistema electrónico de asistencia y votación hasta por 5 minutos.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO**.- Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

**SEGUNDO.-** Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobierno".
**TERCERO.-** El Sistema de registro de asistencia y votación electrónica, deberán ser puesto en operación en un plazo no mayor a 90 días.

**CUARTO.-** Se faculta a la Junta de Coordinación Política, a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, para que en coordinación provean lo necesario para el cumplimiento del presente Decreto.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil once.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS**. Muchas gracias diputado Sámano.

Se registra la iniciativa y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracciones IV, XX y XXI; 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.

Con sujeción al punto número 17, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para la presentación de la iniciativa de Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México.

**DIP. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO.** Con su venia señor Presidente.

Señoras y señores diputados.

Como legisladores debemos hacer más en apoyo de las personas con discapacidad, lo que se ha hecho es insuficiente y es preciso reconocer que la lucha contra la discriminación y por los derechos de las personas con discapacidad, no se ganará si en la existencia de leyes, políticas y programas concretos que favorezcan realmente a este grupo.

El Grupo Parlamentario de Convergencia, congruente con su filosofía de la social democracia, debe de poner al centro de toda política al ser humano, exponer ante ustedes el proyecto de decreto de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud entre el 10 y el 12% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, dicha estimación arrojaría un resultado de aproximadamente 10 millones de mexicanos con discapacidad, de los cuales por lo menos 1 millón 4 mil viven en el Estado de México.

Este hecho es sumamente alarmante, sobre todo, si tomamos en cuenta que esta población tiende a incrementarse por diferentes factores, como la delincuencia, las enfermedades, los accidentes de trabajo, los accidentes de tránsito y hasta por el simple paso del tiempo, lo que nos hace más difícil la vida cotidiana.

Han pasado más de 25 años en los que tanto la comunidad internacional como nuestro propio país, han tratado la problemática de las personas con discapacidad sin haber obtenido buenos resultados; la realidad de millones de personas con discapacidad no ha cambiado sustancialmente, siguen siendo objeto de discriminación y otros abusos. Es vergonzoso tener que reconocer que pese a múltiples instrumentos internacionales, ordenamientos federales y locales, las personas con discapacidad, siguen sin poder ejercer plenamente los derechos que se consagran en su favor en la Constitución de nuestro país. La razón es simple, el principal error ha sido tratar el tema de la discapacidad desde un enfoque médico asistencialista, que ve a las personas con discapacidad como enfermas y necesitadas de ayuda especial, sin enfocarnos en sus habilidades profesionales, científicas, técnicas, artísticas y deportivas, que sustentan con mucho sus aspiraciones como personas.

En 1997 se expidió la Ley para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, sin resultados positivos, posteriormente fue derogada; no obstante, gran parte de su contenido, se integró al Libro Decimo Primero del Código Administrativo, pero ello no ha reflejado la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, por que se carece de un órgano especializado en el diseño de políticas públicas incluyentes, que articule los esfuerzos del Estado, por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Hoy respondemos a este reclamo ciudadano con esta iniciativa, que contiene un enfoque de integración e inclusión social, donde el papel que jueguen las personas con discapacidad será complementario al del Estado, en la tarea de preparar a mexiquenses productivos y responsables, a partir de las bases suscritas en la Comisión Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley, igualmente propone la creación de un instituto que será el responsable del diseño de políticas públicas, que articulen los esfuerzos de la Administración Pública, con los demás actores sociales, garantizando así, un desarrollo integrador e incluyente en materia de discapacidad.

El 3 de mayo, del año 2008, entró en vigor la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidades, misma que fue propuesta por México y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Dicha convención, compromete a los países firmantes, a llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la actualización y modificación de la legislación vigente; para ello, se estableció un plazo de 2 años a partir de su entrada en vigor y este plazo se cumplió el 3 de mayo del año 2010.

En un acto de congruencia, nuestro proyecto significará que el Estado de México, será uno de los primeros estados en expedir una ley armonizada con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por lo anterior, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción I, 67 Bis y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la "LVII" Legislatura, el proyecto de decreto, a través del cual se crea la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México.

Compañeras y compañeros diputados, resulta claro que las personas con discapacidad, las personas que son diferentes, requieren para su inserción social y laboral oportunidades, también diferentes. El punto central del instituto, es promover actividades, encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de los derechos humanos, y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad.

No podemos negar que aún persiste la desigualdad

económica, la ausencia de oportunidades reales y la segregación social, que se hace particularmente aguda y además fría, en el caso de las personas con discapacidad.

Para finalizar, retomo algunas palabra de Gilberto Rincón Gallardo, cuando sostiene, que "…sería necesario legislar sobre la capacitación de las familias para promover un modelo, basado en los derechos de las personas que involucre aspectos de salud, educación, trabajo, recreación, cultura, deporte, vida comunitaria y todos los aspectos de la vida, sobre una serie de programas de apoyo a las familias, como técnicas de alimentación, rehabilitación, comunicación, situaciones de emergencia, problemas de salud, así como apoyo emocional…"

Es cuanto, señor Presidente.

Toluca de Lerdo, México a 10 de marzo de 2011

**DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA Y**
**DIPUTADOS DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**
**A SU HONORABILIDAD**

Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, 28 fracción I, 67 Bis y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta LVII Legislatura el proyecto de decreto a través del cual se crea la "Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México".

La propuesta de decreto se sustenta en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 y el 12 por ciento de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, dicha estimación arrojaría un resultado de aproximadamente 10 millones de mexicanos con discapacidad, de los cuales por lo menos 1´400,000 (un millón cuatrocientos mil) viven en el Estado de México y otro millón más transita cotidianamente por nuestro territorio.

Este hecho, es sumamente alarmante, sobre todo, si tomamos en cuenta que esta población tiende a incrementarse por diferentes factores, como: la delincuencia, las enfermedades, los accidentes de trabajo, los accidentes de tránsito, y hasta por el simple paso del tiempo, pues con el envejecimiento todas las personas vamos perdiendo nuestras habilidades y capacidades, lo que nos hace más difícil la vida cotidiana.

La existencia de tan numeroso grupo, ha hecho necesario tomar medidas para tratar de satisfacer sus necesidades específicas, sin embargo, ya han pasado más de 25 años, en los que, tanto la Comunidad Internacional como nuestro propio país han tratado la problemática de las Personas con Discapacidad sin haber obtenido buenos resultados.

El principal error ha sido tratar el tema de la discapacidad, desde un enfoque Médico Asistencialista, que ve a las personas con discapacidad, como enfermas y necesitadas de ayuda especial, sin enfocarnos en sus habilidades residuales y sus aspiraciones como personas.

Es oportuno mencionar que el concepto actual de Personas con Discapacidad es el resultado de toda una evolución de la concepción de estas personas ante la misma sociedad, quienes anteriormente eran llamadas con adjetivos como: Inválidos, minusválidos, impedidos, discapacitados o incluso idiotas e imbéciles como lo establecían hace tiempo algunos Códigos Civiles, o peor aún con capacidades diferentes, como si cambiando los términos les cambiáramos su calidad de vida.

Dicho concepto encierra en si mismo, la nueva concepción de estos individuos quienes antes que nada son PERSONAS y después se les atribuye una característica, que los limita a realizar ciertas actividades dentro de los parámetros considerados como comunes.

Como hemos dicho el concepto de Personas con Discapacidad es el resultado de una evolución, sin embargo la realidad de millones de personas con discapacidad no ha cambiado sustancialmente, siguen siendo objeto de discriminación y otros abusos, es vergonzoso tener que reconocer que pese a múltiples Instrumentos Internacionales, y ordenamientos Federales y Locales, las Personas con Discapacidad siguen sin poder ejercer plenamente los Derechos que consagra nuestra

Carta Magna.

Así es, aún no hemos sido capaces de garantizar el libre ejercicio de todos sus derechos que les consagran tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni sus leyes reglamentarias, ni tampoco los que estable nuestra Constitución Política del Estado libre y Soberano de México, ni sus leyes reglamentarias, mucho menos los que están establecidos en los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro país.

La razón es simple, pese a un sin número de ordenamientos en nuestro país y particularmente en nuestro Estado, aún no hemos generado las condiciones adecuadas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, pues equivocadamente hemos pretendido reconocerles derechos, que ya han sido establecidos en la constitución y sus leyes reglamentarias, esta Cámara entre otros ordenamientos en la materia, expidió en el año 1997 la Ley para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que nunca dio buenos resultados, posteriormente fue derogada y gran parte de su contenido se integro al Libro Décimo Primero del Código Administrativo, sin que ello haya repercutido en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, quienes a la fecha siguen estando en condiciones de desigualdad y de pobreza.

Gran parte del contenido del Libro Décimo Primero del Código Administrativo, comete los mismo errores que se han repetido a la fecha, primeramente porque se inspira en un enfoque médico asistencialista que trata a las personas con discapacidad como enfermos, necesitados de asistencia pública. Y segundo porque carece de un cerebro que articule los esfuerzos del Estado por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

No dudo, que haya quienes se pregunten ¿porqué una nueva ley? Si hace solo 5 años se abrogo la ley anterior, para integrar su contenido al Código Administrativo y bueno, la respuesta es, que la problemática de la discapacidad no es solo un tema meramente administrativo, sino que la concepción actual lo convierte en un tema de derechos fundamentales, pues como se desprende de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que entro en vigor el 3 de mayo del año 2008, estas personas deben ser vistas como sujetos de derechos y obligaciones y los Estados, están obligados a realizar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el pleno ejercicio de todos sus derechos, como lo establece el artículo 4 numeral 1 inciso a) que a la letra dice: “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;”. Así mismo y como se desprende de la estructura legal federal, ante la existencia de la Ley General para las Personas con Discapacidad, corresponde una Ley Estatal Especializada en dicho tema, la cual en nuestro caso será el instrumento jurídico que nos permita garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en un marco de igualdad de oportunidades, además de dotarlas de un órgano especializado en el diseño de políticas públicas incluyentes, mejorando así su calidad de vida.

Es necesario llevar a cabo, el cambio de paradigma y dejar de ver a las personas con discapacidad como enfermos y sujetos de lástima, para empezar a verlos como sujetos de derechos y obligaciones que igualmente deben cumplir con la obligación y el alto honor de servir a su patria, como cualquier otro mexiquense.

Para ello esta iniciativa contempla ya un enfoque de integración e inclusión social, donde el papel que jueguen las personas con discapacidad será complementario al del Estado, donde crearemos y prepararemos a mexiquenses productivos y responsables, inspirados en la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad.

Esta Ley igualmente, contempla la creación de un Instituto que será el cerebro que articule los esfuerzos de la administración pública y todos los demás actores sociales, garantizando así una visión integradora e incluyente y la continuidad de políticas públicas eficientes, emergidas de este organismo especializado en materia de discapacidad.

Sumado a lo anterior, no podemos pasar por alto, que el 3 de mayo del 2008 entró en vigor la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue propuesta por

México y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, la cual en su momento fue firmada y ratificada por nuestro país.

Dicha Convención obliga a los países firmantes, entre los cuales se encuentra nuestro país, a llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el pleno ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, inclusive la actualización y modificación de la legislación vigente.

La citada Convención establece un plazo de 2 años a partir de su entrada en vigor para que los países firmantes, informen sobre los avances en la aplicación de la Convención, dicho plazo se cumplió el 3 de mayo del presente año, y la pregunta es ¿qué les vamos a informar?, si aún no hemos armonizado nuestras leyes.

Así es, en un acto de congruencia debemos iniciar el proceso de armonización de nuestras leyes con la citada Convención, y es por ello que nuestro proyecto considera ya su contenido, lo que significa, que seríamos unos de los primeros estados en expedir una ley armonizada con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La nueva Ley que proponemos, no es un capricho de nadie, es el resultado de un trabajo profesional realizado conjuntamente con expertos en el tema de la discapacidad e importantes Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes hemos conjuntado esfuerzos para elaborar la presente Iniciativa.

Como hemos mencionado, en nuestro país y particularmente en el Estado de México, existen millones de personas con algún tipo de discapacidad, que históricamente han sido relegadas de las diferentes actividades de la sociedad, como si se tratara de mexicanos de segunda.

Así es, hoy a 200 años de la Independencia y a 100 años de la Revolución, las desigualdades persisten en nuestro país y nuestro Estado no es la excepción, pues a un número muy importante de mexiquenses con discapacidad, aún no les ha hecho justicia la revolución.

Por ello la presente propuesta no solo contempla el que hacer y quienes deben hacerlo sino que va más allá al proponer como sancionar a quienes no den cumplimiento a la misma.

Compañeras y compañeros, como legisladores y como mexiquenses tenemos una deuda histórica con millones de mexicanos con discapacidad y particularmente con aquellos que habitan y transitan en el Estado de México. Y sobre todo no olvidemos que el día de mañana se celebrará en todo el mundo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que el mejor motivo de celebración será haber mejorado su calidad de vida garantizando en todo momento el libre ejercicio de todos sus derechos con la aprobación de esta Ley.

A T E N T A M E N T E

**GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA**

**DIP. HORACIO JIMÉNEZ LÓPEZ** **DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA**

**DIP. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO**

## LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO

### TÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

### CAPITULO I
### DEL OBJETO DE LA LEY

**Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio del Estado de México y tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la igualdad de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes.

Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de lo previsto en las Leyes así como la legislación de asistencia social y privada.

Los servicios que presten las instituciones para la rehabilitación de personas con discapacidad, aún cuando se denominen, ostenten o constituyan bajo otra modalidad, se sujetarán a las disposiciones previstas en la Ley General de Salud y esta Ley.

**Artículo 2**.- En el Estado de México todas las

personas con discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, los establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y esta Ley, sin limitación ni restricción alguna.

## CAPITULO II
## DE LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO

**Artículo 3.-** La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público y por consecuencia la Administración Pública del Estado de México y todos los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el cumplimiento de la presente Ley.

**Artículo 4.-** Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- Accesibilidad Universal: La combinación de elementos construidos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones;

II.- Administración Pública del Estado de México: A las dependencias, entidades y órganos que integran la Administración Centralizada, Desconcentrada, Descentralizada y Paraestatal del Estado de México;

III.- Ayudas Técnicas: A los Dispositivos tecnológicos, materiales y asistencia humana o animal, que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales (auditiva y visual) o intelectuales de las personas con discapacidad;

IV.- Barreras Físicas: Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como el uso y disfrute de los servicios comunitarios;

V.- Barreras Sociales y Culturales: Las actitudes de rechazo, indiferencia o discriminación hacia las personas con discapacidad, debido a los prejuicios, por parte de los integrantes de la sociedad, que impiden su inclusión y participación en la comunidad, desconociendo sus derechos y libertades fundamentales;

VI.- Condiciones Necesarias: Todas las medidas, acciones y programas encaminados o dirigidos a eliminar las barreras físicas, sociales y culturales, del entorno social en el que desempeñan sus actividades las personas con discapacidad;

VII.- Deporte Adaptado: Todas aquellas disciplinas deportivas que han sido adecuadas y reglamentadas para que puedan ser practicadas por las personas con algún tipo de discapacidad;

VIII.- Días multa: Es la cantidad neta en dinero que perciba diariamente el servidor público por concepto de sueldo integrado en el momento de cometer la infracción;

IX.- DIF Estatal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México;

X.- Discapacidad Permanente: Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales, que son de carácter permanente;

XI.- Discapacidad Temporal: Las alteraciones de la salud que limitan o restringen temporalmente las facultades físicas, intelectuales, mentales o sensoriales.

XII.- Equiparación de Oportunidades para la Integración Social: Todos los procesos y acciones mediante las cuales se crean o se

generan condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer todos sus derechos y libertades fundamentales bajo un marco de igualdad con el resto de la población;

XIII.- Instituto: Instituto Mexiquense para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad;

XIV.- Integración al Desarrollo: La participación activa y permanente de las personas con discapacidad, en un ámbito de igualdad de oportunidades, en la vida diaria, principalmente en las actividades sociales, científicas, económicas, políticas, culturales y recreativas.

XV.- Logotipo Internacional de la Discapacidad: Figura estilizada de una persona en silla de quedasen color blanco con fondo azul (pantone número 294), la figura debe orientarse hacia la derecha;

XVI.- Organizaciones de y para Personas con Discapacidad: Todas aquellas figuras asociativas, constituidas legalmente, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

XVII.- Persona con Discapacidad: Todo ser humano que presenta temporal o permanentemente, alguna deficiencia física, intelectual, mental o sensorial;

XVIII.- Prevención: La adopción de medidas encaminadas a impedir que en una persona se produzcan deficiencias parciales o totales, temporales o permanentes, en sus funciones físicas, intelectuales, mentales o sensoriales;

XIX.- Rehabilitación: El proceso de duración limitada, de tipo médico, educativo y social, con la finalidad de permitir que una persona con discapacidad mantenga, mejore o adquiera, un nivel físico, mental, intelectual y sensorial óptimo, que permita restablecer o compensar la pérdida o la falta de una función debido a su discapacidad, proporcionándole una integración plena y efectiva a la sociedad;

XX.- Sensibilización: Es el proceso de concientización dirigido a la sociedad en general, para fomentar actitudes receptivas e incluyentes y percepciones positivas de las personas con discapacidad y del respeto a sus derechos y libertades fundamentales;

XXI.- Trabajo Integral: Todo programa o proyecto encaminado a dar empleo a las personas con discapacidad, garantizando igualmente su permanencia, fomentando su desarrollo laboral en igualdad de condiciones con los demás trabajadores; y

XXII.- Trabajo protegido: Todo aquel programa o proyecto encaminado a dar empleo a las personas con discapacidad que no pueden ser incorporadas al trabajo común, por no alcanzar a cubrir los requerimientos de productividad y que se caracteriza por la subvención que hace el gobierno o los particulares a las fuentes de trabajo.

**Artículo 5.-** Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, las siguientes:

I.- Los programas de salud y rehabilitación dirigidos a mejorar su calidad de vida;

II.- El acceso a la educación en todos sus niveles, sin restricción, conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y sus leyes reglamentarias;

III.- El trabajo y los programas de incorporación al mercado laboral, facilitando su contratación, promoción y permanencia en el empleo, tanto en sectores públicas como privados;

IV.- Los programas de accesibilidad universal

que les garanticen el acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte y las comunicaciones; y

V.- Los programas que les garanticen el disfrute y la participación en las actividades sociales, políticas, culturales, recreativas y deportivas.

## TÍTULO SEGUNDO
## DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

### CAPITULO I
### DE LOS DERECHOS

**Artículo 6**.- Los derechos de las personas con discapacidad son los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como los establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes reglamentarias que de ella emanen.

**Artículo 7.-** Para efectos de la presente Ley se entenderán por derechos específicos de las personas con discapacidad los siguientes:

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares pueden ser utilizados por otras personas en tanto no haya una persona con discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo internacional de la discapacidad acompañado de la leyenda "USO PREFERENTE".

II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo para personas con discapacidad, los cuales en ningún momento pueden ser utilizados por otras personas, como es el caso de los cajones de estacionamiento, los baños públicos y elevadores o mecanismos de ascenso o descenso. Estos lugares deberán estar señalados con el logotipo internacional de la discapacidad acompañado de la leyenda "USO EXCLUSIVO".

III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo internacional de la discapacidad.

La violación a estos derechos será sancionada inmediatamente por las autoridades competentes, quedando facultada la autoridad de tránsito para ingresar incluso a los estacionamientos de los centros comerciales y demás sitios de acceso al público, para remover los vehículos que indebidamente hagan uso de los cajones reservados a los usuarios de silla de ruedas, así como aquellos que obstaculicen los accesos destinados para silla de ruedas.

**Artículo 8.-** Las personas con discapacidad temporal podrán gozar de los derechos específicos que se mencionan en las fracciones I, II y III del artículo que antecede, sin embargo, no podrán ser beneficiadas con los programas de gobierno dirigidos de manera exclusiva a las personas con discapacidad permanente.

**Artículo 9**.- Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes deberán restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones correspondientes a los responsables. Las denuncias de tales violaciones podrán realizarse directamente por el interesado o por cualquier persona que presencie o le conste dicha violación.

## TÍTULO TERCERO
## DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

### CAPÍTULO I
### DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR

**Artículo 10**.- El Gobernador del Estado de México tiene las siguientes facultades y atribuciones:

I.- Integrar al Plan General de Desarrollo del Estado de México, el programa de acciones tendientes a lograr la integración al desarrollo de las personas con discapacidad;

II.- Elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México, así como supervisar su debido cumplimiento, observando en todo momento lo establecido en los planes y programas de carácter nacional, así como las disposiciones internacionales; y

III.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado de México, los fondos necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública del Estado de México programe y prevea realizar cada año en su beneficio.

IV.- Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado de México y que garanticen el ejercicio efectivo de todos sus derechos;

V.- Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad;

VI.- Nombrar a los titulares de los órganos especializados en materia de discapacidad;

VII.- Establecer acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales en materia de personas con discapacidad; y

VIII.- Impulsar el desarrollo de cursos de sensibilización y capacitación a todos los trabajadores de la Administración Pública del Estado de México en el conocimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y el tratamiento de estas cuando soliciten algún servicio de los Organismos y/o Dependencias que la conforman.

### CAPITULO II
### DE LAS AUTORIDADES

**Artículo 11**.- Las Autoridades de la Administración Pública del Estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas integrar y etiquetar en sus respectivos presupuestos de cada año, los costos de los programas y acciones específicas a favor de las personas con discapacidad.

**Artículo 12.-** El Gobierno del Estado, a través de las Secretarías de Salud y de Educación, Cultura y Bienestar Social, del DIF Estatal y la Universidad Autónoma del Estado de México, impulsará y fomentará la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos responsables de la atención de personas con discapacidad, de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Estatal de Salud y los programas educativos.

**Artículo 13**.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como los órganos de procuración de justicia, deberán elaborar, publicar y difundir manuales y material informativo en los que se dé a conocer a las personas con discapacidad sobre las autoridades a las cuales deben acudir en el caso de la violación de sus derechos, así como de los procedimientos que se deben iniciar.

**Artículo 14.-** La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, deberá atender de manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas con discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido o como probable responsable le correspondan, durante la integración de la carpeta de investigación y durante los procesos respectivos.

**Artículo 15**.- Las agencias del Ministerio Público que atiendan los delitos cometidos contra o por personas con discapacidad, deberá contar con las instalaciones adecuadas que garanticen la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, así como con todo el personal y material especializado que permita la atención adecuada y el ejercicio de sus derechos que como ofendido o como probable responsable le correspondan.

**Artículo 16.-** La Defensoría de Oficio y el DIF Estatal, deberán actualizar y capacitar a un cuerpo de defensores de oficio, para la debida atención y defensa de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad de escasos recursos, debiendo contar igualmente con el personal y material especializado, que garanticen una defensa adecuada, en igualdad de condiciones con las demás personas.

**Artículo 17**.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, deberá elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

## CAPÍTULO III
## DE LA SALUD

**Artículo 18**.- Corresponde a todas las dependencias que conforman el sector salud, garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud de las personas con discapacidad habitantes del Estado de México, debiendo prestar la atención médica de calidad y la rehabilitación que sean necesarias, aún cuando no sean derecho habientes, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Los servicios que presten las instituciones para la rehabilitación de personas con discapacidad, aún cuando se denominen, ostenten o constituyan bajo otra modalidad, se sujetarán a las disposiciones previstas en la Ley General de Salud y a esta Ley.

Los servicios de atención médica deberán prestarse inmediatamente después de la detección o diagnóstico de cualquier anomalía o deficiencia.

**Artículo 19**.- A fin de garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad, corresponde a la Secretaría de Salud del Estado de México las siguientes atribuciones:

I.- Elaborar programas de prevención de discapacidades, para su ejecución en los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de México;

II.- Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad;

III.- Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios que utilicen silla de ruedas;

IV.- Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo “traductor intérprete”, que auxilie a las personas sordas en sus consultas o tratamientos;

V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de México, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la atención, revisión y consulta de las personas con discapacidad;

VI.- Promover a través de convenios con universidades y centros de investigación, la investigación científica y tecnológica, dirigida a mejorar la atención de las personas con discapacidad;

VII.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica que garantice la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, a los centros de salud,

clínicas y hospitales y en general a todas las instalaciones de salud a su cargo o administración;

VIII.- Elaborar la clasificación oficial de las discapacidades permanentes y temporales, con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, aprobada por la Organización Mundial de la Salud; estableciendo los niveles de cada discapacidad y determinando el nivel a partir del cual será considerada como sujeta de los beneficios de los programas de gobierno.

La clasificación funcional que le sea otorgada a una persona con discapacidad, tendrá validez ante cualquier dependencia u organismo público o privado del Estado; y

IX.- Emitir el cuadro básico que agrupará, caracterizará y codificará los insumos para la atención de las personas con discapacidad, al que deberán ajustarse las dependencias e instituciones que presten servicios de salud a estas personas.

**Artículo 20**.- Corresponde a los directores o titulares de los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de México, lo siguiente:

I.- Supervisar y garantizar un trato adecuado a las personas con discapacidad;

II.- Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad;

III.- Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios que utilicen silla de ruedas; y

IV.- Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo "traductor intérprete", que auxilie a las personas sordas en sus consultas o tratamientos.

## CAPÍTULO IV
## DE LA ASISTENCIA SOCIAL Y PRIVADA

**Artículo 21.-** Corresponde al titular del DIF Estatal lo siguiente:

I.- Diseñar y operar las actividades relativas a la prevención de la discapacidad y la rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad, que estén a su alcance.

Las acciones de rehabilitación de las personas con discapacidad comprenderán:

a) Rehabilitación médico-funcional;

b) Orientación y tratamiento psicológico;

c) Atención integral, incluyendo la adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;

d) Rehabilitación socio-económica y laboral;

e) Apoyo para obtener financiamiento en la adquisición de dispositivos, prótesis, herramientas, accesorios y equipos para su autosuficiencia; y

f) Facilitar la adquisición de dispositivos, prótesis, herramientas, accesorios y equipos, concediendo descuentos, previo estudio socio-económico, a aquellos que lo necesiten.

II. Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas con discapacidad que soliciten los servicios de rehabilitación, ayudas técnicas y servicios específicos;

III. Proporcionar atención médica especializada en materia de rehabilitación y canalizar a las personas con discapacidad, cuando así lo requieran, a los institutos nacionales donde puedan recibir atención de alto nivel;

IV. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de discapacidades y de rehabilitación de personas con discapacidad, en centros no hospitalarios;

V. Formar, capacitar y actualizar recursos humanos para el trato adecuado de los diferentes tipos de discapacidad que aquejan a la población;

VI. Intervenir ante las instituciones gubernamentales o de asistencia privada, con el objeto de conseguir financiamiento para la adquisición de aparatos o equipos que requieran las personas con discapacidad;

VII. Informar, a través de los medios de comunicación masiva, sobre las características de la discapacidad, la identificación temprana y la atención oportuna de los factores que la causan;

VIII. Proporcionar apoyo y orientación a los familiares de las personas con discapacidad para que les ofrezcan mayor cuidado y atención, así como organizar a terceras personas que apoyen su incorporación a la sociedad;

IX.- Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización sobre las diversas discapacidades;

X.- Crear y operar Unidades Básicas de Rehabilitación para personas con discapacidad de escasos recursos;

XI.- Crear y operar bancos de prótesis, órtesis y ayudas técnicas para personas con discapacidad de escasos recursos; y

XII. Proporcionar orientación y asistencia jurídica en juicios de interdicción y en acciones legales, con particular atención de las personas con discapacidad mental.

**Artículo 22**.- Las autoridades del sector salud del Estado a través de sus instituciones, establecerán procedimientos de orientación y asesoría para las personas con discapacidad respecto al uso de los servicios que requieran, así como de las prestaciones a su alcance y las condiciones de acceso a las mismas.

**Artículo 23**.- La prestación de servicios a las personas con discapacidad comprenderá:

I. Atención médica;
II. Educación regular y especial;
III. Orientación y rehabilitación para el trabajo;
IV. Acciones en materia de transporte y tránsito;
V. Facilidades urbanísticas y arquitectónicas;
VI. Actividades deportivas, recreativas y culturales;
VII. Atención integral; y
VIII. Atención y orientación a la familia o a terceros que tengan a su cargo a alguna persona con discapacidad.

El Instituto podrá solicitar los informes que considere necesarios para verificar que estos servicios se ejecuten con calidad.

**Artículo 24**.- Las instituciones y organizaciones que brinden algún servicio, atención, prestación o ayuda a personas con discapacidad, están obligadas a tratar su imagen con respeto a su dignidad humana, evitando externar sentimientos de lastima, o hechos denigrantes atribuibles a su condición.

## CAPÍTULO V
## DE LA EDUCACIÓN

**Artículo 25**.- Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de Educación del Estado de México:

I.- Garantizar el acceso a la educación regular a las personas con discapacidad en el Estado de México;

II.- Proporcionar a las personas con discapacidad que así lo requieran educación especial, de acuerdo a sus necesidades específicas, tendiendo en todo momento a potenciar y desarrollar sus habilidades residuales y su capacidad de conocimiento, con la finalidad de lograr su incorporación a la vida activa y a un sistema de trabajo, que le permita autorrealizarse, servirse a sí misma y a la sociedad;

III.- Cuando la severidad de la discapacidad lo haga imprescindible, la educación se llevará a cabo en centros especiales de educación

que funcionarán en coordinación con los centros ordinarios;

IV.- Las guarderías, jardines de niños, escuelas, institutos y, en general, aquellos establecimientos, cualquiera que sea su denominación o régimen jurídico, en que se lleven a cabo actividades de educación especial y rehabilitación de discapacidades somáticas o psicológicas, se sujetarán a las normas técnicas estatales que para tal efecto establezca la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social;

V.- Las instituciones educativas públicas o privadas de todos los niveles, deben ofrecer facilidades administrativas para el libre ingreso de personas con discapacidad; y

VI.- Los hijos de trabajadores con discapacidad gozarán de servicio gratuito de guardería, para ello, las instituciones educativas y sanitarias estatales promoverán la prestación del servicio hasta satisfacer la demanda.

VI.- Crear y operar centros educativos en los que se instruya la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, a las personas que lo requieran;

VII.- Integrar a los libros de texto gratuitos, información sobre las personas con discapacidad que permita sensibilizar e informar a los estudiantes, sobre dichas personas e infundirles valores positivos con relación a la importancia de su integración social en su comunidad;

VIII.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las instalaciones educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con discapacidad en todos los planteles educativos del Estado de México;

IX.- Propiciar en todo momento la integración de todos los estudiantes con discapacidad, a la educación regular;

X.- Supervisar y garantizar un trato adecuado a los estudiantes y docentes con discapacidad;

XI.- Programar y ejecutar permanentemente cursos de capacitación, actualización y sensibilización dirigidos al personal docente y administrativo de sus centros educativos;

XII.- Proponer y ejecutar cursos de verano específicos para personas con discapacidad;

XIII.- Realizar las adecuaciones necesarias a las instalaciones educativas, a fin de garantizar el libre acceso y tránsito de los estudiantes y docentes con discapacidad; y

XIV.- Garantizar la existencia del mobiliario y material didáctico que requieran los estudiantes y docentes con discapacidad.

**Artículo 26.-** Las Escuelas Particulares de Educación de nivel Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior, Superior, Universidades y Tecnológicos, tienen la obligación de llevar a cabo lo siguiente:

I.- Adecuar todas sus instalaciones para el libre acceso y seguridad de los estudiantes con discapacidad que se inscriban en sus planteles;

II.- Aceptar la inscripción de los estudiantes con discapacidad que deseen inscribirse a sus planteles;

III.- Capacitar a su personal docente para que esté preparado en la atención de los estudiantes con discapacidad;

IV.- Reservar por lo menos el 10 por ciento de sus becas para estudiantes de escasos recursos, con discapacidad; y

V.- Asignar lugares exclusivos de estacionamiento en sus instalaciones, para estudiantes, maestros y personal con discapacidad que así lo requieran.

## CAPÍTULO VI
## DEL TRABAJO Y LA CAPACITACIÓN

**Artículo 27**.- Para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, corresponde a la Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social del Estado de México lo siguiente:

I.- Elaborar el Programa de Empleo y Capacitación para las personas con discapacidad permanente que habiten en el estado de México;

II.- Brindar orientación y rehabilitación para el trabajo, lo cual comprenderá, entre otras, las prestaciones siguientes:

a) Los tratamientos de rehabilitación médico-funcional específicos para el desempeño de la función laboral;

b) La orientación laboral;

c) La formación, readaptación y reeducación laboral;
d) La colocación de acuerdo a la aptitud y actitud ante el trabajo; y

e) El seguimiento y evaluación del proceso de recuperación, desde el punto de vista físico, psicológico y laboral de la persona con discapacidad;

En la orientación laboral se tomarán en cuenta las potencialidades de la persona con discapacidad, educación escolar, capacitación laboral o profesional adquirida, las perspectivas de empleo existentes para cada caso y se atenderán sus motivaciones y preferencias vocacionales.

Se promoverá la integración de los trabajadores con discapacidad al sistema ordinario de trabajo y, facilitando su incorporación al sistema productivo donde puedan desempeñar trabajos acordes a sus capacidades.

Se generarán programas de asesoría integral y créditos a quienes deseen establecerse como trabajadores autónomos en microempresas.

III.- Promover permanentemente a través del Programa de Empleo y Capacitación, la contratación de personas con discapacidad permanente, en los diferentes sectores productivos y de servicios, creando para ello, programas para la capacitación y el adiestramiento laboral de personas con discapacidad, la creación de agencias laborales, ferias de empleo, y de centros de trabajo protegido;

IV- Crear un sistema de colocación laboral que permita ofertar empleo al mayor número de personas con discapacidad permanente, promoviendo su permanecía y desarrollo en el mismo, en la que se concentren listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidades;

V. Gestionar el apoyo de los sectores público e industrial para colocar a las personas con discapacidad en puestos vacantes;

VI.- Difundir entre las empresas, industrias y giros comerciales, los estímulos fiscales y demás beneficios que se deriven de la contratación de personas con discapacidad permanente, debiendo brindar asistencia técnica a los sectores empresarial y comercial en materia de discapacidad;

VII.- Diseñar y operar programas de trabajo protegido para personas con discapacidad intelectual, y personas con discapacidad motriz severa; y

VIII.- Crear un registro de las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con discapacidad permanente, a efecto de que sean objeto de visitas de inspección para verificar la existencia fehaciente de la relación laboral. En este caso, la Secretaría del Trabajo del Estado de México dará vista a la autoridad correspondiente a fin de que, en su caso, se inicien los procesos administrativos y legales correspondientes por el incumplimiento de esta disposición,

con base en la presente Ley y demás normas aplicables.

IX.- Promover el reconocimiento público e incentivos económicos de personas destacadas en el desarrollo laboral que presenten discapacidad.

X.- Diseñar mecanismos de financiamiento, subsidio o coinversión para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos por las Organizaciones de y para personas con discapacidad; y

XI.- Vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, que las condiciones en que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean discriminatorias.

**Artículo 28.-** Las autoridades de la Administración Pública del Estado de México, deben reservar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad.

**Artículo 29**.- Las autoridades estatales y municipales en su ámbito de competencia, otorgarán facilidades a las personas con discapacidad, que soliciten permisos y licencias de funcionamiento comercial que fomente el autoempleo.

**Artículo 30.-** Tanto los Órganos de la Administración Pública del Estado de México, como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con discapacidad deberán de:

I.- Acondicionar físicamente los lugares de trabajo a fin de garantizar el libre tránsito y seguridad de los trabajadores con discapacidad;

II.- Adquirir y proporcionar los materiales y ayudas técnicas que requieran los trabajadores con discapacidad para la realización de sus actividades;

III.- Ofrecer periódicamente, programas de capacitación a personas con discapacidad; y

IV.- Ofrecer programas de sensibilización a las personas trabajadoras, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como del respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto.

Por ningún motivo se podrá pagar menos sueldo a un trabajador con discapacidad que el destinado a una persona sin discapacidad, por la realización del mismo trabajo.

**Artículo 31.-** El Gobernador del Estado de México propondrá a las autoridades competentes, los estímulos fiscales y reconocimientos que beneficien a las empresas, industrias y comercios que contraten personas con discapacidad, así como los beneficios adicionales para quienes en virtud de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo.

## CAPÍTULO VII
## DEL DESARROLLO URBANO Y LA ACCESIBILIDAD

**Artículo 32**.- Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al público.

Dichas normas deberán contener las medidas, las texturas, los materiales, las características y toda aquella información que permita realizar eficientemente las adecuaciones o modificaciones que establezca dicho Manual.

El Manual deberá contener las Normas Técnicas de Accesibilidad que deberán aplicarse tanto a la remodelación de edificios públicos como a los de nueva construcción.

**Artículo 33**.- Todos los Órganos de la Administración Pública del Estado de México, deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de

accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad.

Los programas deberán contar y prever las medidas de seguridad y libre tránsito en los espacios con acceso al público.

**Artículo 34**.- Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública del Estado de México, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho costo a su presupuesto de egresos correspondiente.

**Artículo 35.**- Todas las empresas, centros comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso al público deberá contar con las medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para todas las personas con discapacidad.

**Artículo 36**.- Los costos de las adecuaciones que eroguen las empresas, centros comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso al público, será sujeto de estímulos fiscales o reconocimientos por la autoridad competente.

**Artículo 37**.- Todo inmueble con acceso al público está obligado a contar con las condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para personas con discapacidad.

La violación o incumplimiento del presente artículo, será sancionado desde la suspensión de la licencia de construcción, hasta la clausura de la obra. En el caso de obra terminada, no se permitirá su uso hasta en tanto cumpla con las medidas mencionadas en el presente artículo.

**Artículo 38.**- Las personas con discapacidad visual usuarias de perro guía, tendrán derecho al libre acceso a inmuebles públicos que presten algún servicio al público o establecimientos con servicios comerciales.
Los inmuebles deberán contar con las adecuaciones físicas de señalización, acceso y permanencia, que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de las personas con discapacidad visual, las usuarias de perro guía, o cualquier otro instrumento de auxilio para su discapacidad.

## CAPÍTULO VIII
## DEL TRANSPORTE PÚBLICO

**Artículo 39**.- Las personas con discapacidad tendrán las prerrogativas siguientes:

I. Las terminales y rutas de transporte público deberán contar con zonas reservadas en la infraestructura vial, debidamente señalizadas, para el ascenso y descenso exclusivo de personas con discapacidad;

II. El uso de asientos exclusivos en los diversos medios de transporte público que determine la autoridad competente; y

III. Estacionarse en zonas de estacionamiento restringido y ocupar los espacios de uso exclusivo en los estacionamientos de servicio al público que sean destinados para personas con discapacidad, los que deberán estar diseñados y señalizados de acuerdo a requerimientos específicos.

Los concesionarios del servicio de transporte de pasajeros están obligados a prestar el servicio a las personas con discapacidad sin discriminación alguna.

**Artículo 40**.- Para el cumplimiento de la fracción III del artículo anterior, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Agencia de Seguridad Estatal, otorgará gratuitamente calcomanías distintivas que deberán fijarse en el parabrisas y medallón de los vehículos en que viajen personas con discapacidad, debiendo llevar un registro y control de las mismas.
**Artículo 41**.- Las autoridades de tránsito estatales y municipales tendrán las obligaciones siguientes:
I. Permitir el estacionamiento de vehículos particulares en los que viajen personas con discapacidad y que cuenten con la calcomanía correspondiente en zonas de

estacionamiento restringido, siempre y cuando no se afecte de manera sustancial el tránsito y sea por el menor tiempo posible;

II. Diseñar e instrumentar programas y campañas permanentes de educación vial y cortesía urbana, encaminados a inculcar respeto y amabilidad hacia las personas con discapacidad durante su tránsito por la vía, edificios y sitios públicos.

**Artículo 42**.- Los prestadores de servicio público de transporte deberán reservar, para ser utilizados por personas con discapacidad, dos asientos en vehículos de más de cuatro plazas y un asiento en vehículos menores, conforme a las normas siguientes:

I. Deberán estar situados cerca de la puerta o puertas de acceso de los vehículos y contarán con un emblema o leyenda que los identifique;

II. Podrán ser utilizados por cualquier usuario, en tanto no sean requeridos por alguna persona con discapacidad.

**Artículo 43**.- Son obligaciones de la Secretaría de Transporte del Estado de México las siguientes:

I.- Elaborar y ejecutar programas permanentes de adecuación y accesibilidad universal de las unidades de transporte público, tomando en consideración las disposiciones del Manual de Equipamiento Básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas y demás personas con discapacidad que hagan uso del transporte público;

II.- Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico que deberán cubrir las nuevas unidades de transporte público, para garantizar el acceso a los usuarios con discapacidad;

III.- Elaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas y equipo con el que deben contar las unidades de transporte público;

IV.- Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con los dispositivos de accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen el acceso a las personas con discapacidad;

V.- Proponer a las autoridades competentes los estímulos fiscales o reconocimientos que se puedan otorgar a los propietarios de las unidades de transporte público, que cumplan con las disposiciones del programa sobre accesibilidad y del Manual de Equipamiento Básico;

VI.- Difundir los estímulos fiscales y reconocimientos a los que tienen derecho los propietarios de las unidades de transporte público, que realicen las adecuaciones de accesibilidad y equipamiento básico en sus vehículos, para ofrecer el servicio a las personas con discapacidad;

VII.- Realizar y ejecutar programas de cultura y sensibilización a todas las personas trabajadoras en la red de transporte público, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto; y

VIII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad universal, dirigidos a todo el personal que labora en la Secretaría.

**Artículo 44**.- Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones lo siguiente:

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en los sistemas de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México.

II.- Difundir permanentemente a través de los medios de comunicación a su alcance, el respeto a las personas con discapacidad, así como el respeto a sus derechos fundamentales con ayuda del Instituto;

III.- Prever que los nuevos sistemas de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México, cuenten con las medidas de accesibilidad universal, libre tránsito y seguridad para los usuarios con discapacidad; y

IV.- Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en la Secretaría, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto.

**Artículo 45**.- Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público en el Estado de México, están obligadas a:

I.- Prestar el servicio de transporte público de pasajeros con unidades que en su totalidad cuenten con las condiciones y dispositivos de accesibilidad para personas con discapacidad;

II.- Coadyuvar en el diseño y construcción para que todas las áreas autorizadas para paradas de autobús del servicio de transporte de pasajeros sean accesibles para personas con discapacidades; y

III.- Diseñar y ejecutar programas de sensibilización dirigidos a todos los operadores de sus unidades, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto.

## CAPÍTULO IX
## DE LA VIDA CULTURAL, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EL DEPORTE

**Artículo 46**.- La Secretaría de Turismo del Estado de México, el Instituto Mexiquense de Cultura, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y los Municipios del Estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán llevar a cabo lo siguiente:

I.- Elaborar y ejecutar un programa de accesibilidad que garantice el libre acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad en los lugares donde se impartan o realicen actividades, turísticas, culturales, deportivas o recreativas; y

II.- Reglamentar y supervisar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, bajo las cuales se realicen las actividades turísticas, culturales, deportivas o recreativas, las cuales deberán ser accesibles para las personas con discapacidad.

**Artículo 47.-** Corresponde a los Municipios del Estado de México, llevar a cabo lo siguiente:

I.- Destinar horarios adecuados en las instalaciones deportivas a su cargo, para que puedan hacer uso de ellas los deportistas con discapacidad que lo soliciten;

II.- Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte adaptado en su Municipio;

III.- Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en su Municipio;

IV.- Prever y adquirir el equipo deportivo que se requiere para la práctica del deporte adaptado; y

V.- Incluir tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de las instalaciones deportivas de su Municipio, el equipamiento y accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad.

El acceso y uso de las instalaciones deportivas será siempre gratuito para las personas con discapacidad.

## CAPÍTULO XI
## DE LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA

**Artículo 48**.- El Instituto Electoral del Estado de México, deberá realizar las acciones que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política del Estado de México, principalmente deberá garantizar en todo momento su derecho a votar y a ser votados.

Artículo 49.- Los Partidos Políticos con registro en el Estado de México deberán garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos. Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección popular.

Artículo 50.- Los Órganos de la Administración Pública del Estado de México, deberán promover en todo momento la participación activa de las personas con discapacidad o sus representantes en los órganos o mecanismos de consulta, sobre todo en aquellos en los que se tomen decisiones relativas a las personas con discapacidad.

## TÍTULO CUARTO
## DEL APOYO ECONÓMICO

## CAPÍTULO I
## DE SUS BENEFICIARIOS

**Artículo 51.-** El programa de apoyo económico para las personas con discapacidad permanente de escasos recursos, habitantes en el Estado de México, será el equivalente a medio salario mínimo diario general vigente en el Estado de México.

**Artículo 52.-** El Instituto será el encargado de establecer los criterios para el otorgamiento del apoyo económico mencionado en el artículo que antecede, debiendo establecer las prioridades en atención a la capacidad presupuestal que le sea designada para tales efectos.

El apoyo será entregado a los beneficiarios en forma mensual, el Instituto determinará el medio idóneo para su entrega.

**Artículo 53.-** El Instituto está obligado a elaborar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios, mismo que deberá publicar a más tardar el 31 de enero de cada año en la Gaceta del Gobierno.
De igual manera deberá programar la ampliación anual de dicho programa e integrar el presupuesto respectivo a su presupuesto anual para su aprobación por la Cámara de Diputados.

**Artículo 54.-** El Gobernador del Estado de México deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de México, la asignación que garantice el apoyo económico de las personas con discapacidad permanente de escasos recursos habitantes en el Estado de México, sin perjuicio de otras asignaciones presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que se desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad.

**Artículo 55.-** La Cámara de Diputados del Estado de México, deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación suficiente para hacer efectivo el apoyo económico a las personas con discapacidad permanente de escasos recursos, habitantes en el Estado de México. Dicha asignación en ningún caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior.

Artículo 56.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta Ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.
Los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento del apoyo económico, ni podrán emplearlo para hacer cualquier tipo de proselitismo.

## TÍTULO QUINTO
## DEL INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA INTEGRACIÓN
## AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

**CON DISCAPACIDAD**

**CAPÍTULO I**
**DE SU CREACIÓN**

**Artículo 57.-** Se crea el Instituto Mexiquense para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con los tres poderes del Estado que menciona el artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como con los Municipios y las Organizaciones de la Sociedad Civil, en el proceso de integración al desarrollo de las personas con discapacidad.

El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión. El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que adquiera por cualquier otro título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se le otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes correspondientes.

En la contratación del personal que labore en el Instituto, se deberá privilegiar la profesionalización, especialización y capacitación permanente de sus servidores públicos, en materia de derechos humanos, combate a la discriminación, promoción de la igualdad de oportunidades y todas aquellas materias afines a la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

En la tarea de integración al desarrollo de las personas con discapacidad, el Instituto deberá promover el empleo de las nuevas tecnologías disponibles, a fin de cumplir con su objeto.

**CAPÍTULO II**
**DE SUS FACULTADES**

**Artículo 58**.- El Instituto Mexiquense para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, tendrá las facultades siguientes:

I.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México;

II.- Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas en materia de discapacidad en el Estado de México;

III.- Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública del Estado de México, los programas específicos que en materia de discapacidad deban elaborar y ejecutar cada año;

IV.- Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública del Estado de México, así como a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un mejor desempeño en sus funciones específicas;

V.- Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban realizar en el Estado de México;

VI.- Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las personas con discapacidad se desarrollen en el Estado de México;

VII.- Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado de México;

VIII.- Elaborar las propuestas legislativas que contribuyan a la reforma integral a la legislación vigente, garantizando en todo momento el interés y beneficio de las personas con discapacidad;

Las propuestas legislativas que elabore el Instituto deberán en todo momento procurar la armonización con los ordenamientos internacionales;

IX.- Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad del Estado de México;

X.- Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al Presupuesto de Egresos del Estado de México de cada año;

XI.- Promover y difundir en la sociedad una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad, resaltando sus valores y habilidades residuales;

XII.- Promover campañas periódicas contra los estereotipos y prejuicios respecto de las personas con discapacidad;

XIII.- Realizar campañas periódicas de difusión y respeto por los derechos de las personas con discapacidad;

XIV.- Promover la sensibilización y concientización de todos los miembros de la sociedad respecto de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en los niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos;

XV.- Promover la participación de los diferentes medios de comunicación en la difusión de los diferentes programas y acciones a favor de las personas con discapacidad;

XVI.- Celebrar convenios con instituciones privadas, sociales y organizaciones de y para personas con discapacidad, que tengan como finalidad impulsar la investigación, desarrollo y producción de ayudas técnicas a costos accesibles para personas con discapacidad.

XVII.- Coordinarse con las organizaciones de la sociedad civil a fin de canalizar sus propuestas y sugerencias a los diferentes órganos de la Administración Pública del Estado de México; y

XVIII.- Celebrar y ejecutar convenios de cooperación, intercambio y ayuda con instituciones, organizaciones y organismos internacionales, en beneficio de las personas con discapacidad.

## CAPÍTULO III
## DE SU INTEGRACIÓN

**Artículo 59**.- El Instituto se integrará por:

I.- La Junta Directiva;

II.- El Director General;

III.- La Subdirección de Investigaciones Jurídicas y Asuntos Legislativos;

IV.- La Subdirección del Registro de Personas con Discapacidad;

V.- La Subdirección de Programas Prioritarios;

VI.- La Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales, Municipales, enlace con Gobierno y Organismos Internacionales;

VII.- Las unidades administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, las cuales estarán precisadas en el Estatuto Orgánico del Instituto.

**Artículo 60**.- La Junta Directiva estará conformada por:

I.- El titular de la Secretaría General de Gobierno quien fungirá como presidente de la junta;
II.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

III.- El titular de la Secretaría de Finanzas;

IV.- El titular de la Secretaría de Salud;

V.- El titular de la Secretaría del Trabajo;

VI.- El titular de la Secretaría de Educación;

VII.- El titular de la Secretaría de Desarrollo

Urbano;

VIII.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico

IX.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano;

X.- El titular de la Secretaría de Comunicaciones;

XI.- El titular de la Secretaría de Transporte;

XII.- El titular de la Secretaría de Turismo;

XIII.- El titular de la Procuraduría General de Justicia;

XIV.- El Director General del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte; y

XV.- El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la Junta.

Artículo 61.- La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

I.- Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, así como sus modificaciones y actualizaciones;

II.- Aprobar los programas específicos del Instituto;

III.- Aprobar el presupuesto de egresos del Instituto; y

IV.- Aprobar el informe anual del Instituto.

## CAPÍTULO IV
## DE SU DIRECCIÓN

**Artículo 62**.- El Director General del Instituto será nombrado por el Gobernador del Estado de México y durará en su cargo 5 años, pudiendo ser ratificado por una sola vez para un periodo adicional de tres años.

**Artículo 63.-** Son requisitos para ser Director General del Instituto, los siguientes:

I.- Ser mexicano por nacimiento;

II.- Tener por lo menos 30 años de edad al momento de asumir el cargo;

III.-Tener algún tipo de discapacidad permanente, con una antelación no menor a 5 años;

IV.- Tener título profesional; y

V.- Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema de la discapacidad.

El Gobernador del Estado de México, deberá verificar que los candidatos cuenten con los requisitos establecidos en el presente artículo, quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y examinarlos sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional.

**Artículo 64**.- El Director General tendrá las siguientes facultades:

I.- Representar al Instituto ante las autoridades nacionales, estatales y municipales, así como ante los Organismos Internacionales especializados en la atención de las personas con discapacidad;

II.- Elaborar el presupuesto de egresos del Instituto y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación;

III.- Administrar los bienes, recursos y el presupuesto del Instituto, debiendo rendir un informe anual a la Junta Directiva;

IV.- Nombrar y remover a los titulares de las subdirecciones del Instituto que se mencionan en las fracciones III, IV, V, VI, y a los titulares de las unidades administrativas designados en términos de la fracción VII del artículo 59 de la presente Ley.

Los titulares de las subdirecciones y unidades administrativas a que se refiere la presente fracción, deberá contar con conocimientos profesionales o técnicos afines al desempeño de su cargo.

V.- Elaborar el Programa para la Integración al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México.

**Artículo 65.**- Son obligaciones del Director General del Instituto, las siguientes:

I.- Velar en todo momento por el fiel y leal desempeño de las funciones del Instituto con pleno apego a la presente Ley y demás ordenamientos aplicables;

II.- Rendir el informe de actividades de cada año, el cual será presentado ante la Junta Directiva para su aprobación;

III.- Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva; y

## CAPÍTULO V
## DEL CONSEJO CONSULTIVO

**Artículo 66**.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo que estará conformado por miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, especialistas, académicos, empresarios, personas de notable trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y un representante de cada consejo municipal.

El Gobernador del Estado presidirá el Consejo, su integración se hará a propuesta del Ejecutivo, y su funcionamiento se regirá por su reglamento interno.

El Consejo será un órgano de consulta y asesoría para diseñar políticas públicas y establecer acciones específicas que el Instituto pueda concertar con las autoridades competentes.

**Artículo 67**.- Específicamente Corresponde al Consejo:

I. Evaluar la prestación de los servicios de atención a personas con discapacidad; y

II. Analizar y proponer las políticas públicas encaminadas a lograr la integración educativa, laboral, recreativa, cultural y deportiva de las personas con discapacidad.

En cada municipio se creará un consejo para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, cada consejo municipal tendrá un representante que formará parte del Consejo Consultivo.

Los ayuntamientos determinarán la estructura y funcionamiento de sus respectivos consejos municipales.

## CAPÍTULO XI
## DE LA VIGILANCIA

**Artículo 68**.- Todas los órganos de la Administración Pública del Estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar el debido cumplimiento de la presente ley y en su caso, proceder a aplicar las sanciones que procedan a los responsables del incumplimiento o violación del citado ordenamiento.

**Artículo 69**.- El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México, velará en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley y en casos de violación u omisión dará vista a la autoridad competente a fin de que se avoque a la investigación y en su caso a la sanción de dichas violaciones.

**Artículo 70**.- Todo individuo que sea testigo o conozca de la comisión de acciones contrarias a esta Ley tiene el deber de denunciarlo a las autoridades competentes, quienes tendrán la obligación de investigar inmediatamente las denuncias y en su caso proceder a sancionar a los infractores.

## TÍTULO SEXTO
## DE LAS SANCIONES Y RECURSO

### CAPITULO I
### DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

**Artículo 71**.- El incumplimiento de la presente ley será sancionado conforme a los criterios siguientes:

I.- Las autoridades de tránsito del Estado de

México, en su ámbito de competencia sancionarán a quienes contravengan lo establecido por el Artículo 5, fracciones I, II y III de la presente Ley, con hasta 30 días de salario mínimo general vigente en el Estado de México.

Cuando la falta sea cometida por vehículos oficiales, del transporte público, pertenecientes a empresas, negociaciones mercantiles o prestadoras de servicios, la multa se aplicará hasta por el doble de lo establecido en la presente fracción.

Los usuarios de vehículos particulares que reincidan en la violación de las fracciones anteriormente mencionadas, serán sancionados con una multa equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en el Estado de México.

II. Multa equivalente de cincuenta a cien veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a los prestadores del servicio público de transporte que nieguen u obstaculicen el uso del servicio a las personas con discapacidad;

III. Multa equivalente de cincuenta a cien veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a los propietarios de restaurantes y bares que no cuenten con los dispositivos de accesibilidad universal para personas con discapacidad.

IV. Multa equivalente de quinientas a mil quinientas veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción a:
a) Los propietarios de centros comerciales y plazas comerciales que no cuenten con los dispositivos de accesibilidad universal para personas con discapacidad;

b) Los empresarios, administradores y organizadores de espectáculos públicos que omitan reservar los espacios preferentes y exclusivos para las personas con discapacidad, así como realizar las facilidades de acceso;

c) Las empresas o constructoras de conjuntos urbanos que omitan en el equipamiento urbano del desarrollo habitacional que construyan, la inclusión y construcción de los dispositivos de accesibilidad universal para discapacitados, señalados en la presente Ley. En este caso las autoridades de desarrollo urbano de los municipios serán responsables de la verificar el cumplimiento de esta disposición;

En caso de reincidencia, se deberá proceder a la clausura temporal o definitiva de acuerdo con la normatividad en materia de desarrollo urbano.

V- En las infracciones a lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, se fincará responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente al servidor público. La Secretaría de Educación del Estado de México sancionará a las escuelas privadas que contravengan el contenido del Artículo 26 de la presente Ley, con una multa de 1500 a 3000 días de salario mínimo general vigente en el Estado de México, y en caso de reincidencia la multa aplicada podrá triplicarse;

VI.- La Secretaría de Transporte del Estado de México, sancionará a los infractores del artículo 45 de la presente Ley, con multa de 500 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Estado de México y en caso de reincidencia se procederá a retirar de la circulación a las unidades que no cuenten con los dispositivos mencionados en el referido artículo.

VII.- Los funcionarios y servidores públicos que violen el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Ley, se harán acreedores a una sanción de 30 a 90 días multa, sin perjuicio del procedimiento administrativo o penal que corresponda.

**Artículo 72**.- Para la aplicación de las sanciones administrativas se aplicará, según sea el caso, lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios.

## CAPITULO II
## DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

**Artículo 73**.- Contra las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas contenidas en el presente capítulo, procederá el recurso de inconformidad con base en lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO**.- La presente Ley entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

**ARTÍCULO SEGUNDO.**- Se deroga el Libro Décimo Primero del Código Administrativo del Estado de México, a partir del inicio de la vigencia de ésta Ley.

**ARTÍCULO TERCERO**.- El programa de apoyo económico para personas con discapacidad permanente habitantes en el Estado de México, entrará en vigor el siguiente año fiscal que corresponda a la creación del Instituto.

**ARTÍCULO CUARTO**.- El Gobernador del Estado de México, tendrá un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, para nombrar al Director General del Instituto Mexiquense para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

**ARTÍCULO QUINTO.**- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, conjuntamente con la Cámara de Diputados del Estado de México, a través de la Comisión de Planeación y Gasto Público y con la opinión de la Comisión para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, determinarán el monto inicial que se destinará a la creación y operación del Instituto.

**ARTÍCULO SEXTO**.- El Gobernador del Estado de México, integrará a su Presupuesto de Egresos que presente a la Cámara de Diputados del Estado de México, la partida correspondiente para la creación, integración y operación del Instituto, el primer año de entrada en vigor de la presente Ley.

**ARTÍCULO SÉPTIMO**.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México deberá dar cumplimiento a la presente Ley, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de su entrada en vigor.

**ARTÍCULO OCTAVO**.- La Secretaría de Transporte deberá dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de su entrada en vigor.

**ARTÍCULO NOVENO.-** El Gobernador del Estado de México publicará el Reglamento de la presente Ley a más tardar 120 días después de su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias diputado Samperio.

Se registra la iniciativa y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos, y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a la Comisión Legislativa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad para su estudio.

Para tramitar el punto número 18 corresponde el uso de la palabra al diputado Jorge Álvarez Colín, quien dará lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, presentada por el H. Ayuntamiento de Tenango del Aire, Estado de México

**DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN**. Papel membretado de la Presidencia y Secretaría Municipal.

Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Tenango del Aire.

Tenango del Aire, México a 25 de febrero de 2011.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. PRESENTES.**

En ejercicio de las facultades que me confieren

los artículos 116 y 118 fracciones II y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire, de conformidad con las atribuciones que le otorgan a éste, los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 fracción IV, 112, 113, 122 de la Constitución Política Local y 31 de la Ley Orgánica Municipal, me permito presentar a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, que ha sido aprobada por el H. Ayuntamiento en sesión extraordinaria de cabildo número 81 de fecha 24 de febrero del año 2011, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El 20 de julio de 2006, fue expedida mediante el decreto 241 de la "LV" Legislatura del Estado de México, la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire", el cual fue promulgado y publicado en el periódico oficial por el ciudadano gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, el 1º de agosto del mismo año, entrando en vigor el siguiente día.

Dicha ley establecía la creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, el cual debería contar para su dirección y administración, con una junta directiva y un director, precisando en el artículo 18 de la Ley en comento, mientras que la Ley de Cultura Física y Deporte, expedida mediante el decreto número 93 de la LIV Legislatura, establece y norma en sus artículos 2 fracción IV, 6 fracción II, 8 fracción IV, 12 fracción IV, 14 y 15, la creación de los Consejos Municipales de Cultura Física y Deporte, como órganos de consulta y coordinación de los gobiernos municipales, para convocar, concertar, inducir e integrar las acciones de los sistemas municipales, y tendrían la organización y funciones que determinen los ayuntamientos con arreglo a las prescripciones del presente ordenamiento.

Con el objeto de evitar que la conformación de este órgano de gobierno, dé una carga financiera que distraiga recursos económicos en su sostenimiento, limitando la capacidad de operación y promoción del Instituto, se propone que los cargos en el Consejo Municipal, sean de carácter honorifico, con excepción del secretario, quien percibirá los emolumentos correspondientes a su función de director del instituto, por ello, se propone homogenizar al consejo municipal con los órganos de gobierno de otros organismos descentralizados municipales, como los sistemas DIF.

Por todo lo anteriormente expuesto, el H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire, por mi conducto somete a consideración de esta Legislatura el proyecto de decreto que se adjunta, para que de tenerse por correcto y adecuado se apruebe en sus términos.

Respetuosamente.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
**MOISÉS GARCÍA PÉREZ**
**(Rúbrica)**
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**
**ADIEL ZERMÁNN MIGUEL**
**(Rúbrica)**

Es cuanto señor Presidente.

PRESIDENCIA
SECRETARÍA MUNICIPAL
CABILDO
OFICIO No. PM/TA/415/2011

Tenango del Aire, México a 25 de FEBRERO de 2011.

**ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TENANGO DEL AIRE.**

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS**
**DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE MÉXICO**
**PRESENTE.**

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 116 y 118 fracciones II y IV de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire de conformidad con las atribuciones que le otorgan a éste los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción IV, 112, 113, 122 de la Constitución Política Local; y 31 de la Ley Orgánica Municipal, me permito presentar a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, que ha sido aprobada por el H. Ayuntamiento en sesión extraordinaria de cabildo No. 81a de fecha veinticuatro de febrero del año de dos mil once, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El 20 de julio de 2006 fue expedida mediante el decreto 241 de la "LV" Legislatura del Estado de México la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, el cual fue promulgado y publicado en el periódico oficial por el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, Licenciado Enrique Peña Nieto el 1o de agosto del mismo año, entrando en vigor al día siguiente.

Dicha ley establecía la creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, el cual debería contar, para su dirección y administración con una Junta Directiva y un director, precisando en el artículo 18 de la ley en comento; mientras que la Ley de Cultura Física y Deporte, expedida mediante el decreto No. 93 de la "LIV" Legislatura, establece y norma en sus artículos 2 fracción IV; 6 fracción II; 8 fracción IV; 12 fracción IV; 14 y 15; la creación de los Consejos Municipales de Cultura Física y Deporte como "órganos de consulta y coordinación de los gobiernos municipales para convocar, concertar, inducir e integrar las acciones de los Sistemas Municipales, y tendrán la organización y funciones que determinen los ayuntamientos con arreglo a las prescripciones del presente ordenamiento".

Esta situación nos llevaba a tener dos órganos con funciones prácticamente similares, sin omitir el hecho que en ninguna de los ordenamientos en comento se precisaba si los integrantes de los mismos tendrían un carácter honorifico, lo que significaba la creación de dos estructuras orgánicas que duplicaban funciones y reducían los alcances de sus acciones.

A partir de la revisión de ordenamientos que crean institutos similares en otros municipios, como Chalco, Valle de Chalco, Zumpango, Nezahualcóyotl, entre otros, es palpable el hecho de que el Instituto de nuestro municipio es de los pocos que considera una Junta Directiva cómo órgano de gobierno del mismo, por aparte del Consejo Municipal, por lo que es preciso para nuestro municipio precisar que debe ser una sola figura, el consejo municipal, en quien recaiga la dirección y administración del Instituto, proponiéndose el cambio en diferentes artículos de la ley, sustituyendo a la Junta directiva por el Consejo Municipal.

Por otra parte se proponen cambios en la conformación de éste órgano de gobierno suprimiendo la participación directa del secretario del Ayuntamiento quien, al crearse las suplencias, pasaría a ocupar la del Presidente Municipal; además de proponerse la incorporación de un representante del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, organismo encargado de normar las políticas públicas en la materia en la entidad; un representante del Instituto de Salud del Estado de México, institución normativa de las políticas de salud en la entidad, actividad preponderante y correlativa del deporte; un representante el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dado que es la institución municipal encargada de la asistencia social y la promoción de la integración social, actividades en las que el deporte y la recreación, a partir de políticas públicas correctas y eficientes, pueden ser integradoras; y se propone eliminar la precisión en el número de vocales, a efecto de que estos sean representantes de los deportes que, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte, se registren en el Sistema Municipal.

Con el objeto de evitar que la conformación de este órgano de gobierno sea una carga financiera que distraiga recursos económicos en su sostenimiento, limitando la capacidad de operación y promoción

del instituto, se propone que los cargos en el consejo municipal sean de carácter honorifico, con excepción del secretario, quien percibirá los emolumentos correspondiente a su función de director del Instituto. Con ello se propone homogenizar al consejo municipal con los órganos de gobierno de otros organismos descentralizados municipales como los sistemas DIF.

De igual forma se, y con la finalidad de dar certeza jurídica a las determinaciones del consejo municipal, se plantea el establecimiento de un Libro de actas y las convocatorias formales para las sesiones del consejo, los cuales serán llevados por el secretario del consejo, quien con ello adquiere fe pública en lo que se refiere a los actos de éste órgano de gobierno del instituto.

Se propone además la ampliación de las facultades del instituto, con el objeto de permitirle buscar fuentes alternativas de financiamiento para sus actividades, a fin de garantizarle suficiencia presupuestal, a través de la gestión de donativos. Patrocinios y apoyos de los sectores público y privado estatales y federales. Por igual, se plantea otorgarle la administración de los espacios deportivos con que cuenta el Municipio de Tenango del Aire, ya que ello permitirá contar con una instancia que, a partir de contar con personalidad jurídica propia, pueda defenderlos y evitar que se haga uso de ellos por parte de particulares o "agrupaciones deportivas" que en muchas ocasiones se alejan de la función social del deporte, además de que ello le permitirá de allegarse de recursos económicos adicionales.

El deporte debe ser, en esencia, una actividad que permita un sano desarrollo del ser humano; por ello se plantea incorporar en la ley el deporte de ingenio, que son aquellos que permiten desarrollar las capacidades cognitivas de las personas, a partir del aprendizaje y práctica de deportes como el ajedrez y el domino, mismos que se encuentran reconocidos como tales por la Comisión Nacional del Deporte y, en el caso del primero, por el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte.

Por otra parte, y a partir de que el artículo 115 en el párrafo segundo de la fracción II, así como los artículos 112, 113, 122, 123 y 124 de la Constitución Local, otorgan a los Ayuntamientos la potestad de aprobar y expedir normas reglamentarias que regulen y organicen la administración pública municipal, ámbito en el que se encuentra inmerso el Instituto como un organismo descentralizado, por lo que se propone que sea el Ayuntamiento quien apruebe el reglamento interior del instituto, a partir del proyecto que presente el consejo municipal; así como el proyecto de reglamento para el uso de instalaciones deportivas del Municipio, con lo que sería congruente con el otorgamiento de la facultad de administrar estos espacios que ya se comentó.

Siguiendo en el mismo sentido, y partiendo que la legislación municipal de la entidad establece que los titulares de las dependencias y organismos municipales son nombrados por el presidente municipal con la aprobación del Ayuntamiento se plantea que el nombramiento del director del Instituto siga el procedimiento establecido por el artículo 31 fracción XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Con la finalidad de establecer condiciones básicas de control y vigilancia del instituto, se plantea incorporar la obligación del director de someter a la consideración del consejo municipal la firma de convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro instrumento jurídico que, dependiendo de sus alcances, signifique la adquisición de obligaciones legales para el mismo.

Por igual, y siendo congruentes con las obligaciones que tienen otros organismos auxiliares, como los sistemas municipales DIF, se propone establecer que los bienes que constituyan el patrimonio del instituto solo puedan gravarse con la anuencia expresa del Ayuntamiento y, en su caso, con la autorización de la Legislatura del Estado de México; así como sujetar al organismo al control y vigilancia del Ayuntamiento, además de la obligación de llevar sus registros contables a partir de las normas que emita el OSFEM.

Por último se propone precisar que las relaciones laborales del instituto con sus trabajadores se rijan por la por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo que permitiría dar certeza jurídica tanto a la institución como a los servidores públicos que en él laboren. Esta precisión se encuentra asentada en las leyes que crean organismos similares en otros municipios pero que en nuestra ley se carecía de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, el H.

Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire, por mi conducto, somete a consideración de esta Legislatura el Proyecto de Decreto que se adjunta, para que de tenerse por correcto y adecuado se apruebe en sus términos:
Respetuosamente

**"Sufragio Efectivo. No Reelección"**
**El Presidente Municipal Constitucional**
**El Secretario del H. Ayuntamiento**
**Moisés García Pérez**
**Adiel Zermann Miguel**

Nota: Se adjunta copia certificada acta de sesión extraordinaria de cabildo No. 81a, de fecha veinticuatro de febrero del año de dos mil once.

**DECRETO NÚMERO**
**LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**DECRETA:**

**ARTÍCULO ÚNICO**.- Se reforman las fracciones XV y XVI del artículo 5; el artículo 17; las fracciones III, IV y sus incisos B) y C) del artículo 18; 19; 20; las fracciones I, IV y X del artículo 21; 22; las fracciones II, IV, V, VI, VII y IX del artículo 23; y la denominación del Capítulo Sexto. Se adicionan una fracción XVII al artículo 5; un artículo 16 Bis; los incisos D) y E), así como un párrafo segundo y un párrafo tercero del artículo 18; un párrafo segundo al artículo 20; una fracción XI al artículo 21; un párrafo segundo al artículo 24; un artículo 24 Bis; un Capítulo Séptimo "Generalidades"; un artículo 26. Se derogan la fracción II del artículo 18 y la fracción VI del artículo 21; todos de la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, para quedar como sigue:
Artículo 5.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, tendrá las siguientes facultades:

I. a XIV. ...

XV. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en el municipio;

XVI. Recibir donativos, celebrar convenios, gestionar apoyos y/o patrocinios de los sectores público y privado, estatal y federal;

XVII. Administrar y conservar, con el apoyo del Ayuntamiento, la Unidad Deportiva Municipal y los demás espacios deportivos y recreativos del Municipio; y

XVIII. Las demás que las leyes de la materia le señalen. Artículo 16 Bis.- Del deporte de ingenio.

**Artículo 16** Bis.- Del deporte de ingenio.

Con este programa se buscará desarrollar las capacidades cognitivas de los tenanguenses a partir de deportes de estrategia que ejerciten la mente y el pensamiento para un sano desarrollo de las aptitudes humanas.

**Artículo 17.-** La dirección y administración del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, estará a cargo del Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte, y de un director.

**Artículo 18**.- El consejo municipal, es el órgano de gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, el cual estará integrado por:
I.
II. Derogado.
III. Un secretario, quien será el director del Instituto; y

IV. Los vocales quienes serán:

A)...

B) Un representante del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte.

C) Un representante del Instituto de Salud del Estado de México;

D) Un representante del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de

Tenango del Aire;

E) Un representante de cada deporte registrado en el municipio propuestos por los interesados y designados por el presidente municipal.

Por cada miembro propietario de la Junta se nombrará un suplente, con excepción del Secretario del Consejo. Será suplente del Presidente el secretario del Ayuntamiento.

Los cargos de los miembros del consejo municipal serán honoríficos, con excepción del Director del Instituto que percibirá los emolumentos que disponga el presupuesto de egresos.

**Artículo 19.-** Los miembros del consejo municipal, durarán en su cargo, el período constitucional de la administración municipal para la cual fueren designados.

**Artículo 20.-** El consejo municipal, sesionará por lo menos cada tres meses de forma ordinaria y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesaria.

Corresponde al secretario del consejo llevar actualizado el libro de actas que él redactará, elaborar el orden del día de las sesiones y formular la convocatoria a éstas, las cuales serán emitidas al menos con setenta y dos horas de anticipación.

**Artículo 21**.- Son atribuciones del consejo municipal:

I. Aprobar el proyecto de reglamento interno del Instituto el cual será turnado al Ayuntamiento para su discusión y aprobación;

II. a llI. ...

IV. Conocer y en su caso aprobar los estados financieros y balances anuales, así como los informes generales y especiales que se presenten por parte del director;

V. ...

VI. Derogado;

VII. a IX....

X. Aprobar el proyecto de reglamento para el uso de instalaciones deportivas del Municipio, y someterlo a la consideración del Ayuntamiento; y

XI. Las demás que se deriven de la presente ley y de los ordenamientos jurídicos correlativos.

**Artículo 22.-** El director será nombrado a propuesta del presidente municipal, y ratificado en sesión de cabildo por el H. Ayuntamiento.

**Artículo 23.-** Son facultades y obligaciones del director, las siguientes:

I. ...

II. Dar cumplimiento a los acuerdos del consejo municipal;

III. ...

IV. Celebrar, con la aprobación del consejo municipal, acuerdos, convenios y contratos de coordinación para el cumplimiento de los planes y proyectos del instituto;

V. Presentar ante el consejo municipal el proyecto del programa operativo del instituto;

VI. Presentar ante el consejo municipal el proyecto anual del presupuesto de ingresos y de egresos;

VII. Adquirir conforme a las normas los bienes necesarios y previa autorización del consejo municipal, para el mejor cumplimiento de sus objetivos;

VIII. ...

IX. Las que le confieren la presente ley, el reglamento interno y el consejo municipal.

Artículo 24.- El patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire, se integra con:

I. a V. ...
Los bienes que constituyan el patrimonio del Instituto, sólo podrán gravarse con la anuencia expresa del Ayuntamiento respectivo, cuando a Juicio de éste así convenga al financiamiento de obras y servicios a su cargo, y previa autorización en su caso de la Legislatura Local.

**CAPITULO SEXTO**
**DEL CONTROL Y VIGILANCIA**

Artículo 24 Bis.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire estará sujeto al control y vigilancia del Ayuntamiento y llevarán su contabilidad ajustándose a las normas que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

La administración y contabilidad del Instituto se llevará a cabo a través de un tesorero que al efecto designe el Consejo Municipal con las obligaciones que éste último le imponga.

**CAPITULO SEPTIMO**
**GENERALIDADES**

**Artículo 26**.- Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTICULO PRIMERO.-** Publíquese el Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**ARTICULO SEGUNDO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**ARTICULO TERCERO.-** El H. Ayuntamiento de Tenango del Aire, México, instalará el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte con su respectivo consejo municipal, en los siguientes sesenta días de la entrada en vigor del presente decreto.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil_____.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias diputado Álvarez Colín.

Se registra la iniciativa y observando lo previsto en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI, 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, para su estudio.

De acuerdo con el punto número 19 del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Horacio Jiménez, para la lectura de la iniciativa de Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, México, presenta por el H. Ayuntamiento de Amecameca, México.

**DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Con su permiso señor Presidente.

En papel membretado del Municipio del H. Ayuntamiento de Amecameca de Juárez, 2009-2012.
"2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero"
Con número de oficio PM-E/0912024/2011

**C. PRESIDENTE DE LA H. "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTE**

Con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracciones I, II y III, inciso i), y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 7, 8, 14, 15, 20 y 21 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México; 2 y 31 fracción III y IV, 48 y 123 de la Ley Orgánica Municipal el Estado de México, nos permitimos someter a la consideración de la Legislatura, iniciativa de Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, con

base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Es fundamental que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, se constituya como órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que su presupuesto se determine y del conocimiento de la sociedad, y sea dirigido por personas surgidas del movimiento deportivo municipal, que sean de reconocida capacidad, honestidad y manifiesto compromiso con su comunidad.

Es necesario que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, cuente con programas municipales y que estos sean dados a conocer a toda la población, tal y como lo dispone el artículo 21 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México.

El Ayuntamiento tiene el ineludible compromiso, así como la plena capacidad jurídica y política para entregar el movimiento deportivo municipal, las atribuciones y facultades necesarias, así como recursos financieros para la promoción, desarrollo y organización, realización y evaluación de las actividades de cultura física y el deporte en el municipio.

En virtud de lo anterior y considerando que la cultura física y el deporte son una función del municipio, que deben traducirse en un servicio público a cargo del municipio. El ayuntamiento promovente acordó en sesión de cabildo de fecha 18 de febrero del 2010, en el acta número 37, la creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, como se desprende de la certificación del acta de cabildo respectiva que se adjunta a la presente.

El ayuntamiento que suscribe la presente iniciativa, por los conductos legales, se obliga expresamente a la asignación anual al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, los recursos materiales, humanos y financieros necesarios y/o destinar anualmente el 2% disponible del presupuesto de egresos municipal para el cumplimiento de sus programas, metas y objetivos, en beneficio de la comunidad del municipio.

Asimismo, se propone que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Estado de México, en términos de lo que dispone la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, establezca como metas inmediatas en su programa, las siguientes:

Crear el Programa Municipal de Cultura Física y Deporte, el cual deberá publicarse en la Gaceta del Gobierno.

Formar el Consejo Municipal del Deporte.

Crear el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte, y;

Crear el Sistema Municipal de Información, registro en materia de cultura física y deporte.

Por lo expuesto, se estimó conveniente, someter a la Legislatura del Estado de México por conducto del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa de Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca.

Se adjunta el proyecto de decreto correspondiente, para que de tenerse por correcto y adecuado se apruebe en sus términos.

**ATENTAMENTE**
**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
**DE AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO.**
**DR. JUAN DEMETRIO SÁNCHEZ GRANADO.**
**(Rúbrica)**

Es cuanto señor Presidente, su instrucción ha sido cumplida.

**"2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO"**
**PM-E/09-12/024/2011.**
**Febrero 11 de 2011.**
**C. PRESIDENTE DE LA H. LVII LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTE:**

Con fundamento, en lo establecido por los artículos 115, fracciones I, II, III inciso i), IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 116, 122, 125, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 7, 8, 14, 15; 20, 21, de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, 2, 31 fracciones III y IV, 48, 123 de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de México, nos permitimos someter a la consideración de la Legislatura, iniciativa de Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca", con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Los deportistas mexiquenses de todos los tiempos han cumplido con su compromiso ante la sociedad y la historia, en los niveles municipal, estatal y nacional, más allá de lo que les ha sido reconocido, esto nos motiva a pensar que es tiempo de que los gobiernos municipales se interesen en la cultura física y el deporte como tema prioritario de interés social y de salud pública, para prevenir enfermedades y mejorar la salud física, mental y social de la población.

El deporte se constituye en uno de los elementos más importantes para abatir la patología social que actualmente vivimos y que tanto daña fundamentalmente a los niños y jóvenes, a quienes se les perturba cotidianamente a través de todos los medios, afectando su salud física y mental y, en consecuencia afectando al presente y futuro de nuestro municipio, de nuestro Estado y de nuestro país.

Es imperativo dar cumplimiento al compromiso que tienen los Ayuntamientos y la sociedad en general con el deporte y los deportistas, a través de la creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, a fin de que éstas actividades, elevadas a rango legal, tengan el trato profesional, de quienes las dirigen, organizan, planean, programan, representan, informan, practican, evalúan, aplauden y critican

Es fundamental que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, se constituya como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que su presupuesto sea determinado y del conocimiento de la sociedad, que sea dirigido por personas surgidas del movimiento deportivo municipal, que sean de reconocida capacidad, honestidad y manifiesto compromiso con su comunidad.

Es necesario que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte cuente con programas municipales, y que éstos, sean dados a conocer a toda la población; tal y como lo dispone el artículo 21 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México.

El Ayuntamiento tiene el ineludible compromiso, así como la plena capacidad jurídica y política para entregar al movimiento deportivo municipal, las atribuciones y facultades necesarias así como los recursos financieros para la promoción, desarrollo, organización, realización y evaluación de las actividades de cultura física y el deporte del municipio.

En virtud de lo anterior y considerando que la cultura física y el deporte son una función del municipio, que debe traducirse en un servicio público a cargo del municipio, el Ayuntamiento promovente acordó, en sesión de cabildo de fecha 18 de febrero de 2010 (Acta N° 37), la creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, como se desprende de la certificación del acta de cabildo respectiva, que se adjunta al presente.

El Ayuntamiento que suscribe la presente iniciativa, por los conductos legales, se obliga expresamente a asignar anualmente al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, los recursos materiales, humanos y financieros necesarios y/o destinar anualmente el 2% disponible del Presupuesto de Egresos Municipal, para el cumplimiento de sus programas, metas y objetivos, en beneficio de la comunidad del municipio.

Asimismo, se propone que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Estado de México, en términos de lo que dispone la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México establezca como metas inmediatas en sus programas, las siguientes:

- Crear el Programa Municipal de Cultura Física y Deporte, el cual deberá publicarse en la "Gaceta del Gobierno".
- Formar el Consejo Municipal del Deporte.
- Crear el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte.
- Crear el Sistema Municipal de Información y Registro en materia de cultura física y deporte

Por lo expuesto, se estimó conveniente someter a la Legislatura del Estado de México, por conducto del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa de Ley que crea el

Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca".

Se adjunta el proyecto de decreto correspondiente para que, de tenerse por correcto y adecuado, se apruebe en sus términos.

**ATENTAMENTE**
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
**DE AMECAMECA ESTADO DE MÉXICO**
**DR. JUAN DEMTRIO SÁNCHEZ GRANADOS**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE AMECAMECA, MÉXICO.**

## CAPÍTULO PRIMERO
## DE SU NATURALEZA JURÍDICA Y SUS OBJETIVOS

**Artículo 1.-** Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca", como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios.

**Artículo 2**.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, será manejado, entre otros, por personas que surjan del movimiento deportivo municipal, que conozcan y estén comprometidos con todos los deportistas y la sociedad en general del municipio de Amecameca, México.

**Artículo 3.-** El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, es sujeto de derechos y obligaciones, otorgándosele autonomía necesaria para asegurar el cumplimiento del deber del municipio de promover el deporte y la cultura física.

**Artículo 4**.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, tendrá los siguientes objetivos:

I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio;
II. Propiciar la interacción familiar y social;
III. Fomentar la salud física, menta!, cultural y social de la población del municipio;
IV. Propiciar el uso adecuado y correcto de los tiempos libres;
V. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes;
VI. Promover el deporte de los trabajadores;
VII. Promover el cambio de actitudes y aptitudes;
VIII. Promover y desarrollar la captación de recursos humanos para el deporte;
IX. Elevar el nivel competitivo del deporte municipal;
X. Promover la revaloración social del deporte y la cultura física;
XI. Promover fundamentalmente el valor del deporte para el primer nivel de atención a la salud;
XII. Promover la identidad del municipio de Amecameca, en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional a través del deporte;
XIII. Fomentar la integración familiar y social; y
XIV. Facilitar a los deportistas el acceso a los servicios de salud.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE SUS FACULTADES

**Artículo 5**.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, tendrá las siguientes facultades:

I. Crear escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, comunidades, barrios

y colonias del municipio de Amecameca;

II. Crear el sistema municipal de becas académicas, económicas y alimenticias para deportistas distinguidos del municipio;

III. Crear torneos estudiantiles permanentes en los niveles: preescolar, primaria, secundaria y media superior;

IV. Organizar clubes deportivos populares permanentes;

V. Involucrar a los sectores públicos, social y privado en el deporte municipal;

VI. Presentar públicamente los programas deportivos municipales, sus objetivos, metas, estrategias y resultados;

VII. Otorgar dirección técnica de calidad a representaciones municipales;

VIII. Otorgar asesorías al deporte formativo y de recreación;

IX. Promover el uso de instalaciones deportivas públicas y privadas;

X. Promover y desarrollar instalaciones públicas y privadas;

XI. Desarrollar corrientes sociales y deportivas del mérito;

XII. Crear el registro municipal de instalaciones deportivas;

XIII. Crear el registro municipal de deportistas, deportes, clubes, ligas y torneos deportivos;

XIV. Crear el registro municipal de jueces, árbitros, entrenadores, profesores de educación física, médicos del deporte, psicólogos del deporte y escuelas del deporte;

XV. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en el municipio; y

XVI. Las demás que las leyes de la materia le señalen.

## CAPÍTULO TERCERO
### DE SUS PROGRAMAS BÁSICOS

**Artículo 6**.- Del deporte estudiantil.

A través de este programa, se promoverá y organizará la participación de los estudiantes deportistas del municipio, con el fin de inducir la ocupación adecuada de los tiempos libres, el desarrollo de aptitudes individuales y actitudes de sociabilización y responsabilidad social.

**Artículo 7.-** De los clubes estudiantiles.

Para fomentar el uso adecuado de los tiempos libres, desarrollar las aptitudes y mejorar actitudes en los jóvenes estudiantes, se formarán y organizarán clubes deportivos estudiantiles dentro y fuera de las escuelas, a los cuales se les brindará asesoría en la organización, capacitación, participación, entrenamiento y torneos, asimismo se les brindará apoyo con el uso de instalaciones deportivas y en algunos casos con material deportivo.

**Artículo 8**.- De los torneos municipales.

Se fomentarán, organizarán y dirigirán torneos municipales permanentes entre estudiantes de todos los niveles.

**Artículo 9**.- Del deporte popular.

A través de este programa se promoverá y organizará el deporte en forma permanente en todo el territorio municipal, con la convicción de la importancia del deporte en los ámbitos formativo, competitivo y recreativo para lograr buena salud en todos los aspectos, como principio básico de la práctica deportiva.

**Artículo 10.-** De las escuelas de iniciación.

Se crean escuelas de iniciación deportiva por todo el territorio municipal, según sea la demanda basada en el deporte que más se practique o le

interese a la comunidad de que se trate.

**Artículo 11**.- De los torneos de barrios.
Se promoverán y organizarán torneos en cada barrio, colonia, pueblo, comunidad o delegación municipal.

**Artículo 12.-** De Los torneos de campeones.

Se organizará un torneo con los campeones de todas las ligas y clubes deportivos, en todas sus categorías y ramas.

**Artículo 13**.- De las instalaciones deportivas.

Con este programa se pretende realizar un censo de instalaciones deportivas asentadas en el municipio con la finalidad de conocer su estado y uso actual, con el propósito de mejorar el uso adecuado y su plena utilización.

**Artículo 14**.- De la capacitación.

El deporte en la época actual, debe cumplir con las expectativas sociales, para lo cual es imperativo que exista la capacitación en todos los que formen parte del deporte.

**Artículo 15**.- Del deporte formativo.
En la formación, es donde el Instituto de Cultura Física y Deporte de Amecameca, otorgará asesorías, promoción e información a la comunidad sobre los deportes y su práctica.

**Artículo 16.-** Del deporte recreativo.

También para su propia organización, su financiamiento, su desarrollo y todo aquello que conlleva un beneficio individual sin perder de vista el bien social.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE SU ORGANIZACIÓN INTERNA

**Artículo 17**.- La dirección y administración del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca estará a cargo de un consejo directivo y de un director.
**Artículo 18.-** El Consejo Directivo, es el órgano de gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, el cual estará integrado por:

I. Un presidente, quien será el presidente municipal;

II. Un secretario técnico, quien será el director del deporte; y

III. Cinco vocales quienes serán:

A. El regidor de la comisión del deporte.

B. Tres vocales que designe el H. Ayuntamiento a propuesta del presidente y/o el director.

**Artículo 19**.- Los miembros del consejo directivo, durarán en su cargo, el período constitucional de la administración municipal para la cual fueren designados.

**Artículo 20**.- El consejo directivo, sesionará por lo menos cada tres meses de forma ordinaria y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario.

**Artículo 21**.- Son atribuciones del consejo directivo:

I. Aprobar el reglamento interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca;

II. Establecer los lineamientos generales del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca;

III. Aprobar, en su caso, los proyectos, planes y programas que proponga el director para la consecución de sus objetivos;

IV. Conocer y en su caso aprobar los estados financieros y balances anuales, así como los informes generales;

V. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y de egresos;

VI. Nombrar o ratificar al director;

VII. Evaluar los planes y programas;

VIII. Promover la obtención de fuentes alternas de financiamiento;

IX. Invitar a sus sesiones a otros servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal, cuando los eventos o asuntos así lo requieran; y

X. Las demás que deriven de otros ordenamientos legales.

**Artículo 22**.- El director será nombrado por el consejo directivo a propuesta del presidente municipal y ratificado en Sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento.

**Artículo 23**.- Son facultades y obligaciones del director, las siguientes:

I. Representar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca;

II. Dar cumplimiento a los acuerdos de la junta directiva;

III. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas del instituto;

IV. Celebrar acuerdos, convenios y contratos de coordinación para el cumplimiento de los planes y proyectos del instituto;

V. Presentar ante la junta directiva el proyecto del programa operativo del instituto;

VI. Presentar ante la junta directiva el programa anual del presupuesto de ingresos y de egresos;

VII. Adquirir, previa autorización del consejo y conforme a las normas, los bienes necesarios para el mejor cumplimiento de sus objetivos;

VIII. Prever lo necesario para el debido cumplimiento de los programas y el ¡ogro de los objetivos;

IX. Las que le confieren la presente ley, el reglamento interno y la junta directiva.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE SU PATRIMONIO

**Artículo 24**.- El patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, se integra con:

I. Los recursos del presupuesto de egresos que el municipio le asigne anualmente.

II. Los bienes muebles e inmuebles que el Ayuntamiento le asigne como organismo público descentralizado.

III. Los apoyos financieros, subsidios, valores, bienes y servicios que provengan del gobierno federal, estatal y municipal.

IV. Los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, cooperaciones y demás ingresos que adquiera por cualquier título, ya sea público, privado o social.

V. Los ingresos y utilidades que obtenga por prestación de sus servicios.

## CAPÍTULO SEXTO
## GENERALIDADES

**Artículo 25**.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, estará sujeto a, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México.

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMECAMECA ESTADO DE MÉXICO DR. JUAN DEMETRIO SÁNCHEZ GRANADOS**

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**
**C. FERNANDO JUÁREZ VÁZQUEZ**

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias diputado Horacio Jiménez.

Se registra la iniciativa y con sustento en lo preceptuado en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXI; 51, 57, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se remite a la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte.

Por lo que hace al punto número 20, hace uso de la palabra el diputado Edgar Castillo, quien dará lectura al dictamen formulado al punto de acuerdo; mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que colaboren en el fomento y promoción del deporte nacional de la charraría, a los titulares de los poderes federal, estatales y municipales, a conmemorar fielmente el 15 de septiembre como Día Nacional de la Charrería y a las comisiones de Juventud y Deporte, de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, se destinen recursos suficientes para fomentar en el país el Deporte Nacional de la Charrería y las cabalgatas; así como la creación y construcción de la Escuela Nacional de Charrería, presentado por la Cámara de Senadores.

**DIP. EDGAR CASTILLO MARTÍNEZ.** Con su permiso diputado Presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

La Presidencia de esta Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, le confiere, turnó a la Comisión de la Juventud y el Deporte para su estudio y dictamen, exhorto, por parte del Senado de la República al Congreso del Estado de México, a fin de que en el proyecto de presupuesto, se analice, discuta y en su caso, se apruebe, destinar recursos necesarios para fomentar el Deporte Nacional de la Charrería y cabalgatas que se desarrollan, con la finalidad de impulsar la mexicanidad.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72, 78, 82 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; y en los artículos 78, 79, 80 y demás relativos y aplicables de su reglamento, somete a la consideración, el presente dictamen de conformidad con los antecedentes conocidos, así como con los:

**RESOLUTIVOS**

**ÚNICO**. La "LVII" Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, se da por enterada del exhorto realizado por el Senado de la República en beneficio del deporte nacional de la Charrería y procederá en su oportunidad al estudio correspondiente, para su presupuestación; así como su fomento en nuestra Entidad.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México, en la ciudad de Toluca de Lerdo capital del Estado de México, a los once días del mes de agosto del año dos mil diez.

**COMISIÓN LEGISLATIVA DE JUVENTUD Y DEPORTE.**
**PRESIDENTA**

| | |
|---|---|
| **DIP. MARÍA JOSÉ ALCALÁ IZGUERRA.** | **DIP. VICENTE MARTÍNEZ ALCÁNTARA.** |
| **DIP. HÉCTOR KARIM CARVALLO DELFÍN.** | **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ.** |
| **DIP. GUILLERMO CALDERÓN LEÓN.** | **DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA.** |
| **DIP. EDGAR CASTILLO MARTÍNEZ.** | **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** |

**DIP. EYNAR DE LOS COBOS CARMONA**

Es cuanto diputado Presidente.

**HONORABLE ASAMBLEA:**

La Presidencia de la "LVII" Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México le confiere, turnó a la Comisión de la Juventud y el Deporte para su estudio y Dictamen, exhorto por parte del Senado de la República al Congreso del Estado de México, a fin de que en el proyecto de presupuesto se analice, discuta y en su caso apruebe destinar recursos necesarios para

fomentar el Deporte Nacional de la Charrería y cabalgatas que se desarrollan con la finalidad de impulsar la mexicanidad.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72, 78, 82 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y en los artículos 78, 79, 80 y demás aplicables de su Reglamento, somete a su consideración el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

**ANTECEDENTES**

El Exhorto motivo del presente Dictamen fue remitido a la consideración de la "LVII" Legislatura por el Senado de la República de la "LXI" Legislatura, en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior.

En orden cronológico y a manera de antecedentes se destaca:

Primero.- En 1931, siendo presidente de la República Don Pascual Ortiz Rubio se decretó el 14 de septiembre como Día Nacional del Charro.

Segundo.- En 1933, el Presidente de la República General Abelardo L. Rodríguez decretó a la Charrería como el único Deporte Nacional.

**CONTENIDO DEL EXHORTO**

El exhorto remitido por el Senado de la República, motivo del presente Dictamen conforme a sus consideraciones expuestas, tiene como objetivo principal el de alentar a los Congresos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en sus proyectos de presupuestos anuales, analicen, discutan y en su caso, aprueben destinar recursos necesarios para fomentar el Deporte Nacional de la Charrería y las cabalgatas que se desarrollan con la finalidad de impulsar la mexicanidad.

Todo ello con el firme propósito de fomentar la práctica de la Charrería, con el fin de preservar nuestras raíces, tradiciones, usos, costumbres, idiosincrasia y acervo cultural.

Se argumenta que la Charrería preserva la identidad y fortalece la mexicanidad como herramientas fundamentales para dotar de nacionalismo a nuestros jóvenes. Por su parte las cabalgatas exaltan el trabajo en equipo, coadyuvan en la honra a nuestros símbolos patrios, se aprecia y conserva el entorno ecológico, se fortalece la solidaridad y la fraternidad.

Se resalta que el incrementar los recursos para la Charrería y las cabalgatas tendrá como resultado una mayor contribución de dicha actividad en el desarrollo nacional, como ya ha quedado de manifiesto; su contribución es tan diversa que lejos de considerar que un incremento presupuestal se traduzca en gasto, convencidos que será una inversión eficaz para el Deporte y la Juventud de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, tomado en cuenta el contenido del exhorto remitido a esta Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de la Juventud y el Deporte hacen las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Es competencia de la Legislatura conocer y resolver las iniciativas de Decreto, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que señala como facultades y obligaciones de la Legislatura expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado.

La Charrería, nació en las Haciendas del siglo XVI hasta el XIX; fueron muchos testigos del desarrollo de la ganadería y la agricultura, dando como resultado la evolución, trascendencia y crecimiento del hombre del campo para así convertirse en el charro mexicano.

En sus extensos pastizales y potreros surgieron las suertes charras, estas nacen del trabajo rudo y continuo del campo hermanando, tanto a los ricos hacendados como a los caporales y mozos en el arte de florear la reata, o colear y lanzar un novillo, es así como se empieza a escribir la historia que en nuestros días conocemos como la Charrería.

Posteriormente al culminar la Revolución Mexicana, los hacendados y la gente del campo se trasladan a las grandes ciudades extrañando las faenas campiranas buscando sitios para practicarlas.

Por ello el 14 de Septiembre de 1919, nació en Guadalajara la Asociación de Charros de Jalisco y el 4 de Junio de 1921 la Nacional de Charros en la capital de la República, convirtiéndose así en las primeras asociaciones, dando paso poco a poco a más en toda la República Mexicana.

Tal importancia tuvo la presencia del charro mexicano como figura tradicional que el entonces presidente de la República Ing. Pascual Ortiz Rubio en 1931 estableció el "14 de Septiembre como Día Nacional del Charro" en honor de la Asociación de Charros de Jalisco. Asimismo hizo el Decreto oficial, que el traje de Charro adquiriera el título del atuendo oficial y símbolo de nuestra nacionalidad.
Para la Charrería el año de 1933 fue trascendental, ya que se emite un Decreto Presidencial por el General Abelardo L. Rodríguez, dándole el título de único deporte nacional.
Es así como el Charro se convirtió en un símbolo viviente de la mexicanidad, ya que a finales del siglo XIX, los charros se dieron a la tarea de perfeccionar y depurar las faenas, tratando siempre de ejecutar los lances con mayor grado de dificultad y con más estética, sin perder sus raíces.
Con los acontecimientos sucedidos, se empezaron a crear numerosos asociaciones en todo el país, se establece la Federación Nacional de Charros para garantizar la práctica organizada de este deporte, actualmente cuenta con colegio de jueces varonil y femenil, coordinación de locutores, delegada de escaramuzas, así como leyes, estatutos y reglamentos que rigen a los deportistas guardianes de esta tradición.
Es por eso que todas las innovaciones contribuyeron a hacer de la Charrería un espectáculo, el cual se transforma en deporte y hoy se practica como tal después de la Revolución Mexicana.
Actualmente la Federación de Charrería forma parte de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), contando con 11,600 charros federados, quienes conforman las más de 668 asociaciones, además de las 1,750 integrantes de 177 escaramuzas hablando de un universo de 14,000 deportistas que hacen Charrería en México sin contar con los estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México e Illinois, en donde también se practica la Charrería.
Como cualquier otro deporte, la Charrería tiene estatutos y reglamentos para que las suertes se ejecuten con precisión, belleza y se obtengan puntos y su misma Federación es la que vigila todo evento competitivo.
La Charrería es catalogada como uno de los deportes más completos, puesto que se practica al aire libre, se divide en 9 suertes, llamadas así porque el éxito de la ejecución dependerá en gran parte de la voluntad de la bestia con la cual se van a ejecutar, siendo una actividad en la que se activan todos los músculos del cuerpo al comenzar el movimiento del caballo, o al aplicar la fuerza de poder a poder con los animales que están siendo sometidos. Es un deporte que forja disciplina, se requiere dedicación, concentración y esfuerzo; y esto da como resultado un deporte limpio.
Asimismo es uno de los deportes más nobles ya que los Charros no reciben sueldo por actuar, y tienen que recorrer grandes distancias para hacerlo, y la aportación que el público da por presenciar una charreada, subsidia parcialmente los gastos de la misma, siendo que el saldo lo pagan los integrantes del equipo o a veces toda la asociación.
Ahí estriba también la nobleza del deporte, pues arriesgan su integridad siempre, desde que comienza su relación con el caballo, quien no tiene palabra de honor por nada y menos en cuestión de temperamento. Por lo cual se dice que, en el momento de meter el pie en el primer estribo, se toca el escalón más importante para llegar al cielo, acortando así la distancia entre este mundo y el de la eternidad.
Pero a pesar de todo lo que representa la Charrería para nuestro país, en la actualidad no ha tenido la difusión y promoción suficiente para que se siga llevando a cabo este deporte, que a nivel internacional es muy apreciado.
No podemos permitir que los jóvenes de ahora, pierdan el sentido de la mexicanidad, debemos de fomentar la práctica con el fin de preservar nuestras raíces, tradiciones, usos, costumbres, idiosincrasia y nuestro acervo cultural.
Es por ello que las autoridades competentes deben impulsar nuevamente la Charrería, para que al igual que cualquier otro deporte que se enseñe desde la niñez y que no solo se quede en un sector como en las Asociaciones Charras que son grupos más delimitados, se necesita promover para que realmente la Charrería pueda estar al alcance de todos.
La Charrería es tan importante para los mexicanos por ser un gran atractivo para el público nacional y que por descuido no ha sido promocionado como debería serlo, de igual forma para los visitantes

extranjeros que nos visitan en los principales centros turísticos.

El deporte nacional por excelencia debe ser promovido y fomentado por lógica cultural; por lo que creemos justo que su federación y asociaciones respectivas en conjunto con los estados y municipios, deben ser garantes de la promoción para su arraigo de forma tal, que en lo futuro renazca ese mexicanismo que se nos ha extraviado por causas de una globalización, hoy imperante en el mundo entero.

Fomentar la Charrería en todo el país como deporte nacional debe ser premisa de las autoridades deportivas en el estado, quienes deberían difundir y promover de manera más amplia que la charraría es un atractivo a gozar, además debe ser materia de innovación como atractivo a los turistas que nos visitan en las regiones de mayor influencia de visitantes internacionales.

Pero no solo es mantener y reforzar nuestra cultura de la Charrería, ahí está ya de nueva cuenta renaciendo las cabalgatas por todo el país como símbolo de nuestra mexicanidad, pues sin las cabalgatas como lo registra bien la historia la revolución jamás habría triunfado.

En las cabalgatas se exalta el trabajo en equipo, se honra a nuestros símbolos patrios, se ama el entorno ecológico que nos rodea, así como la solidaridad y fraternidad que deben prevalecer en la sociedad.

Es por ello que no podemos dejar a un lado la Charrería, que hoy por hoy sigue siendo gran imagen para nuestro país, reconocida como el único Deporte Nacional por excelencia; por lo que la importancia de las acciones y el compromiso del Congreso Estatal por encaminar atinadamente el desarrollo de la población, en atención a sus tradiciones, usos y costumbres, son motivo justo y suficiente para llevar a cabo todas las acciones encaminadas en beneficio de actividades como las promovidas mediante el exhorto remitido por el Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto y como resultado de la valoración del exhorto remitido por el Senado de la República, esta comisión coincide en la necesidad de fomentar la práctica de la Charrería, con el fin de preservar nuestras raíces, tradiciones, usos, costumbres, idiosincrasia y acervo e identidad cultural en nuestra entidad federativa; sometiendo al Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

**RESOLUTIVO**

Único.- La "LVII" Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, se da por enterada del exhorto realizado por el Senado de la República, en beneficio del Deporte Nacional de la Charrería y procederá en su oportunidad al estudio correspondiente para su presupuestación, así como su fomento en nuestra entidad.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado, a los 11 días del mes de agosto de 2010

**COMISIÓN LEGISLATIVA DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE.**

**PRESIDENTA**

**DIP. MARÍA JOSÉ ALCALÁ IZGUERRA**

| | |
|---|---|
| **SECRETARIA** | **PROSECRETARIO** |
| **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** | **DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA** |
| **DIP. EDGAR CASTILLO MARTÍNEZ** | **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** |
| **DIP. HÉCTOR KARIM CARVALLO DELFÍN** | **DIP. EYNAR DE LOS COBOS CARMONA** |
| **DIP. VICENTE MARTÍNEZ ALCÁNTARA** | **DIP. GUILLERMO CÉSAR CALDERÓN LEÓN** |

**LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:**

**A C U E R D O**

**ÚNICO**.- La "LVII" Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, se da por

enterada del exhorto realizado por el Senado de la República, en beneficio del Deporte Nacional de la Charrería y procederá en su oportunidad al estudio correspondiente para su presupuestación, así como su fomento en nuestra entidad.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil once.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias diputado Edgar Castillo.

Esta Presidencia pide a quienes estén por la aprobatoria del turno a discusión del dictamen, se sirvan poner de pie.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO**. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS**. Comunique la Secretaría los antecedentes del punto de acuerdo.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** Señoras y señores diputados, el punto de acuerdo fue presentado a la soberanía popular, por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen se remitió a la Comisión Legislativa de la Juventud y Deporte.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** En cumplimiento de las disposiciones procesales aplicables, la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y el proyecto de acuerdo con que se acompaña y consulta a las señoras y a los señores diputados si desean hacer uso de la palabra.

Esta Presidencia pregunta a los integrantes de la Legislatura, si son de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de acuerdo y pido a quienes estén por ello, se sirvan poner de pie, agregando que si algún diputado desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, se sirva expresarlo.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** El dictamen y el proyecto de acuerdo, han sido aprobados en lo general por unanimidad de los diputados presentes.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Se acuerda la aprobación en lo general del dictamen y del proyecto de acuerdo.

En virtud de que no hubo solicitudes para discusión particular, se tienen también por aprobados en lo particular.

Se solicita a la Secretaría expida el acuerdo respectivo y provea su cumplimiento previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** En cuanto al punto número 21 se otorga el uso de la palabra al diputado Armando Reynoso, quien dará lectura al dictamen formulado al punto de acuerdo, para exhortar a los 125 municipios del Estado de México, a que en el ámbito de su competencia, formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus programas de ordenamiento ecológico del territorio municipal, así como a diseñar las acciones inaplazables para su implementación inmediata, presentado por el diputado Pablo Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**DIP. ARMANDO REYNOSO CARRILLO.** Con su permiso señor Presidente.

Compañeros y compañeras diputados.

La Presidencia de la "LVII" Legislatura en ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo le confiere, tuvo a bien remitir a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos de los 125 Municipios del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus programas de ordenamiento ecológico del territorio municipal, así como diseñar acciones inaplazables para su implementación.

En atención al estudio realizado y con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la aprobación de la Legislatura en Pleno, el siguiente:

**DICTAMEN…**
**RESOLUTIVOS**

**PRIMERO.** Es de aprobarse el punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos de los 125 Municipios del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus programas de ordenamiento ecológico del territorio municipal, así como diseñar acciones inaplazables para su implementación.

SEGUNDO. Previa discusión y en su caso, aprobación del Pleno Legislativo, expídase el acuerdo que adjunto se acompaña.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil diez.

Es cuanto señor Presidente.

**HONORABLE ASAMBLEA.**

La Presidencia de la "LVII" Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México le confiere, tuvo a bien remitir a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos de los 125 Municipios del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal, así como diseñar acciones inaplazables para su implementación.

En atención al estudio realizado y con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de México, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la aprobación de la Legislatura en Pleno, el siguiente:

**D I C T A M E N**
**ANTECEDENTES**

El Punto de Acuerdo fue sometido al conocimiento, deliberación y aprobación de la "LVII" Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por el Diputado Pablo Dávila Delgado, integrante de esta "LVII" Legislatura del Estado de México.

Del análisis y estudio que llevamos a cabo al Punto de Acuerdo desprendemos que tiene por objeto, exhortar a los 125 Ayuntamientos del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia, canalicen y gestionen los recursos necesarios para su formulación, aprobación, modificación y publicación de sus Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal.

**CONSIDERACIONES**

Es competencia de la Legislatura conocer y resolver las disposiciones de carácter general, emitir leyes, decretos, acuerdos o iniciativa al Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

De acuerdo con el estudio que llevamos a cabo los integrantes de esta Comisión Legislativa, se advierte que el Punto de Acuerdo propone un exhorto a los 125 ayuntamientos de los municipios del Estado de México, para que en el ejercicio de su competencia formulen, conduzcan y evalúen su política ambiental municipal, así como la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico del territorio municipal.

Apreciamos que, nuestro Estado, es la entidad más poblada del país, situación que incide de manera negativa en el territorio, sobre todo en la disponibilidad y vulnerabilidad de los recursos naturales, principalmente suelo y agua; contexto al que se agregan diferentes acciones como la sobrecarga en terrenos por las construcciones, el gran aforo vehicular y la sobre explotación del agua.

Observamos que, en la actualidad, se cuenta con 83 áreas naturales protegidas que ascienden a 922,150.17 hectáreas, no obstante la superficie deforestada, va en aumento, alcanzando un total de 259.72 hectáreas, situación que demanda la suma de esfuerzos de todos los niveles de gobierno para instrumentar medidas que contribuyan

a la protección y mantenimiento continuo de los recursos bióticos y abióticos, así como la utilización racional de los elementos y recursos naturales.

Reconocemos los logros que en materia ambiental se han obtenido en el Estado de México, ya que en 1999 a iniciativa del gobernador se decretó el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México (POETEM), modificado y publicado el 19 de diciembre de 2006, en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, convirtiéndose en una herramienta de planeación ambiental para el desarrollo, su objetivo es inducir los usos del suelo y las actividades productivas, con la finalidad de lograr la protección del ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como el soporte y guía de la regulación del uso del suelo.

En ese contexto, se aprobaron cinco programas regionales, que son: 1) Modelo de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Biósfera de la Mariposa Monarca; 2) Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco; 3) Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Volcán Popocatépetl y su Zona de Estudio; 4) Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Nevado Sur (Concluido y no publicado); y 5) Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca ZMVT (concluido y no publicado); los cuales se han convertido en importantes aportes para la implementación de las acciones diseñadas en el Plan de Desarrollo Estatal 2005-2012 en sus tres pilares: Seguridad Social, Seguridad Económica y Seguridad Pública, que prevé la promoción y la creación de instrumentos de planeación basados en la dinámica urbana y las actividades productivas.

Estimamos que, no obstante los aportes en nuestra Entidad Federativa en materia ambiental, es necesaria la existencia de un instrumento de carácter obligatorio para los particulares, que contribuya y refuerce al Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México y a los regionales, y que en lo sucesivo se denomine: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal.

Encontramos que, a nivel federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala que, corresponde a los Municipios, en el ámbito de su competencia, "la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal" y "la aplicación de los instrumentos de política ambiental", así como "la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio; en el ámbito local, el Código para la Biodiversidad del Estado de México, estipula que corresponde a las autoridades municipales en el ámbito de su competencia formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, así como formular y aplicar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal. Instrumento capaz de reflejar políticas ambientales eficaces, porque regula e induce el uso racional del suelo, identifica su deterioro y sus potencialidades de aprovechamiento para las actividades productivas que habrán de desarrollarse en cada Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de cada municipio, a la par, normar su protección, el uso, la conservación y preservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los elementos y recursos naturales existentes.

Sin embargo, advertimos que en el ámbito municipal los avances son mínimos, ya que sólo los municipios de Almoloya de Juárez, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Tecámac, Texcoco y Villa de Allende, cuentan con un Programa de Ordenamiento Ecológico, quedando pendiente de su publicación los municipios de Chalco y Tlalmanalco.

Consideramos necesario exhortar a los Ayuntamientos faltantes, para que canalicen y gestionen los recursos necesarios, para su formulación y aprobación correspondiente, así como la publicación de este instrumento de planeación ambiental; en ese contexto, para aquellos ayuntamientos que ya tienen un Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal evalúen o modifiquen, en su caso, lo allí soportado, de esa manera los municipios, contribuirán a dar una respuesta efectiva para reducir la vulnerabilidad humana, al cambio ambiental y a reforzar los mecanismos de alerta temprana.

Los integrantes de esta Comisión, coincidimos que resulta ineludible implementar acciones preventivas para evitar los desequilibrios ecológicos, debemos desarrollar e incrementar nuestras capacidades de alerta temprana mediante la identificación y evaluación oportuna del surgimiento de amenazas ambientales que, a largo plazo, pueden afectar negativamente la vulnerabilidad de las personas, de los ecosistemas y de los servicios que éstos nos proporcionan.

Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado el año 2010 como el "Año Internacional de la Diversidad Biológica" y al 2011 como "Año Internacional de los Bosques"; por lo que, los legisladores de esta Comisión, responsables con lo preceptuado por la ONU, estimamos que es necesario el diseño e instrumentación de una verdadera planeación ambiental, capaz de reflejar las políticas, los lineamientos, las estrategias y las acciones gubernamentales que habrán de llevarse a cabo para lograr la regulación ecológica en el Estado de México.

Por las razones expuestas, nos permitimos concluir con los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO**.- Es de aprobarse el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal, así como diseñar acciones inaplazables para su implementación.

**SEGUNDO.-** Previa discusión y en su caso, aprobación del pleno legislativo, expídase el Acuerdo que adjunto se acompaña.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil diez.

**COMISIÓN LEGISLATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.**

**PRESIDENTE DIP. FÉLIX ADRIÁN FUENTES VILLALOBOS**

| | |
|---|---|
| **SECRETARIO** | **PROSECRETARIO** |
| **DIP. FRANCISCO CÁNDIDO FLORES MORALES** | **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** |
| **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** | **DIP. HÉCTOR KARIM CARVALLO DELFÍN** |
| **DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ** | **DIP. ARMANDO REYNOSOCARRILLO** |
| **DIP. OSCAR JIMÉNEZ RAYÓN** | **DIP. ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA** |

**LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:**

**A C U E R D O**

**ARTÍCULO PRIMERO**.- La H. "LVII" Legislatura del Estado de México, en un marco de absoluto respeto municipal, exhorta a los Ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia formulen, aprueben, expidan, evalúen y/o modifiquen sus Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal, así como diseñar las acciones inaplazables para su implementación inmediata, conforme a lo establecido en los artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción VIII, 4°, 7° fracción IX, 8° fracciones I, II y VIII y 20 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 2.2 fracción XII, 2.9 fracciones II y XXXI, 2.40, 2.41, 2.45, 2.52, 2.53, 2.54 y 2.61 del Código para la Biodiversidad del Estado de México.

**ARTÍCULO SEGUNDO**.- Comuníquese el presente Acuerdo a los 125 Ayuntamientos de los

municipios del Estado de México, para sus efectos correspondientes.

**ARTÍCULO TERCERO**.- Hágase del Conocimiento a la Secretaría del Medio Ambiente, para que elabore la guía para la integración de los Programas de Ordenamiento Ecológico de los Territorios Municipales y su seguimiento oportuno.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO**.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

**SEGUNDO**.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil once.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Gracias señor diputado.

La Presidencia pide a quienes estén por la aprobatoria del turno a discusión del dictamen se sirvan poner de pie.

Diputada Secretaría, le solicitamos atentamente revise la existencia de quórum.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** (Pasa lista de asistencia).

¿Falta algún diputado de registrar su asistencia?

Señor Presidente, se declara la existencia del quórum, por lo que puede continuar la sesión.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN**. Muchas gracias.

Retomando el procedimiento, repetiremos la votación.

Esta Presidencia, pide a quienes estén por la aprobatoria del turno a discusión del dictamen, se sirvan poner de pie.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Informo a la Presidencia, que la proposición ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN**. Reseñe la Secretaría de manera sucinta, los antecedentes del punto de acuerdo.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Honorable Legislatura.

El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Pablo Dávila Delgado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso del derecho que la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México le confieren, para su estudio y dictamen fue enviado a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental.

Es cuanto, señor Presidente.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Acatando las disposiciones procesales, aplicables, la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y el proyecto de acuerdo con que se acompaña y pregunta a las señoras y a los señores diputados si desean hacer uso de la palabra.

Esta Presidencia consulta a los integrantes de la Legislatura, si son de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de acuerdo y solicita a quienes estén por ello, se sirvan poner de pie, precisando que si algún diputado desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, se sirva expresarlo.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Informo a la Presidencia que el dictamen y proyecto de acuerdo, han sido aprobados por unanimidad de votos en lo general, por los diputados presentes.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Se acuerda la aprobación en lo general del dictamen y del proyecto de acuerdo; y en virtud de que no hubo solicitudes para su discusión particular, se tienen también por aprobados, en lo particular.

Se solicita a la Secretaría, expida el acuerdo respectivo y provea su cumplimiento, previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

Por lo que hace al punto número 22, se otorga el uso de la palabra a la diputada Yolitzi, quien dará lectura al dictamen formulado al punto de acuerdo, por lo que se exhorta al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos y a los 125

Municipios del Estado, para que en el ámbito de sus facultades, otorguen todas las facilidades y la colaboración necesaria, para la realización del censo de población y vivienda 2010 y así, alcanzar los objetivos deseados.

**DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** Con su venia, señor Presidente.

Honorable Asamblea.

Por acuerdo de la Presidencia de la "LVII" Legislatura, se remitió a la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica para su estudio y dictamen, punto de acuerdo, relacionado con el censo de población y vivienda 2010.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se emite el siguiente informe:

La diputada Flora Martha Angón Paz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, presentó a la Legislatura el punto de acuerdo en uso de las facultades contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Mediante el punto de acuerdo, se propone que se exhorte al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y a los 125 municipios del Estado de México, para que en el ámbito de sus facultades, otorguen todas las facilidades y la colaboración necesaria, para la realización del Censo de Población y Vivienda 2010 y así alcanzar los objetivos deseados.

Subyace en el punto de acuerdo que se dictamina el interés de que los poderes públicos, organismos autónomos y ayuntamientos del Estado de México, favorecieran la realización del Censo 2010 para que alcanzara los objetivos planteados.

Esta propuesta fue hecha en su oportunidad, por los integrantes de la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, advirtiendo la trascendencia que tiene la producción de información socio demográfica y económica básica para actualizar los datos sobre población, edad, sexo, distribución en el territorio nacional, vivienda, para contribuir al conocimiento de la realidad nacional y al proceso diagnóstico, programación y diseño de políticas públicas.

En este sentido, cabe destacar que consecuentes con los propósitos del punto de acuerdo, esta Comisión Legislativa, desarrolló diversas actividades, encaminadas a facilitar los trabajos del censo de población que realizó el INEGI.

Por lo tanto, los integrantes de la Comisión Legislativa y en general, todos los diputados de la legislatura, han hecho del conocimiento de los poderes públicos, organismo autónomos y ayuntamientos el material que entregó el INEGI, difundiéndolo y convocando a las distintas autoridades estatales y municipales al apoyo del Censo de Población y Vivienda 2010, concluido exitosamente y cuyos resultados preliminares se hicieron del conocimiento de los legisladores.

Por lo expuesto, nos permitimos concluir con los siguientes:

**RESOLUTIVOS**

**PRIMERO.** Se tienen por atendidos los objetivos del punto de acuerdo, en relación con el censo de población y vivienda 2010, pues los legisladores hicieron del conocimiento de las autoridades estatales y municipales, la trascendencia de apoyar la realización del mismo.

**SEGUNDO**. El Censo de Población y Vivienda 2010, se realizó exitosamente del 31 de mayo al 25 de junio del año 2010.

**TERCERO**. Infórmese de ello a la Legislatura, para los efectos procedentes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil once.

**ATENTAMENTE**
**COMISIÓN LEGISLATIVA DE PLANIFICACIÓN DEMOGRÁFICA**

Es cuanto.

**HONORABLE ASAMBLEA.**

Por acuerdo de la Presidencia de la "LVII" Legislatura, remitió a la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, para su estudio y dictamen, Punto de Acuerdo relacionado con el Censo de Población y Vivienda 2010.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77

del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se emite el siguiente:

**INFORME**

La Diputada Flora Martha Angón Paz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, presento a la "LVII" Legislatura el Punto de Acuerdo, en uso de las facultades contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Mediante el Punto de Acuerdo se propone que se exhorte al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y a los 125 Municipios del Estado de México, para que, en el ámbito de sus facultades, otorguen todas las facilidades y la colaboración necesaria para la realización del Censo de Población y Vivienda 2010, y así alcanzar los objetivos deseados.

Compete a la Legislatura, conocer y resolver el Punto de Acuerdo en términos de lo previsto en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Subyace en el Punto de Acuerdo que se dictamina, el interés de que los poderes públicos, organismos autónomos y ayuntamientos del Estado de México favorecieran la realización del Censo 2010, para que alcanzaran los objetivos planteados.

Esta propuesta fue hecha, en su oportunidad, por los integrantes de la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, advirtiendo la trascendencia que tiene la producción de información sociodemográfica y económica básica, para actualizar los datos sobre población, edad, sexo, distribución en el territorio nacional, vivienda, para contribuir al conocimiento de la realidad nacional y al proceso de diagnóstico, programación y diseño de políticas públicas.

En este sentido, cabe destacar que, consecuentes con los propósitos del Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa desarrollo diversas actividades encaminadas a facilitar los trabajos del censo de población que realizo el INEGI, destacando las siguientes:

- Reunión con el Titular del INEGI sobre los preparativos del Censo de Población y Vivienda 2010. (19 de marzo de 2010)
- Entrega de material del INEGI a los 75 diputados (21 de mayo de 2010)
- Entrega de carpeta de resultados preliminares del Censo 2010 a los miembros de la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica (7 de enero de 2011)

Por lo tanto, los integrantes de la Comisión Legislativa y en general todos los diputados de la "LVII" Legislatura han hecho del conocimiento de los poderes públicos, organismos autónomos y ayuntamientos, el material que entregó el INEGI, difundiéndolo y convocando a las distintas autoridades estatales y municipales, al apoyo del Censo de Población y Vivienda 2010, concluido exitosamente y cuyos resultados preliminares se hicieron del conocimiento de los legisladores.

Por lo expuesto, nos permitimos concluir con lo siguiente:

**PRIMERO**. Se tienen por atendidos los objetivos del Punto de Acuerdo, en relación con el Censo de Población y Vivienda 2010, pues los legisladores hicieron del conocimiento de las autoridades estatales y municipales la trascendencia de apoyar la realización del mismo otorgado, en el ámbito de sus facultades, las facilidades y colaboración necesaria para alcanzar sus objetivos.

**SEGUNDO.** El Censo de Población y Vivienda 2010, se realizó exitosamente del 31 de mayo al 25 de junio del año 2010.

**TERCERO**. Infórmese de ello, a la Legislatura para los efectos procedentes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 08 días del mes de febrero del dos mil once.

**COMISIÓN LEGISLATIVA DE PLANIFICACIÓN DEMOGRÁFICA.**

**PRESIDENTA**

**DIP. FLORA MARTHA ANGÓN PAZ**

| | |
|---|---|
| **SECRETARIA** | **PROSECRETARIO** |
| **DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO** | **DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA** |
| **DIP. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA** | **DIP. PABLO DÁVILA DELGADO** |

**DIP. ANTONIO GARCÍA MENDOZA**
**DIP. FRANCISCO OSORNOSOBERÓN**
**DIP. NOÉ BARRUETA BARÓN**
**DIP. GUILLERMO CÉSAR CALDERÓN LEÓN**

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Muchas gracias compañera diputada.

La Legislatura queda enterada del informe y se tiene por concluido el asunto para los efectos procedentes.

Con apego al punto número 23, se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Piña García, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dará lectura al punto de acuerdo para exhortar al Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que explique el porcentaje de eficiencia del ministerio público, en consignaciones, órdenes de aprehensión giradas y cumplidas, así como las sentencias condenatorias.

**DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA.** Con su permiso señor Presidente.

Señoras y señores diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los numerales 51 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, el suscrito diputado Arturo Piña García y los Grupos Parlamentarios de los Partidos, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, nos permitimos someter a consideración de esta H. Legislatura, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que informe a esta Legislatura, al cierre del primer trimestre del año 2011, el porcentaje de eficiencias del ministerio público, en consignaciones, ordenes de aprensión giradas y cumplidas, así como las sentencias condenatorias, a efecto de que, de considerarlo pertinente se apruebe en sus términos el mérito a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

De acuerdo al "Convenio de Colaboración suscrito en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de septiembre de 1993, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los 31 estados integrantes de la Federación, se comprometieron a instrumentar acciones con la finalidad de colaborar recíprocamente, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en la modernización, agilización y optimización de la lucha contra la delincuencia".

Asimismo, dentro del objeto de clausulado de este Convenio, la Procuraduría del Estado de México, se comprometió a llevar a cabo, entre otras acciones, "Modificaciones Legislativas" por medio de estudios jurídicos, de los cuales puedan recomendarse reformas legales, con el objeto de actualizar y modernizar el marco jurídico en las materias de su competencia y, en los casos procedentes, a uniformar las disposiciones legales a nivel nacional, a la "profesionalización", para la creación y desarrollo del Servicio Civil de Carrera para los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial, Ministerial o Investigadora y de los Peritos, promover también la actualización y especialización, así como promover la homologación de los perfiles y requisitos mínimos de selección, ingreso y permanencia en el servicio, la aplicación de cursos de capacitación en los que se induzca ajustar su actuación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

También la "investigación de delitos" para intercambiar información en forma ágil y oportuna, establecer enlaces policiales operativos de carácter permanente entre las policías judiciales, ministeriales o investigadoras, con objeto de agilizar las investigaciones y ejecutar acciones de colaboración policial, "Ejecución de Órdenes de presentación, aprensión, reprehensión y comparecencia", donde nos obligan a entregarse sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados, con pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, el "abatimiento del rezago", donde se comprometen a establecer programas de cooperación para abatir el rezago de integración de averiguaciones previas y el cumplimiento de mandamientos judiciales, los "operativos conjuntos" para realizar operativos conjuntos para

la investigación de delitos y, el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales.

Dentro del Paquete Fiscal para el año 2011, se presentaron en el programa "Procuración de Justicia", los principales logros que durante el quinto período del Gobierno Estatal la Procuraduría General de Justicia del Estado de México llevo a cabo, destacando que se recibieron más de 268 mil denuncias sobre presuntos hechos constitutivos de delito, 37 mil 042 casos por denuncias de lesiones dolosas y 24 mil 881 por robo de vehículos.

En este mismo documento se precisa que se consignaron ante los órganos jurisdiccionales competentes, un total de 16 mil 085 denuncias recibidas, mientras que un mil 896 fueron remitidas a otras entidades federativas o al ministerio público de la federación.

Se emitieron 8 mil 723 sentencias; de las cuales 87% fueron resueltas a favor del ministerio público y un total de un mil 260 autos de sujeción a proceso.

Dentro del cumplimiento de las órdenes judiciales, se encuentran la aprehensión, comparecencia o presentación de los implicados en algún delito o querella. De un total de 26 mil 357 mandamientos judiciales, fueron ejecutados 31 mil 629 y se cumplimentaron 3 mil 027 órdenes de aprehensión, asegurando un total de 3 mil 603 personas.

Para lograr que a los procesos de revisión y definición de la situación que tienen las denuncias penales se les dé el curso más adecuado, se llevan a cabo audiencias públicas con la finalidad de escuchar la opinión de los individuos y grupos involucrados en algún delito, realizándose un conjunto de 21 mil 024 audiencias públicas para un total de 28 mil 760 personas.

La autorización del presupuesto a esta dependencia para este año fiscal, por esta Legislatura corresponde a 2 mil 246 millones 322 mil 601 pesos y se estableció que dentro de su programa "Procuración de Justicia", en el proyecto "Control de Procesos", se llevarían a cabo, entre otras acciones: la notificación de 2 mil 100 resoluciones de auto de formal prisión; 500 resoluciones de auto de sujeción a proceso; 6 mil 800 sentencias condenatorias; 216 sentencias mixtas y mil 504 sentencias absolutorias. En el proyecto "Aprehensiones", en sus principales acciones, denotan cumplir con 25 mil órdenes de investigación asignadas por el Ministerio Público; cumplir con 66 mil ordenamientos de intervención ministerial, sin detenidos; y detener a 3 mil personas por la probable responsabilidad en la comisión de delitos.

Las acciones son claras, la procuración de justicia en nuestro Estado denotan acciones que deben dar como resultado una mejor prestación de los servicios de procuración de justicia, en beneficio, sobre todo, de las familias mexiquenses, su actuar y avances dependen del cumplimiento programado por la misma dependencia, subsanar aquellas deficiencias por el incremento a la delincuencia en todo el país, el aumento de población, la marginación y el desempleo, por ello, nuestros Grupos Parlamentarios consideran que está fundado que los mexiquenses conozcan los avances, deficiencias y sobre todo, el que a sus denuncias se les está dando cause para que en su caso, se subsane en lo posible el quebranto en su persona o en sus bienes.

Por otro lado, teniendo en consideración que este presupuesto fue presentado con base a la evaluación de proyectos, la evaluación por tanto, es fundamental, ello permitirá conocer si el objetivo establece la conveniencia técnico-económica de ejecutar los proyectos que se presentaron, adoptar un enfoque costo-beneficio o un enfoque costo-eficiencia; ya que es posible cuantificar y/o valorar los beneficios del proyecto que fue autorizado.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO**. Se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que informe en forma trimestral a esta Legislatura, iniciando por el primer trimestre del año 2011, el porcentaje de eficiencia del Ministerio Público, en consignaciones, órdenes de aprehensión giradas y cumplidas; así como las sentencias condenatorias.

**ATENTAMENTE**

**GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS**

**DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

**Y ACCIÓN NACIONAL.**

Es cuanto señor Presidente.

**A T E N T A M E N T E**

**"DEMOCRACIA YA. PATRIA PARA TODOS"**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

| | |
|---|---|
| **DIP. ARTURO PIÑA GARCIA** | **DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LOPEZ** |
| **DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO** | **DIP. MARÍA ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS** |
| **DIP. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA** | **DIP. CRISOFORO HERNANDEZ MENA** |

**DIP. FRANCISCO VELADIZ MEZA**

**ATENTAMENTE**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

| | |
|---|---|
| **DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS** |
| **DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO** | **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** |
| **DIP. JAEL MÓNICA FRAGOSO MALDONADO** | **DIP. MAGUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ** |
| **DIP. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA** | **DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN** |
| **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** | **DIP. FLORENTINA SALAMANCA ARELLANO** |
| **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** | **DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES** |

**PROYECTO DE ACUERDO**
**ACUERDO NÚMERO**

La H. LVII Legislatura del Estado de México, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 57, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha tenido a bien emitir el siguiente:

**ACUERDO**

**ARTÍCULO ÚNICO**.- Se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que informe en forma trimestral a esta Legislatura, iniciando por el primer trimestre del año 2011, el porcentaje de eficiencia del Ministerio Público, en consignaciones, órdenes de aprensión giradas y cumplidas, así como las sentencias condenatorias.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO**.- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno".

Dado en el Palacio del Poder legislativo, a los días del mes de de 2011.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Gracias señor diputado.

Pregunto a los integrantes de la Asamblea, si desean hacer uso de la palabra.

La Presidencia consulta a las señoras y a los señores diputados, si se admite a trámite la proposición y solicita a quienes estén por ello, se sirvan poner de pie.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ**. Informo a la Presidencia que la proposición ha sido aprobada por unanimidad de los diputados Presentes.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Se turna a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis.

De acuerdo con el punto número 24 del orden del día, tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Bautista López, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, dará lectura al proyecto de acuerdo con la finalidad de solicitar la urgente comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado de México, para que explique los resultados obtenidos en nuestra Entidad en materia de combate al secuestro.

**DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ.**

**C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA HONORABLE "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO PRESENTES.**

En ejercicio de las facultades que nos

confiere lo establecido por los artículos 52, 57, 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 68, 72 y 73 de su Reglamento, el diputado Víctor Manuel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y también con la representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, someto a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de acuerdo, con la finalidad de solicitar la urgente comparecencia del señor Procurador General de Justicia del Estado de México, para que explique los resultado obtenidos en nuestra Entidad, en materia de combate al secuestro, de conformidad con la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio a conocer un estudio denominado "secuestro, impacto social y características del delito", mediante el cual se realiza un análisis detallado sobre estos graves acontecimientos que afectan a nuestra sociedad.

En ese estudio se compilan las cifras oficiales sobre las denuncias que por secuestro se han presentado ante las autoridades del ministerio público, en el período que va del año 2000 hasta junio del 2010, lLas que permiten advertir que los años con mayor incidencia son precisamente los más recientes, 2008 con mil 28 denuncias, 2009 con 1,163 y 2010 con 674 denunciados hasta el mes de junio, lo que refleja además en la presentación de 2.82 denuncia al día en el 2008, de 3.72 en 2009 y 3.7 denuncias diariamente en la primera mitad del 2010.

En ese estudio y realizando una proyección sobre los datos que ha recopilado la Comisión Nacional del Derechos Humanos, se calcula en 4 mil 214 casos los secuestros ocurridos en el 2008, incluyendo aquellos que no fueron denunciados formalmente.

No dudamos que existen opiniones que pretendan matizar el impacto de este fenómeno delictivo, apelando a supuestas tendencias nacionales, como si la autoridad local y los estados no contribuyeran con su incidencia local, a integrar esta cifra nacional. Es en razón de lo anterior que consideramos indispensable identificar con precisión los datos aportados y su clasificación, de acuerdo con la incidencia ocurrida en el nivel de las entidades federativas.

De acuerdo con las cifras oficiales y en 8 entidades del país, ocurrieron el 61% de los secuestros denunciados. En primer lugar se sitúa el Estado de Chihuahua, en segundo lugar el Estado de México, seguido por el Distrito Federal, Baja California, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas.

La evolución de la incidencia del delito de secuestro en nuestra entidad, debe de realizarse con mayor detalle. En el 2007 fueron denunciados apenas 52 casos, en el 2008 se situó la cifra en 136, en el 2009 desciende ligeramente a 127 casos y en sólo la primera mitad del 2000 se denunciaron 98 casos. Lo que permite tener una cifra total en estos tres años y medio de 413 casos denunciados, el 16% del total de los ocurridos en nuestro país.

No podemos menos que destacar el brusco incremento ocurrido entre 2007 y 2008, de casi un 162%, que puede triplicarse por una mayor movilización de las bandas delictivas en nuestra entidad o bien la necesidad de más ciudadanos de acudir ante la autoridad.

Por debajo del Estado de México se ubica el Distrito Federal, con 380 casos ocurridos en el mismo período y que representa un porcentaje del 12% de los datos nacionales.

Es muy importante hacer referencia a los datos de nuestra entidad y del Distrito Federal, en lo que corresponde a la incidencia delictiva, en razón de uno de los principales argumentos del gobierno del Estado y de su partido, se ha centrado en tratar de relacionar el número de delitos ocurridos con una razón construida a partir del número de la población, lo que según la autoridad, es una razón evidente para tratar de explicar que el territorio mexiquense no es uno de los más violentos del país.

Pero el día de hoy estamos en condiciones de trascender ese debate, maniqueo y superficial, sin detenernos en el intento de tratar de medir si nuestra entidad debe ser considerada violenta o no por el número de delitos ocurridos. Utilicemos, relacionada con las cifras anteriores, otros indicadores aportados por el mismo estudio sobre

el grado de eficiencias del Sistema de Procuración de Justicia, para integrar las denuncias y conseguir sentencias condenatorias al respecto.

De acuerdo con el mismo estudio, el Distrito Federal es la entidad con mejores resultados en lo que corresponde al número de personas sentenciadas durante 2007 y 2008 con 245 casos, mientras que en el Estado de México se sitúa en un segundo lugar con 172 sentencias, lo que implica que la cantidad de sentencias condenatorias que el Gobierno del Estado de México obtiene en contra de responsables de la comisión de delitos de secuestro, representa apenas el 70% de las sentencias que consigue la autoridad del Distrito Federal. Esta es una cifra y una proporción que no puede relacionarse con la población, sino que nos muestra como a pesar de que en nuestra entidad se presentan más casos de secuestros que en el Distrito Federal, las autoridades locales de la capital del país logran detener e integrar los elementos que le permiten obtener un mayor número de sentencias condenatorias.

Pero hay más datos en ese mismo sentido, considerando la proporción de cada uno de los estados, el promedio nacional se sitúa en un 87% de condenas condenatorias, en 9 estados se obtuvieron sentencias condenatorias en la totalidad de los casos, con responsables presentados ante la autoridad judicial.

En dos casos, las sentencias condenatorias representaron el 94% de los casos llevados ante los tribunales, en 3 estados ese tipo de sentencias se ubicaron en el 92%, en Colima por ejemplo, se obtuvo un resultado del 91%, en otras entidades se ubicó en el 90% y en Baja California el 88, en total 18 estados lograron resultados superiores a los de la media nacional, en ese grupo no se encuentra nuestro Estado.

Nuestra Entidad encabeza el grupo de las entidades federativas cuyos resultados de sentencias condenatorias se situaron por debajo de la media nacional y fuimos el estado con mayor número de sentencias absolutorias. Lo que implica que la Procuraduría de Justicia del Estado de México, es la que consigna a más personas inocentes o las más deficientes en la integración de los expedientes de consignación.

Todos estos elementos son suficientes para advertir tendencias inaceptables en un delito, cuya gravedad, impacto y efectos en nuestra sociedad, propician la integración de una opinión pública que registra la habilidad de las instituciones y el deterioro generalizado de las comisiones generales de seguridad.

Pero además por tratarse de delitos bajo la jurisdicción del fuero común, la responsabilidad de las autoridades locales es ineludible y no caben cálculos políticos o ambigüedades.

Considerando estos elementos, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, consideramos oportuno solicitar la asistencia del Licenciado Alfredo Castillo Cervantes, Procurador General de Justicia del Estado de México, con la finalidad de que comparezca ante esta Asamblea, para explicar los resultados obtenidos por la dependencia a su cargo en materia del combate al secuestro.

Es cuanto señor Presidente.

A T E N T A M E N T E

**“DEMOCRACIA YA. PATRIA PARA TODOS”**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

| | |
|---|---|
| **DIP. ARTURO PIÑA GARCIA** | **DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LOPEZ** |
| **DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO** | **DIP. CRISOFORO HERNANDEZ MENA** |
| **DIP. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA** | **DIP. MARÍA ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS** |

**DIP. FRANCISCO VELADIZ MEZA**

**ATENTAMENTE**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

| | |
|---|---|
| **DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS** |
| **DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO** | **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** |
| **DIP. JAEL MÓNICA FRAGOSO MALDONADO** | **DIP. MAGUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ** |

| | |
|---|---|
| **DIP. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA** | **DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN** |
| **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** | **DIP. FLORENTINA SALAMANCA ARELLANO** |
| **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** | **DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES** |

**PROYECTO DE ACUERDO**

**ACUERDO NÚMERO**
**LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO**
**ACUERDA:**

**Artículo Primero**.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México se solicita al Ejecutivo del Estado la comparecencia del C. Lic. Alfredo Castillo Cervantes, Procurador General de Justicia del Estado de México ante esta Asamblea, lo anterior con la finalidad de que explique los resultados obtenidos por la dependencia a su cargo y particularmente en materia de combate al delito de secuestro.

**Artículo Segundo.-** Se instruye a la Junta de Coordinación Política para presentar formalmente la solicitud y para concertar la fecha y formato de dicha comparecencia.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO UNICO**.- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno".

Dado en el Palacio del Poder legislativo, a los
días del mes de
de 2011.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Gracias señor diputado.

Pregunto a las señoras y a los señores legisladores si desean hacer uso de la palabra.

La Presidencia consulta a las señoras y a los señores diputados si se admite a trámite la proposición y solicita a quienes estén por ello se sirvan poner de pie.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Informo a la Presidencia que la proposición ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes.

**VICEPRESIDENTE DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN.** Se turna a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis.

En el punto número 25, corresponde hacer uso de la palabra al diputado Crisóforo Hernández Mena, quien en nombre del Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional, presenta un punto de acuerdo donde se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que en el ámbito de su competencia, establezca mayor eficiencia en la distribución, ejecución y ampliación de los recursos convenidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, dentro del presente ejercicio fiscal; asimismo, se exhorta para que los recursos que han sido ejercidos, sean ejecutados en su totalidad y subsanar, en su caso, el subejercicio de ejercicios fiscales anteriores.

**DIP. CRISÓFORO HERNÁNDEZ GARCÍA.** Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados de la Mesa Directiva.

En ejercicio de las facultades que me confieren lo dispuesto por los artículos 57 y 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento, el que suscribe, diputado Crisóforo Hernández Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el presente punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que en el ámbito de su competencia, establezca mayor eficiencia en la distribución, ejecución y aplicación de los recursos convenidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, dentro del presente ejercicio fiscal.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La seguridad pública es un derecho consagrado en la Constitución Política de los

Estado Unidos Mexicanos, que nos instituye a favor de los individuos y de la sociedad, conforme a lo establecido en el Párrafo Octavo del Artículo 21, establece que la seguridad pública, es una función, a cargo de la federación del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en sus respectivas competencias.

Al respecto, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala en el Artículo Segundo, que la seguridad pública, es la función a cargo de Estado, que tiene como fin, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, los cuales, se alcanzarán mediante la prevención de los delitos, así como la investigación, persecución y sanción de los mismos.

Por otra parte, la Ley de Seguridad Pública preventiva de Estado de México, en su Artículo Tercero, señala "…el Estado y los Municipios combatirán las causas que generen a las comisiones del delito y conductas antisociales y desarrollarán políticas, programas y acciones para que la sociedad participe en la planeación, supervisión de la seguridad pública y se fomenten los valores culturales y cívicos que estimulen el respeto a la legalidad…"

En los tiempos actuales, sin duda, el derecho a la seguridad pública, es el más recurrente, el más exigido y el más anhelado por la sociedad, debido a que la delincuencia, ha aumentado considerablemente durante los últimos años, constituyéndose en uno de los problemas sociales que ameritan mayor atención, aunado a ello, la poca efectividad en nuestro sistema de seguridad para consignar y castigar a los delincuentes, ha generado un ambiente de impunidad, el cual ha llevado a que las actividades criminales, prosperen en detrimento de la seguridad de los ciudadanos.

Con respecto al Estado de México, en los últimos 10 años se ha incrementado un 30% de la comisión del delito, lo que representa 77 mil 563 delitos, que en este año 2000; asimismo, según datos del Sistema Nacional para la Seguridad Pública, la incidencia delictiva del Estado de México en 2010, la ubica como la primera, en mayor número de delitos denunciados del fuero común, mismos que ascienden a 267 mil 783, lo que representa, que uno de cada 6 delitos, sean denunciados en la entidad, esto sin considerar los delitos que no se denuncien.

De los delitos denunciantes, 247 mil 118, corresponden al robo de vehículos, lo que representa el 17.62% del total, siendo el delito más frecuente en la entidad. En segundo lugar, con 46 mil 782 casos, aparecen las denuncias relacionadas con lesiones dolosas, mientras que en el tercero, con 42 mil 482 casos, aparecen las denuncias relacionadas al robo de peatones, categorías que representan el 17.47% y el 15.86% del total, respetivamente. También de acuerdo a "México Evalúa" del Centro de Análisis de Políticas Públicas, el Estado de México está ubicado en el sexto lugar en el Índice de Seguridad Ciudadana y Violencia, con una calificación de 52.27.

En virtud de lo anterior, la esencia del Estado de México se ha visto deteriorada, muestra de ello, es la poca eficiencia que presenta para salvaguardar sus más básicas prerrogativas, garantizar la seguridad de los ciudadanos, preservar el respeto a los derechos humanos, así como el orden y la paz social, aunado a ello, es importante mencionar que en el Estado de México, persisten actos de retención de los recursos federales, en materia de seguridad, lo que llevó a que este 2010, se registrara un subejercicio del 32.5% del Fondo de Aportaciones Federales para la Seguridad Pública (FASP), es decir, que el gobierno del Estado no ejerció 223 millones de los recursos convenidos de dicho fondo, mismos que ascendieron a 687.5 millones, de los cuales 85% fueron aportaciones federales.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, son recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y del Distrito Federal, para la seguridad pública, destinados exclusivamente, al reclutamiento, formación, evaluación y depuración de los recursos humanos, vinculados con tareas de seguridad pública, al equipamiento de las policías judiciales, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios, al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y para la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de

justicia, así como la seguridad pública.

Ante tal escenario y dados los destinos, expresamente previstos en esta ley, para la aplicación de las aportaciones federales, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, consideran lamentable y preocupante que el gobierno del Estado no haga uso en tiempo y forma de los recursos convenidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, esto a pesar de los evidente rezagos en materia de evaluación y capacitación, el incremento en femenicidios, del índice delictivo y recrudecimiento de la violencia. Por ello es necesario que se establezcan mecanismos que hagan eficiente la aplicación y evaluación de los recursos no ejercidos en el 2010, así como los recursos correspondientes para el presente año, monto que asciende a 568.1 millón, esto sin considerar la aportación estatal.

Por lo anterior expuesto, siendo la seguridad pública de los mexiquenses, una de las demandas que merece mayor atención, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el presente punto de acuerdo, para que de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.

**ATENTAMENTE**
**DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

Es cuanto Presidente.

**ATENTAMENTE**
**"DEMOCRACIA YA. PATRIA PARA TODOS"**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

| | |
|---|---|
| **DIP. ARTURO PIÑA GARCIA** | **DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LOPEZ** |
| **DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO** | **DIP. CRISOFORO HERNANDEZ MENA** |
| **DIP. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA** | **DIP. MARÍA ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS** |

**DIP. FRANCISCO VELADIZ MEZA**

**ATENTAMENTE**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

| | |
|---|---|
| **DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS** |
| **DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO** | **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** |
| **DIP. JAEL MÓNICA FRAGOSO MALDONADO** | **DIP. MA GUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ** |
| **DIP. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA** | **DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN** |
| **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** | **DIP. FLORENTINA SALAMANCA ARELLANO** |
| **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** | **DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES** |

**PROYECTO DE ACUERDO**

**ACUERDO NÚMERO**
**LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO**
**ACUERDA**

La H. LVII Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 38, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, ha tenido a bien emitir el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO**.- La LVII Legislatura del Estado de México, en un marco de respeto y colaboración, exhorta la Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en el ámbito de su competencia, establezca mayor eficiencia en la distribución, ejecución y aplicación de los recursos convenidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública dentro del presente ejercicio fiscal, en los destinos expresamente previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

**SEGUNDO**.- De los recursos que no han sido ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ejercicio Fiscal de 2010, la LVII Legislatura exhorta la Titular del Poder Ejecutivo para que éstos sean ejecutados en su totalidad y subsanar, en su caso, el subejercicio de ejercicios fiscales anteriores, de conformidad con lo establecido en las fracciones VIII, X y XI, Cláusula Séptima, del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 2010, suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.**- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno".

**SEGUNDO**.- Comuníquese el presente acuerdo al Titular del Ejecutivo del Estado, para los efectos correspondientes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los días del mes de de dos mil once.

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Gracias diputado Hernández Mena.

La Presidencia consulta a las señoras y a los señores diputados, si desean hacer uso de la palabra.

Esta Presidencia consulta a la Legislatura, si se admite a trámite la proposición, pidiendo a quienes estén por ello, se sirvan poner de pie.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ**. Informo a la Presidencia que la proposición ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes.

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Señor Secretario, por mayoría de votos, su servidor no…

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ**. Ratifico, por mayoría de votos.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Se turna a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

En términos del orden del día y para dar a conocer y tramitar el punto número 26, pido a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo propuesto por el diputado Ricardo Moreno Bastida, mediante el cual se condena la censura del documental titulado "Presunto Culpable", así como de la constante amenaza del derecho a la libre manifestación de las ideas.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Con gusto señor Presidente.

**"2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO."**

Toluca, México; a 10 de marzo del 2011.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA DE LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 72 de su Reglamento, el subscrito Licenciado Ricardo Moreno Bastida, diputado independiente, somete a consideración de la H. Asamblea, el siguiente punto de acuerdo, a efecto de que si se considera procedente, se apruebe en sus términos, sustentado en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales más importantes plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin éste no podríamos luchar por el respeto y promoción de todos los demás.

Hace una semana, hablábamos del grave problema que representa en la actualidad para nuestro país la constante violación del derecho a la libre manifestación de las ideas.

Incluso hicimos una remembranza de un sin número de atentados contra este derecho fundamental y entre ellos recordemos:

Cuando Televisa emprende una lucha contra el periódico REFORMA y METRO al acusarlo de

fomentar la prostitución, esto como respuesta a las publicaciones de dicho medio en la que exhiben a la televisora, cuando la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) falló a favor de la sociedad Televisa-Nextel, que ganó el mayor bloqueo de llamadas y licitación número 21, criticada como la licitación amañada y de practicas monopólicas.

Por otro lado, recordemos la campaña emprendida en contra de la Revista PROCESO, luego de que este semanario diera a conocer declaraciones del presunto narcotraficante Sergio Villareal "El Grande", según las cuales, éste sostuvo un encuentro con Felipe Calderón. Televisa a través del noticiero que conduce su vocero oficial nocturno, acusó a PROCESO y al reportero Ricardo Ravelo de haber recibido dinero del narcotráfico para acallar la información.

Recientemente hace unas cuantas semanas, un linchamiento a la libre expresión de las ideas, cuando la periodista Carmen Aristegui fue despedida de la radio emisora MVS, con el pretexto de haber realizado una trasgresión al Código de Ética de la empresa, al negarse a ofrecer una disculpa pública, ésta decidió dar por terminada la relación laboral con la informadora.

Su despido fue percibido como una censura mediática, producto de la presión gubernamental, pues levanta sospechas esta acción, en un contexto en el que MVS negocia con el gobierno federal el refrendo de su concesión en la banda 2.5 Gigahertz.

Ahora sucede un atentado más contra la libertad de expresión, pues la Licenciada Blanca Lobo Domínguez, Jueza Décima Segunda de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, notificó una suspensión provisional para la exhibición del documental "Presunto Culpable", por la demanda de amparo interpuesta por actos de autoridad de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, pues esta inició, autorizó y clasificó "B" a la cinta.

Cabe señalar que este largometraje se realizó en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y el Tribunal de Justicia, narra la lucha de José Antonio Zúñiga, en contra del Sistema Penal y Judicial Mexicano, al ser acusado y condenado por un homicidio que no cometió, producto de un proceso judicial plagado de irregularidades que muestra nuestra triste realidad en la impartición de justicia.

El documental ha levantado polémica, pues se trata de una producción cinematográfica de denuncia; y esto ha propiciado que la atención pública se centre en el tema de la justicia, la impunidad, la ineficiencia y la corrupción del Sistema Judicial Mexicano.

En ejercicio de sus derechos un particular promueve un amparo y solicita la suspensión provisional de la exhibición del documental, pues considera afectados sus derechos; sin embargo a su vez, son afectados los derechos a la información y vulneran el ejercicio de la libertad de expresión.

Todo esto ha generado un amplio y profundo debate en nuestra sociedad, comprensible en el ámbito de los valores en que cada caso se tutela, pues que por una parte tenemos interés público sustentado en las garantías constitucionales del derecho a la información y en la libertad de expresión; y por otra el derecho ciudadano a recurrir a un juicio de amparo cuando considera que se vulnera su esfera jurídica de interés.

El pasado lunes el documental "Presunto Culpable" dejó de exhibirse, pues la distribuidora de cinta, Cinépolis fue notificada por parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, la orden de retirar las copias de la cinta, hecho que para todos resulta una CENSURA encubierta del propio gobierno; y cómo no imaginar esto, cuando el abogado del particular que solicita el amparo, resultó ser un analista jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Cabe señalar que durante el Gobierno del señor Felipe Calderón o Presidente Madrazo, o Presidente Mordaza, como ahora se le conoce, la censura al derecho a la libertad de manifestación de las ideas y del derecho de prensa son más que amenazados.

La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, pues la lucha por la libertad de expresión es nuestro propio individualismo.

Hacemos desde esta Tribuna un llamado a las instituciones internacionales a plasmar sus ojos en el problema que representa para nuestro país esta situación, pues durante este gobierno, se han

cometido las más graves violaciones a la libertad de expresión.

Por ello exhortamos a la autoridad judicial como lo ha hecho ya el Senado de la República, a que realice una justa valoración, entre los derechos de las partes involucradas, tanto en el derecho a la privacidad del ciudadano que se queja y exige una suspensión provisional y el interés público que significa la libertad de expresión, derecho fundamental, que todos hemos construido y que debemos luchar para preservarlo.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Legislatura, el presente punto de acuerdo, a fin que si lo estiman correcto, se apruebe en sus términos.

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.** La Honorable "LVII" Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, condena la censura del documental "Presunto Culpable", así como las constantes violaciones y amenazas a la libertad de manifestación de las ideas, exhortando al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones garantice la protección y tutele este derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**TRANSITORIO**

**PRIMERO.** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil once.

**ATENTAMENTE**

**DIP. RICARDO MORENO BASTIDA.**

Señor Presidente, con fundamento en lo establecido en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 83 de la Ley Orgánica y 74 del Reglamento, ambos del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; y por considerarlo asunto de urgente y obvia resolución, me permito solicitar que sea dispensado del turno a comisiones, para que pueda ser sustanciado en este momento.

Es cuanto señor Presidente.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS**. Antes de seguir con el punto número 26, quisiera yo señalar aquí dos aclaraciones con respecto al punto anterior, al punto número 25. En primer lugar, quiero pedirle una disculpa al diputado Secretario Horacio Jiménez, él tenía razón, efectivamente, la proposición fue aprobada por unanimidad de votos, fue un error mío señor Secretario, le pido una disculpa y el segundo punto que quiero aclarar es que, se turnó a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

Aquí hay un error y se turna, repito el punto número 25, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito para su análisis.

Gracias.

Regresaremos ahora al punto número 26. Para estar en aptitud de acordar si se da trámite de turno, esta Presidencia consulta a los señores, a las señoras y a los señores diputados si desean hacer uso de la palabra.

Consulto a la Asamblea si se admite a trámite la proposición y pido a quienes estén por ello se sirvan poner de pie.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Informo A la Presidencia que la proposición ha sido aprobada por mayoría de votos de los diputados presentes.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Se turna a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

En lo concerniente al punto número 27 del orden del día, solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta que formula la Junta de Coordinación Política en relación con modificación de integración de Comisiones Legislativas.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Con gusto señor Presidente, doy cuenta al Pleno de un documento con el membrete de la "LVII" Legislatura del Estado de México.

"2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero"

Toluca de Lerdo, Méx, a 10 de marzo de 2011.

**DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.**

**PRESIDENTE DE LA H. "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESENTE.**

Considerando lo dispuesto en los artículos 62 fracción I, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo establecido en los artículos 13 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de ampliar la integración de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, nos permitimos proponer a la aprobación de la "LVII" Legislatura, por su conducto, la presente propuesta en términos del proyecto de acuerdo que se adjunta.

Sin otro particular le expresamos nuestra elevada consideración.

ATENTAMENTE

**JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**
**PRESIDENTE DIP. ERNESTO JAVIER NEMER ÁLVAREZ**

| | |
|---|---|
| **VICEPRESIDENTE DIP. OSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **VICEPRESIDENTE DIP. ARTURO PIÑA GARCÍA** |
| **SECRETARIO DIP. LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ** | **PRIMER VOCAL DIP. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ** |
| **SEGUNDO VOCAL DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA** | **TERCER VOCAL DIP. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO** |

LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

## ACUERDO

**ARTÍCULO ÚNICO.** Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 fracción I y 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 13 y 25, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con la integración de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, se modifica en su parte conducente a los acuerdos expedidos por la "LVII" Legislatura en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2009 y 02 de diciembre de 2010, conforme al tenor siguiente:

**COMISIÓN LEGISLATIVA DE PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL**
**PRESIDENTE**
**DIP. DAVID SÁNCHEZ ISIDORO**

| | |
|---|---|
| **SECRETARIO DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ** | **PROSECRETARIO DIP. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ** |
| **DIP. FRANCISCO JAVIER FUNTANET MANGE** | **DIP. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA** |
| **DIP. FERNANDO FERNÁNDEZ GARCÍA** | **DIP. NOÉ BARRUETA BARÓN** |
| **DIP. MARTÍN SOBREYRAPEÑA** | **DIP. JOSÉ VICENTE COSS TIRADO** |
| **DIP. JORGE ÁLVAREZ COLÍN** | **DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES** |

## TRANSITORIOS

**PRIMERO**. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México.

**SEGUNDO.** El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días, de la fecha del mes de marzo de dos mil once.

Es cuanto señor Presidente.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias diputado Jiménez.

Esta Presidencia abre la discusión en lo general del proyecto de acuerdo y pregunto a los integrantes de la Legislatura si desean hacer uso de la palabra.

La Presidencia, haciendo uso de las atribuciones que le otorga el artículo 47 fracciones VIII, XX y XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, consulta a las señoras y a los señores diputados si es de aprobarse en lo general el proyecto de acuerdo, formulado por la Junta de Coordinación Política y solicita a quienes estén por ello, se sirvan poner de pie; asimismo, indiquen si desean separar algún artículo para su discusión particular.

Muchas gracias.

Sí señor diputado Jiménez.

**DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Si, señor Presidente con la siguiente propuesta, en el transitorio segundo donde habla de que el presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado, solicitando ya que es un asunto de particularidades del propio poder que si viene cierto, la obligatoriedad de publicarlo para efectos, en el segundo transitorio, bien puede entrar en vigor, a partir de su aprobación.

Esa es nuestra propuesta.

Es cuanto.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Diputado Jiménez, vamos a votar en lo general en primera instancia y procederíamos después, a votar su propuesta, si usted está de acuerdo.

Solicito a quienes estén a favor, en lo general, en votación económica, se sirvan poner de pie.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** El punto de acuerdo ha sido aprobado en lo general, por unanimidad de votos de los diputados presentes.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Es de aprobarse en lo general, el proyecto de acuerdo y en lo particular, a quienes estén de acuerdo con la propuesta del diputado Horacio Jiménez, pido en votación económica, se sirvan poner de pie.

Muchas gracias.

**SECRETARIO DIP. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.** Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Es de aprobarse en lo general y en lo particular, el proyecto de acuerdo y se pide a la Secretaría provea su cumplimiento, previa revisión de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

En lo que concierne al punto número 28, se otorga el uso de la palabra al diputado Alejandro Landero, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de esta "LVII" Legislatura, a dictaminar a la brevedad las iniciativas en materia de seguridad pública que han sido presentadas durante esta "LVII" Legislatura Local.

**DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ.** Con su venia, Presidente.

En nombre del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, venimos a presentar un punto de acuerdo, que tiene un único punto que es exhortar precisamente a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la de Seguridad Pública y Tránsito de esta "LVII" Legislatura, a dictaminar a la brevedad, las iniciativas en materia de seguridad pública, que han sido presentadas, durante esta Legislatura del Estado de México. Le pido que se inserte el texto completo, en el Diario de los Debates.

Compañeros en primer lugar, queremos dar la bienvenida a la iniciativa de seguridad, que presenta el señor Gobernador el día de hoy, "más vale tarde que nunca", que bueno, que los pronunciamientos que efectuaron, llegaron un poco a sensibilizar, esperamos que sea este el inicio de un camino correctivo en la materia.

En segundo lugar, queremos manifestar nuestra voluntad, para lograr acuerdos y reformas, en seguridad pública, nuestro estado se encuentra en un grave deterioro en esta materia, tenemos que actuar con prontitud, esperamos que haya voluntad política para generar una reforma amplia y profunda que recoja las distintas iniciativas presentadas con anterioridad.

Destacaríamos la iniciativa presentada por el

diputado Oscar Sánchez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de fecha 6 de agosto del 2010; la presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de agosto del mismo año, y también la presentada por la Asociación Civil "México es nuestro compromiso", presidida por don Marco Maccin en octubre pasado.

En estas iniciativas se pretende modificar el sistema estatal de seguridad pública en materias como la coordinación interinstitucional, la clarificación de la labor de los cuerpos auxiliares, la profesionalización policial, el establecimiento de base de datos y la participación ciudadana, entre otros temas fundamentales.

Asimismo, hay pendientes iniciativas fundamentales en materia de trata de personas, de extinción de dominio, de observación ciudadana en seguridad pública, en prevención social del delito y en combate al secuestro.

Hay que recordar que la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 84 establece que las iniciativas remitidas por la Mesa Directiva a las omisiones deberán ser dictaminadas en un plazo que no exceda los 30 días hábiles y varias de estas iniciativas que he mencionado llevan ya más de un año y no han sido dictaminadas.

Nuestro Estado reclama, que sumamos como prioridad de la agenda legislativa en este periodo la materia de seguridad pública, los ciudadanos nos lo piden a gritos, hay un drama social allá afuera, que tenemos que atender con prontitud y eficacia.

Y para que no haya sorpresas y nadie se sienta ofendido, el tono de nuestro discurso estará determinado por la gravedad y por la urgencia de los problemas que sufren los mexiquenses; también estará determinado por la capacidad de respuesta del gobierno del Estado para atenderlos.

Por ello, presentamos este exhorto el día de hoy y presentaremos los que sean necesarios, para lograr que el tema de seguridad sea convertido en una prioridad de estado.

Es cuanto Presidente.

Toluca de Lerdo, México,
a 10 de Marzo de 2011.

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS**
**DE LA H. "LVII" LEGISLATURA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO.**
**P R E S E N T E S**

|En ejercicio del derecho que nos confieren los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 78, 79 y 81 fracciones I, II y III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en nuestro carácter de diputados integrantes de esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de México y de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por este conducto presentamos Punto de Acuerdo para exhortar a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la de Seguridad Pública y Tránsito de esta LVII Legislatura a dictaminar a la brevedad las iniciativas en materia de seguridad pública que han sido presentadas durante esta LVII Legislatura Local, lo que hacemos en atención a los siguientes:

Consideraciones

La seguridad en el estado de México, es sin duda una de las principales preocupaciones de los mexiquenses. La situación por la que atraviesa nuestro estado ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de transformar la política estatal en materia de seguridad.

Los resultados del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las Corporaciones Policiales Estatales, nos muestra que se ha equivocado el camino para nuestro estado en seguridad, pues se ha privilegiado año con año el incremento en el presupuesto tanto estatal como el aportado de recursos federales y el clima de inseguridad que se respira en nuestro estado no baja.

Gran parte del problema de seguridad en nuestro estado, pasa por la eficacia en el manejo de los recursos, pues el presupuesto para la seguridad del Estado de México se ha incrementado en un 65%, pasando en tan sólo cinco años de dos mil ochocientos treinta y cuatro millones a más de cuatro mil trescientos noventa y ocho millones de pesos. Tan sólo para este 2011 el estado de México recibirá por concepto del Subsemun 568 millones 101 mil 295 pesos, prácticamente 40% más que el año pasado, con lo que se convierte en la entidad que mayor monto percibe dentro de este fondo.

Sin embargo el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que nuestro estado apenas cuenta con el 8% de policías capacitados, además de alcanzar apenas el 3.2 % de avances de las metas definidas en materia de Evaluaciones de Control de Confianza. Si bien es cierto, se ha invertido en infraestructura y equipamiento, aún persisten varios retrasos en los Sistemas de Información en lo que respecta al Registro de Personal de Seguridad Pública, Registro Administrativo de Detenciones, Registro Nacional de Información Penitenciaria, entre otros.

Es cierto que nuestro estado, por su densidad demográfica y por su extensión territorial hacen aún más complicada la tarea en materia de seguridad. Sin embargo los números que arroja el estado muestran que nuestra entidad se ubica como la 2ª entidad con la mayor tasa de secuestros a nivel nacional, las averiguaciones previas crecen año con año, hasta quintuplicarse durante estos cinco años de gobierno, el número de extorsiones ha pasado de 120 casos en 2007 a mil 482 en 2010, es decir 1,235% más. Se registra 2.1, homicidios diarios y 1456 ejecuciones en los últimos cuatro años, sin contar a los 90 ejecutados que iban hasta la primera semana del mes de marzo, más los que se hayan acumulado en estos días.

La percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en nuestro estado es grave y merece ser atendida con prontitud, 76% de los ciudadanos considera al estado de México como una entidad insegura.

Todo lo anterior, es derivado de una descoordinación entre mandos municipales y estatales, así como el desinterés por parte de las autoridades mexiquenses en perfeccionar y profesionalizar los cuerpos de seguridad y su participación dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera eficaz, expedita y transparente.

Es necesario también, que se contemple como eje de la política en materia de seguridad pública a la ciudadanía, lo que permitirá prevenir la comisión de delitos de manera más efectiva, permitir mayor transparencia en el manejo de los recursos, así como en las tareas que desempeñan las fuerzas policiacas, pues desafortunadamente estas han sido utilizadas en varias ocasiones con fines políticos y electorales por parte de las autoridades estatales.

Estamos seguros que no con más policías vamos a ganar la batalla a la delincuencia, resultaría ingenuo suponerlo. Tampoco es suficiente aumentar las penas judiciales o llenar las cárceles de delincuentes. Es necesario una política estatal transversal, clara y bien coordinada.

Otro de los graves y urgentes obstáculos para combatir de forma integral a la delincuencia en la entidad, es la carencia de una dependencia estatal con carácter de secretaría, que tenga una naturaleza jurídica que le otorgue los elementos necesarios para hacer de manera efectiva su trabajo.

Los estados de México y Colima, son los únicos estados que carecen de una instancia de gobierno con rango de secretaría para el combate a la delincuencia y el establecimiento de políticas públicas en materia de seguridad. Se comprende que un estado con cerca de 5000,000 habitantes no cuente con una, como es el caso de Colima, pero en una entidad como el estado de México, con una población de más de quince millones de personas, no hay explicación alguna que justifique su inexistencia.

En 2006 fue creada la ASE como un órgano descentralizado de la Secretaría General de Gobierno, contando con autonomía técnica y operativa, coordinando las funciones de Seguridad Pública y Tránsito; Prevención y Readaptación; Protección Civil y Pirotecnia. Esto ha dado pobres resultados en materia de seguridad.

Estos números nos debieran incitar a redoblar esfuerzos y a priorizar la discusión y el análisis de las propuestas que se han presentado en esta Legislatura.

Sabemos que la tarea de seguridad pública involucra a diversos actores, nosotros como Poder Legislativo no podemos quedar ajenos a la responsabilidad, muestra de ello, es que en esta Asamblea se han presentado ya proyectos de Ley, sin que ninguno haya sido discutido aun.

El trabajo legislativo de la LVII Legislatura en materia de seguridad, se ha centrado en la aprobación de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, la cual tiene por objeto regular la prestación de los servicios de seguridad privada que se prestan en la entidad, consistente en la autorización de requisitos, modalidades, registro, obligaciones y restricciones, capacitación y vistas

de verificación.

Se aprobaron reformas al Código Administrativo del Estado de México para regular los establecimientos comerciales, evitando con ello la proliferación de giros negros.

También se hicieron las reformas necesarias para permitir la entrada en funciones de transporte exclusivo para mujeres a fin de poner un alto a los abusos físicos, sexuales, psicológicos y patrimoniales contra las mujeres.

Se estableció como agravante en el delito de violación el hecho de que cuando un sujeto pasivo padezca o tenga algún tipo de discapacidad o bien se encuentra en el estado de inconsciencia y sea víctima de una violación, se incremente la sanción al sujeto agresor.

Sin embargo, en esta Quincuagésima Séptima Legislatura, los Grupos Parlamentarios tanto del Partido Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática e incluso Sociedad Civil representado por la Asociación Civil "México es nuestro Compromiso" presentaron respectivas iniciativas, las cuales aún no han sido dictaminadas, las cuales contemplas aspectos como:

1. El establecimiento del servicio profesional de carrera policial, así como, la operación y desarrollo de acciones de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;
2. El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública;
3. La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos; y
4. Las formas de participación ciudadana en materia de seguridad pública.

Cabe recordar que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de México, estipula que las iniciativas remitidas por la Mesa Directiva a Comisiones, deberán ser dictaminadas en un plazo que no exceda de los treinta días hábiles, los cuales han transcurrido, pues estas fueron presentadas desde agosto del año pasado, por lo que ya han transcurrido al menos 5 meses sin que las iniciativas citada hayan sido motivo de discusión.

Ningún estado que tenga como prioridad cumplir con la exigencia ciudadana de crear un territorio seguro y condiciones de sana convivencia, puede dejar de lado las adecuaciones normativas. El Gobierno del Estado de México, es de las pocas entidades que aún no actualiza su legislación en materia de seguridad pública, a las nuevas necesidades en la materia; e incluso, no ha cumplido con el seguimiento de los puntos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Después de veinticinco semanas de haber sido anunciadas por le Secretario de Gobierno, finalmente podemos dar la bienvenida a la iniciativa del Ejecutivo en materia de Seguridad Pública, estamos prestos para discutirla, sin que esto signifique hacer a un lado las propuestas que se han presentado en esta LVII Legislatura en materia de Seguridad Pública y que aún aguardan ser atendidas.

Por lo que en virtud de lo antes expuesto, los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática en la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de México, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, para que una vez agotado el proceso legislativo de ley, se apruebe en sus términos.

Proponemos a esta Asamblea, el siguiente:

## PUNTO DE ACUERDO

**ÚNICO:** Se exhorta a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de esta LVII Legislatura a dictaminar a la brevedad las iniciativas en materia de seguridad pública que han sido presentadas durante esta LVII Legislatura del Estado de México.

**ATENTAMENTE**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL**

| | |
|---|---|
| **DIP. ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ** | **DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS** |
| **DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO** | **DIP. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ** |

| | |
|---|---|
| **DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN** | **DIP. MA GUADALUPE MONDRAGÓN GONZÁLEZ** |
| **DIP. ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ** | **DIP. JAEL MÓNICA FRAGOSO MALDONADO** |
| **DIP. DAVID DOMÍNGUEZ ARELLANO** | **DIP. FLORENTINA SALAMANCA ARELLANO** |
| **DIP. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA** | **DIP. DANIEL PARRA ÁNGELES** |

**"DEMOCRACIA YA. PATRIA PARA TODOS"**
**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

| | |
|---|---|
| **DIP. ARTURO PIÑA GARCIA** | **DIP. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA** |
| **DIP. CONSTANZO DE LA VEGA MEMBRILLO** | **DIP. CRISOFORO HERNANDEZ MENA** |
| **DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LOPEZ** | **DIP. MARÍA ANGÉLICA LINARTE BALLESTEROS** |

**DIP. FRANCISCO VELADIZ MEZA**

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias diputado Landero.

Esta Presidencia registra lo expresado por el diputado Alejandro Landero y se hace del conocimiento de las comisiones correspondientes.

Para sustanciar el punto número 29 se concede el uso de la palabra a la diputada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien en nombre de la Legislatura interviene con motivo del "Día Internacional de la Mujer".

**DIP. ISABEL JULIA VICTORIA ROJAS DE ICAZA.** Con su venia señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados, a nombre de las diputadas y diputados integrantes de la "LVII" Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, comparezco ante esta tribuna para pronunciar el mensaje con motivo del Centésimo Aniversario del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo.

La historia universal registra que hace 100 años a consecuencia de una decisión adoptada en Copenhague un año antes, el día internacional de la mujer, se celebró por primera vez el 19 de marzo, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines en los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres, es importante mencionar que posteriormente, se eligió el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en relación con varios sucesos que ocurrieron en New York. Uno de ellos es el que un grupo de costureras en el año de 1857 apoyadas por su sindicato, decidieron tenazmente ocupar la fábrica textil, en donde laboraban para exigir igualdad de salarios y una jornada de trabajo de 10 horas.

Lamentablemente este movimiento terminó con un incendio en el que murieron 146 costureras y otras más resultaron heridas. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, los manifestantes exigieron el derecho a la mujer al trabajo, a la formación profesional, a la no discriminación laboral. La convocatoria encontró eco y en cada aniversario, sociedades conscientes de la igualdad intrínseca entre géneros, celebraron ese acontecimiento; sin embargo, también es perceptible una diferencia abismal entre las palabras y los hechos. El menosprecio y la violencia contra las mujeres y las niñas, persiste en todos los continentes, países y culturas, provocando efectos devastadores en la vida de las mujeres, de sus familias y por ende de la sociedad.

Es cierto que la mayor parte del mundo occidental prohíbe la violencia de género, pero también lo es que en el transcurso de la vida cotidiana, dicha violencia se encubre o se tolera.

Hace 37 años que nuestra Constitución reconoce igualdad entre la mujer y el hombre, no obstante la necesidad imperiosa de expedir normas tutelares de las mujeres, implica un reconocimiento tácito de las condiciones desventajosas que enfrentamos para lograr un desarrollo integral y plena participación.

Es innegable que el impulso decidido de legisladores de todas las fuerzas políticas aquí representadas; y la acción firme del titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, permiten afirmar que avanzamos en la dirección correcta, pero también es evidente, que las acciones no han sido suficientes y que hace falta acelerar el paso.

Con frecuencia se asocia la mujer con los mejores y sublimes sentimientos humanos, pero esta construcción no debe distraernos de la lucha por sus derechos y aspiraciones fundamentales, salvo por excepción en números ámbitos de la vida política, económica y social del país, la mujer ha sido dejada al margen.

Es impensable un verdadero desarrollo y progreso en nuestra Entidad, si la mitad de la población está sujeta a condiciones de discriminación, desigualdad y violencia, y si no se modifican también los paradigmas que las excluyen y construyen un marco jurídico que las convierta en verdaderas ciudadanas. Debemos convocar la memoria y mirar esta fecha como espejo recordatorio, sin que se nos cierren los ojos, impidiendo ver el camino que todavía debemos andar.

El rumbo con destino y propósito que merece México y que merecemos los mexicanos, demanda un espacio nacional, donde las mujeres tengan los mismos derechos y materialicen las mismas oportunidades políticas, educativas, sociales, económicas y culturales que los hombres, tenemos que pasar de las palabras a los hechos, tenemos que colocar nuestras acciones a la altura de nuestras convicciones, lograr la efectiva igualdad de la mujer, no admite dilatación.

Este día ofrece una oportunidad para que todos, mujeres y hombres, nos unamos en pro de una causa que toca a toda la humanidad, el empoderamiento de la mujer, es no sólo un objetivo en si mismo, sino una condición indispensable para mejorar la vida de todos los habitantes del planeta.

José Saramago sostenía: "…somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir…" (sic)

Muchas gracias.

**PRESIDENTE. DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Se registra lo expresado por la diputada Rojas de Icaza y se inserta en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.

Con sujeción al punto número 30, se otorga el uso de la palabra al diputado Crisóforo Hernández Mena, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática interviene con motivo del CLXXXIII Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México.

**DIP. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA**. Con su permiso diputado Presidente.

Compañeras, compañeros diputados, señoras y señores.

La educación superior en México ha desempeñado un papel fundamental en la historia y en la consolidación de nuestras instituciones. El progreso se puede dedicar en parte, gracias a la gran diversidad de conocimientos, investigaciones, innovaciones y recursos que han aportado las universidades como fuentes generadoras de ciencia, tecnología y cultura; no hay que olvidar que las sociedades actuales, cada vez tienden más a fundarse en el conocimiento, razón por la que la educación superior es, hoy en día, parte fundamental del desarrollo cultural y socioeconómico no sólo de los individuos, sino también de las naciones.

En todo caso, la educación media y superior, ha dado pruebas de su viabilidad; en el Estado de México, se ha constatado su capacidad para transformar, propiciar el cambio y el progreso. Prueba de ello es la Universidad Autónoma del Estado de México, que constituye la más importante casa de estudios universitarios de nuestra Entidad. Fundada el 03 de marzo de 1828 como Instituto Literario del Estado de México, fue promovida a Instituto Científico y Literario en 1943 y a Universidad Autónoma del Estado de México en 1956. Su lema "Patria, Ciencia y Trabajo".

A 183 años de tradición científica humanística y 55 años de su fundación la Universidad Autónoma del Estado de México, es hoy una de las mejores de nuestro país y representa espacios de conocimiento, de investigación y de cultura para todos los mexiquenses. Es ahí donde las ideas surgen y se debaten para presentarse a la sociedad, con proyectos viables para un mejor futuro.

Los universitarios son el potencial que necesita el país para alcanzar un desarrollo pleno, con más miras en un mundo más competitivo, abierto y plural. El papel de la Universidad Autónoma del Estado de México es formar hombres que generen

conocimiento, que tengan espíritu crítico, que sean propositivos, con una actitud de progreso, con valores sociales y con pleno conocimiento de las necesidades del país y de nuestra Entidad.

Así la universidad promueve la práctica de la democracia, la igualdad, el respeto, la justicia, la tolerancia y la observancia de la ley. Todos esos valores, forman a los universitarios con el objetivo de ofrecer a la sociedad ciudadanos mayor informados y preparados en los campos del saber científico y social.

La universidad es el espacio para el diálogo, el debate y las propuestas, en donde los universitarios comparten sus ideas, muchas veces contrapuestas, pero que son respetadas, porque se convive en un espacio de pluralidad, libertad y de transparencia.

En el ámbito nacional, la UAEM es reconocida como una de las mejores universidades, con programas educativos de licenciatura, acreditados y estudios avalados por el Programa Nacional Postgrados de Calidad; asimismo, en el ámbito internacional, cuenta con programas de estudios avanzados en cooperación internacional.

En consonancia con lo anterior, la UAEM, ha incursionado de lleno en las universidades del siglo XXI, al implementar planes de estudio flexibles de licenciatura, al diversificar su oferta de estudios avanzados y al operar una de las redes virtuales de consulta académica y científica más importantes en el mundo de habla hispana, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

Dicha condición ha ubicado a la Universidad Autónoma del Estado de México, como una universidad moderna, comprometida con su afán de asegurar un clima de libertad, de pensamiento y producción académica, basada en la franca expresión y discusión de ideas, así la responsabilidad social de la UAEM, se haya estrechamente relacionada con la generación de conocimientos, vinculante con los más altos valores humanos. Su carácter público le permite contribuir a la construcción de un ambiente favorable, para que el dinamismo humanista, cultural, científico y tecnológico de una universidad encuentre causes, que deriven en mayor bienestar e igualdad social.

Por ello, debemos de estar orgullosos y hacer un merecido reconocimiento a nuestra máxima casa de estudios, por generar, preservar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura superior, en todos sus aspectos; así como impartir, granizar y fomentar la educación media y superior.

En tal sentido, respetuosamente invito a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, a conmemorar el aniversario de nuestra Universidad y la mejor manera de hacerlo, es seguir trabajando para modernizar nuestro marco legal y proveer de los recursos necesarios para que los mexiquenses tengan la oportunidad de una educación universitaria, que esté a la vanguardia de las mejores universidades del país.

Muchas gracias.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Muchas gracias al diputado Hernández Mena.

Se registra lo expresado por el diputado para insertarse en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** Señor Presidente los asuntos del orden del día han sido agotados.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Registre la Secretaría la asistencia a la sesión.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** Se registra la inasistencia de 4 diputados con justificación.

**PRESIDENTE DIP. JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS.** Habiendo agotado los asuntos en cartera, se levanta la sesión siendo las dieciséis horas cincuenta y cuatro minutos del jueves diez de marzo del año dos mil once y se cita a los integrantes de la soberanía popular, para que el jueves diecisiete de marzo del año en curso, a las diez treinta horas, para realizar sesión de la Legislatura.

**SECRETARIA DIP. YOLITZI RAMÍREZ TRUJILLO.** La sesión ha quedado grabada en la cita marcada con la clave 102-A-LVII.